

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Instituto de Relaciones Internacionales

La mujer en Guerra. Su Situación en el Conflicto y Post-Conflicto de la Región de los Grandes Lagos de África Subsahariana

Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales

Maestranda: Irina A. Golda Lamadrid

-2016-

La mujer en Guerra. Su Situación en el
Conflicto y Post-Conflicto de la Región de
los Grandes Lagos de África Subsahariana

Maestranda: Irina A. Golda Lamadrid

Director de Tesis: Prof. Dr. Roberto Miranda

INDICE

Indice.....	1
Agradecimientos.....	5
Abreviaturas y Siglas	6

INTRODUCCION

Antecedentes del Problema	10
Problema de Investigación	11
Marco Teórico	15
Metodología	19
Algunas Cuestiones Metodológicas	21
Conceptos y Terminología	24
Desarrollo de la Tesis.....	27

CAPITULO I

Haciendo un Poco de Historia: Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo

Periodo Pre-colonial.....	32
Periodo Colonial.....	35
Periodo Post-colonial	40
Ruanda: de la Revolución Social de 1959 a la Primera República	
La Revolución Social	40

1963-64 – Matanzas y Persecución	44
Primera República	45
Burundi: de las Primeras Elecciones a la Segunda República (Militar)	
Primeras Elecciones	45
La Corte Toma el Poder	47
La Primera República (Militar)	48
La Segunda República (Militar)	50
República Democrática del Congo: del Congo Belga al Fin de la Primera República	
Primeros Movimientos Políticos	51
Primera República/Primera Guerra Civil, 1960-65	52

CAPITULO II

Conflictos Recientes en Ruanda, Burundi y las Provincias del Este de la RDC Vistos a través del Lente de Género

Ruanda

La Segunda República	55
Octubre de 1990: Invasión y Guerra Civil	57
Tres Meses de 1994: ¿El Desenlace Inesperado?	60
Paul Kagame	64

Burundi

La Tercera República (Militar)	66
La Corta Democracia Burundesa	67
Guerra Civil y los Acuerdos de Arusha	68

República Democrática del Congo

Mobutu, 1965-1997	70
Vaivenes de las Políticas de Nacionalidad y su Impacto en las Poblaciones del Este de la RDC	72
Primera Guerra del Congo	74
La Segunda Guerra del Congo	77
Ni Guerra ni Paz	79
Los Conflictos Vistos a través del Lente de Género	80

CAPITULO III

Masculinidades y Femeidades en la región de los Grandes Lagos. Impacto de la Guerra y la Militarización.

Todos Son Víctimas	89
La Vida de las Mujeres desde el Periodo Pre-Colonial hasta las Guerras Civiles en Ruanda, Burundi y la RDC.....	91
Periodo Pre-Colonial	92
Periodo Colonial.....	94
Desde la Independencia hasta las Guerras Civiles	97
Las Construcciones de las Imágenes de Femeidad y Masculinidad en la Región de los Grandes Lagos	99
La Militarización de la Sociedad: Su Relación con los Roles de Género y la Violencia Social.....	109

CAPITULO IV

La Actuación de las Mujeres en el Teatro Bélico

Roles Plurales de las Mujeres en los Conflictos Armados.....	117
Las Mujeres en las Fuerzas Armadas	120
Mujeres Perpetradoras de Genocidio	125
Mujeres en las Milicias de la Región	130
La Violencia Ejercida por las Mujeres	136
Las Mujeres Estrechan Lazos y Buscan la Paz	142

CAPITULO V

Violencia contra la Mujer en los Conflictos Armados de la Región de los Grandes Lagos

Violencia y Explotación Sexual	146
Violencia y Explotación Sexual por Parte de los Integrantes de las Operaciones de Paz y Otros Trabajadores de Ayuda Humanitaria.....	152
Efectos de la Violencia y Explotación Sexual en las Mujeres y el Impacto en el Entorno Social	156
Impacto a Nivel Personal.....	156
Repercusiones en la Vida Familiar	160
Consecuencias a Nivel Social.....	163
El Porque de la Violencia Sexual.....	165

CAPITULO VI

No Hay Post-Conflicto para las Mujeres

Mesas de Paz	180
Consecuencias en el Post-Conflicto	185
La Victimización Continua	186
Situación Familiar y Social	186
Violencia Sexual.....	187
Violencia Doméstica y Social	189
Trabajo y Economía	191
Educación	194
Salud.....	195
Refugiados y Personas Internamente Desplazadas (PID)	196
Re-victimización	197
Programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)	198
Problemáticas que Enfrentaron las Mujeres Asociadas a Grupos Armados	
Irregulares.....	200
Violencia Social.....	202
¿Desvictimización/Empoderamiento?.....	205
Ex-Combatientes Mujeres	205
Activismo	207
Posición Política y Social	208

CONCLUSION

¿Vuelta al <i>status quo ante bellum</i> ?	213
Bibliografía.....	219

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis no podría haber sido escrita sin la ayuda y colaboración de las siguientes personas e instituciones: el Prof. Dr. Norberto Consani y la Prof. Mag. Laura Bogado Bordazar, Director y Secretaria Académica del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, respectivamente; al Prof. Dr. Diego Buffa; el *Canadian Bureau for International Education*; el *Department of Foreign Affairs, Trade and Development* de Canadá por haberme otorgado la beca de investigación ELAP; a la *Université Laval*, dentro de esta al *Haute Études Internationales* por permitirme utilizar todo sus recursos académicos largo tiempo después que ya me había ido; y a la Prof. Dra. Marie Brossier de la *Université Laval* por su guía durante mi estadía en dicha institución, así como por hacerme excelentes sugerencias sobre la problemática tratada.

Asimismo, deseo expresar mi especial agradecimiento a mi Director de tesis, el Prof. Dr. Roberto Miranda, por su inestimable ayuda, apoyo y su disposición permanente ante cada una de mis dudas.

Finalmente, debo agradecer a mi familia por incentivarne a que siga adelante y, en más de una ocasión, ayudarme a aclarar mis propias ideas.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABAKO	Alliance des Bakongo
ACNUR	Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
AFDL	Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération des Gens du Congo-Zaire
AGI	Acte Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo
AI	Amnesty International
ANC	Armée Nationale Congolaise
APR	Armée Patriotique Rwandaise
APROSONA	Association pour la Promotion Sociale de la Masse
AVEGA	Association des Veuves du Genocide Agahoso
CDR	Coalition pour la Défense de la République
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Siglas en ingles)
CIRC	Comité International de la Cruz Roja
CMSN	Comité Militaire pour le Salut National
CNDD	Conseil National pour la Défense de la Démocratie
CNRD	Conseil National de la Résistance pour la Démocratie
CNS	Conférence Nationale Souveraine
CONAKAT	Confédération des Associations du Katanga
CS	Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas

DDR	Desarme, desmovilización y reintegración
FAC	Forces Armées Congolaise
FAR	Forces Armées Rwandaises
FARDC	Forces Armées de la République Démocratique du Congo
FAZ	Forces Armées Zaïroises
FDD	Forces pour la Défense de la Démocratie
FDLR	Forces Démocratique de Libération du Rwanda
FIDH	Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme
FND	Forces de Défense Nationale
FPR	Front Patriotique Rwandais
FRODEBU	Front Démocratique du Burundi
FROLINA	Front de Libération Nationale
HRW	Human Rights Watch
ICC	International Crisis Group
ITEKA	Ligue Burundaise des Droits de l'Homme
MDR-PARMEHUTU	Mouvement Démocratique Républicain - Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu
MDRP	Multi-country Demobilization and Reintegration Program
MINUAR	Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda
MNC	Mouvement National Congolais
MONUC	Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo
MPR	Mouvement Populaire de la Révolution
MRND	Mouvement Révolutionnaire National pour la Démocratie et le Développement
NRA	National Resistance Army
NRM	National Resistance Movement
NU	Naciones Unidas
ONU	Organización de Naciones Unidas
ONUB	Opération des Nations Unies au Burundi
ONUC	Opération des Nations Unies au Congo
OUA	Organización para la Unidad Africana
PALIPEHUTU	Parti pour la Libération du Peuple Hutu
PALIPEHUTU-FNL	Parti pour la Libération du Peuple Hutu – Forces Nationales de

	Libération
PARMEHUTU	Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu
PDC	Parti Démocrate Chrétien
PID	Personas Internamente Desplazadas
PNDRR	Programme National de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration
PRP	Parti de la Révolution du Peuple
RADER	Rassemblement Démocratique Ruandais
RANU	Rwandese Alliance for National Unity
RCD	Rassemblement Congolaise pour la Démocratie
RCD-ML	Rassemblement Congolaise pour la Démocratie-Mouvement de Libération
RDC	República Democrática del Congo
RI	Relaciones Internacionales
RTL	Radio Télévision Libre des Milles Collines
UNAMIR	United Nations Assistance Mission in Rwanda
UNAR	Union Nationale Rwandaise
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNITA	União Nacional para a Independência Total de Angola
UNOMUR	United Nations Observation Mission for Uganda and Rwanda
UPRONA	Union pour le Progrès National
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USD	Dólares Estadounidenses

INTRODUCCION

“Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento” Werner Heisenberg (1901-1976).

África aparece en el imaginario colectivo como una masa unificada en lugar de un continente dividido en países, regiones y realidades muy diferentes. Tal vez entre las dos falacias más populares sobre el continente africano encontramos que hay leones y jirafas por doquier, y la guerra es una constante permanente. Aunque es verdad que muchos estados tienen altos niveles de conflictividad interna, que la violencia ha perdurado a lo largo de muchos años, inclusive décadas, y que según el *Uppsala Conflict Data Programme*, este continente ha sufrido desde el fin de la Guerra Fría un tercio de todos los conflictos mundiales (Williams, 2011:20), no es menos cierto que la tendencia a resolver las disputas a través de la guerra difícilmente sea exclusiva del continente africano; y así como no hay leones y jirafas en todos los países, muchos tampoco han sufrido guerras civiles. Simplemente es que, al parecer, los estados africanos no son noticia a menos que corra sangre.

De todos modos, las guerras en la Región de los Grandes Lagos han sido largas y crueles, y ha habido recrudecimientos constantes de los episodios de violencia. Si bien todos los sectores sociales fueron duramente afectados, las mujeres se encontraron siempre en una posición de enorme vulnerabilidad, no solo ante los ataques de las fuerzas regulares de los estados y de los grupos

insurgentes, sino también porque fueron víctimas de sus propias familias y de la sociedad. Su situación durante el conflicto, los esfuerzos que muchas han hecho para llegar a la paz, pero especialmente a una paz duradera, así como aquellas mujeres que tomaron las armas y lucharon en pos de aquello que consideraban justo, las que participaron en los momentos más sangrientos, las que fueron raptadas y obligadas a sostener una maquinaria de guerra que les era ajena, en fin, la pluralidad de roles que tuvieron durante las guerras y, como luego, ellas intentaron reconstruir sus vidas bajo condiciones totalmente adversas en el post-conflicto, a pesar de su invisibilización constante, motivan este análisis.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Las guerras en Burundi, Ruanda y lo que hoy es la República Democrática del Congo (RDC) participaron de las llamadas “nuevas guerras” por sus particulares características, entre ellas: haber sido conflictos intra-estatales y que la mayor cantidad de víctimas en este tipo de conflictos no provino de los enfrentamientos entre las distintas fuerzas armadas, sino de la población civil, ya que el teatro bélico no fue una zona apartada, sino que llegó hasta la puerta de sus casas.

Aunque toda la sociedad sufrió los rigores del conflicto, las mujeres fueron un segmento especialmente afectado porque, entre otras cosas, padecieron todo tipo de agresiones, entre las cuales tomó una especial relevancia por su magnitud y brutalidad la violencia sexual. Sin embargo, las mujeres no solo fueron víctimas en estos conflictos armados ya que muchas jugaron distintos roles en el escalamiento de las tensiones y luego participando activamente en los conflictos. Finalmente, otras, a pesar de su marginalización constante, trabajaron desde las instituciones de base para poner fin a los estados de beligerancia, y algunas con mucho esfuerzo lograron marcar una presencia en las mesas de negociación de los acuerdos que buscaban terminar las guerras. Aunque la mayor parte de las veces simplemente intentaron reconstruir sus vidas y las de sus familias, a pesar de los constantes embates políticos y sociales.

Partiendo de esta problemática del segmento femenino, este trabajo analiza ese fenómeno en los conflictos armados sucedidos desde finales del Siglo XX hasta la primera década de este siglo en Ruanda, Burundi y las provincias del este de la República Democrática del Congo, de las cuales se han elegido puntualmente Kivu del Norte y Kivu del Sur. De todos modos, la geografía no se toma como una constante rígida sino que permite que la temática vaya abarcando el área geográfica. Específicamente, se ha determinado el año 2006 como fecha que pone límite al marco temporal dado que, para ese momento, se habían llevado a cabo elecciones “democráticas” en todos los estados bajo estudio. Sin embargo, encontramos una verdadera dificultad en demarcar límites muy

estrictos, ya que luego de terminados oficialmente los conflictos, las hostilidades continuaron durante los años siguientes.

A su vez, estos estados de beligerancia tomaron relevancia internacional por su magnitud, y se internacionalizaron por el envío de tropas de operaciones de paz por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero además, se considera su internacionalización por la constante injerencia externa en todos ellos, tanto por parte de otros estados de la región como extracontinentales. Asimismo, cabe explicar que se ha tomado esta zona geográfica debido a que tiene en común varias características, entre ellas: los mismos grupos étnicos especialmente en Ruanda y Burundi, pero también focos poblacionales de estos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur; el movimiento constante de refugiados, combatientes y armas a través de fronteras porosas, lo cual fue una fuente de inestabilidad social y política en los tres estados; la invariable intrusión del poder político de los tres estados en los asuntos de los vecinos; la violencia generalizada contra la población civil; comparten, asimismo, un pasado colonial común; formas de gobierno militarizadas y dictatoriales con alternancia de poder únicamente como resultado de violencia, conflictos o golpes de estado; condiciones sociales similares para las mujeres y estados fuertemente patriarcales con marcadas desigualdades en las relaciones de poder entre los géneros; entre otras cuestiones.

PROBLEMA DE INVESTIGACION

Si bien las guerras civiles en estos estados tuvieron un fuerte impacto en la vida de hombres y mujeres por igual, y que entre ellos encontramos la mayor cantidad de bajas durante la guerra, las mujeres, luego, igualaron esa tasa de mortalidad en el post-conflicto. Es que, simplemente, un análisis serio no puede ignorar como las mujeres, las cuales constituyen estimativamente la mitad de la población, viven, actúan e influyen en un conflicto.

Para comenzar es necesario señalar la complejidad de las situaciones y los roles de las mujeres en estas guerras, ya que en incontables casos el lugar que ocuparon no suele ser concluyente. Muchas mujeres tuvieron un rol activo mientras fueron victimizadas al mismo tiempo. De este modo, parece ser necesario que al examinar las situaciones que atravesaron esto sea tomado en cuenta, dado que de otro modo son equivocadamente clasificadas de forma binaria en “víctimas” versus “combatientes/perpetradoras”, no dejando espacio de interpretación para las múltiples situaciones en las cuales se vieron inmersas durante los estados de beligerancia. Aunque las categorías son esencialmente útiles, y de hecho son usadas de esta forma en la estructura de este trabajo para organizar el mismo, se debe entender que de ninguna manera estamos implicando que ese fue el único lugar que ocuparon o desde el único ángulo en que vivieron el conflicto. Por

ejemplo, inclusive aquella mujer que eligió unirse voluntariamente a algún grupo insurgente, con seguridad fue víctima de violencia sexual dentro de aquel. Por ello, es imperativo entender la dinámica de las situaciones para evaluar los roles reales que las mujeres jugaron en la guerra, siempre teniendo en mente que no pierden sus rasgos de género, ni su femineidad, sin importar cuales fueron las situaciones que padecieron o generaron, ya que únicamente de esta manera se podrá tener un conocimiento comprensivo de cómo protegerlas o, en su caso, como juzgarlas.

Entre las problemáticas que afectaron más directamente al segmento femenino se encuentra la violencia sexual, la cual tomó una especial relevancia por su magnitud, brutalidad y uso sistemático, ya que fue utilizada con distintos fines: ya sea para contagiar enfermedades como el HIV o para generar embarazos forzados (Durham y O'Byrne, 2010:51) o, inclusive, para infundir terror. Estos hechos atroces fueron luego reconocidos como “armas de guerra”, además de “actos constitutivos de genocidio” en fallos tales como: “Akayesu” o “Nyiramasuhuko”, ambos dictados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado bajo el mandato del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad (ver Hagay-Frey, 2011). Pero más allá de este fenómeno particular, las mujeres sufrieron todo tipo de explotación sexual, tales como: violaciones oportunistas para satisfacción del perpetrador, violencia sexual para humillar a la víctima o a su familia (Josse, 2010:138-139); prostitución forzada; entre otras situaciones. De todos modos, entre las peores violencias que sufrieron la gran mayoría de las mujeres se encuentran las violencias sociales, familiares y, luego en el post-conflicto, institucionales. Esto se tratará con especial profundidad ya que es uno de los factores que consideramos más ha marcado la vida del segmento femenino en estas guerras.

Sin embargo, las mujeres no solo fueron víctimas en estos conflictos armados. De hecho, un factor de interés que se irá viendo a lo largo de este trabajo es la relación constante de la mujer con la paz, su construcción como ser no-violento, maternal, y la aversión general, inclusive de muchas teóricas feministas a entender que las mujeres –o por lo menos algunas- puedan ser tan violentas como –algunos- hombres, y por tanto puedan incidir en el escalamiento de las tensiones y luego participar activamente en el conflicto. En dichos casos, la cuestión de género toma gran relevancia atento a las nociones arraigadas socialmente sobre las expectativas de los roles que deben cumplir hombres y mujeres, pero no solo en esas sociedades sino también en Occidente, ya que esa conexión entre la mujer y la paz ha sido de suma importancia en la configuración de las mujeres que perpetraron atrocidades durante la guerra. Sin ir más lejos, algunos teóricos defienden la tesis que las mujeres que han participado u ordenado actos de gran brutalidad encuentran su femineidad problematizada, por lo cual deben ser asimiladas a los hombres, como si únicamente al haber olvidado su identidad de género y características maternas pudieran perpetrar dichas acciones.

Simplemente, ya no es posible negar el rol de las mujeres como combatientes, ni asimilar esa actuación a comportamientos masculinos no propios de aquellas. Así, encontramos mujeres que ocuparon posiciones de simples combatientes hasta, en algunos casos, cargos de poder y, por ende, responsabilidad directa en los acontecimientos; otras veces su contribución fue menor, pero no por ello menos importante, como en los casos que sirvieron de espías o delatoras. Sin importar porque tomaron las armas, lo central de este tema es la voluntad que imprimieron a su accionar.

De todos modos, la participación de las mujeres en los conflictos no siempre fue voluntaria, ya que gran parte de las veces fueron secuestradas o forzadas por distintos medios a seguir a los soldados de los grupos insurgentes para cumplir distintas tareas, ya sea de cocina o simplemente como esclavas sexuales, sosteniendo la maquinaria de guerra independientemente de su situación en el grupo. Una arista de las circunstancias que vivieron estas mujeres se presenta luego en el post-conflicto, ya que los programas de desmovilización, desarme y reintegración se diseñaron de forma tal de concebirse como de género neutro, y por lo tanto no las tomaron en cuenta, así como tampoco sus necesidades particulares, quedando mayormente excluidas de beneficiarse de esta reinserción.

Finalmente, las mujeres demostraron ser una fuerza trabajando en pos de la paz, y a pesar de su marginalización política constante, operaron como pudieron desde las instituciones de base para terminar las guerras. Con mucho esfuerzo en algunos casos, lograron marcar una presencia y hacerse oír en las negociaciones de los acuerdos que luego marcarían oficialmente el fin de los conflictos. Mientras tanto, la gran mayoría intentaba reconstruir sus vidas luchando contra la pobreza, la marginalización social, la pérdida de familia y amigos, criando hijos fruto de violaciones en cuanto se les iba la vida como consecuencia del contagio de HIV.

Luego, también se analizan las construcciones de masculinidades y femineidades en esta región, las cuales no cambiaron en lo absoluto por los conflictos. Entendemos que es necesario comprender a la mujer en su contexto social y cultural para ubicar su accionar y las consecuencias que sufren. De esta forma, se observará como los roles y las expectativas de género que tenían las mujeres y los hombres antes de la llegada de los colonizadores eran complementarios, en lugar de antagónicos como devinieron con la influencia de los europeos y la religión. La violencia contra las mujeres en esta región, aún durante la guerra, no surgió de un vacío cultural, sino de costumbres y violencias sociales que se fueron construyendo históricamente desde la colonización y se arraigaron en los nativos a tal punto que son llamadas “tradicionales”, entre ellas es posible encontrar la creencia de que el hombre es superior a la mujer y que ella le debe sumisión y obediencia. Pero esa construcción patriarcal importada no perjudicó solo a las mujeres, sino que los hombres también se vieron afectados por esta, ya que si bien por un lado los condujo a la desvalorización de aquellas, por otro no pudieron flexibilizar sus propias masculinidades y operar efectivamente ante los

cambios sociales que trajo aparejada la guerra.

Entonces, la conjunción de estos elementos contextuales y culturales nos ha llevado a preguntarnos: ¿Cómo juega desde el análisis de las teorías feministas la situación de las mujeres en esos conflictos, que por un lado fueron victimizadas por su género y por su importancia social y cultural, mientras que por otro combatieron junto a los hombres y fueron perpetradora de atrocidades, y otras veces es imposible clasificarlas en esta distinción binaria y cuáles fueron las consecuencias que les acarrió estos papeles en el post-conflicto?

Como respuesta a dicha pregunta, nuestra hipótesis indicaría que:

Las mujeres han asumido una pluralidad de roles en los conflictos de la región de los Grandes Lagos de África Subsahariana, pero independientemente de cuáles hayan sido estos, las consecuencias que enfrentaron en el post-conflicto fueron similares.

Atento a esta hipótesis de trabajo el objetivo general es analizar críticamente desde las teorías feministas la situación de las mujeres en los conflictos armados intraperiféricos en la región de los Grandes Lagos de África Subsahariana, para identificar la pluralidad de roles que asumen y las consecuencias de ello. Más específicamente se intenta: identificar y explicar las problemáticas específicas que enfrentan las mujeres durante los conflictos; dilucidar como el conflicto y sus efectos, impactan y modifican las condiciones de las mujeres en la sociedad post-conflicto; evaluar las teorías feministas enfocadas en las relaciones internacionales, el conflicto y la cultura, para dar un marco analítico a las situaciones que se generan en estos estados de beligerancia civil; corroborar si las teorías feministas dan una respuesta adecuada a las problemáticas específicas que surgen y enfrentan las mujeres a raíz de los conflictos investigados.

Finalmente, este trabajo se justifica por la importancia de entender la posición de las mujeres insertas en la realidad social que presentaron estos conflictos y luego en el post-conflicto, los cuales existieron en un contexto geográfico, histórico y político determinado. Asimismo, es necesario presentar un trabajo que pueda comprender lo más globalmente posible la variedad de situaciones y de lugares que ocuparon las mujeres, o en su caso la lucha por ocuparlos, y cuáles fueron los efectos personales, sociales y políticos de esas circunstancias en un escenario de guerra y de “no guerra-no paz”. Asimismo, un análisis del conflicto desde el género puede acrecentar el conocimiento del nexo existente entre lo personal y lo institucional, entre la violencia estatal y la doméstica, y brindar una idea de cómo el mantenimiento de ciertas estructuras de poder garantizan que los ciclos de violencia se repitan.

MARCO TEORICO

Dado que estos conflictos se dieron en sociedades fuertemente patriarcales, donde la mujer era vista –y en muchos casos se veía a sí misma – como subordinada del hombre y propiedad masculina; y mientras que la violencia contra la mujer no solo estaba ampliamente tolerada por el estado y la sociedad, sino que también era justificada por la religión, no es de extrañar que la primera victimización se diera contra el sexo femenino por factores tales como: reafirmación de la masculinidad, humillación al varón contrincante, o un elemento de destrucción de la cultura y/o etnia de la víctima, bien como misoginia pura (Seifert en Skjelsbaek, 2001:79-81).

Asimismo, la militarización como ideología que se basa en el uso de la fuerza para controlar a la sociedad y como medio de resolución de los conflictos, vuelve a poner de relieve los roles de género en estas sociedades, ya que la mujer necesita “ser protegida” y el hombre debe enrolarse, porque el no hacerlo pone en peligro su propia masculinidad (Álvarez Molinero, 2007:88).

Por otro lado, gran parte del fracaso que se evidenció en las operaciones de paz de Naciones Unidas, así como en la ayuda prestada por las ONGs internacionales que se presentaron en la región, y en los programas de desarme, desmovilización, y reinserción se debieron a la falta de perspectiva de género en su planificación, entre otras causas.

Por ello se ha elegido trabajar esta investigación desde los avances teóricos del feminismo, ya que han hecho visibles actores y situaciones que de otro modo seguirían oscurecidas bajo el manto de los análisis en género neutro. El feminismo ha puesto en duda que “el estado sea el garante de la seguridad de sus ciudadanos [porque] el estado no es neutral en cuanto a las provisiones de seguridad para todos los individuos” (Smith, 2002:6). Esto, proyectado al sistema internacional - que, en definitiva, está compuesto por estados- significa que aquel, tampoco protege de igual manera a todas las personas, para lo cual basta volver a recordar que las escasas provisiones legales de protección de las mujeres en los conflictos armados son relativamente recientes, de exigua aplicación y, hasta ahora, sin un historial de éxito, además de los pocos estudios serios y sistemáticos que encontramos sobre la mujer en su faz de combatiente.

Las teorías feministas, a su vez, serán examinadas en su relación con otras disciplinas – relaciones internacionales, teoría del conflicto, sociología- y con elementos de la realidad objetiva de estos pueblos, en especial su cultura e historia, para intentar comprender como fue la condición de la mujer en estos conflictos armados y la diversidad de situaciones que vivió, cual hubiera sido la mejor manera de protegerla, que se hubiera necesitado para reinsertarla en la sociedad, cuáles eran sus particulares necesidades en el post-conflicto y la objetividad con la que debía ser juzgada, en

caso necesario. Para ello será menester revisitar las teorías feministas a fin de examinar si tienen respuestas a estas necesidades.

No se tomarán en cuenta los enfoques económicos, porque estos no implican una mayor igualdad femenina, ni una mejoría en su situación; por el contrario, desplazar al hombre de su rol de proveedor a favor de la mujer genera una mayor violencia basada en diferencias de género, lo cual se explica más satisfactoriamente desde las teorías feministas y análisis de elementos culturales que desde las teorías economicistas. Por otro lado, la tesis que analizan las guerras desde un aspecto netamente económico, solo cuentan parte de la historia. Esto no implica, de todos modos, que no se tomarán en cuenta algunos elementos de la economía, especialmente en relación al trabajo y fuentes de ingreso, para explicar ciertos fenómenos sociales y hasta hechos históricos. Ninguna disciplina es un compartimento estanco y situaciones como las que se verán necesitan ser vistas desde todos los ángulos para estudiarlas lo más acabadamente posible.

Tampoco se analizarán los conflictos ni la situación de las mujeres desde una faz legal, o más específicamente de derecho internacional. Más allá de alguna referencia puntual a un tratado, convenio, etc. que sea hecha para completar otra información o dar un marco referencial de actuación, como en el caso de los acuerdos a los que se arribaron en las mesas de paz, no se tomaran en cuenta otros instrumentos internacionales ni tampoco la jurisprudencia del Tribunal Internacional para Ruanda como puntos de análisis. Ello así, porque como se explicó anteriormente las normas eran escasas, su aplicación exigua y su éxito no menos que dudoso. Asimismo, la creciente tendencia de privatizar las guerras, con la contratación de empresas de seguridad privadas, mercenarios y formación de distintos grupos paramilitares, milicias tribales, etc. los cuales no están obligados, y en muchos casos desconocen las leyes internacionales, es otro factor disuasorio para tomar en cuenta este enfoque.

Para ilustrar estos extremos basta recordar que Burundi ya era parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), al momento de terminar el conflicto; sin embargo no hubo directivas explícitas sobre la aplicación de esta convención durante el Gobierno de Transición. Al contrario, las prácticas y costumbres que discriminaban a las mujeres continuaron impidiendo su proyección y desarrollo; además que dicho tratado no contiene provisiones que traten cuestiones como la violencia contra la mujer, y mucho menos temas más específicos como la violencia sexual durante los conflictos armados. Por otro lado, en el año 2000 se voto la Res. 1325 del Consejo de Seguridad, la cual fue ampliamente alabada y recibida con entusiasmo; a pesar de ello, y otras resoluciones que le seguirían en los años venideros para complementarla, su aplicación, a nuestro criterio no es menos que dudosa. En el caso de la RDC las rondas de negociación para alcanzar un acuerdo de paz,

escasamente incluyeron mujeres como se verá; si bien comenzaron en 1999 formalmente tuvieron lugar a partir del 2001, por lo cual la Res. 1325 hubiera debido ser aplicada. En cuanto a los soldados de las misiones de paz, y a pesar de las provisiones de tolerancia cero de cualquier contacto de índole sexual, aún siendo consensuado, entre un componente y una mujer nativa, continuó la explotación sexual de prostitutas y más gravemente violaciones y otras atrocidades. Por ende, y atento a que los organismos internacionales no logran hacer respetar cabalmente sus propias normativas, no encontramos mayores razones para hacer uso de estas en este trabajo en particular.

Dicho esto, cabe hacer una especial referencia a algunas teorías feministas y las complejidades que presentan. Para comenzar es importante subrayar que, en términos generales, el enfoque de estas es sociocultural, por ello combinan y superponen aspectos metodológicos y epistemológicos que dificultan cualquier intento de encasillamiento teórico.

Como en cualquier análisis de Relaciones Internacionales (RI), las feministas también se adscriben a distintas teorías; es más, el término “teoría” es ampliamente discutido por aquellas, de esta forma se preguntan: ¿qué es una teoría?, ¿qué califica como tal?, ¿cuáles son las implicaciones políticas de usar una determinada teoría? (Butler, 1992:xiii). Posiblemente por ello y por la forma de ver ciertas cuestiones centrales de las RI las feministas, al igual que otros teóricos han seguido distintos caminos en su conceptualización del estado, la seguridad, los conflictos armados, etc. Pero tal vez las dos preguntas más importantes que se hacen es como teorizar al estado y al género; por lo cual las suposiciones ontológicas que hacen sobre cómo debe tomarse el estado, por ejemplo, varían enormemente (Hansen, 2010:18). Mientras las feministas liberales consideran que es un actor central que define las relaciones internacionales y que está preocupado con su propia supervivencia, las feministas *standpoint* sostienen que la división entre lo público y la privado tiene consecuencias fundamentales para la marginalización política, económica y cultural de las mujeres, por lo cual al estado se lo ve como un conjunto de prácticas patriarcales (Hansen, 21).

De esta forma, las feministas construyen sus distintas ontologías, epistemologías y, finalmente, sus metodologías, y también sus teorías y puntos de preocupación. Sin embargo, y a pesar de lo antedicho es posible construir “una perspectiva feminista”: una forma de ver al mundo que prioriza ciertas características y procesos (Steans et al., 2010:155). Así algunas autoras han adoptado la terminología de ver a través de “lentes de género” para descubrir aquellos aspectos de las relaciones internacionales que han sido descuidados o no tratados por otros enfoques. Ello así, porque a las feministas, sin importar cuál es su aproximación teórica, les preocupa la cuestión de género vista como una construcción social en oposición a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. De esta forma, aquellas intentan explicar los roles de género –y sus desigualdades- en la teoría y en la práctica de las relaciones internacionales, investigando como esos desequilibrios

afectan a las mujeres a través de las estructuras y comportamientos. Es que, como explica Heeg Maruska (2010:237) las feministas usan una perspectiva de género porque no miran al hombre, sino a las masculinidades construidas socialmente; no miran a la mujer, sino a las construcciones sociales de femineidad. Una perspectiva de género reconoce que la historia es más complicada; que hay más de un tipo de masculinidad y femineidad operando al mismo tiempo y en un mismo lugar (Heeg Maruska, 237).

Por ello, en el análisis de este trabajo se tomarán en cuenta de acuerdo al enfoque feminista las relaciones de poder entre hombres y mujeres, las desigualdades existentes entre ambos, los roles de género y las construcciones de masculinidades y femineidades como aspectos centrales. Ello sin asumir ninguna postura feminista en particular atento que todas tienen sus méritos, a su vez que son merecedoras de ciertas críticas y, porque como se verá en el apartado de Metodología, este trabajo se ha beneficiado de distintos enfoques feministas, ya que combinar distintas epistemologías y metodologías es un avance cada vez más usado en esta corriente.

Por otro lado, mientras las RI generalmente tienden a pensar las relaciones en términos abstractos, las feministas se enfocan más en las relaciones sociales de lo internacional; por ello, tienden a ver como una realidad de las relaciones internacionales ciertos aspectos de la sociedad cuyos resultados afectan a las mujeres y otros grupos en el sistema internacional (Sylvester, 2002:10). A su vez, y en primer lugar, se tiende a ubicar a las mujeres y a las cuestiones de género en las relaciones internacionales, y a partir de ese punto ofrecer versiones compensatorias de la teoría y de la práctica más justas y menos parciales (Sylvester, 11). Justamente, en este trabajo se describen las situaciones que atraviesan las mujeres para luego intentar explicar las mismas aplicando las teorías a los casos concretos, en lugar de intentar que las cuestiones bajo estudio se inserten en una tesis dada.

En otro orden de ideas, como explica Tickner (citada en Sylvester, 2002:11) la mayor parte de las feministas que estudian las RI lo hacen desde una perspectiva constructivista del género, es decir como un producto del discurso y las prácticas sociales. Sin ánimo de ajustar esta investigación a ninguna teoría pre-establecida, de todos modos encontramos que hay una tendencia marcada a tomar las construcciones y los discursos sociales -y por ende políticos- no solo como contexto de las situaciones que viven las mujeres, sino como narrativas que operan construyendo las realidades, las expectativas y las relaciones de poder entre los géneros.

Esta negativa a trabajar desde las corrientes principales de las RI deviene del hecho que al ser investigadas para buscar marcadores centrales como el sexo, el género, y su cruce con la raza, clases sociales o inclusive el imperialismo, se encuentran distorsiones y prejuicios (Sylvester, 2002:272), pero más grave aún se encuentran exclusiones, temas que no se ven, no se tratan, es

decir, se invisibilizan. Luego, las feministas buscan los sitios donde se encuentran las relaciones de género, los cuerpos, las subjetividades y las narrativas, o sea, aquellos conocimientos que nos obligan a re-plantearnos ciertas preguntas y aquello que creíamos saber. Esto no es tarea fácil, las cuestiones de género no saltan a la vista, sino que deben ser buscadas, ya que normalmente el sexo y el género se pasan por alto. De esta forma, se nos enseña que enfermedades como el HIV son cuestiones que se incluyen entre los nuevos temas de seguridad internacional, pero no se nos enseña que esta epidemia está íntimamente relacionada con la violencia sexual y explotación de la mujer, con las redes de prostitución y de trata de personas (Hudson et al., 2012:2). En definitiva, como explica Tickner (2005:4) lo que es singular en el trabajo de las feministas es su compromiso para plantear preguntas feministas y construir conocimiento desde las vidas de las mujeres, compromiso este que tiene mayores implicaciones ya que puede tener el potencial de transformar los marcos de conocimiento existentes.

Finalmente, ningún trabajo que analiza la situación de las mujeres y las relaciones de género estaría completo sin revisar las masculinidades que complementan o antagonizan a las femineidades bajo estudio; ello así, dado que de otro modo se estaría mezclando el género con la mujer en lugar de apreciar su nexo relacional (Steans, 2013:38). Por ello, se han problematizado, en lo posible, las construcciones de masculinidad de la región bajo estudio y como estas son manipuladas, lo cual evita la tendencia a tratar a los hombres como la norma y a las mujeres como marginales (Steans, 39), ya que ello también informa las relaciones internacionales.

Para terminar vale recordar las palabras de Sarlach (1999:391):

“...la mayor parte de las mujeres en África Sub-Sahariana están, por necesidad, mas concentradas en cuestiones urgentes como la supervivencia, que con las rumias sobre si el sexo es o no una construcción social. Para una ruandesa cabeza de familia, intentar conseguir suficiente cantidad de comida para sus propios hijos y los de su hermano fallecido mientras lucha contra el HIV y el trastorno post-traumático provocado por la guerra, que tan relevante es el debate esencialista-constructivista?”.

O, en su caso, cualquier otro debate teórico.

METODOLOGIA

En primer lugar, se tomarán en cuenta las guerras civiles de Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo, con énfasis en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, vistos desde dos momentos: el conflicto propiamente dicho y, luego el post-conflicto, considerado aquí como la etapa que comienza una vez firmados los acuerdos de paz que ponen oficialmente fin a la guerra y por los cuales se constituye un nuevo gobierno, o bien, como el periodo que tiene inicio

cuando un grupo rebelde logra tomar la capital y establecerse como el nuevo poder –por ejemplo, Laurent-Désiré Kabila después de la Primer Guerra del Congo-.

A su vez, se analizará la situación de las mujeres durante la etapa de desarrollo del conflicto armado en sus diferentes roles, para continuar con las consecuencias que viven en la etapa post-conflicto de acuerdo a cual haya sido su condición durante la guerra.

Para ello se hará una revisión de la bibliografía académica existente, un examen de los informes provistos por ONGs reconocidas internacionalmente que trabajaron en el terreno, así como se observarán documentos y reportes de las organizaciones internacionales y de sus organismos especializados con especial interés en aquellos emanados del sistema de Naciones Unidas. Finalmente, se usarán como material secundario algunos artículos periodísticos, libros no científicos y mapas. Es necesario hacer notar que casi la totalidad de la bibliografía es de origen europeo o norteamericano, dado el escasísimo tratamiento de estos temas en Latinoamérica.

En otro orden de ideas, es menester hacer mención al tipo de metodología particular que se usará en este trabajo como consecuencia del uso del enfoque feminista de las RI.

En primer lugar cabe explicar que el género no es usado como variable, ni tampoco como categoría de estudio, sino simplemente como una relación social central en el estudio de la situación de las mujeres.

En segundo lugar, los estudios feministas frecuentemente cruzan las divisiones entre enfoques y usan una variedad de metodologías. Las feministas de las RI han sido muy abiertas sobre la posibilidad de combinar las distintas epistemologías y metodologías existentes, ya que la armonización de diferentes ontologías, epistemologías y metodologías puede darnos otra información al mismo tiempo que proveen otras maneras de ser crítico (Hansen, 2010:19). Como explica Tickner (2005) las feministas de las RI no afirman tener determinados estándares metodológicos para sus estudios, ni desean construir uno; en cambio, la investigación se vuelve un viaje que toma aquellos métodos o herramientas apropiados –por distintos que sean- para llegar al objetivo buscado en lugar de comprometerse con metodologías existentes, lo cual es más típico de las corrientes principales de las ciencias sociales (Tickner, 3). Por lo tanto, el conocimiento se construye simultáneamente dentro de los parámetros de la disciplina y fuera de ellos (Tickner, 4).

De esta forma, en este trabajo se usará bibliografía feminista que responde a diferentes enfoques, entre ellos encontramos: investigaciones cuantitativas y comparación de casos que fueron los adoptados, en general, por el feminismo empiricista; el estudio de las realidades sociales de individuos concretos en contextos determinados que deja de lado las estructuras abstractas y no toma al estado como actor central de las RI, tal como es el caso del feminismo *standpoint*; y

finalmente, la visión de las feministas post-estructuralistas que analizan como el discurso construye al sujeto y ello delimita y legitima determinados cursos de acción (Hansen, 2010:19-24).

Para concluir, cabe decir que el propósito de este trabajo y estas elecciones metodológicas no fueron hechas buscando traer preguntas de RI al feminismo, sino incorporar preguntas feministas a las RI, aunque esto implique salirse un poco de las fronteras de la disciplina.

ALGUNAS CUESTIONES METODOLOGICAS

Analizar los conflictos del continente africano suele ser una tarea compleja, principalmente porque la información habitualmente está incompleta y no es del todo fiable: a veces porque surge de la maquinaria política de alguna de las partes en combate y/o porque fue manipulada de alguna manera; además algunos estados y sus conflictos parecen despertar mayor interés que otros - Burundi no es uno de ellos-; muchas veces la información es anecdótica porque no se han elaborado estadísticas o no se han realizado investigaciones al respecto y se basa en los relatos de los locales que tampoco logran ser muy precisos por obvias razones; finalmente, porque en las últimas décadas se comenzaron a tomar en cuenta categorías que antes no eran relevantes y por lo tanto no hay datos disponibles, como por ejemplo no se sabe si hubo participación de mujeres en las matanzas de Burundi de 1972.

Asimismo, trabajar en el terreno durante el conflicto es una tarea difícil, ya que por un lado no hay cobertura cuando los medios no están interesados en mostrar una nueva “guerra tribal”; por otro, el análisis académico llega cuando la violencia ya terminó. Entonces la información suele surgir de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o del propio gobierno de turno.

En otro orden de ideas, como se he visto desde los conflictos de las últimas décadas del Siglo XX, hay una tendencia mundial a que el frente de batalla ya no esté definido, sino que las guerras se libren entre la propia población. Por ello encontramos la tendencia creciente a que el mayor número de bajas no sea de combatientes, sino de los civiles no involucrados directamente en los conflictos. A su vez, gran parte de estas víctimas no mueren como causa directa de la violencia de la guerra, sino por los efectos que trae como desnutrición, violencia sexual, desplazamientos forzados, heridas, enfermedades, etc. (Williams, 2011:27). Precisar con seguridad la cantidad de víctimas en los conflictos suele ser muy difícil, tanto por los motivos referidos como por otros: usualmente no hay censos pre-conflicto confiables en la mayor parte de los estados africanos, muchas veces inclusive porque fueron arbitrariamente modificados por los mismos gobiernos, como fue el caso en

Ruanda y Burundi para esconder datos, como por ejemplo la mengua en la cantidad de personas de una etnia que fue perseguida (ver Uvin, 2001), o porque los mismos pobladores o refugiados no quieren ser censados porque tienen miedo a persecuciones de variada índole (Uvin, 2001:168), y tampoco hay estadísticas confiables del número de nacimientos y decesos por causas naturales.

A su vez, cada gobierno, institución u ONG recolecta los datos que considera necesarios, usando diversas metodologías (Kuehnast et al., 2011:6) y con diversos parámetros, por lo cual muchas veces nos encontramos con variaciones sustanciales en los números de muertos y afectados por las guerras. Todo ello amén de la referida dificultad de trabajar en el terreno recolectando estos datos durante pleno conflicto. Entonces el número de víctimas de una guerra, o en su caso, en el post-conflicto, puede variar significativamente dependiendo de donde provenga la información. De este modo, no se sabe con precisión cuál fue, por ejemplo, el número de bajas civiles en Ruanda por acciones directas del FPR entre abril y diciembre de 1994. Un informe de Amnesty International (AI) de agosto de 1994 manifiesta que cientos, aunque posiblemente miles, de personas desarmadas y opositores fueron sumariamente ejecutados; mientras que Human Rights Watch (HRW) reportó en septiembre que fueron cientos de civiles (Eltringham, 2004:103). Por otro lado, el ACNUR envió una misión liderada por Robert Gersony luego de que se estableciera el Gobierno de Unidad Nacional el 17 de Julio de 1994; según el informe elaborado por esta misión se estimaba que el APR había matado a miles de personas por mes entre abril y agosto de ese año, de forma sistemática y premeditada, estimando el número de bajas en algún lugar entre 25.000 y 45.000; mientras que la Comisión de Expertos enviada por Naciones Unidas informó que no encontró evidencia que hubiera habido ejecuciones organizadas u ordenadas por el comando del APR, desestimando el reporte anterior, el cual, aparentemente nunca debió haber sido escrito (Eltringham, 104-106). Como es posible observar, hubo una diferencia importante entre los datos aportados por cada una de estas instituciones, e inclusive serias dudas sobre la veracidad de la información brindada.

Por otro lado, para que la información fuera más eficaz, sería necesario clasificar los decesos en por lo menos dos categorías: muertes en el campo de batalla y muertes relacionadas con el estado de beligerancia, ya sea por enfermedades, hambruna, etc. A su vez, estos números deberían estar desagregados por sexo y, en lo posible, por franja etaria; sin embargo, esos datos son virtualmente inexistentes (Kuehnast et al., 2011:6). A pesar de que en la Res. 1325 del Consejo de Seguridad se reconoce la importancia de recolectar información sobre los conflictos y analizarla, aún falta mucho por hacer a este respecto (Kuehnast et al., 7); además que aquella que no se obtuvo en su momento ya está perdida. Sin ir más lejos, a pesar de que cuando se votó esa resolución los conflictos en la

República Democrática del Congo y Burundi aún continuaban, no hay información desagregada por sexos sobre las tasas de mortalidad de las guerras en estos países.

Otra dificultad se encuentra en determinar de qué especie son los conflictos en el continente africano y, específicamente, los que se verán en este trabajo. Por un lado, se pueden hacer varios tipos de clasificaciones, entonces podemos distinguir entre: conflictos intra o interestatales, con la participación o no del estado, y aquellos que han quedado solo como intra-estatales o los intra-estatales que se han internacionalizado. La mayoría de los conflictos africanos suelen ser guerras civiles o luchas entre diferentes facciones, es decir, intra-estatales, y mayormente, sino siempre, con la participación del estado como una de las partes belicosas; mientras que, por lo menos, durante un periodo de tiempo se han internacionalizado por el envío de Misiones de Paz por alguna organización internacional, o bien como sucedió en el Congo por la intervención de fuerzas armadas de otros países que apoyaban al gobierno nacional o a algunos de los grupos rebeldes que buscaban hacerse con el poder. También en muchos casos hay episodios de violencia transfronterizos que derivan en que una zona – y no ya, todo un país- esté en conflicto. Esto se suele dar cuando hay grupos armados que son sostenidos por un gobierno para atacar en el territorio de otro estado, como sería el caso de Ruanda y Uganda que mantuvieron fuerzas insurgentes en las provincias del este de la RDC.

En cuanto a determinar el número de conflictos que se han dado en un momento determinado tampoco es tarea sencilla. Generalmente depende de qué organismo o institución haga el análisis, y cuáles son los parámetros mínimos que pone, para que cuando se cruce dicho umbral se lo considere un conflicto. Ello deriva en que el número de conflictos sea variable. Luego, es necesario determinar cuál es la intensidad del conflicto, para lo cual se vuelve a depender de las mediciones institucionales y, nuevamente, los resultados son relativos. Para dar un ejemplo: el *Uppsala Conflict Data Programme* define un conflicto armado como una incompatibilidad en disputa que concierne a un gobierno o a un territorio, o a ambos, y donde el uso de las fuerzas armadas entre dos partes, de las cuales por lo menos una pertenece a un estado, resulta en por lo menos 25 muertes en el campo de batalla, mientras que una guerra conllevaría 1.000 muertes durante las batallas en un año calendario (Williams, 2011:20). Entonces de acuerdo a esta base de datos África sufrió, desde el fin de la Guerra Fría, un tercio de todos los conflictos mundiales (Williams, 20). Por otro lado, Monty Marshall, a quien le fue encargado por el *UK Government's Africa Conflict Prevention Pool*, hacer un relevamiento de los conflictos en África Sub-Sahariana, puso como piso mínimo 500 muertes directas en batalla, con lo cual los números fueron sustancialmente diferentes (Williams, 19).

En los casos de los países que nos ocupan no hay dudas sobre la existencia de conflictos intra-estatales, así como de su internacionalización por el envío de Fuerzas de Paz por Naciones Unidas;

a su vez, en el caso de la RDC consideramos que el conflicto fue intra-estatal a pesar de las tropas enviadas por los distintos países de la región para apoyar a un bando u otro, atento que no hubo declaraciones de guerra, invasiones directas o luchas por la conquista de un territorio entre los distintos estados, sino que fueron intervenciones en la política interna de ese país. Por otro lado, este último conflicto también se internacionalizó por el envío de Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. En cuanto a la intensidad de los conflictos y dada la duración y cantidad de muertos como se verá en los próximos capítulos, consideramos que pueden clasificarse como guerras civiles. Finalmente, dado que el número de guerras a tratar es limitado por el marco geográfico, no es relevante a los efectos de este trabajo dilucidar cuantas otras guerras existían en el continente africano durante el mismo periodo.

CONCEPTOS Y TERMINOLOGIA

Consideramos necesario precisar algunos conceptos y alcances terminológicos para aclarar el significado que se les ha dado a lo largo del trabajo, especialmente ante la variedad de interpretaciones, inclusive teóricas, que pueden tener algunos términos. En este orden de ideas, solo se explicarán como han sido definidos o entendidos a los fines de esta investigación sin entrar en discusiones sobre otras posibles maneras de comprenderlos.

Para comenzar, los términos como “hombre”, “mujer”, “niña”, “niño”, etc., son definidos de acuerdo a las características físicas biológicas, es decir: los hombres –o niños, en su caso- son los sujetos de sexo masculino, mientras que las mujeres o niñas son aquellas que presentan los rasgos biológicos femeninos. Esta categorización es, de alguna manera, concordante con la manera de percibir las diferencias de sexo en la región bajo estudio, donde las divisiones entre hombre y mujer son bastante tajantes. De todos modos, estamos conscientes de la problemática que podría presentar homogenizar estos términos de forma monolítica, atento a las diferencias entre los componentes de cada uno de aquellos, pero muy especialmente debido a las construcciones sociales de género.

Por otro lado, en cuanto al género, entendemos que este viene determinado por un conjunto de expectativas y normas concernientes a los comportamientos, características y roles apropiados para los hombres y las mujeres en una sociedad dada y en un momento histórico preciso. El género y los roles de género son culturalmente específicos, aprendidos y cambian con el tiempo, a la vez que son influenciados por otros marcadores como la raza, la religión, la clase, la edad, e inclusive la política, entre otros. Judith Butler argumenta que el género es performativo, es decir algo que se “hace” en lugar que se “es”. Esta autora reconoce el cuerpo como físico, material, pero se niega a separarlo del discurso; de esta manera el cuerpo nunca escapa al proceso por el cual es significado (Steans,

2013:33). Luego, la identidad no existe antes del discurso; más aún, en el proceso de construcción, el discurso sobre el cuerpo desplaza el sexo en favor del género (Steans, 33). En otras palabras, la sociedad no estaría compuesta por dos sexos -masculino y femenino- pero por sexos binarios de hombre y mujer que están profundamente enraizados en las convenciones sociales y por ende en el lenguaje; de esta forma, la construcción binaria se mantiene no porque provenga de diferencias esenciales, pre-existentes, sino porque son continua e ininterrumpidamente reproducidos en el discurso como binarios en permanente oposición (Steans, 33). Los géneros binarios construyen las “diferencias” de los cuerpos, justificando también de forma binaria las desigualdades. Más allá que estemos o no de acuerdo con entender al género como performativo, es indiscutible que en la región de los Grandes Lagos, este se entiende como binario y es construido socialmente a través del discurso, el cual, a su vez, informa las identidades masculinas y femeninas. Consecuentemente, las experiencias, posiciones y efectos que viven hombres y mujeres durante y después de los conflictos han sido afectadas por el género al que pertenecen o, socialmente, crean pertenecer. Descubrir las diferencias de género en una sociedad determinada, permite entender las relaciones de poder en general en ese medio, así como echar luz sobre las contradicciones e injusticias inherentes a esas relaciones (El-Bushra, 2000:67).

Como correlato del género, las identidades conciernen al proceso social por el cual los individuos se identifican a sí mismos, o por lo menos intentan hacerlo, con una configuración particular de roles sociales y relaciones con respecto a ciertas características que pretenden poseer.

El patriarcalismo, por su parte, surgió como concepto en referencia a un sistema de gobierno en el cual los hombres rigen la sociedad a través de su posición de cabezas de familia (Walby, 1990:19). Luego, este concepto evolucionó y fue tomado por las feministas para marcar el elemento de dominación de la mujer por el hombre; por ello, ahora podemos definir al patriarcalismo como un sistema de estructuras y prácticas sociales en el cual el hombre domina, oprime y explota a la mujer (Walby, 19-20). Es importante notar que al hacer referencia una “estructura social” excluye el determinismo biológico, y la noción que cada hombre está en una posición de dominación y cada mujer es subordinada (Walby, 20).

La violencia contra la mujer es, sin dudas, otro concepto vago y ambiguo que necesita ser clarificado. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104 de 1994, ofrece en su artículo primero la siguiente definición:

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

A los fines prácticos de dar una definición clara, concisa y universalmente aceptada -en tanto votada por la Asamblea General de Naciones Unidas- del significado de violencia contra la mujer se utilizará este artículo, a pesar de las limitaciones que presenta.

Por otro lado, la violación es definida como la penetración por cualquier orificio del cuerpo de la víctima, ya sea con un objeto o con una parte cualquier del cuerpo del perpetrador o de quien se esté obligando a hacer las veces de aquel, por la fuerza o bajo amenaza de fuerza o coerción, o aprovechando un ambiente coercitivo, o contra una persona que por su edad o condición física o mental sea incapaz de dar su consentimiento libremente.

En cuanto al tema de la violencia sexual, este concepto es definido en el Capítulo VI correspondiente al tema. De todos modos, y atento el uso extensivo que se hace de esta figura a lo largo de toda la tesis adelantamos que consideramos como violencia sexual cualquier tipo de violencia, física o psicológica, dirigida a la sexualidad o a las características sexuales de una persona (Marks, 2012:105). Por otro lado, cuando en el trabajo se haga referencia a violencia sexual o violaciones sistemáticas, masivas o como arma de guerra, se estará hablando no de una ocurrencia común en tiempos de guerra sino de un uso de este tipo de violencia con fines estratégicos, de esta manera la violencia sexual se presenta de forma coordinada, lógica y efectiva (Gottschal, 2004:131).

Por otro lado, la violencia sexual contra los hombres solo se tocará tangencialmente y en relación a la mujer, sin embargo es importante tener presente que muchos hombres también han sido víctimas de violencia sexual durante los conflictos armados bajo estudio, especialmente en las provincias del este de la República Democrática del Congo. La violencia sexual contra el hombre es independiente de la cuestión de la penetración: por ejemplo, en el caso de incesto forzado, ambas partes son víctimas, sin importar quien penetró o fue penetrado (Gerecke, 2010:142). Por ello, debe tenerse en cuenta que la violencia sexual contra los hombres suele tomar formas distintas además de la penetración, tales como tortura sexual, castración, ablación del pene y otras formas de mutilación sexual, obligarlos a presenciar o colaborar con la violencia sexual contra miembros de la familia, comunidad, etc. (Christian et al., 2011:233).

El conflicto es definido como la prosecución de metas incompatibles por distintos grupos. Dentro de este concepto global se encuentran distintos tipos de conflictos, el que nos interesa a los fines de este trabajo es, específicamente, el subtipo conflicto armado, llamado más comúnmente: guerra. Esta se define como el uso de la violencia organizada por distintos grupos con fines políticos que resulta en muertes (Williams, 2011:2). Además presenta otras características, a saber: es una acción no-cooperativa, destructiva, generalizada y persistente; hay violación, captura y destrucción de propiedades, bienes, personas o instituciones; y es instigado por la acción de un

grupo (Berdal y Malone, citados en Brück y Vothknecht, 2011:87). Empero, los conflictos no se caracterizan solo por el uso de violencia, sino que son procesos sociales y políticos que afectan la vida de las personas a las que toca de distintas maneras (Williams, 2011:2); por ello, es una forma dramática de cambio social que implica la desintegración de las relaciones sociales, mientras genera oportunidades de cambio (El-Bushra, 2000:67). Este puede darse o no, en cuyo caso se vuelve a estructuras similares a las existentes en el pre-conflicto, generalmente dando como resultado nuevos estallidos de violencia.

Dentro del tipo conflicto, encontramos el intra-estatal, que huelga definirlo como aquel que se encuentra confinado a las fronteras reconocidas de un estado, entre el gobierno y uno o más grupos de ese estado.

Los conflictos en Burundi, Ruanda y República Democrática del Congo, de acuerdo a la distinción hecha en el apartado sobre cuestiones metodológicas, serían guerras debido a su intensidad y duración. Sin embargo, y a los efectos de este trabajo se usarán indistintamente los términos “conflicto”, “conflicto armado”, “guerra”, “guerra civil”, “estado de beligerancia”, etc. para referirnos a los sucesos de esos países. Lo mismo que para el periodo posterior que puede ser identificado como “post-conflicto” o “pos-guerra”.

En este trabajo se habla de “ejército”, “fuerzas armadas” o “fuerzas regulares” para referirse a las fuerzas armadas gubernamentales de cada país, mientras que “insurgentes”, “grupos armados”, “rebeldes”, “milicias” o cualquier combinación de estos, denota aquellos grupos que se oponen al gobierno del estado, sea porque buscan derrocarlo e instaurar un nuevo régimen, o simplemente porque intentan satisfacer sus propias agendas, aún sin una ideología política clara o definida.

Finalmente, se define al genocidio como un tipo de masacre de masa unilateral con la que un estado u otra autoridad tiene la intención de destruir un grupo al que el mismo perpetrador ha definido (Chalk y Jonassohn citados en Brunetau, 2006:24). Es insoslayable debido a parte de la temática de esta tesis definir al genocidio, eso no implica desconocer la problemática que trae aparejada cualquier conceptualización de este tipo particular de masacre, atento a la ambigüedad del término, a las distintas características que le imprimen los diferentes autores y a la variedad de hechos que han sido denominados, históricamente, como genocidios. Valga, entonces, esta breve definición únicamente a los fines de ofrecer una suerte de comienzo de entendimiento del término.

DESARROLLO DE LA TESIS

El exordio de este trabajo comienza con una breve introducción sobre la concepción que se tiene normalmente de África; luego plantea los antecedentes del problema de investigación y continúa

con la pregunta que motiva esta tesis. Dentro del marco teórico se descartan aquellos enfoques que no serán usados, para luego ofrecer un muy breve repaso de las distintas teorías feministas y como se ha intentado armonizarlas en el presente trabajo. Dentro del apartado de Metodología no solo se expone la misma, sino que se hace mención a la particular forma de investigación que plantea el feminismo, que ha sido usada en estas páginas. Luego nos encontramos con algunas cuestiones metodológicas que es necesario resaltar al intentar retratar la realidad de los conflictos visitados. La problemática tratada además, nos obliga a definir y explicar el uso que se le da a ciertos conceptos y términos. Por fin, se describe el desarrollo de la tesis y se brindan algunas aclaraciones adicionales.

En el primer capítulo se cuenta brevemente la historia de Ruanda, Burundi y la RDC, desde la época pre-colonial hasta el gobierno inmediatamente anterior a aquel que estuvo antes del comienzo de las guerras civiles en el caso de los dos primeros países, y la Primera Guerra del Congo, en el caso de aquel último estado. Este recuento se hace desde el llamado “género neutro”, es decir sin hacer distinción entre los roles de los hombres y las mujeres en los acontecimientos. Sin embargo, se tiene presente que aquello que se considera “género neutro” en realidad no es neutral. Constantemente se está haciendo alusión a lo que los hombres hicieron y las pocas veces que se hace mención a las mujeres es como víctimas, o a aquella “excepción” que hizo tal o cual cosa. Invisibilizar a la mujer, y visibilizar al hombre no es un relato en género neutro en realidad, sino que es netamente patriarcal y típico del orden social político que nos fue impuesto a partir de la construcción del estado moderno, donde la vida de la mujer se privatizó y la del hombre se hizo pública (ver Pettman, 1996). De este modo el hombre se generalizó como ser universal y su historia pasó a ser el relato de “género neutro”. Teniendo en cuenta esta problemática, y a pesar de la gran cantidad de bibliografía consultada para el estudio de los Capítulos I y II, inclusive parte escrita por mujeres, solo una autora, Patricia Daley, narra la historia de Burundi desde el género.

Las causas que dieron origen a las guerras civiles de Burundi y Ruanda, así como a la Primera y Segunda Guerra del Congo y los sucesivos conflictos en ese país serán visitados en el Capítulo II. Luego, desde las teorías feministas y a través del llamado lente de género se hará un breve análisis de algunas causas que entendemos coadyuvaron al inicio de los conflictos en la región de los Grandes Lagos. Es preciso tener en cuenta que los elementos estudiados no implican de modo alguno excluir otras causas analizadas, sino que es una revisión de otros aspectos que normalmente no se toman en cuenta cuando se hacen los análisis de género neutro.

El Capítulo III comienza con un repaso del concepto de víctima y como hombres y mujeres son afectados por los conflictos armados. Luego, se examina la situación social y se hace una breve descripción de la vida de las mujeres, así como de las relaciones de género en estos estados antes de la llegada de los colonizadores. Inmediatamente se explican los cambios que tuvieron lugar debido

a la colonización, como se vio afectada la sociedad en general y las mujeres en particular. Para concluir se describe que lugar ocupaban las mujeres socialmente luego de la descolonización, así como los efectos de la injerencia europea en las relaciones de poder entre hombres y mujeres hasta el comienzo de las guerras civiles. Todo ello a fin de compararlo con la situación de la mujer durante el conflicto y en la etapa posterior. A raíz de lo visto, se analizarán las construcciones de masculinidad y femineidad en la región de los Grandes Lagos, como estas identidades se vieron afectadas por el conflicto y algunas consecuencias de ello. En ese apartado se hace un especial énfasis en las masculinidades, aunque se estudia como la destrucción de esa identidad idealizada del hombre impactó en el segmento femenino. Por fin, se examina la militarización de la sociedad y la relación de ese fenómeno con los roles de género y las violencias sociales y domésticas que surgen a partir del estado militarizado. Desde las teorías feministas se estudia la construcción de masculinidades violentas y la desvalorización de todo lo relacionado con lo femenino.

El Capítulo IV apunta a analizar cómo respondieron las mujeres a los conflictos armados. A tal fin se comienza explicando la dificultad que implica clasificar a las mujeres en categorías cerradas y específicas. Después se continúa haciendo un recorrido por las diferentes formas en que las mujeres han desplegado su accionar durante las distintas guerras, sea como componentes de las fuerzas armadas del estado, como elementos de los grupos rebeldes o como perpetradoras de genocidio. Luego, se hace un breve repaso de las teorías que analizan las acciones de las mujeres cuando deciden tomar las armas, conducta que hasta hace pocos años era vista como perteneciente al ámbito masculino. Finalmente, terminamos con un recuento de la actuación de las mujeres en su rol de activistas por la paz, así como su trabajo desde las organizaciones de base para intentar llenar los espacios que el estado no ocupa por diferentes motivos.

En el primer apartado del Capítulo V se ve la cuestión de la violencia y explotación sexual sufrida por las mujeres durante las guerras, tanto a manos de los grupos insurgentes como de los ejércitos regulares. Luego, el trabajo se enfoca en el mismo tipo de violencia y la extensiva explotación de prostitutas por parte de los componentes de las operaciones de paz de Naciones Unidas, así como de otros trabajadores de ayuda humanitaria en el terreno. A raíz de esa violencia desplegada contra las mujeres sus vidas cambiaron drásticamente, por ello se analizan cuáles son los efectos a nivel personal y el impacto en el entorno social; dicho de otra forma, como el uso masivo y sistemático de las violaciones como arma de guerra han generado no solo costos en las mujeres sino en sus familias y en la comunidad en general. En el último punto se hará un repaso de las principales teorías esgrimidas para explicar el uso de violencia sexual contra las mujeres durante los conflictos armados. El uso masivo de este tipo de violencia nos obliga a buscar otras respuestas, especialmente cuando se tiene en cuenta que también los hombres han sido víctimas. Por ello, se

tomará una posición ecléctica, ya que el fin de este punto no es formular una teoría general de la violencia sexual durante la guerra, lo que excedería la finalidad del capítulo y de la tesis en general, sino que se intenta explicar el porqué de esta violencia en los conflictos que nos ocupan.

El Capítulo VI comienza con la actuación de las mujeres en las negociaciones de paz, especialmente en Burundi y la RDC. Aquí queda plasmado como la discriminación que sufren en la vida diaria se traslada directamente al ámbito político. Luego, se hace un repaso de cómo vivieron las mujeres el post-conflicto. Esta parte estará dividida en tres apartados: victimización, re-victimización y ¿desvictimización/empoderamiento? Este análisis pretende probar la hipótesis, ya que al hacer un repaso de los distintos lugares que ocuparon las mujeres y como fue su situación en el post-conflicto se llega a la conclusión que sin importar que rol tuvieron durante el estado de beligerancia, las consecuencias que enfrentaron luego fueron muy similares. La elección de estos subtítulos no implica de forma alguna que consideremos a las mujeres únicamente como víctimas; sin embargo no podemos soslayar que el post-conflicto fue una etapa en la cual se crearon nuevas víctimas y se re-victimizó a otras, mientras el empoderamiento de algunas no fue más que una fachada para presentar al mundo, y aquellas que habían vivido las guerras en sus propios términos, luego no pudieron sostener esas libertades.

Finalmente presentamos la conclusión. Su título es una pregunta, y la respuesta es que no solo las mujeres no han logrado mantener las ganancias obtenidas durante el conflicto, sino que en el mejor de los casos han vuelto a las estructuras patriarcales anteriores al inicio de las guerras. Si bien ha habido algunos cambios, estos han sido cosméticos y no de fondo, especialmente en el ámbito político que es uno de los que más se suele señalar como innovador. Por otro lado, Ruanda que es donde más se evidencian estas transformaciones, ha tenido por otro lado fuertes retrocesos como respuesta directa a esos mismos cambios. Para concluir, y como corolario de los capítulos precedentes, especialmente el inmediato anterior, entendemos que podemos probar nuestra hipótesis de trabajo al demostrar que las situaciones que vivieron las mujeres en el post-conflicto fueron muy similares, a pesar de sus distintas posiciones durante la guerra.

Para concluir, solo resta aclarar que cualquier historia que pueda haber sido relatada a lo largo de este trabajo no fue seleccionada con la intención de describir hechos trágicos, ya que se sopesó su inclusión, sino que se hizo para demostrar la realidad que vivieron esas mujeres, la cual a veces parece enajenarse cuando se utiliza el lenguaje académico: descriptivo pero a la vez distante.

CAPITULO I

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA: RUANDA, BURUNDI Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

“Si la suerte del continente africano evoca desesperanza, en ningún lugar la sensación de desesperación es más evidente que en la antigua África belga” René Lemarchand (2004:61)¹.

Probablemente pocos acontecimientos en África, hayan captado el imaginario colectivo como el genocidio de Ruanda. Ciertamente, no ha sido el caso de la matanzas en Burundi o de los millones de muertos que se cuentan en las Guerras de la República Democrática del Congo, que apenas han aparecido en las noticias. Lamentablemente cuando algunos de estos acontecimientos llegan a los medios, los conflictos se han visto reducidos a una situación binaria y esencialista: tutsi² contra hutu, "matanzas por diferencias étnicas", actos "salvajes" propios de ese continente. Inclusive muchos académicos pretenden darle una visión simplista a procesos que son complejos, ya sea argumentando que son guerras por cuestiones étnicas, por saqueo de recursos naturales, o por agravios sociales (ver Williams, 2011). En realidad, los hechos que se sucedieron en Ruanda, Burundi o en la RDC están muy lejos de ser conflictos por diferencias étnicas y tampoco son

¹ La traducción del inglés es nuestra. Todas las traducciones de los distintos autores o artículos periodísticos que se citan en este trabajo, sean en inglés, portugués, italiano o francés, son nuestras.

² Según Mamdani (2001:53) tutsi y hutu son palabras invariables que no cambian por número o género. Las palabras Abatutsi/Watutsi, Abahutu/Wahutu y Abatwa/Watwa son los plurales de Umututsi, Umuhutu y Umutwa (Gatwa, 2005:4). Cuando estas palabras son precedidas por un artículo o un determinante indefinido pierden la A o la U del prefijo inicial, quedando de este modo: Batutsi, Bahutu y Batwa y los singulares como Mututsi, Muhutu o Mutwa..

exclusivos de la región de los Grandes Lagos; basta recordar que el primer genocidio del que se tiene registro en el Siglo XX fue cometido, si, en África, pero por los alemanes contra el pueblo Herero, en lo que hoy es el actual territorio de Namibia (ver Mamdani, 2001:10 y ss.), y los que siguieron tampoco fueron cometidos en África como el genocidio del pueblo armenio, y luego el holocausto judío y romaní.

Por ello, y para comprender de forma más acabada la compleja historia y política de estos países se comenzará haciendo un breve repaso desde el periodo pre-colonial ya que hacer un análisis solo de los sucesos de los años previos a los conflictos armados es empezar en un falso comienzo, porque como “plantea Aristóteles en el marco de su dialéctica, el tiempo no tiene principio [y] cuando marcamos un comienzo, el mismo gesto nos lleva de modo inevitable a pensar en un momento previo” (Peyrú y Corsi, 2003:26).

PERIODO PRE-COLONIAL

Se cree que los pobladores originales de la zona de lo que hoy es Ruanda y Burundi, así como el este de la República Democrática del Congo y parte del sur de Uganda eran los Batwa, pueblo de cazadores y recolectores. Luego, entre los años 722 y 1200, se sitúa la llegada de los primeros clanes bantú, los cuales se dedicaban principalmente a la agricultura (Ogot, 2010:562). Para el Siglo XV estos pobladores fueron formando pequeños estados agrarios, "con varios linajes sometidos a un linaje dominante, que era dirigido por un *mwami* (jefe o rey)" (Ogot, 581), por lo que ya habría habido una suerte de organización política cuando llegó la siguiente ola migratoria. Esta tuvo lugar a partir del Siglo XV, y estaba formada por pequeños grupos pastoralistas que probablemente vinieron del norte o del noreste. Se sostiene que estas migraciones habrían tenido su origen en las comunidades nilóticas-luo del sur de Sudan, y que su capacidad de adaptación les permitió adoptar rápidamente el lenguaje de las comunidades nativas a donde migraban o a las que conquistaban, adquiriendo un nombre distinto del que tenía originalmente (Omeje, 2013:36). Esta última ola migratoria de pastoralistas explicaría el origen de quienes en los siglos venideros pertenecerían a la etnia tutsi, los cuales asimilaron costumbres, rituales y hasta las concepciones de autoridad de los pueblos de la zona.

Jan Vansina (citado en Ogot, 2010:583) demostró que ambas comunidades -pastoralistas y agricultores- convivían en paz, y que el sistema de vasallaje "que vendría a caracterizar las relaciones entre estos dos grupos, se desarrolló después del 1.500", cuando los pastoralistas lograron dominar a los primeros habitantes de la región, y establecer una economía basada en la riqueza ganadera sobre la agrícola, así como construir un sistema político fuerte y centralizado que

dio lugar a los reinos de Ruanda y Burundi (Omeje, 2013:36).

Lo cierto es que cuando llegaron los primeros colonizadores en el Siglo XIX encontraron estados cuasi feudales, con los *mwami* -que ya para esa época se autodefinían tutsi- bien asentados en sus tronos desde finales del Siglo XVIII (Cohen, 2010:321-322). El rey gobernaba con la ayuda de vasallos y consejeros de distintos linajes en las comunidades a través de un complejo sistema jerárquico (Omeje, 2013:37). Algunos pobladores se defendían "de las arbitrariedades cometidas por (...) las cortes" (Cohen, 2010:340) emigrando hacia otras áreas "que ofrecían mejores posibilidades de acceso a la tierra" o para escapar de las campañas de colecta de impuestos (Cohen, 340). Parte de estos ruandeses, que fueron migrando en pequeños grupos, se asentaron en lo que ahora son las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur en el este de la RDC (Reyntjens, 2009: 13-22). Mayormente los hutu se fueron hacia el norte y los tutsi hacia el sur (ver Turner, 2013:cap. 3), ocurriendo lo mismo con los Barundi, aunque en menor escala.

La sociedad de Ruanda y de Burundi estaba organizada en clanes y linajes: mientras los primeros eran integrados tanto por linajes tutsi como hutu y no había lealtades entre ellos, los segundos eran conformados únicamente por una de las etnias y mantenían obligaciones mutuas (Mamdani, 2001:54-55). De todos modos, las categorías de tutsi y hutu eran flexibles, y debido a ello se podía subir en la escala social por acumulación de ganado y dejar de ser hutu -*kwihurtura*- para adquirir el status político de tutsi, o bien podía darse el proceso inverso -*gucupira*-, aunque raramente ocurriera (Omeje, 2013:36; Mamdani, 2001:70). Específicamente en el caso de Burundi, se podía descender de *ganwa* (príncipes reales) a tutsi -*gutahira*-, pero no se podía seguir bajando en la escala social, es decir, de tutsi a hutu (Daley, 2008:46). También había casamientos interétnicos, así como relaciones comerciales y de diversas índoles. Pero lo más importante es que ambas sociedades tenían cada una un único *mwami*, sus habitantes compartían un mismo idioma -el *kirundi*³ en Burundi y el *kiruanda* en Ruanda-, "los mismos mitos e historias eran contados, se observaban las mismas prohibiciones y se practicaba una misma religión" (De Heusch, 1995:4), y las relaciones eran pacíficas entre los distintos grupos. Por otro lado, si bien se identifica a los tutsi con el pastoralismo y a los hutu con la agricultura, dichas actividades no eran exclusivas de un grupo u otro (Mamdani, 2001:51), sino que muchos tutsi cultivaban la tierra y muchos hutu también tenían ganado.

Según Omeje (2013:36), en el periodo pre-colonial "tutsi" y "hutu" no eran términos para identificar dos etnias diferentes, sino clases sociales, ya que las clases gobernantes se aventuraron a mostrarse a sí mismas como tutsi -un término que literalmente describía a una persona poderosa y rica en ganado-. El resto de las personas subyugadas eran clasificadas como 'hutu'. Por descarte,

³ El prefijo *ki* en swahili forma el nombre de un idioma, por ej. *kiswahili* es el idioma swahili.

"hutu" se usaba para referirse a quienes no tenían riquezas y eran inferiores o subordinados (Omeje, 36). El poderoso *Mwami* Kigeri Rwabugiri de Ruanda, quien gobernó desde 1860 hasta 1895, fue el último rey en expandir las fronteras (Mamdani, 2001:69), las cuales, tanto de Ruanda como de Burundi, permanecieron prácticamente inalteradas desde ese momento (Lemarchand, 1994:1). Durante sus campañas de expansión territorial, etiquetó a todos los conquistados como hutu (Omeje, 2013:36), ya que centralizó el poder y reemplazó a los jefes locales por colaboradores tutsi, y mientras estos se apropiaban de la tierra y el ganado, los conquistados “eran forzados a entrar en relaciones de servidumbre para obtener acceso a la tierra” (Mamdani, 2001:70). De este modo, el término hutu pasó a estar relacionado con un status inferior (Mamdani, 70).

En Burundi, por su parte, y aunque las relaciones de subordinación eran similares a las de Ruanda, el término hutu era usado de forma más flexible que en aquel país, ya que en *Kirundi* “hutu” se refiere a un “subordinado social”, de tal modo que un tutsi de alto rango sería un “hutu” con respecto a un príncipe, aún cuando su identidad cultural siguiera siendo tutsi (Lemarchand, 1994:10). Por lo tanto era el estatus, y no “la identidad étnica, que determinaba el rango y los privilegios” (Lemarchand, 10) que tenía una persona. El *Mwami* por su parte, “no era hutu ni tutsi, [ya que] personificaba a la nación” (Uvin, 2009:7). Por otro lado, a los *ganwa* (príncipes de sangre real), se los veía como pertenecientes a una etnia separada (Cornwell y de Beer, 1999:84) y gozaban del rango “más alto de la jerarquía socio-política” (Lemarchand, 1994:10). Sin embargo, luego de la descolonización se los asimiló a los tutsi, ya que “la dicotomía hutu-tutsi eliminó otras alternativas de identidad social” (Lemarchand, 15), suprimiendo también a los *bashingantahe*, que eran los notables locales, mayormente de origen hutu y en cuya sabiduría confiaban tanto unos como otros (Lemarchand, 15). Esto fue resultado directo de la colonización belga, la cual como en Ruanda, sustituyó a los jefes locales por otros, generalmente de origen tutsi, a los cuales se los terminó por asimilar, junto con los *ganwa*, a los europeos. Un caso paradigmático que ilustra este hecho es citado en Lemarchand (1994:46): en 1934 hubo un levantamiento en el cual solo participaron hutu y twa luego de una epidemia de tifus; durante este se quemaron más 300 chozas y 10 escuelas de los misioneros, mostrando ya un incipiente tinte anti-tutsi.

El Reino del Kongo⁴, en cambio, presentó aristas diferentes, además de que su primer contacto con los europeos fue siglos antes que los ruandeses o los burundeses. Su territorio se extendía desde el Océano Atlántico y cubría partes de las actuales Angola, Congo, Gabón y por supuesto la actual RDC, dominando en África Central desde aproximadamente 1482 hasta 1550 (Deibert, 2013:9). La vida política del reino estaba centrada en la ciudad de *Mbanza Kongo* –corte

⁴ Lo que ahora es la R. D. del Congo, ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia. Se usará cada uno de estos, de acuerdo a como se lo denominaba en el momento histórico del que se trate.

del Kongo- donde residía el monarca, el *ManiKongo*⁵ (Hochschild, 1999:4-5). Después de algunos encuentros con navegantes portugueses, finalmente en 1491 llegaron los primeros misioneros y emisarios de Portugal, los cuales se establecieron en la ciudad de forma permanente, erigiendo iglesias y otros edificios (Hochschild, 4-5). Como otras naciones en África, los Bakongo también tenían esclavos, mayormente capturados en las batallas con otras tribus (Hochschild, 6); sin embargo fue con la llegada de los europeos que el comercio de esclavos floreció, enviándose hacia el 1530 más de 5.000 cautivos por año (Deibert, 2013:10) al “Nuevo Mundo”. Los siglos venideros trajeron miseria, guerras civiles y revueltas, además de la despoblación de la región por el intenso tráfico de esclavos, todo lo cual terminó por dividir al Kongo en pequeños estados.

PERIODO COLONIAL

Originalmente y de acuerdo a la división establecida por la Conferencia de Berlín de 1885, a los alemanes se les otorgó el control de lo que hoy son los territorios de Tanzania (menos la isla de Zanzíbar) y los reinos de Ruanda y Burundi, que fueron anexados pasando a llamarse: Ruanda-Urundi, y cuyo gobierno colonial era mantenido con una dotación mínima de personal germano. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916 específicamente, los belgas conquistaron dicho territorio mediante una fuerza armada proveniente del llamado, en aquel entonces, Congo Belga. Finalmente, luego de que Alemania perdiera la Guerra, y tras el Tratado de Versalles, se le concedió a Bélgica los territorios ocupados de Ruanda-Urundi, pasando a ser formalmente colonia belga bajo la autoridad de la Liga de las Naciones (Omeje, 2013:26) cuando este organismo le otorgó mandato en 1924, continuando luego, bajo el sistema de fideicomiso impuesto por la Organización de Naciones Unidas.

En 1865 Leopoldo II fue coronado rey de Bélgica. Este, después de organizar una serie de sociedades con supuestas intenciones científicas, logró el apoyo necesario para establecerse en el territorio del Kongo, contratando para llevar adelante el trabajo al infame Henry Morton Stanley. (Deibert. 2013:13). Al año siguiente de la Conferencia del Berlín, la cual había reconocido el territorio como propiedad personal del rey belga, nació el *État Indépendant du Congo* (Estado Libre del Congo). A manos de la *Force Publique* (Fuerza Pública), creada en 1886 y compuesta de oficiales blancos y soldados negros (Deibert, 14), la población nativa sufrió todo tipo de abusos: violaciones a las mujeres, saqueos a los pobres campesinos, castigos corporales como latigazos o mutilaciones, trabajos forzados; lo cual sumado a las hambrunas y epidemias, resultó en la reducción de casi el 50% de los habitantes originales (McCalpin, 2002:35). Finalmente en 1908 la

⁵ Otros autores se refieren al rey como *Mwene Kongo* (Deibert, 2013:9).

colonia pasó a manos del Gobierno Imperial Belga, luego del escándalo que hicieron público la degradación y la explotación de la población, mostrando la verdad del accionar del rey “filántropo”.

Los belgas impusieron en todas sus colonias africanas el mismo tipo de administración común a la época: la administración indirecta. Esta se basaba en mantener poco personal europeo en la colonia, pero suponiendo una "fachada de legitimidad al usar subrogantes locales" (Omeje, 2013:30). De este modo, el gobierno indirecto se utilizaba para mantener el orden, imponer la ley y cobrar los impuestos, lo cual llevó a todo tipo de abusos y vendettas étnicas por parte de los administradores, quienes gozaban de impunidad para cometer estos atropellos (Omeje, 30). El gobierno indirecto, a su vez, contribuyó "a mitigar la dialéctica del colono-nativo fracturando la conciencia de raza de los nativos en conciencias étnicas múltiples y separadas" (Mamdani, 2001:23), lo cual en los casos de Ruanda y Burundi, contribuyó a crear la idea del tutsi como "otro", como "colonizador" que venía a dominar y explotar a los nativos: los hutu. Más aún porque, a diferencia de las "Autoridades Nativas" propias del gobierno indirecto que se estableció en toda la África colonial, en Ruanda-Urundi, los belgas etnizaron la autoridad nativa, es decir, quien gobernaba en nombre de la autoridad colonial era la elite tutsi. Entonces, los hutu no eran gobernados por sus jefes hutu (Mamdani, 34), sino por la aristocracia tutsi. Esto, a su vez, contribuyó a que se cristalizaran más rápidamente las distinciones sociales que se habían profundizado con el *mwami* Rwabugiri (Eltringham, 2004:15). Lo mismo sucedió en el re-bautizado *Congo Belge* o Congo Belga, donde se intentó reconfigurar los arreglos étnicos, y cuando no pudieron cambiarlos, “favorecieron a algunos grupos sobre otros para promover la empresa colonial” (Deibert, 2013:18).

En Ruanda-Urundi, una de las tareas a las que se dieron los primeros europeos al llegar y luego se intensificó bajo el control belga, fue a contar y clasificar a los habitantes de la zona (Uvin, 2001:149). Tanto los misioneros como los administradores coloniales distinguieron tres grupos étnicos: los Batwa, los Batutsi y los Bahutu (Chrétien, 1993, citado en Uvin, 155). Los europeos se adhirieron rápidamente a la hipótesis camítica para explicar el origen de los tutsi, los cuales serían parte blancos y por eso superiores a los hutu, negroides bantú, y a los twa, pigmeos. Esto derivó en que no se diera solo una división étnica como en otras regiones de África, sino que se dividieran en razas (Mamdani, 2001:35; De Heusch, 1995:4): por un lado los tutsi, una minoría superior, no nativa, etíope, más similar en rasgos a los blancos, más inteligente y mejor equipada; y por otro, los hutu, mayoría nativa, inferior, cuyo desarrollo social y político se debía a la presencia de los tutsi en Ruanda-Urundi (Omeje, 2013:35). La suposición de los colonizadores era la siguiente: los tutsi eran superiores a los hutu, estos a los twa, y los europeos a todos ellos (Human Rights Watch [HRW], 1999:36). Sobra decir que la aristocracia tutsi ayudó a mantener el mito, ya que coincidía con sus

propias ideas de superioridad (HRW, 36).

Para entender la hipótesis camítica, la cual serviría para fundamentar todo tipo de atrocidades, es necesario remontarse a las historias bíblicas. Los hijos de Noé eran Cam, Sem y Jafet. Aunque el Génesis no hace referencia a que las razas de los hijos de Noé fueran diferentes, el Talmud Babilónico que recoge las tradiciones orales judías que fueron coleccionadas entre los Siglos II a VI d.C. representa a la descendencia de Cam como negros, que están malditos, y a este como un pecador y su progenie como degenerados (Sanders, 1969:521-522). De acuerdo a este mito bíblico, cuando bajaron las aguas luego del diluvio Noé plantó una vid que dio fruto y de esta hizo un vino que lo embriagó. En dicho estado Noé arrancó sus ropas y Cam vio a su padre desnudo, y a diferencia de sus hermanos no lo cubrió. Luego Noé lo maldijo a él y a su hijo Canaán, cuya descendencia sería negra, porque negros fueron los pecados de Cam, y la cual sería esclavizada por la descendencia de Sem y Jafet. De este modo, se identificaba a los descendientes de Cam con los negros africanos. Sin embargo, en la época del Iluminismo se empieza a poner en duda esta visión del origen de los pueblos del mundo. Posteriormente, con el descubrimiento de los restos arqueológicos de la civilización egipcia esta concepción cambia aún más: pasa a ser posible que haya un grupo de humanos que estén a mitad de camino entre los blancos y los negros (Becchis, 2011:4). De este modo se “identificó a los camíticos con los descendientes de un movimiento migratorio europeo-caucásico que hizo de estos ‘negros falsos’, es decir, blancos que solamente en un momento posterior se habrían mezclado con los negros, manteniendo de todos modos ciertas características” (Becchis, 4). Esas particularidades fueron las mismas que se les atribuyó a los tutsi, en otras palabras: una pigmentación más clara de la piel, rasgos más finos, actividades pastorales y mayor inteligencia.

De esta apropiación de la hipótesis camítica se desprendieron dos hechos: el primero fue la re-apropiación de la hipótesis por parte de los hutu; y el segundo, la innegable realidad, que llevó a que la administración belga emitiera tarjetas de identificación, ya que no podían diferenciar a simple vista a los hutu de los tutsi. Ambos sucesos tuvieron un fuerte impacto en los años venideros, en la historia y en el desarrollo político de Ruanda. En cuanto a la primera cuestión, la historia mítica de que una raza caucasoide era responsable por los signos de civilización en África, era más representativa de la “atmosfera intelectual de Europa” que de la historia verdadera de Ruanda (HRW, 1999:37) y Burundi. De todos modos, la hipótesis fue tratada en Europa y luego devuelta a los ruandeses y burundeses a través de las escuelas y seminarios (HRW, 37). Este mito camítico, además, era perfectamente compatible con las historias y mitologías propias de los tutsi sobre su origen celestial (ver Gatwa, 2005; Lemarchand, 1999; Mamdani, 2001), por lo cual, una vez “incorporado al trabajo de los historiadores, se volvió cada vez más difícil distinguirlas”

(Lemarchand, 1999:8). Es de notar, de todos modos, que si bien los batutsi creían en el origen divino de su *mwami*, nunca expresaron que este, o los batutsi en general, no fueran nativos (Mamdani, 2001:79). De acuerdo al informe de HRW (1999:37) la población de Ruanda y Burundi tenía tanto respeto por la educación europea que esta “historia” fue aceptada por toda la población; los tutsi, además, ayudaron a difundirla, mientras que los hutu tuvieron que tolerarla.

La otra cuestión que se deriva de esta hipótesis camítica es que, por más que los colonizadores y los misioneros quisieran darles un lugar de privilegio a los tutsi y ver supuestas diferencias físicas, la realidad era que, mayormente, no podían distinguir a los hutu de aquellos. Esto no es sorprendente en lo absoluto si se toma en cuenta que culturalmente estaban completamente identificados, convivían hacia varios cientos de años juntos y los casamientos interétnicos eran moneda corriente. Como cuestiona Mamdani (2001:50), es impensable que los descendientes de los tutsi y de los hutu se hayan mantenido en líneas puras, y que aún hoy en día sepan de forma tajante a qué grupo pertenecen, sin que nadie se identifique como “hutsi” (Mamdani, 53). Más allá de la acertada observación, ello se explica dado que la sociedad ruandesa, así como la burundesa, eran fuertemente patriarcales, y la identidad de los hijos se pasaba⁶ a través de la línea paterna, es decir un padre hutu tendría hijos hutu, aunque su esposa fuera tutsi.

Entonces, dado que los identificadores corrientes que hubieran separado a los hutu de los tutsi no existían en la práctica, en 1930 en Ruanda, los belgas decidieron introducir las tarjetas de identificación: cada persona se auto-definía como perteneciente a uno de los grupos étnicos y esta identificación “tutsi”, “hutu” o “twa” se anotaba en las tarjetas (Uvin, 2001:156). El resultado fue que un 15% de la población se identificó con el primer grupo, un 84% con el segundo y solo un 1% declaró ser twa (HRW, 1999:38). Estas tarjetas se dejaron de usar recién en 1994, después del genocidio, a pesar de las promesas del presidente Juvénal Habyarimana de reemplazarlas por documentos sin identificación de etnia. Como explica Eltringham (2004:19) si no hubiera sido por esas tarjetas “las referencias a la etnicidad en los discursos políticos hubieran permanecido abstractas y negociables”; sin embargo atento a su existencia, el concepto se cristalizó y se volvió inmutable.

Muchos argumentan que las divisiones étnicas fueron producto de la colonización, pero la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que estas ya existían antes de que los primeros europeos descubran la región (De Heusch, 1995; Uvin, 2001; Lemarchand, 1999; entre otros); aunque estos hayan profundizado estas diferencias a través del control colonial de Ruanda-Urundi. Eltringham (2004:14), por ejemplo, distingue seis usos del término “tutsi”, en diferentes momentos

⁶ Luego del genocidio en 1994, la etnia se continuó pasando como una costumbre y no ya como una imposición legal, dado que el gobierno niega cualquier diferencia de etnias en Ruanda.

y contextos, los cuales podían significar una o más de las siguientes proposiciones:

Una descripción de estatus (rico en ganado); membresía de un linaje de alcurnia; la posesión de autoridad derivada del *mwami*; “reconocimiento social” como “tutsi” debido a riquezas o por extensión del control centralizado (cooptación de los jefes de los linajes); aquellos que tenían ganado; o simplemente “no hutu”

A diferencia de “hutu” que inicialmente significaba “hijo social, cliente o quien no poseía ganado (Jacobs, citado en Eltringham, 14) y luego fue asociado y definido como de estatus inferior (Newbury, C., citada en Eltringham, 14).

Entonces, de acuerdo a lo visto hasta este punto, se pueden distinguir cuatro elementos esenciales que contribuyeron a que la identidad tutsi, tanto en Ruanda como en Burundi, haya sido construida para ser los "otros", la “otra raza”, los “colonizadores”: su dominio pre-colonial; su colaboración con los colonizadores a través de su rol como autoridad nativa –autoridad que ya ejercían de todos modos-; la difusión del mito camítico por los colonizadores y misioneros y su re-apropiación por los hutu; y la construcción de la identidad política. Estos elementos jugaran un importante rol en la descolonización de Ruanda y en la construcción del Poder Hutu, porque como ya se ha entrevisto las identidades “tutsi” y “hutu” han ido variando en los distintos momentos de la historia de Ruanda, dependiendo del poder político de turno.

Volviendo al Congo, la transferencia de este territorio de las manos de Leopoldo II al gobierno belga “vio una reorientación radical del modelo económico del país” (Deibert, 2013:17). Mudaron la capital a Leopoldville (ahora Kinshasa), generaron una enorme burocracia (Deibert, 17-18) y lo abrieron “a los negocios” para quien estuviera dispuesto a invertir. De todos modos, lo que Turner (2007:28) llama “la trinidad colonial”: el estado, la Iglesia y las empresas, continuaron rigiendo la vida de la colonia.

Durante este periodo hubo dos hechos que traerían consecuencias a largo plazo. El primero fueron las masivas expropiaciones de tierra destinadas a la explotación minera y a la siembra comercial de determinados cultivos (Omeje, 2013:27), así como la imposición de ese tipo de sembradíos para cumplir con el pago de impuestos. Toda la tierra que no pudiera ser explotada a través de la minería debería ser usada para cultivos comerciales, ganadería o bien destinada a la preservación de la flora y fauna local, como fue el caso del Parque Virunga, fundado en 1925 y originalmente llamado Parque Nacional Alberto, en honor a su fundador el Rey Alberto I de Bélgica. La falta de tierras, así como la obligación de las familias de destinar cierta parte de sus campos a la siembra comercial y la pérdida de espacio para el pastoreo de las comunidades pastoralistas, generaron una presión importante en las relaciones sociales y entre los diferentes grupos étnicos. Muchos se vieron obligados a dejar sus regiones y comunidades autóctonas en busca del escaso trabajo remunerado que proveía la colonia, o bien para obtener acceso a la tierra para cultivos de subsistencia, por ende parte de estas comunidades desplazadas terminaron por

asentarse en los territorios de otros grupos étnicos (Omeje, 2013:27), resultando en la alteración de la costumbre local del acceso a la tierra “ganado en virtud de ser un miembro de una comunidad ancestral autóctona” y no por ser ciudadano del Congo (Omeje, 27). Entonces la ruptura del sistema tradicional de uso de la tierra, sumado a que los colonizadores tendían a favorecer el acceso a los recursos a algunos grupos étnicos por sobre los otros, dio lugar a divisiones étnicas y tensiones que perduraron y definieron alianzas políticas, así como contribuyeron a alimentar los movimientos independentistas.

El segundo hecho fue el constante flujo de trabajadores traídos de Ruanda por los belgas, para cubrir la necesidad de mano de obra “útil” en las minas y en las cosechas comerciales, los cuales se fueron asentando en las provincias del este, generando importantes comunidades de Banyaruanda. De este modo, entre 1937 y 1955 “las autoridades coloniales fueron responsables de ‘trasplantar’ una gran cantidad de, mayormente, hutu ruandeses como parte de la ‘*Mission d’Immigration des Banyarwanda*’ ” (Vlassenroot, 2006:52). A pedido de los belgas al *Mwami* Rudahigwa envió a más de 80.000 hutu, que se asentaron en el territorio de Masisi (ahora parte de la provincia de Kivu del Norte), para servir como mano de obra en las plantaciones europeas de té, café y algodón, así como en los ranchos ganaderos, además de brindar una solución al problema de la sobre-población de Ruanda (Vlassenroot, 52; Turner, 2013:98-99) y a la falta de población “útil” del Congo. Luego de la independencia, estas personas permanecieron en lo que luego sería Kivu del Norte; de esta manera los Banyaruanda pasaron a constituir la mitad de la población local, pero sin gozar de un reconocimiento de su estatus legal por parte de las autoridades de la colonia, ni por parte de los gobiernos que vendrían.

PERIODO POST-COLONIAL

RUANDA: DE LA REVOLUCION SOCIAL DE 1959 A LA PRIMERA REPUBLICA

LA REVOLUCION SOCIAL

Hacia el final de los años ‘50 la elite tutsi, en sintonía con los otros movimientos independentistas africanos, comenzaron a movilizarse en contra del control belga. Al mismo tiempo, parte de esta elite comenzó a criticar la hegemonía de la Iglesia Católica, que a su vez, empezó a prestarle oídos a las quejas de los hutu (De Heusch, 1995:4). Algunos autores plantean

que este sentimiento anti-colonialista y anti-religioso movió la balanza en favor de los hutu (Uvin, 2001:162; De Heusch, 1995:4). Por otro lado, los colonizadores, en razón de la presión ejercida por parte del Consejo de Administración Fiduciaria de Naciones Unidas y de las protestas locales de los hutu, debieron flexibilizar su política de dominación tutsi y fomentar la participación en el poder de aquellos, para lo cual les dieron más acceso a la educación y a los trabajos en la administración pública (Omeje, 2013:37). A pesar de que estos cambios difícilmente pudieran calificarse de profundos, y no satisfacían en lo absoluto a los bahutu, fueron lo bastante intensos como para asustar a la elite tutsi (HRW, 1999:39), la cual se vio presionada para obtener la independencia lo antes posible, mientras aún se mantenía en el poder.

En febrero de 1957 el *Conseil Supérieur* (Consejo Superior) del *Mwami Rudahigwa Mutara* (Mutara III), “llamó a una rápida transferencia de poder a nuevos ministerios ‘indígenas’ con personal ruandés” (Eltringham, 2004:34). La contra-elite hutu, educada y apoyada por la Iglesia Católica, interpretó este movimiento como un “intento de institucionalizar el aparato de la hegemonía de la elite tutsi” (Eltringham, 34). Temiendo que esto implicara un traspaso de poder luego de la independencia publicaron, el 24 de Marzo de 1957, un manifiesto conocido como *Manifeste des Bahutu*, cuyo título completo es “Nota sobre el Aspecto Social del Problema Racial Indígena en Ruanda”. Este documento fue redactado por nueve intelectuales, entre los que se encontraba Grégoire Kayibanda, quien luego de la descolonización sería el primer presidente de Ruanda, y perteneciente a la contra-elite hutu que, durante los años ’50, fue educada mayormente en el seminario de Nyakibanda, pero a la cual se tenía sojuzgada en empleos de poca categoría (Viret, 2010:13). Al introducir el “problema racial” comenzaron a preparar el terreno para lo que vendría, ya que expuso una “representación racial de ‘doble colonización’” aquella de los belgas por un lado, y por el otro de los “camíticos” (Eltringham, 2004:34).

En mayo de 1958 un grupo de conservadores de la corte habían respondido al Manifiesto de forma arrogante, declarando públicamente que no “había bases para fraternidad y cooperación entre los hutu y los tutsi” (Newbury, C., 1998:12) ya que los primeros habían sido subyugados por los segundos, y por ello, serían siempre, subordinados (Uvin, 2001:158). En un intento por calmar el ambiente, el *Conseil Supérieur*, creó una comisión con diez miembros (cinco hutu y cinco tutsi) para estudiar la situación del “*Problème Mututsi-Muhutu*”; esta concluyó, en junio de 1958, que de acuerdo a los resultados obtenidos no había ningún problema entre ambos y que “toda identificación étnica debía ser borrada de documentos oficiales” (Eltringham, 2006:34). Además, comenzó a preparar un programa de distribución de tierras, a lo cual en una “carta abierta al rey, un grupo que se describía a sí mismo como ‘quince ancianos tutsi’, advirtió que si la distribución de tierras procedía, iría a haber revueltas en el país” (Newbury, C., 1998:12) por lo cual el plan, finalmente,

no se llevó a cabo.

El 25 de julio de 1959 fallece inesperadamente el *Mwami* Mutara III en Buyumbura. Este hecho precipitó los acontecimientos que se venían desarrollando en un clima de incertidumbre e inestabilidad política. En el funeral, para sorpresa de todos, se anunció la sucesión al trono de un joven de 24 años, medio hermano del fallecido rey y quien “nunca fue más que un peón en las manos de la aristocracia tutsi” (De Heusch, 1995:4). Los partidos políticos moderados como *Rassemblement Démocratique Ruandais* (RADER) y la *Association pour la Promotion Sociale de la Masse* (APROSONA, partido de la región de Astrida, hoy Butare) que pretendían organizarse haciendo un corte transversal en la línea divisoria entre los tutsi y los hutu para bajar el tono a la discusión étnica (Newbury, C., 1998:13), perdieron terreno frente al partido monarquista tutsi *Union Nationale Rwandaise* (UNAR), y al *Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu* (PARMEHUTU), identificado exclusivamente con estos (HRW, 1999:39).

El 1º de noviembre de ese mismo año, Dominique Mbonyumutwa que lideraba el PARMEHUTU junto a Kayibanda, fue atacado por miembros de UNAR (Eltringham, 2006:8). Rápidamente corrió el rumor de que este había muerto, lo que provocó casi inmediatamente revueltas campesinas (Newbury, C., 1998:13). De este modo comenzó la llamada “Revolución Social”: una revolución contra la monarquía y la elite tutsi (Omeje, 2013:37) que estalló en las aéreas rurales y se propagó al resto del país. Para comienzos de 1960, una enorme cantidad de propiedades habían sido destruidas, saqueadas y quemadas; alrededor de 1.000 tutsi habían sido asesinados y cerca de 10.000 se exiliaron a los países vecinos (Eltringham, 2006:81-82), especialmente a Uganda, Burundi y las provincias del este del, todavía, Congo Belga. Estos refugiados luego serían conocidos como “los del 59”⁷. Esta violencia no logró que los hutu accedieran al poder; sin embargo los regímenes posteriores interpretarían a los eventos de noviembre del ‘59 retrospectivamente como el ‘momento decisivo’ en el que los hutu se liberaron a sí mismos de los tutsi (Eltringham, 2004:35), olvidando convenientemente que para el 14 de noviembre los belgas habían impuesto el orden a través de un régimen militar con tropas traídas del Congo (Newbury, C., 1998:13). Estas estaban bajo el mando del Coronel Logiest, quien ordenó sumariamente reemplazar a los jefes y sub-jefes tutsi, permitiéndoles a los hutu acceder a los puestos de poder (De Heusch, 1995:4), a pesar de las protestas del *Mwami*.

Mamdani (2001:14) explica que “es en este contexto que los tutsi (...) fueron construidos como una presencia extranjera colonizadora (...) por la gran revolución nativa de 1959”. Sin embargo, David Newbury (2012:50) hace una interesante diferenciación entre el discurso de la contra-elite hutu y las motivaciones de los campesinos durante la Revolución Social. Este autor

⁷ Es una traducción libre del inglés “the 59ers”, y del francés “les 59ème”.

recuerda que los hutu educados en las escuelas coloniales utilizaron el relato camítico para sus fines políticos, así como era esgrimido por la elite tutsi que planteaba su innata superioridad para gobernar. La contra-elite hutu afirmaba que sus derechos se fundaban en la ocupación previa del territorio, mientras rechazaban la conquista como autoridad legitimadora. Estas justificaciones no se basaban en evidencia empírica; en cambio, ambas se enmarcaban en ideologías coloniales, lo cual no es sorprendente, dado que ambas elites fueron producto de la educación colonial (Newbury, D., 51). David Newbury (2012:51) continúa argumentando que esto era necesario para que sus discursos sean tomados seriamente por quienes tenían el poder: ya que se dirigían a los colonizadores belgas debían utilizar el relato colonizador. En cambio, los campesinos que participaron de la Revolución poco sabían o les importaban estos mitos, su revuelta era contra quienes ellos sentían que los oprimían, es decir “era el simple ejercicio del poder que creaba y reforzaba las jerarquías de la superioridad social” (Newbury, D., 51).

Finalmente, se realizaron elecciones comunales en junio y julio de 1960, en las cuales el PARMEHUTU, presentándose como MDR-PARMEHUTU (*Mouvement Démocratique Republicain*) y APROSOMA ganaron el 84% de los votos, mientras que los dos partidos “tutsi” UNAR y RADER obtuvieron menos del 9% de los sufragios. Con estos resultados en octubre de ese año se formó un gobierno provisorio con Kayibanda como Primer Ministro (Eltringham, 2004:39). Unos meses más tarde, el Coronel Logiest llamó a una reunión de burgomaestres (intendentes) y consejeros rurales en la localidad de Gitarama el 28 de enero de 1961, los cuales declararon la República, encargando a Kayibanda que forme un gobierno (De Heusch, 1995:5). De este modo el nuevo estatus alcanzado por los hutu, gracias al apoyo de los belgas y de la Iglesia Católica, quedó consolidado mediante un golpe de estado. La Asamblea General de Naciones Unidas solicitó la suspensión de las autoridades ilegítimamente nombradas y ordenó que se lleven a cabo elecciones legislativas conjuntamente con un referéndum para consultar a la población si quería abolir la monarquía definitivamente o mantenerla (De Heusch, 5).

En septiembre de 1961 se llevaron a cabo las elecciones legislativas y haciendo un llamamiento a las diferencias étnicas, que ahogaron las voces de los más moderados (Newbury, C., 1998:16) se confirmaron los resultados de las elecciones comunales del año anterior (De Heusch, 1995:5); además un 80% del electorado votó favorablemente para abolir la monarquía (Eltringham, 2004:39). Finalmente, en octubre de 1961, la Asamblea Legislativa, compuesta en su mayoría por hutu nombra a Grégoire Kayibanda como Presidente de Ruanda, y el 1º de Julio de 1962 se declara la independencia. Para ese momento 300.000 tutsi habían sido desplazados, encontrándose alrededor de 120.000 en países vecinos. Sin embargo, aún más huirían del país, ya que se llegaría a una cifra cercana a los 336.000 de acuerdo al CICR y al ACNUR, después de los sucesos de 1963 y

1964 (Eltringham, 41).

1963-64 – MATANZA Y PERSECUCION

Desde que el *Mwami* fuera depuesto en enero de 1961, parte de los exiliados tutsi, impulsados por François Rubeka (De Heusch, 1995:5) empezaron a atacar Ruanda, intentando retornar al poder. Estos ataques, mal planeados, se llevarían a cabo a lo largo de 6 años (HRW, 1999:40). Este grupo se lo conocía despectivamente en Ruanda como “*inyenzi*” (cucarachas) “por su propensión a retornar repetidamente durante la noche, a pesar de los esfuerzos para aniquilarlos” (Kuperman, 2001:7). Posiblemente “*inyenzi*” derivó de un juego de palabras, dado que los tutsi insurgentes se autodenominaban “*ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi*”, literalmente “los bravos al servicio del ejército del Rey” -nombre de una de las tropas del *Mwami* Rwabugiri-, entonces “*ingenzi*” (bravos), es casi igual a “*inyenzi*” (Eltringham, 2004:47). En diciembre de 1963 se dio el ataque más exitoso, cuando un grupo de entre 200 a 300 tutsi que provenían de Burundi, y cuyo número fue aumentando hasta los 1.000 aproximadamente a medida que atravesaban el país, lograron llegar hasta a unos 18 km. de Kigali, solo para ser frenados por la *Garde Nationale* bajo mando belga (Kuperman, 2001:7; Eltringham, 2006:83).

Estos ataques resultaron en la manipulación de la población por parte del gobierno para incitar una masacre contra los tutsi. Eltringham (2004:42) nota con acierto que los ataques de los tutsi venían ocurriendo desde 1961; sin embargo las matanzas recién comenzaron en 1963, estando entre los primeros en ser asesinados los líderes de los partidos UNAR y RADER, continuando luego, de forma indiscriminada contra la población tutsi en general (Eltringham, 42). Entre diciembre de 1963 y enero de 1964 entre 10.000 y 14.000 tutsi fueron aniquilados bajo extrema violencia (De Heusch, 1995:5). Finalmente las tácticas de terror del gobierno dieron resultado y en 1967 se vio el último ataque de los tutsi exiliados (Kuperman, 2001:7). Estos hechos serían el “preámbulo del genocidio planeado que ocurriría 30 años más tarde” (De Heusch, 1995:5) con espantosas similitudes: el arengamiento a la población desde los medios de comunicación, la participación de los burgomaestres en la “limpieza” de sus aéreas con la ayuda de “grupos de auto-defensa” (Eltringham, 2006:84) y el uso de los relatos étnicos. De estos ataques surgiría el mito de la revolución hutu como una lucha contra las fuerzas opresoras tutsi. Para aquellos “la batalla había sido legítima y brava, los hutu como ‘gran mayoría’ (...) tenían el derecho a gobernar la minoría” (HRW, 1999:40). De todos modos, estas matanzas, que algunos llaman “el primer genocidio”, tuvieron una marcada diferencia con los sucesos de 1994: a los tutsis se les permitió salir del país.

PRIMERA REPUBLICA

El gobierno de Kayibanda (1962-1973) se caracterizó por su despotismo y la persecución política, ya que mató o forzó al exilio a la mayoría de los tutsi que tenían algún poder o participaban activamente en política, así como a muchos opositores hutu que no se unieron al PARMEHUTU (Uvin, 2001:163). Además mantuvo “la política colonial de discriminación, meramente revirtiendo e intensificando la exclusión de los tutsi” (Omeje, 2013:38). A pesar de ello, estos habían comenzado a prosperar (De Heusch, 1995:5), y luego que finalizaron las incursiones de los insurgentes, la violencia contra los tutsi que sobrevivieron y se quedaron en Ruanda mermó, por lo menos hasta los acontecimientos de 1973 (Kuperman, 2001:7).

Ese año sobrevino una avalancha de críticas contra este gobierno ineficiente y corrupto, especialmente por parte de hutu educados y desempleados (De Heusch, 1995:5), entre otras cosas por favorecer desmedidamente a la región de Gitarama de donde provenía el presidente. Asimismo, hubo un último ataque de tutsi insurgentes desde Burundi, que aún intentaban retomar el poder (Scherrer, 2002:38). Kayibanda trató de recobrar el apoyo hutu para su partido, reviviendo los ataques contra los tutsi. Por un lado resucitó el relato de las diferencias entre estos y los hutu, mientras culpaba a los primeros de todo aquello que estaba mal en Ruanda (Kuperman, 2001:7), posiblemente en una tentativa de desviar la atención de la población. Además implementó medidas restrictivas limitando el acceso de los tutsi a la educación y a la administración del sector privado (De Heusch, 1995:5). Sin embargo, este intento tuvo poca vida, ya que no solo no tuvo eco en las aéreas rurales (De Heusch, 5), sino que el 5 de julio de ese año un General del Ejército, Juvénal Habyarimana, aprovechando el caos, lo derrocó en un golpe de estado sin aparente derramamiento de sangre (De Heusch, 5; Kuperman, 2001:7; HRW, 1999:42).

BURUNDI: DE LAS PRIMERAS ELECCIONES A LA SEGUNDA REPUBLICA (MILITAR)

PRIMERAS ELECCIONES

Los años '50 llegaron a Burundi con los aires independentistas que soplaban por gran parte de África Subsahariana, por lo cual para cuando los belgas buscaron introducir reformas en el sistema político de la colonia, a fines de la década, ya habían sido superados por la realidad.

El príncipe Louis Rwagasore, hijo mayor del *Mwami*, fundó, en 1958, el partido nacionalista *Parti de l'Union et du Progrès National* (UPRONA). Este, estaba formado por miembros de la

aristocracia Bezi, a pesar de lo cual, gracias a la popularidad y posición política moderada de Rwagasore, como a su matrimonio con una mujer hutu, contaba con el apoyo de esa comunidad (Daley, 2008:62). Por otro lado, la administración colonial ayudó a conformar el *Parti Démocrate Chrétien* (PDC), que estaba liderado por los dos hijos de un activo colaborador de los belgas y fuertemente identificado con el linaje Batware (Uvin, 2009:9). Dado el apoyo absoluto de los europeos al PDC y los recursos que puso a su disposición, este salió victorioso en las elecciones comunales⁸ de noviembre de 1960. Sin embargo, el triunfo duraría poco.

En cuanto el Príncipe Rwagasore era puesto bajo arresto por la administración colonial, esta decidió formar un gobierno interino en el cual no se le dio lugar alguno a UPRONA (Lemarchand, 1994:53). Dicha situación llegó rápidamente a oídos del Consejo de Administración Fiduciaria de Naciones Unidas, que logró, a través de dos resoluciones (nro. 1579 y 1605), que la administración belga desechase el gobierno interino, llame a elecciones y libere a todos los presos políticos (Lemarchand, 53). En septiembre de 1961 se realizaron las elecciones legislativas, las cuales venció UPRONA obteniendo 58 de los 64 asientos (Uvin, 2009:9) de la nueva Asamblea Nacional. Rwagasore fue nombrado inmediatamente Primer Ministro; sin embargo tres semanas después, el 13 de octubre, es asesinado por un pistolero griego contratado por el PDC (Reyntjens, 2000:7; Lemarchand, 1994:54).

Este suceso se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Burundi, ya que no solamente nunca más habría otro “partido nacionalista multiétnico de éxito” (Omeje, 2013:31), sino que tuvo directa repercusión en las divisiones étnicas que se sucedieron. Por otro lado, el hecho que se sospeche de la participación activa de los belgas en el asesinato de Rwagasore, dio claros indicios de la poca voluntad que tenía Bélgica de permitir que un nacionalista, que estuviera verdaderamente interesado en el bienestar de su pueblo llegara al gobierno, todo lo cual guarda una espantosa similitud con el corto y desgraciado gobierno de Lumumba en el Congo. Basta recordar que una de las acusaciones preferidas de la administración colonial era tachar al Príncipe de lumumbista y de pro-comunista. Por otro lado, recuerda Daley (2008:63) que los occidentales estaban preocupados por el tamaño de la embajada china en Buyumbura, desde donde sospechaban que se traficaban armas al Congo con la hábil intermediación de los tutsi para colaborar con la lucha de Lumumba; aunque los belgas, por su parte, estuvieran haciendo otro tanto al pasar armas a través de los Kivus para los anti-lumumbistas.

⁸ Por la llamada Declaración de Noviembre, hecha en 1959, los colonizadores belgas nuevamente hicieron cambios en el sistema de división territorial: las antiguas *chefferies*, pasaron a ser provincias; y las *sous-chefferies* comunas o municipios (Lemarchand, 1994:51).

LA CORTE TOMA EL PODER

La declaración de la independencia de Burundi el 1º de Julio de 1962, como una monarquía constitucional, tuvo lugar en medio de un clima de incertidumbre, desconfianza e incipientes conflictos étnicos. Sin dudas, la Revolución Social de Ruanda y las matanzas que le siguieron, tuvieron un impacto muy negativo en la sociedad burundesa y en su elite política. UPRONA, luego del asesinato de su líder, se dividió en facciones internas; la Asamblea Nacional se fraccionó en líneas étnicas y el gobierno quedó paralizado (Lemarchand, 1994:67); por lo cual, el *Mwami* Mwambutsa apareció como “la única fuente de legitimidad con la cual tanto los hutu como los tutsi pudieran relacionarse de forma significativa” (Reyntjens, 2000:7). Lamentablemente el *Mwami* era un neo-conservador con ideas pro-occidentales y su máximo interés era preservar el status quo, lo que derivó en que nombrara a un tutsi, Andrea Muhirwa, como Primer Ministro; a pesar que cualquiera de los otros líderes de UPRONA hubieran sido una decisión más lógica (Daley, 2008:64). Como la educación, especialmente la secundaria, había sido brindada mayormente a los tutsis, estos rápidamente ocuparon los cargos administrativos en el estado naciente, lo cual significó un nuevo motivo de división étnica en Burundi “más allá de la arena política” (Lemarchand, 1994:66). Por otro lado, las relaciones diplomáticas con Ruanda comenzaron a deteriorarse notablemente, dando lugar a los hutu a sospechar de que los tutsi burundeses estaban ayudando a los refugiados tutsi ruandeses en sus incursiones a través de la frontera para retomar el poder en Ruanda (Lemarchand, 66).

Entre 1962 y 1965, Mwambusta nombró seis gobiernos sucesivos, alternando entre tutsi y hutu, mientras permitía que los *baganwa* expandieran su poder, nombrándolos en puestos claves (Daley, 2008:64). El 18 de enero de 1965, es asesinado el Primer Ministro hutu Pierre Ngendandumwe tras tres días en el cargo, por un tutsi refugiado de Ruanda que trabajaba para la embajada de Estados Unidos (Lemarchand, 1994: 68-69). Ngendandumwe había sido nombrado por el *Mwami* después de despedir al tutsi Albin Nyamoya, quien estaba siendo percibido por los occidentales como muy cercano a los chinos y a los lumumbistas (Lemarchand, 69). Ante la furia de la elite hutu, la corte decidió llamar a elecciones en el mes de mayo, ganando los hutu una “sólida mayoría en la Asamblea Nacional” (Lemarchand, 69) habiendo apelado a la cuestión étnica por primera vez. Sin embargo, Mwambusta decidió desechar el voto popular y en lugar de nombrar a un primer ministro hutu le dio el cargo a Léopold Biha, un *ganwa* de origen Bezi y favorito de la corte (Lemarchand, 69). Esta jugada política que tuvo como fin impedir un posible control hutu del gobierno nacional, probó ser fatal para la monarquía.

LA PRIMERA REPUBLICA (MILITAR)

El 19 de octubre de 1965 marca el inicio de una larga lista de golpes e intentos de golpes de estado que han plagado la historia política de Burundi. En dicha fecha, un grupo de hutu gendarmes y oficiales del ejército, descontentos con la elección de Biha por el *Mwami*, le dispararon y lo dejaron por muerto mientras atacaron el Palacio (Cornwell y de Beer, 1999:86). El Capitán Michel Micombero, un tutsi-hima de la provincia de Bururi al sur de Burundi, repelió el ataque, pero otros oficiales se amotinaron, finalmente para cuando se recobró la calma, el *Mwami* había decidido huir a Suiza (Lemarchand, 2008:3). El intento de golpe de estado tuvo como consecuencia no solo la matanza de miles de hutu en las zonas rurales, muchos de sus líderes políticos y una extensa purga del ejército y la gendarmería, sino que los tutsi tomaron el absoluto control del poder, mientras los hutu perdieron cualquier oportunidad de compartirlo (Lemarchand, 1994:71). El *Mwami* mandó a su hijo Charles Ndizeye de vuelta a Burundi para preservar la monarquía y que actuara como Príncipe Regente, pero este derrocó a su padre autoproclamándose *Mwami* como Ntare V el 8 de Julio de 1966, mientras revocaba la constitución y despachaba a Biha y todo su gobierno (Cornwell y de Beer, 1999:86).

Ntare V fue derrocado cuatro meses más tarde, en noviembre, por el Teniente General Michel Micombero que actuaba en calidad de Primer Ministro y contaba con el apoyo de facciones del ejército y de la elite Bezi. Micombero enseguida declaró la República y abolió la monarquía justificando su accionar en la necesidad de estabilizar el país, el cual fue gobernado los dos años siguientes por el Consejo Nacional Revolucionario (Daley, 2008:66). Durante diez años -1966 a 1976- Micombero rigió Burundi, tomando en seguida que asumió los cargos de Primer Ministro, Ministro de Defensa y presidente de UPRONA (Scherrer, 2002:31).

Durante el gobierno de Micombero, y los dictadores que lo siguieron, Burundi pasó a tener un partido único: UPRONA, del cual todos los burundeses eran miembros; así como una inexistente división de poderes (Uvin, 2009:9-10); además, se militarizó la sociedad y se suprimieron las libertades y derechos civiles. La represión contra los hutu y las purgas de las fuerzas armadas se hicieron cada vez más violentas. Los tutsi pasaron a dominar la escena política y a tomar todos los altos cargos del ejército al mismo tiempo que, a la elite hutu, le era negada cualquier participación en cargos de poder (Lemarchand, 2008:3). Por otro lado, los tutsi-hima que siempre habían visto como sus intentos de acceder al poder eran frenados por la Corte (Scherrer, 2002:31) a favor de los tutsi-banyaruguru, ahora frenaban los intentos de estos de volver a sostener posiciones de poder. Como resultado de ello, en 1971 hubo un pico de tensión intra-étnica, ya que los tutsi-hima acusaban a los otros de estar conspirando para volver a instaurar la monarquía. Justamente fue en el

pico de esta crisis que los insurgentes hutu decidieron atacar.

El 29 de abril de 1972, de forma repentina, un grupo de entre 300 y 500 hutu con ayuda de mulelistas del Zaire, irrumpieron en la ciudad lacustre de Rumonge y tomaron el arsenal, para luego atacar a la población tutsi y a todos aquellos hutu que no quisieran adherirse a la rebelión (Lemarchand, 2008:4; 1994:91). Esta, rápidamente llegó a otras localidades a lo largo del Lago Tanganica, así como a la ciudad de Bururi, capital de la provincia del mismo nombre, en donde mataron a todos los funcionarios del gobierno, civiles y militares por igual (Lemarchand, 2008:4). Casi al mismo tiempo, hubo ataques similares al este de Buyumbura, donde intentaron tomar las radios. La rebelión solo duró unos cuantos días, con el costo de entre 800 y 1.200 vidas, aunque el verdadero resultado se vería en los meses siguientes. Nunca se supo con seguridad la identidad de los instigadores, aunque se supone que muchos vinieron desde Tanzania, donde había una importante cantidad de refugiados burundeses, a la vez que contrataron jóvenes locales desempleados (Lemarchand, 2008:4). En esos cortos días se cometieron todo tipo de atrocidades y se destruyeron incontables propiedades.

La respuesta de Micombero no se hizo esperar y su primera decisión fue disolver el gobierno, además puso a cargo de las operaciones militares a hombres de su entera confianza, como el Ministro de Relaciones Exteriores, Artémon Simbabaniye, quien según Lemarchand (2008:4) fue el responsable del “cambio estratégico del gobierno de pasar de la represión a las purgas en el campo”. Se impuso la ley marcial y un estricto toque de queda. La represalia lanzada por el gobierno fue de proporciones genocidas, se calcula que entre 100.000 y 200.000 personas perdieron la vida, inclusive muchos tutsi y aquellos hutu que habían luchado al lado de los tutsi para frenar la rebelión. Entre los hutu arrestados –de los cuales muchos desaparecieron o murieron en prisión- y/o asesinados por el gobierno, se encontraban especialmente aquellos que gozaban de educación - adultos y niños por igual-. Esto se hizo para impedir que se repita la historia de Ruanda en Burundi, o que puedan acceder a cualquier cargo administrativo, así como para aterrorizar lisa y llanamente a la población (Cornwell y de Beer, 1999:4), ya que sucedió “mucho después que la paz y el orden habían sido restablecidos en el sur” (Lemarchand, 1994:102). Entre los muertos se cuenta al depuesto *Mwami* Ntare que fue asesinado en su casa de Gitega, este había vuelto a Burundi desde Uganda bajo falsas promesas hechas por Idi Amin Dada y Micombero. Alrededor de 150.000 hutu se refugiaron en los países vecinos, principalmente en Tanzania, donde mantuvieron viva la memoria de lo sucedido, memoria que luego en 1980 dio nacimiento al *Parti pour la Libération du Peuple Hutu* (PALIPEHUTU).

De esta “limpieza ‘étnica’, emergió una sociedad lisiada, donde la única elite, era la elite tutsi” (Lemarchand, 1994:103). Se creía que no quedaba hutu educado vivo y que en algunos

pueblos no sobrevivió ninguno; las propiedades pasaron a las manos de los tutsi que eran los únicos que tenían permitido asistir a la universidad, trabajar en la administración pública o integrar el ejército (Lemarchand, 103). Además, se afectó gran parte del presupuesto nacional a la compra de armas y a aumentar las fuerzas armadas, apurando el proceso de militarización social, especialmente por miedo a otra revuelta hutu (Daley, 2008:73). Finalmente el 1º de noviembre de 1976, un primo de Micombero, el Coronel Jean Baptiste Bagaza, también un tutsi-hima de Bururi, lo derrocó en un golpe de estado sin aparente derramamiento de sangre (Scherrer, 2002: 31).

LA SEGUNDA REPUBLICA (MILITAR)

Aunque Bagaza quiso mostrar al mundo que Burundi era un país que había superado sus diferencias étnicas, eso no sucedió en la realidad. Luego de asumir, esta administración restauró las instituciones civiles, dictó una nueva constitución que fue adoptada a través de un referéndum nacional en noviembre de 1981, se otorgó el sufragio universal y se llamó a elecciones para cubrir los cargos de la Asamblea Nacional en octubre de 1982 (Reyntjens, 2000:8). En cuanto al aspecto social, predicó la unidad nacional y prohibió la referencia a cualquier distinción étnica y algunos pocos hutu nuevamente accedieron a la educación universitaria, a algunos puestos ministeriales y a algún cargo en el ejército, a pesar de que la discriminación continuaba, especialmente en el acceso a la educación primaria y secundaria, lo cual les impedía progresar (Daley, 2008:73).

Entre 1984 y 1987 el gobierno de Bagaza entró en conflicto con la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas por su interferencia en las libertades religiosas de la población, aumentando el número de presos políticos que criticaban al gobierno por las restricciones impuestas a las actividades religiosas (Reyntjens, 2000:8). La intención de Bagaza era reducir la influencia de la Iglesia, para lo cual expulsó a más de 500 misioneros, todas las escuelas secundarias pasaron a ser estatales y cerró las escuelas de catequismo (Lemarchand, 1994:113-114). Esto le generó antagonismo con sus principales donadores Francia y Bélgica, que para presionarlo, retenían la ayuda económica a Burundi. Mientras Bagaza asistía a un congreso sobre la francofonía en Quebec, fue depuesto en un golpe de estado sin derramamiento de sangre, el 3 de septiembre de 1987 por el Mayor Pierre Buyoya. De esta forma comenzó la tercera “república” militar.

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: DEL CONGO BELGA AL FIN DE LA PRIMERA REPUBLICA

PRIMEROS MOVIMIENTOS POLITICOS

La historia del Congo luego de la independencia, no es menos convulsionada o brutal que en los siglos anteriores. Tampoco es menor el involucramiento de las potencias extranjeras en la historia de este país. Desde Bélgica y su neo-colonialismo, pasando por China, Estados Unidos y la URSS, cada uno ha contribuido, en mayor o menor medida, a impedir que cimienten las instituciones y la democracia.

A pesar de los movimientos anticolonialistas que empezaban a agitar a la poca población educada del Congo Belga en los años '50, Bélgica no tenía ninguna intención de permitir que se declare la independencia y, mucho menos, entregar el control de las fuerzas armadas o de los recursos minerales del país (Reno, 2006:47). Por otro lado, realmente había muy pocas personas capaces de conducir el gobierno, cuyos cargos estaban ocupados casi en su totalidad por los europeos. De todos modos, uno de los primeros partidos políticos que se habían formado, *Alliance des Bakongo*, más conocido como ABAKO, dirigido por Joseph Kasavubu, empezó a presionar para una independencia inmediata y no a largo plazo como pretendían los belgas, logrando que se llame a elecciones comunales en 1957 (McCalpin, 2002:36).

Al año siguiente, y en 1959, se dieron dos hechos que precipitaron los acontecimientos: en primer lugar el presidente Charles de Gaulle habló en el Congo francés de darle la independencia a toda la África francófona, lo cual aumentó los aires independentistas (McCalpin, 2002:36). Por otro lado, ya en 1957 el precio del cobre se había desplomado y continuó bajando al año siguiente, generando un importante incremento del desempleo (Deibert, 2013:19). Los jóvenes cansados de la situación de pobreza comenzaron a movilizarse en Leopoldville, lo cual terminó en violentos disturbios del 4 al 6 de enero de 1959, que fueron brutalmente reprimidos por la Fuerza Pública bajo la excusa de que se había atacado a algunos europeos (Deibert, 19). Esto resultó en que el Parlamento belga dictara una ley electoral y una constitución para el Congo, dándole la forma de estado parlamentario y llamando a elecciones nacionales y provinciales para mayo de 1960 (Kisangani, 2012:16).

Se formaron cientos de partidos políticos, siempre apelando a las cuestiones étnicas y con bases fuertemente regionales, que luego se fueron uniendo en alianzas y coaliciones, hasta que se presentaron a competir por los cargos entre 30 (Haskin, 2005:16) y 40 (McCalpin, 2002:37) partidos. Además de ABAKO, los otros dos partidos fuertes y con alguna proyección nacional eran

el *Mouvement National Congolais* (MNC), creado en 1956 y liderado por Patrice Lumumba; y el partido apoyado por los colonizadores, la *Confédération des Associations du Katanga*, conocido como CONAKAT y encabezado por Moïse Tshombe (Haskin, 2005:16). Ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. El MNC fue el más votado, obteniendo 33 de los 137 escaños del Parlamento; sin embargo, tuvo que negociar con Kasavubu para poder formar gobierno y así obtener la independencia del Congo, a pesar de sus irreconciliables diferencias. De esta forma Lumumba obtuvo el cargo de Primer Ministro y Kasavubu fue nombrado Presidente (McCalpin, 2002: 37-38). Finalmente, la independencia se declaró el 30 de junio de 1960.

PRIMERA REPUBLICA/PRIMERA GUERRA CIVIL, 1960-65

La República del Congo nació casi intempestivamente, sin la cultura política necesaria, con problemas étnicos y regionales sin resolver (McCaplin, 2002:38) y con una fuerte injerencia belga, lo cual se volvió evidente a los pocos días de la declaración de la independencia.

Aún no había transcurrido una semana desde que el nuevo gobierno había asumido el 4 de julio, cuando el General belga Émile Janssens, quien servía como Comandante en Jefe de la Fuerza Pública “se negó a promover a africanos a puestos de alto rango, declarando el 5 de julio de 1960 que ‘antes de la independencia = después de la independencia’” (Kisangani, 2012:17). Los efectivos interpretaron esto como que nada cambiaría y que los belgas aún mantendrían el poder, por lo cual se amotinaron y solicitaron que se despidiera a todos los belgas (Haskin, 2005:23). Incidentes de violencia estallaron por todo Leopoldville y a medida que la noticia de lo ocurrido llegaba al interior, se iban produciendo nuevos amotinamientos. En un intento por calmar la situación, Lumumba decidió africanizar la Fuerza Pública re-bautizándola *Armée Nationale Congolaise* (ANC), poniendo en el lugar de Janssens a Victor Lundula y a Joseph-Désiré Mobutu como Jefe del Estado Mayor (Deibert, 2013:21). A pesar de estos cambios, el desorden continuó y parte de la población europea fue atacada por los soldados amotinados, lo que tuvo dos consecuencias: por un lado que Bélgica interviniera con tropas para proteger a sus nacionales, violando la soberanía del nuevo estado y, por otro, que los empleados administrativos europeos dejaran sus puestos con lo cual el estado se paralizó completamente. En medio de todo ese caos, Tshombe, con el apoyo de los belgas, declaró el 11 de julio la secesión de la provincia de Katanga, la más rica en minerales y, por ende, la más preciada.

Lumumba solicitó asistencia militar a Naciones Unidas (NU), y luego de la Resolución del Consejo de Seguridad (CS) nro. 143, del 14 de julio, se estableció la *Opération des Nations Unies au Congo* (ONUC), la primera de muchas misiones de paz en el país (Deibert, 2013: 21). Mientras

tanto, la provincia de Kasai del Sur –ahora parte de la provincia de Kasai Oriental y fronteriza con Katanga-, una zona riquísima en diamantes, declaró su secesión el 8 de agosto, y apenas tres días más tarde, estallaba una rebelión en contra de la secesión de Katanga (Kisangani, 2012:17). La República del Congo se hundía en el caos irremediablemente con la activa colaboración de los belgas, cuyas tropas habían ocupado parte de la capital durante más de 10 días y nada hicieron para mejorar la situación, ya que todos sus intereses comerciales estaban mayormente concentrados en esas provincias ricas en minerales.

El Primer Ministro viajó a New York, Washington y Ottawa en busca de ayuda, pero solo recibió como respuesta que cualquier acción sería a través de NU (Deibert, 2013:21). Viendo que la ONU nada hacía por apurar la retirada de las tropas belgas que para ese momento ya habían asegurado sus intereses en Katanga, reiteró su pedido, esta vez dirigido a la URSS, que rápidamente envió ayuda y armas (Deibert, 22; McCalpin, 2002:39). Este pedido de Lumumba probó ser un error fatal, a partir del cual Estados Unidos no tardó en unir fuerzas con Bélgica para eliminarlo definitivamente. Esa solicitud no solo causó malestar en occidente, sino también en el Congo, por lo cual el frágil entendimiento entre el Primer Ministro y Kasavubu llegó a su fin cuando este destituyó a Lumumba el 5 de septiembre y nombró a Joseph Ileo en su lugar, a lo cual Lumumba respondió destituyendo a Kasavubu (McCalpin, 2002:39). Antes que Ileo pudiera asumir, el Coronel Mobutu dio un golpe de estado sin derramamiento de sangre, anunciando por la radio que seguía reconociendo a Kasavubu como el jefe formal del estado. Sin embargo cerró el Parlamento e instaló un gobierno provisional dirigido por el *College des Commissaires*, grupo colegiado integrado por graduados universitarios (McCalpin, 39). Por otro lado, puso a Lumumba bajo arresto domiciliario acusándolo de iniciar la sublevación militar.

El 27 de noviembre Lumumba logró escapar, pero antes de llegar a Stanleyville (ahora Kisangani), donde Antonie Gizenga había empezado a preparar una revuelta contra Mobutu, fue capturado (Haskin, 2005:29) y llevado de vuelta a Leopoldville, donde fue exhibido, golpeado y humillado (Deibert, 2013:24) ante la inacción total de la misión de paz. A raíz de estos hechos, varios países –Marruecos, Ceylan, Indonesia, Guinea, Yugoslavia, entre otros- que tenían tropas participando de la ONU, las retiraron en protesta por el accionar de NU; inclusive, Nikita Khrushchev llegó a pedir la renuncia de Dag Hammarskjöld (Haskin, 2005:29). Pero el destino de Lumumba ya estaba sellado. Este fue trasladado junto a dos aliados a Elizabethville, donde fue entregado a Tshombe, quien lo asesinó pocos días más tarde, aparentemente con ayuda de militares belgas (Deibert, 2013:24) y participación de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense.

Va de suyo que esto no trajo la paz esperada, sino que el Congo se dividió en regiones encabezadas por distintos líderes políticos. Tshombe continuaba siendo apoyado firmemente por

Bélgica; mientras Gizenga tenía por detrás a la URSS, China, Marruecos, Guinea y Ghana entre otros países; Kasavubu continuaba gobernando con Mobutu manejando los hilos en Leopoldville y Albert Kalonji, por su parte, tenía tropas a su disposición en Kasai del Sur (Haskin, 2005:30). Naciones Unidas debía solucionar este embrollo y reunificar al Congo, ya que era la única solución posible. Para ello lanzó una serie de operaciones militares, logrando finalmente terminar con la secesión de Katanga a principios de 1963, con Tshombe huyendo a Rhodesia (actual Zimbabue) (Deibert, 2013:26). Mientras tanto, el moderado Cyrille Adoula había asumido el gobierno en Leopoldville, pero al no soportar las presiones renunció, dejando un verdadero vacío de poder (McCalpin, 2002:40). Por su parte los rebeldes lumumbistas, conocidos como “simbas” (león en swahili) liderados por Pierre Mulele atacaron y lograron tomar casi la mitad del país durante 1964, haciendo que la ANC huyera a su paso. Entre estos guerreros se encontraba el joven Laurent Kabila (Deibert, 2013:26). Esta rebelión tuvo un fuerte eco y apoyo en las provincias del este, posiblemente porque permitía que algunas comunidades robaran el ganado de otras o simplemente les negaran el acceso a la tierra, especialmente porque la zona ya venía altamente convulsionada a causa de los conflictos de 1963 entre los autóctonos, que mantenían el poder por derecho consuetudinario, y quienes estos consideraban extranjeros, los *kinyaruanda* (los que hablan kiruanda), que reaccionaban ante el abuso de la autoridad nativa de negarles el acceso al uso de la tierra (Vlassenroot, 2006:53). Finalmente, una coalición formada por la ANC, con soldados belgas, mercenarios y apoyo aéreo de Estados Unidos, lograron derrotar a los simbas (Deibert, 2013:26).

En Leopoldville, luego de la renuncia de Adoula, el gobierno fue retomado por Kasavubu, para lo cual convenció a Tshombe que vuelva del exilio; pero este nuevo acuerdo duró apenas tres meses, hasta que Kasavubu destituyó a Tshombe y nombró a Evariste Kimba en su lugar. En ese corto tiempo se adoptó una nueva constitución y se cambió el nombre del país a República Democrática del Congo (McCalpin, 2002:40). Empero, antes de que Kimba pudiera asumir su cargo, el hábil Mobutu tomó su oportunidad y mediante un golpe de estado el 24 de noviembre de 1965, se declaró presidente, poniendo fin a la Primera República (McCalpin, 40).

CAPITULO II

CONFLICTOS RECIENTES EN RUANDA, BURUNDI Y LAS PROVINCIAS DEL ESTE DE LA RDC VISTOS A TRAVES DEL LENTE DE GÉNERO

“Los hombres no encuentran la verdad, ellos la crean, como crean su historia” Paul Veyne.

RUANDA

LA SEGUNDA REPUBLICA

Luego del golpe de estado que depuso a Grégoire Kayibanda asumió como presidente Juvénal Habyarimana y comenzó la Segunda República, la cual duró entre 1973 y 1994. Este gobierno no tuvo mayores diferencias con el primero. Se estableció un régimen militar por el cual se forzó al exilio (Omeje, 2013:38), se ejecutó o murieron en prisión muchos tutsi y opositores hutu, incluido Kayibanda; el sistema judicial del país era dependiente del poder de turno; y la impunidad y el clientelismo eran moneda corriente (Uvin, 2001:163-164). Las elecciones eran una farsa, ya que dos años luego del golpe se instituyó un sistema de partido único, el *Mouvement Révolutionnaire National pour la Démocratie et le Développement* (MRND), con Habyarimana como único candidato. Este gobierno tuvo dos grandes apoyos políticos: uno de ellos fue la Iglesia Católica. Como recuerda Braeckman (citado De Heusch, 1995:5) “era un dictador con tufillo de ‘santidad’”. De hecho, una de las medidas que tomó durante su gobierno, fue prohibir todo tipo de métodos

anticonceptivos, lo cual derivó en una explosión demográfica en el pequeño estado de Ruanda, que ya contaba con una elevadísima tasa de natalidad. Además implicó un aumento desproporcionado, con respecto a la población, de los portadores de HIV. Ese “catolicismo” le sirvió para ser recibido en el Palacio Real de Bélgica y a beneficiarse del sólido apoyo político del Presidente francés François Mitterrand (De Heusch, 5). El otro respaldo era a través de su esposa, Agathe Kanziga, quien provenía de una rica y poderosa familia hutu del norte y que formaba parte del grupo íntimo que sería conocido como “*Akazu*” (pequeña choza/casa), junto con un reducido círculo de personas de la enorme red de conexiones personales del presidente (HRW, 1999:46). Los miembros de este grupo, de acuerdo a De Heusch (1995:5) solo tenían una ambición: hacerse ricos, para ello controlaban el territorio del país, las prisiones, la prostitución y el tráfico de drogas y armas. El Arzobispo de Kigali era amigo íntimo de los miembros de la *Akazu* (De Heusch, 5).

Durante su presidencia, Habyarimana dividió a Ruanda en 10 prefecturas, cada una de las cuales estaba compuesta por sub-prefecturas y estas por comunas, que estaban encabezadas por burgomaestres, los cuales eran nombrados o despedidos por Habyarimana en persona y eran sus hombres de confianza en las colinas (HRW, 1999:43). Esta jerarquía administrativa tenía como fin el control y la movilización (HRW, 44), y jugó un rol central en la perpetuación de genocidio.

En parte debido a la fuerte caída de los precios de las materias primas a nivel mundial, el Banco Mundial le impuso a Ruanda un “Programa de Ajuste Estructural” que tuvo varias consecuencias: en primer lugar, la devaluación de la moneda local –lo cual exigió el Fondo Monetario Internacional- significó un aumento inmediato en los precios; luego, los programas sociales se vieron drásticamente reducidos aumentando los costos escolares, de salud y hasta de agua; finalmente esto, sumado al bajo precio del café, implicó una reducción en las entradas económicas de las familias (Newbury, D., 1998:89). Para empeorar el panorama, hubo una terrible sequía a comienzos de 1990; dado que los alimentos habían aumentado considerablemente y los planes de ajuste impedían brindar ayuda, cientos de personas murieron de hambre (Newbury, D., 89). Ahora bien, la educación siempre había sido la única oportunidad para que los jóvenes pudieran encontrar trabajo fuera de la agricultura, la cual había dejado de ser una opción por la falta de tierra; sin embargo, debido a las escasas entradas económicas, las altas tarifas educativas y los bajos precios de los commodities, muchos jóvenes –siempre se prefería educar a los hombres- debieron dejar sus estudios; pero además ya no era sencillo encontrar trabajos de temporada, los cuales solían estar directamente ligados a las cosechas de café (Newbury, D., 91). Así, miles de hombres jóvenes se encontraron sin tierras, estudios, trabajo y por ende sin posibilidades de poder casarse y mantener una familia; amargados y desesperados, no fue difícil reclutarlos para formar las milicias o para ingresar al ejército, que pasó de tener alrededor de 5.000 hombres a más de 40.000 a

finis de 1990 (Newbury, D., 91).

En cuanto a la cuestión étnica, esta tuvo un abordaje complejo; por un lado, apenas había algunos tutsi en altos cargos, pero a su vez, frenó la violencia contra estos, como había prometido (Kuperman, 2001:7-8) y tampoco hizo cumplir a rajatablas las leyes que limitaban el acceso de los tutsi al sistema educativo superior o a los puestos públicos, ya que estos estaban representados más allá del 9% permitido⁹, lo mismo que en los sectores privados donde había aún menos control gubernamental (Uvin, 2001: 164-165). Empero, la cuestión étnica seguía presente como un recordatorio de que “los tutsi eran diferentes y que el estado estaba cuidando los intereses de los hutu” (Uvin, 165). Esto se evidenció en que nunca se reemplazaron las tarjetas de identidad que contenían la “etnia” a la cual pertenecía el portador, a pesar de las muchas promesas. Con respecto a los refugiados se había negado rotundamente a tratar el tema, declarando en 1986 que no había más lugar en Ruanda. Recién en 1989, posiblemente debido a los fuertes rumores de una inminente invasión armada desde Uganda, consideró revisitarlo, pero ya era demasiado tarde.

OCTUBRE DE 1990: INVASION Y GUERRA CIVIL

Debido a la crisis económica y política, Habyarimana se estaba viendo presionado, interna e internacionalmente, para realizar reformas que conllevaran la apertura democrática en Ruanda (HRW, 1999:50) tales como: libertad de prensa y elecciones libres. En julio de 1990, el presidente accedió a formar una comisión nacional que diera una respuesta a esta cuestión (HRW, 51). Empero, el 1º de Octubre de 1990, el *Front Patriotique Rwandais* (FPR) invadió Ruanda desde Uganda.

Los integrantes del FPR se autodenominaron *Inkotanyi*, que significa “los guerreros que luchan valientemente”, y al igual que los *ingenzi*, este nombre también hacía alusión a uno de los ejércitos del *Mwami* Rwabugiri (Eltringham, 2006:85). Pero las diferencias entre ambos eran sustanciales: mientras los últimos eran todos tutsi y su único objetivo era retomar el poder perdido, los rebeldes del FPR tenían entre un 20 y 30% de hutu en sus filas, hablaban de la “unión nacional”, del retorno de los refugiados y no hacían ninguna referencia a restablecer la monarquía (Eltringham, 85). El FPR fue un producto directo de los exiliados de la Revolución Social del '59 y las matanzas que le siguieron, los cuales después de muchos años de espera para retornar a su patria se convencieron que la única forma de hacerlo era a través de la vía militar e instaurando un nuevo régimen en Ruanda.

⁹ Este porcentaje se sacaba de acuerdo a la cantidad de población tutsi con respecto a los hutu (Uvin, 2001:165) y conforme a compensaciones históricas por la discriminación que habían sufrido estos últimos (Kuperman, 2001:8).

Mientras el FPR se encaminaba hacia Kigali, el país cayó en una guerra civil que el presidente Habyarimana llamó de “amenaza tutsi”, lo cual “levantó inmediatamente su legitimidad ante los ojos de los hutu” (Mamdani, 2001:186). El gobierno rápidamente lanzó un contraataque militar, además de medidas contra los tutsi y la oposición hutu, lo que resultó que en pocos días entre 8.000 y 13.000 personas fueran encarceladas (Kuperman, 2006:71), muchos de los cuales fueron también torturados y murieron en prisión (HRW, 1999:54). Además, inmediatamente atrajo ayuda armada de Francia, Bélgica y el Zaire que desplegaron soldados para salvar el régimen (Omeje, 2013:39).

Semanas después del ataque inicial se implementó la operación “*Noroît*”, por la cual las *Forces Armées Rwandaises* (FAR) lograron frenar el avance de los invasores con la ayuda de los belgas, los zaireños (Jones, B., 1999:55) y los franceses, quienes continuarían prestando ayuda militar los próximos tres años (Kuperman, 2006:71). En su camino para expulsar a los rebeldes, las FAR mataron entre 500 y 1.000 civiles bahima, etnia que se la identifica con los tutsis, acusándolos de haber ayudado al FPR (HRW, 1999:55). Los *Inkotanyi* tuvieron importantes bajas y quedaron desparramados y confundidos debido a la muerte de su líder Fred Rwigyema en los primeros días de la invasión (Mamdani, 2001:186), por lo cual volvieron a Uganda para reagruparse y rearmarse. Para ese entonces el Mayor Paul Kagame decidió interrumpir su entrenamiento en el *U.S. Army Command and General Staff College* en Fort Leavenworth, Kansas, y retornar para dirigir al FPR.

Kagame hizo retroceder a las tropas hasta las montañas Virunga y para mediados de 1991 había rearmado el FPR a una fuerza de 15.000 hombres y, para finales del año, había conseguido tomar territorio ruandés lindero con Uganda, de unos 32 km de extensión (Mamdani, 2001:186). Un acuerdo de “alto al fuego” fue firmado entre los líderes del FPR y Habyarimana el 29 marzo de 1991 en N’Sele, Zaire (Jones, B., 1999:62), con los auspicios de la Organización para la Unidad Africana (OUA), la cual dejó de lado su sacro santa negativa a interferir en las cuestiones internas de los países africanos. La diferencia se dio porque la OUA estaba presidida por Yoweri Museveni, presidente de Uganda, y el Secretario General Salim A. Salim era tanzano (Jones, B., 1999:56 y 62); y dicho estado no tenía intenciones de seguir recibiendo refugiados. Este acuerdo fue roto a los pocos días por ambos bandos, a lo cual le siguió otro, el de Gbadolite, con la misma suerte (Jones, B., 62).

En julio de 1992 comenzaron las negociaciones en Arusha, auspiciadas por el gobierno de Tanzania, así como por otros poderes regionales: Burundi, Zaire y Uganda; e internacionales: Francia, Estados Unidos (Jones, B., 1999:54) y la OUA. Las conversaciones de paz de Arusha concluyeron en un extenso y comprensivo acuerdo de paz en agosto de 1993 (Omeje, 2013:39). Incluyeron las negociaciones de alto al fuego, así como cinco protocolos adicionales, de los cuales uno se refería a un gobierno de transición con poder compartido y otro a la composición de las

fuerzas armadas que estarían integradas por las dos partes (Jones, B., 1999:68). Según Bruce Jones (1999:68-69) el protocolo que pactaba el gobierno de coalición hubiera supuesto un cambio radical en la política ruandesa. Pero el que se refería al ejército, si bien fue un claro triunfo del FPR en la mesa de negociaciones, también probaría ser un error táctico, ya que era de imposible aplicación en Kigali (Jones, B., 69). Dicho protocolo -el IV- dividía las fuerzas armadas en un 60-40% a favor del gobierno y a los cargos de comando 50-50% (Jones, B., 69). Pero lo que fue aceptado por Habyarimana en la mesa de negociación, no sería aceptado por las líneas duras en Ruanda.

Mientras estas negociaciones se llevaban a cabo, las hostilidades en el campo de batalla solo se detenían para recomenzar con claras y demoledoras victorias del FPR, lo cual era trasladado a la mesa de paz dándoles mayor ventaja y endureciendo su posición. Esto los llevó a rechazar cualquier participación de la *Coalition pour la Défense de la République* (CDR) en el gobierno de transición, a pesar de la presión de los países intermediarios. La CDR de extrema derecha, abogaba por el Poder Hutu, y aunque aliada del MRND, no aceptó los Acuerdos de Arusha. Confiando en la propaganda nacionalista, especialmente a través de la *Radio Télévision Libre des Mille Collines* (RTL) el gobierno movilizó, financió y entrenó a jóvenes para participar en milicias, usándolos para infundir terror en la comunidad tutsi de Ruanda (Omeje, 2013:40). Los grupos más grandes y despiadados fueron los *Interahamwe* (aquellos que luchan o matan unidos) y los *Impuzamugambi* (aquellos que tienen un solo propósito), los cuales formaban el brazo armado de la CDR.

El rol de NU había sido marginal en las negociaciones de Arusha hasta las hostilidades de febrero de 1993, cuando Museveni solicitó que se desplegara una misión de observación, lo cual fue aprobado por el Consejo de Seguridad que envió la *United Nations Observation Mission for Uganda and Rwanda* (UNOMUR), a cargo del Brigadier General Roméo Dallaire, para que ayudara a patrullar las fronteras entre los dos países y asegurar que el alto al fuego se mantuviera (Omeje, 2013:39). Luego, el CS le solicitó a Dallaire que encabezara la *Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda* (MINUAR, aunque dicha misión fue más conocida por sus siglas en inglés UNAMIR) que reemplazaba a la anterior y contaba con un total de 2.548 hombres; parte de los cuales fueron enviados a Burundi para evitar que el inminente estallido de violencia en el país vecino, por el asesinato del Presidente Melchior Ndadaye, no fuera a desestabilizar aún más a Ruanda (Jones, B., 1999:73). Pero la misión que ya tenía muchos menos hombres de los necesarios, nunca pudo hacer pie y garantizar la seguridad en Kigali (Jones, B., 73), y mucho menos en el resto del país.

TRES MESES DE 1994: ¿EL DESENLACE INESPERADO?

Nunca se sabrá con exactitud cuántas personas murieron en los tres meses que duró el genocidio. Los cálculos rondan entre el medio millón y 900.000 tutsi, y entre 10.000 y 50.000 hutu (Mamdani, 2001:5; Eltringham, 2006:67; HRW, 1999:15). La falta de certeza se debe, entre otros motivos, por la dificultad de distinguir los cadáveres de unos y otros (Kuperman, 2001:19). Pero mientras los primeros fueron exterminados como grupo, los segundos fueron blancos individuales (Mamdani, 2001:5). El genocidio de Ruanda fue algo personalizado: matar con machetes, mutilar, violar, son acciones que conllevan mucho esfuerzo físico, eran necesarios varios pares de manos para matar a alguien, el genocidio fue un “asunto íntimo” (Mamdani, 6). Mamdani (2001:7) reflexiona que:

“Si bien la violencia desde abajo no se podría haber desparamado sin haber sido cultivada y dirigida desde arriba, es igualmente verdad que la conspiración del pequeño grupo de genocidas no hubiera tenido éxito si no hubiera encontrado resonancia desde abajo. El diseño de arriba involucra a una pequeña minoría y es fácil de entender. La respuesta y la iniciativa desde abajo involucró multitudes y presenta el verdadero dilema moral del genocidio de Ruanda”

El 6 de abril de 1994, el avión privado –un jet Falcon 50- donde venía Juvénal Habyarimana junto con el presidente de Burundi Cyprien Ntaryamira, que regresaban de una reunión en Dar es Saalam, fue derribado cuando ya llegaba al aeropuerto Kanombe, en Kigali, cerca de las 8.30 p.m. (Eltringham, 2006:1) por dos misiles tierra-aire. Habyarimana había ido a la capital tanzana a pedido del presidente Ali Hassan Mwinyi para tratar la crisis de Burundi (Jones, B., 1999:75). Nunca se supo quien derribó el avión: si fue el FPR, que tenía una pequeña fuerza desplegada en Kigali desde diciembre de 1993 (Kuperman, 2001:19), aunque no era demasiado lo que tenían para ganar; o si efectivamente los culpables fueron hutu extremistas. Las líneas duras en Kigali nunca habían aceptado los Acuerdos de Arusha: los militares con altos cargos, miembros del CDR, elementos extremistas dentro del MRND y todos aquellos que formaban parte de la *Akazu*, sabían que no tendrían lugar dentro de un nuevo régimen democrático, además de que percibían a los acuerdos como una victoria del FPR (Jones, B., 1999:74). Estos impidieron, desde la firma misma, su implementación mediante asesinatos y amenazas a políticos de la oposición, todo como parte de un plan aún mayor del Poder Hutu. Lo cierto es que a los 45 minutos del hecho, aunque algunos alegan que antes, y previamente a que se anuncie en los medios, la Guardia Presidencial y milicias extremistas ya habían instalado barricadas y bloqueado las calles de Kigali (Eltringham, 2004:111-112). La *Akazu* inmediatamente culpó al FPR, el Coronel Théoneste Bagosora tomó el control del gobierno y a las pocas horas comenzó el horror. Acierta Bruce Jones (1999:76) cuando afirma que la muerte de Habyarimana no fue la chispa que comenzó la masacre, sino que fue el primer acto del

genocidio.

El grito de unión en la Revolución de 1959 había sido “Nación Hutu”, y fue el fundamento de la Primera República (Mamdani, 2001:189). Ya durante la presidencia de Habyarimana, los tutsi fueron redefinidos como una minoría ruandesa (Mamdani, 189), dejando de ser una raza para volver a ser una etnia regional. De este modo el Poder Hutu como ideología había perdido cada vez más terreno, especialmente frente al hecho que los tutsi volvieran al poder era una idea más y más lejana (Mamdani, 189). Pero luego del comienzo de los ataques del FPR, el asesinato de Ndadaye en Burundi y la matanza de miles de hutu que siguió (Kuperman, 2006:76), el fantasma del poder tutsi se apoderó de Ruanda (HRW, 1999:182), y de este modo el Poder Hutu volvió a la escena con más fuerza que nunca. La ideología central de estos era que los tutsi eran una raza extranjera que había llegado a Ruanda para colonizarlos, lo cual significó un retorno a la visión colonial. Para ellos no cabía la idea de los tutsi como una minoría gobernada por una mayoría en una democracia, porque los hutu no eran una mayoría, sino que eran la nación (Mamdani, 2001:190). De este modo, y a través de la propaganda, especialmente de RTL M y del diario *Kangura*, se deconstruyó la idea de los tutsi como etnia para volver a construirla como una raza que quería dominar y oprimir a los hutu.

El genocidio fue planeado con anticipación, de lo cual hay sobradas pruebas, entre ellas los registros de compras de armas y machetes en enorme cantidad entre enero de 1993 y marzo de 1994 (HRW, 1999:166 y ss.), así como triplicaron los reclutas de las fuerzas armadas y se armaron las milicias compuestas por jóvenes (Maier, 2012-2013:3). Estos hechos tuvieron una clara motivación política: mantener a la elite gobernante en el poder y evitar que los tutsi recobren el dominio de Ruanda después de 35 años, aunque eso costara la vida de todos los tutsi y aquellos hutu que se opusieran.

Para el 7 de abril el genocidio, y la eliminación de todos los opositores, estaban en plena marcha en la mayor parte de Ruanda. Agathe Uwilingiyama, que había sido nombrada primera ministra, fue asesinada en su casa menos de 24 hs. después de comenzada la ejecución de la Solución Final (Jones, B., 1999:76). Algunos soldados belgas, que formaban parte de la UNAMIR, fueron ultimados al tratar de llegar a la casa de la Primera Ministra esa mañana por soldados ruandeses a quienes se les había dicho que estos habían ayudado al FPR a derribar el avión presidencial (HRW, 1999:267). Debido a esto, Bélgica decidió retirar a las fuerzas que quedaban en el terreno (De Heusch, 1995:7). El presidente de la Corte Constitucional también fue ejecutado el mismo día, dado que habría sido necesario para jurar en el cargo a cualquier nueva autoridad (HRW, 1999:270). El Comandante de la UNAMIR intentó razonar con Bagosora para que se mantenga la institucionalidad, pero los posibles sucesores de Habyarimana habían sido eliminados

para el mediodía por la Guardia Presidencial (ver HRW, 1999). Finalmente el Dr. Theodore Sindikubwabo, presidente del Parlamento, fue elegido como presidente interino y se formó un nuevo gobierno, aunque el poder de hecho lo mantenía el Coronel Bagosora (Omeje, 2013:40). Mientras tanto, los medios urgían a la población hutu a que tomara venganza contra los tutsi por la muerte del Presidente (Kuperman, 2001:15).

Un hecho que facilitó el reconocimiento de los tutsi durante el genocidio fueron las tarjetas de identidad, las cuales eran obligatorias e indicaban el grupo étnico de la persona (Uvin, 2001:166). Además los burgomaestres habían preparado listas con los nombres de los tutsi, lo cual también fue sencillo de hacer dado que la población tenía la obligación de registrar nacimientos, cambios de domicilio, etc., en sus comunas (Uvin, 167). Sin embargo, como recuerda Eltringham (2004:23) uno de los temas que se repetía constantemente en los medios, era la referencia a los *abaguze ubwoko*, los “tramposos étnicos”, aquellos que perteneciendo a un grupo “querían hacerse pasar por otro”. Entonces concluye este autor que “para los perpetradores del genocidio el imperativo de ‘desenmascarar a los tutsi’ demuestra que la distinción no estaba basada en marcadores del comportamiento o siquiera fisiológicos, sino por una interna, imborrable y escondida diferencia biológica” (Eltringham, 23). Los hijos de matrimonios mixtos, *ibiyanyi* (híbridos), eran vistos como una aberración, ya que ahí surgía el “tramposo” por excelencia: los hijos de un hombre hutu con una mujer tutsi, por línea patrilineal heredaban la etnia paterna. Los tutsi eran identificados, buscados y ejecutados usando cinco métodos diferentes: su nombre aparecía en una lista, su nombre y domicilio eran leídos al aire por RTLM, el perpetrador conocía previamente a la víctima, por la etnia que indicaba la tarjeta de identificación o porque parecían tutsi (Eltringham, 26). Pero la paranoia con respecto a los *abaguze ubwoko*, sumada a la imposibilidad de confiar en los rasgos físicos o en las tarjetas de identificación, llevó a que personas que su tarjeta los identificaba como hutu pero tenían rasgos tutsi pudieran ser asesinadas, al igual que quienes no la tenían (Eltringham, 26).

Es importante no olvidar dos cuestiones. Primero, que si bien parte de la población participó activamente, esta no representó a la mayoría de los hutu. Aunque las opiniones difieren, se estiman que, entre quienes planearon y ejecutaron el genocidio sea voluntariamente o por coacción, solo el 10% de la población de unos 6.5 millones de hutu fue responsable de esta masacre (Eltringham, 2004:69). En segundo lugar, si bien el genocidio fue a nivel nacional, el resultado no fue igual en todas las localidades, ya que en muchos sitios los tutsi sobrevivieron. En Byumba que ya estaba parcialmente ocupada por el FPR cuando murió Habyarimana, y rápidamente tomó el resto del territorio, la población tutsi sobrevivió en su mayoría; otras dos que tenían una importante cantidad de extremistas hutu, Gisenyi y Ruhengeri, también hubo pocas bajas porque los tutsi habían huido

antes del comienzo del genocidio; en Butare, donde había un Prefecto tutsi, así como en la prefectura de Gitarama, que era el corazón de la oposición al régimen, consiguieron mantener a la población a salvo varias semanas hasta que llegaron fuerzas gubernamentales (Kuperman, 2001:17).

La respuesta internacional fue paupérrima. El General Dallaire trató de contener la situación, mientras solicitaba refuerzos a NU (Jones, B., 1999:77), pero el CS, a instancias de Estados Unidos, nunca consideró el pedido seriamente. Al contrario, después de que Bélgica retirara sus fuerzas el 13 de abril, el día 20 votaron a favor de sacar gran parte de las tropas (Jones, B., 77). Dallaire quedó solo con 470 soldados de la UNAMIR en Kigali, y ello porque Ghana ordenó a sus fuerzas que se quedaran violando las órdenes del CS (Adebajo, 2011:73); a pesar de ello lograron salvar miles de vidas (Jones, B.,1999:77). Mientras tanto el representante del régimen genocida de Ruanda, que estaba en el CS como miembro no permanente, informaba a su gobierno sobre la reticencia del Consejo, lo cual daba una carta blanca para que la violencia continuara (Adebajo, 2011:73). Por fin en mayo se revirtió la orden y el CS ordenó que se enviaran 5.500 soldados a Ruanda bajo el nombre de UNAMIR II, los cuales tardarían meses en llegar. Mientras aquella era desplegada, el CS a través de la Res. 929 del 22 de junio, autorizó una misión temporaria francesa que llamaron *Opération Turquoise* (Carayannis, 2005:89). Su mandato era claro: proteger a los civiles estableciendo áreas seguras para ayuda humanitaria; sin embargo actuó en contravención a su deber de neutralidad, permitiendo que milicias hutu, políticos y miembros de las FAR se escaparan hacia el Zaire bajo su protección, mientras los tutsi seguían siendo masacrados. Vale recordar que al no haber un mayor interés en lo que sucedía en Ruanda por los medios internacionales, hacía que fallara la presión necesaria para dar una pronta respuesta (ver Dallaire, 2007 y Hilsum, 2007).

El genocidio terminó cuando el FPR consiguió entrar a Kigali, cien días después de haber comenzado. Para ese entonces, cerca de la mitad de la población que tenía Ruanda había sido desplazada a campos de refugiados (Jones, B., 1999:77) dentro o fuera del país. Un comisario político que entrevistó Mamdani (2001:6-7) en 1995 expresó:

“Cuando capturamos Kigali pensamos que nos enfrentaríamos a un gobierno criminal, en su lugar, nos enfrentamos a una población criminal. Kigali estaba medio vacía cuando llegamos. Era como si el FPR fuera un ejército de ocupación”.

Esa situación apenas podría sorprender al FPR que estaba al tanto de las actividades de Habyarimana, la *Akazu* y la CDR, y sin embargo no cedieron terreno en las negociaciones de Arusha, ni en sus ataques armados. Solo dos semanas después de comenzado el genocidio y viendo a la velocidad con que estaba ocurriendo, el FPR aceptó el alto al fuego ofrecido por los oficiales más moderados de las FAR, pero para el 23 de abril estos también habían sido ejecutados y el elemento extremista restante ya no tenía intenciones de frenar lo que había comenzado (Kuperman, 2004:79). El FPR decidió, entonces, seguir con su estrategia original: tomar el poder en Kigali.

Para ello resolvieron no atravesar el país en la dirección sudoeste donde se encontraban las prefecturas donde había mayor concentración de tutsi, porque ello hubiera representado enfrentamientos con las FAR y la muerte de más soldados rebeldes, sino que rodearon el país en dirección a las agujas del reloj hasta tener la capital encerrada, lo cual recién sucedió en el mes de junio (Kuperman, 2006:78). La estrategia funcionó, sin lugar a dudas, pero difícilmente puedan argumentar que el precio en vidas civiles que se perdieron, era un costo que no tenían calculado previamente sacrificar.

PAUL KAGAME

Cuando el FPR finalmente llegó a Kigali el país estaba en ruinas. Cerca de un millón de muertos y millones desplazados: 2 millones en países vecinos y más de un millón de personas internamente desplazadas (PID); los refugiados tutsi retornaban en forma desordenada, ninguno de los servicios básicos o instituciones gubernamentales funcionaban; y se habían perdido cosechas y ganado (Reyntjens, 2004:178). El día 18 de julio declararon unilateralmente el alto al fuego, ya que no quedaba nadie con quien luchar (Kinzer, 2008:177) o negociar. Rápidamente se nombró al hutu Pasteur Bizimungu como presidente, y Paul Kagame asumió como vice-presidente y ministro de defensa. La ideología del nuevo gobierno era simple: “ni hutu, tutsi o twa”, es decir indicaba la necesidad de una identidad nacional que fuera independiente de los orígenes étnicos de sus componentes. Por ello, luego del genocidio el FPR siempre enfatizó la motivación política y no étnica del genocidio, reconociendo que muchos hutu también habían muerto (HRW, 1999:1054).

El 19 de julio de 1994 el nuevo gobierno de Ruanda asumió sus cargos y se reabrió la Asamblea Nacional (Reyntjens, 2004:178). A excepción del MRND y el CDR que fueron prohibidos, el nuevo “Gobierno de Unidad Nacional”, distribuyó los cargos según el Acuerdo de Arusha, aunque se hicieron algunos cambios de forma unilateral, como por ejemplo la instauración de un ejecutivo fuerte que imponía el indiscutido dominio del FPR en la nueva administración (Reyntjens, 178). A su vez, se anunció que el gobierno transicional permanecería en el poder durante cinco años, aunque antes de transcurrido dicho plazo, en 1998 la administración informó que el periodo de transición se extendería por cinco años más (Burnet, 2008:365).

El conflicto continuó a lo largo de los años venideros, especialmente en el noreste del país en la zona fronteriza con la RDC desde donde, cerca de un año después del genocidio (Deibert, 2013:53) y luego intensificándose a partir de 1997, contingentes de milicias hutu y ex-FAR atacaban a la población (Reyntjens, 2004:195). La violencia no era aleatoria o étnica, sino que era política y motivada. Su principal causa, además de matar posibles testigos de los crímenes de los *génocidaires* más importantes, era desestabilizar el gobierno, paralizar las instituciones y causar

pánico en la población. Por ello sus blancos preferentes fueron escuelas, puestos de salud, oficinas gubernamentales, puentes, etc. Los hutu eran amenazados y obligados a “elegir bandos”, bajo pena de ser asesinados por los combatientes hutu, pero a su vez también enfrentando una posible ejecución si las fuerzas armadas del FPR sospechaban que había habido colaboración con los insurgentes. El fin último de estas incursiones armadas era retomar el poder en Ruanda.

Por otro lado, el respeto a los derechos humanos se deterioró rápidamente y el FPR fue responsable de masacres espantosas como la del Campo de PID de Kibeho, en abril de 1995, que se cobró la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, no fue el único caso. Muchos jueces, periodistas y políticos terminaron por exiliarse debido a amenazas y abuso de poder a lo largo de los años (Reyntjens, 2004:180). A su vez, hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y masacres de civiles (Burnet, 2008:365). Mientras tanto, los países donantes, especialmente Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda miraban para otro lado, posiblemente debido a un sentimiento de culpa ante su falta de actuación durante el genocidio (Reyntjens, 179), lo que implicó otorgar un cheque en blanco a Paul Kagame. Con el correr de los años los sobrevivientes sintieron que se estaban volviendo ciudadanos de segunda categoría con respecto a los refugiados retornados de Uganda (Reyntjens, 180) que se auto-replegaban en su camino a consolidarse en el poder, sin darles lugar a aquellos sobrevivientes que se habían enfrentado al régimen anterior (Newbury, D., 1998:82). A su vez, cada año que pasaba el nuevo gobierno instrumentalizaba la representación del genocidio durante su conmemoración en función de los conflictos del momento, produciendo una historia oficial que no era más que un prolongamiento de la ideología en las relaciones de fuerza en las cuales estuviera involucrado, generando una violencia simbólica extrema y empujando a la población a una “memoria forzada” de la guerra (Vidal, 2004:9-10).

Finalmente, y en parte debido al maltrato a los sobrevivientes, en el año 2000 hubo una nueva ola de exilios (Burnet, 2008:365). Asimismo, renunciaron a sus cargos el Presidente de la Asamblea Nacional en enero, luego el Primer Ministro en febrero y en último lugar el presidente Bizimungu en marzo. Mientras los dos primeros huyeron del país y denunciaron presiones del FPR, este último permaneció en Ruanda (Reyntjens, 2004:181) e intentó formar un partido de oposición, pero rápidamente fue acusado de varios delitos y puesto bajo arresto (Deibert, 2013:75). Paul Kagame, que durante los años precedentes, sutil y metódicamente, estuvo armando las bases de un estado autoritario, asumió como presidente (Deibert, 75). Kagame, que a diferencia de otros líderes corruptos de África Subsahariana era austero y serio, y que con su discurso sobre unidad nacional despertó un aire de esperanza en la región, probó con el tiempo, ser igual a todos los dictadores anteriores.

BURUNDI

LA TERCERA REPUBLICA (MILITAR)

La “Segunda República” terminó el 3 de septiembre de 1987, cuando el Mayor Pierre Buyoya, un tutsi-hima de Bururi y primo de Bagaza, lo derrocó en un golpe de estado sin derramamiento de sangre, aprovechando que este último estaba en el exterior. Rápidamente se instituyó un *Comité Militaire pour le Salut National* (CMSN), compuesto por 31 oficiales tutsi de la *Force de Défense Nationale* (FDN)¹⁰, se suspendió la constitución de 1981, la Asamblea Nacional y se disolvió el Comité Central de UPRONA (Lemarchand, 1994:117); asimismo se levantaron algunas de las restricciones a las prácticas religiosas y mejoró la relación con la Iglesia Católica, lo cual contribuyó a aplacar los ánimos de los países donantes (Daley, 2008:75). El 2 de octubre, Buyoya juró como presidente. Todo indicaba que este gobierno sería una continuación de los anteriores, ya que a pesar de haber liberado a cientos de presos políticos, de no intervenir en la libertad de expresión y hablar de la unidad nacional, la discriminación de los hutu continuaba y el gobierno seguía descansando sobre la elite tutsi. Sin embargo, luego de los incidentes de 1988, la situación empezó a cambiar.

Las comunas de Ntega, provincia de Kirundo, y Marangara en la provincia de Ngozi, eran áreas especialmente sensibles debido a sus fronteras con Ruanda, ya que el flujo continuo de refugiados, comerciantes y traficantes las hacía altamente volátiles. La tensión que comenzó a sentirse en la zona hizo que el gobierno central decidiera mandar tropas de la gendarmería en agosto de 1988, lo cual provocó pánico en la población, quien aun tenía muy presente las masacres de 1972. Los hutu levantaron barricadas, formaron grupos de autodefensa y destruyeron varios puentes, por lo cual se despachó un batallón de infantería a la zona (Lemarchand, 1994:124). Finalmente, la tensión étnica se convirtió en acción y grupos hutu armados con machetes, arcos y flechas, lanzas y palos, empezaron a matar a los tutsi y quemarles sus viviendas (Lemarchand, 125). El resultado fue la muerte de alrededor de mil tutsi y una brutal represión militar que se calcula dejó alrededor de 20.000 hutu muertos y más de 60.000 que huyeron a Ruanda (Reyntjens, 2000:8). A diferencia de las masacres anteriores, Burundi fue duramente condenado por otros estados, lo cual empujó a Buyoya a abrir una etapa de liberalización política (Vandeginste, 2009:66).

Una de las medidas que tomó fue nombrar a distintos hutu como miembros del gabinete, entre estos a Adrien Sibomana como Primer Ministro (Cornwell y de Beer, 1999:87). Esto fue suficiente para asustar a parte de la elite tutsi y del ejército, el cual seguía estando compuesto casi

¹⁰ Nombre oficial de las fuerzas armadas burundesas.

exclusivamente por tutsi, por lo cual hubo una serie de intentos de golpes de estado los siguientes dos años (Cornwell y de Beer, 87).

Para 1991 había nombrado a varios gobernadores e intendentes de origen hutu, se les había abierto las puertas a cargos administrativos y se les daba acceso a la educación (Reyntjens, 2000:9). A su vez, un controlado proceso democrático comenzaba a abrirse espacio, especialmente luego del referéndum del 13 de marzo de 1992 que aprobó una nueva constitución que garantizaba un sistema multi-partidario (Daley, 2008:80), por lo cual hacia fin de año varios partidos políticos habían pasado los rigurosos requisitos para ser registrados y comenzaban a militar (Reyntjens, 2000:10). Finalmente se llamó a elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar el 1º y 29 de junio de 1993, respectivamente. A pesar de que Buyoya creyó que ganaría la presidencia, el vencedor fue Melchior Ndadaye, un hutu del partido *Front Démocratique du Burundi* (FRODEBU) que ganó con el 66% de los votos, contra un 33% de UPRONA. Buyoya enseguida reconoció la derrota y Ndadaye se convirtió, el 10 de julio, en el primer presidente hutu electo en Burundi dentro de un sistema multi-partidario, a pesar de las protestas y los disturbios que protagonizaron los extremistas de UPRONA apenas se conocieron los resultados (Lemarchand, 1994:178). Lo mismo ocurrió con las elecciones parlamentarias en donde el FRODEBU ganó 65 de los 81 escaños de la Asamblea Nacional (Lemarchand, 178), siendo los restantes para UPRONA.

LA CORTA DEMOCRACIA BURUNDESA

Ndadaye cumplió su promesa de nombrar a Syvie Kinigi, una tutsi, como primera ministra, la cual se convirtió en la primera mujer en ocupar dicho cargo en África (Cornwell y de Beer, 1999:88). Su gobierno de unidad nacional además impuso una amnistía política que permitió volver a rebeldes hutu e incluso a Bagaza al país. Lamentablemente, la vida democrática de Burundi tuvo una muy corta duración, ya que el 21 de octubre de 1993, Melchior Ndadaye fue asesinado durante un golpe de estado (Cornwell y de Beer, 88) orquestado por los militares. Esto provocó una ola de violencia que costó la vida a más de 50.000 burundeses y llevó a más de 600.000 mil a refugiarse en países vecinos, a pesar de que el General Dallaire había enviado parte de las escasas fuerzas de la UNAMIR para intentar contener la situación. El ejército, aunque alegaba que aún dependía del gobierno central, operaba mayormente fuera de la ley y la represión para restablecer el orden fue brutal (Reyntjens, 2000:14). Como explica Lemarchand (1994:65):

“Cuando el uso de la fuerza reaparece con tanta frecuencia y con tanta magnitud que se vuelve un proceso ‘normal’ para resolver conflictos étnicos, invocar las tradiciones pre-coloniales de compromiso y adaptación tiene poco sentido. Una nueva tradición ha echado raíces, una que hace recurrir a la violencia la norma y el acuerdo la excepción”

Aunque en seguida los militares nombraron a un sucesor, la presión y condena internacional lograron que para noviembre el presidente de la Asamblea Nacional, Sylvestre Ntibantunganya del FRODEBU asumiera como presidente interino. A principios de 1994 se llamó a una mesa de negociación y el 19 de enero, nueve partidos políticos firmaron el Acuerdo de Kigobe, por el cual se haría una enmienda constitucional para permitir a la Asamblea Nacional elegir al próximo presidente (Reyntjens, 2000:15). Cyprien Ntayrimana fue electo a principios de febrero, pero su presidencia también sería muy corta, ya que murió junto con Habyarimana cuando llegaban a Kigali el 6 de abril. El FRODEBU exigió que Ntibantunganya volviera a la presidencia, pero UPRONA extorsionando -bajo amenaza de violencia por pandillas callejeras- consiguió que se les garantizará obtener el 45% de los cargos gubernamentales, lo cual fue escrito en un documento que además suspendía la constitución de 1992, hasta el 9 de junio de 1998 y ponía al gobierno “bajo el tutelaje de un Consejo de Seguridad Nacional, que dominaba la oposición” (Reyntjens, 15-16). Esto resultó en el alejamiento de las líneas más duras del FRODEBU, que acabaron por separarse ese año y crearon el *Conseil National pour la Défense de la Démocratie* (CNDD), junto con su brazo armado, las *Forces pour la Défense de la Démocratie* (FDD), liderado por Leonard Nyamgoma. De esta forma Burundi caía en las garras de una inevitable guerra civil.

GUERRA CIVIL Y LOS ACUERDOS DE ARUSHA

Como recuerda Daley (2008:84), el periodo entre 1994 y 2005 estuvo marcado por la militarización de la sociedad burundesa a través de distintos actores: los militares, grupos paramilitares, milicias, partidos políticos y sus brazos armados y grupos de jóvenes; todos los cuales no dudaban en hacer uso de una violencia extrema para lograr sus fines con total impunidad.

Con auspicios de NU se llegó a nuevo acuerdo de gobernabilidad, que fue imposible poner en marcha, precipitando la inoperancia del gobierno de Burundi (Daley, 2008:86). Esta situación envalentonó a aquellos que solo querían sembrar el caos a través de la violencia de los grupos armados, el asesinato y/o extorsión de parlamentarios, la limpieza étnica o el desplazamiento de hutu de ciertas zonas de Buyumbura a través del uso de paramilitares de la juventud tutsi tales como los *Sans Échec* (sin fracaso) o *Sans Défaite* (sin derrota), (Daley, 86). Estos estallidos de agresión armada se cobraron la vida de entre 15.000 y 25.000 personas solo en 1995 (Reyntjens, 2000:16). Esto llevó a los hutu, a través de sus partidos más extremistas tales como el CNDD-FDD y al PALIPEHUTU-FNL (*Forces Nationales de Libération*), a la conclusión que solo sería posible obtener la paz venciendo a las milicias tutsi militarmente, lo cual sumado a la enorme cantidad de refugiados hutu y la proliferación de armas que había tenido como resultado la victoria del FPR en

Ruanda, las filas de los hutu aumentaban rápidamente (Cornwell y de Beer, 1999:89). Por ello, el Presidente solicitó el apoyo de las fuerzas armadas burundesas para volver a imponer la paz y el orden, las cuales de esta manera obtenían carta blanca para cometer toda clase de atropellos (Cornwell y de Beer, 89). Finalmente, el 25 de julio de 1996, un nuevo e inevitable golpe de estado le puso fin a la presidencia de Ntibantungaya, asumiendo Pierre Buyoya una vez más (Reyntjens, 2000:16).

Este golpe trajo diferentes consecuencias a Burundi. Por un lado, fue severamente condenado por la OUA que impuso duras sanciones económicas al país, mientras que el restante de la comunidad internacional lo vio como una posibilidad de traer seguridad y estabilidad a este convulsionado país (Daley, 2008:87). Para enero de 1997 había reabierto la Asamblea Nacional, levantado la proscripción a los partidos políticos y comenzado un periodo de transición de tres años (Daley, 87). A pesar de que había comenzado discretas negociaciones de paz con el CNDD-FDD, se negó a participar en Agosto de 1997 en la primera ronda de negociaciones de paz en Arusha, llamada a instancias del ex-presidente tanzano Julius Nyerere, quien había sido nombrado como mediador por líderes regionales (Reyntjens, 2000:16).

Las conversaciones comenzaron formalmente en junio de 1998, cuando 17 delegaciones de Burundi se sentaron en la mesa de negociaciones (Reyntjens, 2000:16), y terminarían el 28 de agosto de 2000 con el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha, que funcionaría como una constitución de transición, pero que, paradójicamente, no había sido negociado ni firmado por los grupos rebeldes hutu (Vandeginst, 2009:71). Una de las grandes dificultades de este acuerdo fue el alto al fuego, ya que el gobierno interpretaba que se refería a los grupos rebeldes, pero no al ejército, mientras que el CNDD-FDD, consideraba que tampoco le incumbía ya que no era parte de la mesa de paz; por ello las hostilidades continuaron, inclusive por parte de otros movimientos como PALIPEHUTU y el *Front de Libération Nationale* (FROLINA), que si eran parte de las negociaciones (Reyntjens, 2000:16). Estas fueron arduas y largas, con constantes idas y venidas como las fracturas en aún más divisiones de los grupos rebeldes como, por ejemplo, el FDD, que a partir del 2000 sería dirigido por Pierre Nkurunziza por un lado y Jean-Bosco Ndayikengurukiye por otro, así como violaciones continuas al alto al fuego, y el cambio de mediador a la figura de Nelson Mandela, por el fallecimiento de Nyerere en 1999. Tampoco ayudaron las tensas relaciones de Burundi con el gobierno tanzano, al cual acusaba de dar refugio y asistencia a los rebeldes burundeses; ni la interferencia del aliado de Kabila, Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, quien, para ese entonces, estaba entrenando facciones de la *Interahamwe* y de la CNDD-FDD, las cuales se infiltraban en Burundi, y llevaron a que este país se viera obligado a patrullar las fronteras de la RDC (Cornwell y de Beer, 1999:91).

El Acuerdo de Arusha fue firmado por el gobierno, la Asamblea Nacional y 17 partidos políticos, pero dejó sin resolver importantes cuestiones como el alto al fuego, por lo cual nuevas negociaciones fueron necesarias. El gobierno transitorio de Burundi establecido por el Acuerdo de Arusha -encabezado por Buyoya y luego por Domitien Ndayizeye, un hutu del FRODEBU-, firmó el 16 de noviembre de 2003 un Acuerdo Global de Alto al Fuego con el CNDD-FDD que pasó a integrar la Asamblea Nacional y el gobierno (Vandeginste, 2009:73). Para ese entonces la guerra civil se había cobrado la vida de más de 300.000 personas. Por su parte, las negociaciones con el PALIPEHUTU-FNL comenzaron en enero de 2004, pero luego fueron interrumpidas por la brutal masacre de *Banyamulenge* en el campo de refugiados instalado en el pueblo lacustre de Gatumba en agosto de 2004, violencia que ese grupo hutu se adjudicó (Vandeginste, 74). El 19 de agosto de 2005 Pierre Nkurunziza del CNDD-FDD, partido que había ganado las elecciones que se llevaron a cabo durante junio y julio, fue electo presidente de Burundi por la Asamblea Nacional haciendo las veces, excepcionalmente, de Colegio Electoral, y asumiendo el 26 de agosto. Finalmente, un Acuerdo Comprensivo de Alto al Fuego fue firmado en septiembre de 2006 con el PALIPEHUTU-FNL, el cual fue el último grupo rebelde en inscribirse como partido político en 2009 (Vandeginste, 74). Así llegó a su fin la guerra civil de Burundi, pero lamentablemente no sus interminables ciclos de violencia.

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

MOBUTU, 1965-1997

Joseph-Désiré Mobutu asumió la presidencia el día 24 de noviembre de 1965, nombrando a Evariste Kimba como Primer Ministro, lo cual fue anunciado por la radio sin mayores repercusiones; de hecho, el pueblo cansado de los conflictos armados le dio la bienvenida a este cambio (Haskin, 2005:39). Inmediatamente suspendió toda actividad política por un periodo de cinco años, aduciendo que ese era el tiempo que les había llevado a los políticos arruinar el país (Deibert, 2013:29). A pesar de algunos motines por parte del ejército y de la gendarmería en los años venideros, Mobutu logró mantener un férreo control del Congo durante muchos años a través de la concentración de poder, del culto a su personalidad, de la estrategia de dividir, subir, bajar y volver a subir a posibles opositores, y de la red de clientelismo que generó a su alrededor.

A los pocos meses de asumir como presidente disolvió el Parlamento arrogándose poderes legislativos y pasó a ser el jefe del ejército, del gobierno central y del estado (Haskin, 2005:41). Para marzo de 1967 promulgó una nueva constitución cuyas reformas incluían: un sistema

presidencialista en lugar del parlamentario, una única cámara legislativa – Consejo Legislativo Nacional-, el voto a las mujeres, y permitía únicamente dos partidos políticos; todo lo cual fue ratificado en un referéndum de dudosa legalidad, en junio de ese mismo año (Deibert, 2013:30). Luego creó el partido *Mouvement Populaire de la Révolution* (MPR) que encabezó, obligando a todos los congoleños a afiliarse; este sería el único partido a pesar de la provisión constitucional, y por el cual sería electo presidente en varias oportunidades. El MPR quiso ser un “camino intermedio entre el capitalismo y el comunismo’ en casa y ‘totalmente neutral’ en el extranjero” (Lefever, citado en Haskin, 2005:42). Este camino intermedio sería uno de los grandes logros del régimen mobutista en sus relaciones diplomáticas con occidente y la URSS, ya que supo coquetear eficientemente durante la Guerra Fría para obtener aquellos beneficios económicos necesarios para mantenerse en el poder.

En 1971 comenzó la campaña de nacionalización. Su objetivo era reunir al Congo con su pasado pre-colonial, en una vuelta hacia la “*authenticité*”, y de este modo unir al país en una identidad nacional única. Una de las medidas que tomó a este respecto fue prohibir todos los nombres de pila “cristianos”, y para dar el ejemplo el mismo Mobutu cambió su nombre a *Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga* (el todo poderoso guerrero que, debido a su resistencia e inflexible voluntad de ganar, va de conquista en conquista dejando fuego a su paso). También rebautizó a la RDC y al río que le dio su nombre, pasando ambos a llamarse Zaire, una corrupción portuguesa de la palabra kikongo *nzere* que significa “el río que se traga todos los ríos” (Deibert, 2013:31). Evidentemente Mobutu no sabía que “zaire” poco tenía que ver con las raíces que él pretendía buscar. Finalmente, rebautizó al ejército con el nuevo nombre de *Forces Armées Zaïroises* (FAZ).

Una de las grandes fallas del gobierno de Mobutu, como explica Turner (2013:10), fue no crear un ejército fuerte y bien entrenado con su correspondiente cadena de mando; en su lugar, las FAZ estaban compuestas de unidades individuales que el mismo Mobutu armaba según su criterio, reemplazándolas por otras, generalmente entrenadas por extranjeros, cuando dejaban de ser confiables. Como el mismo Mobutu decía, eran un “ejército de amotinados” (Turner, 10), que servían poco más que para aterrorizar a la población. Tanto así que durante la guerra civil en Ruanda, a las dos semanas de estar prestando ayuda al gobierno de Habyarimana contra el FPR, este le solicitó que se retiraran debido a los saqueos y violencia perpetradas contra la población civil.

Los primeros años de gobierno trajeron prosperidad, volviendo a los niveles de producción coloniales, además que las reformas en materia de economía y la austeridad fiscal “convencieron a los inversionistas extranjeros que Mobutu tenía serias intenciones en promover el crecimiento económico” (Reno, 2006:47). Esto contribuyó a fomentar la unidad nacional durante algunos años,

pero a mediados de los '70 la situación se había deteriorado considerablemente debido a las medidas que tomó en noviembre de 1973 como parte de la campaña de zairinización, cuando nacionalizó todas las compañías agrícolas extranjeras, así como las mineras belgas, las cuales entregó a sus cómplices que no tardaron en destruirlas (McCalpin, 2002:42). Para 1980 las instituciones estaban totalmente colapsadas y una recesión creciente se apoderaba del país, por lo cual las elites comenzaron a usar sus posiciones de privilegio para obtener los recursos necesarios, aún por medios informales o apelando a la cuestión étnica (ver McCalpin, 2002); esto transformó totalmente el sistema económico del Zaire, que en los años venideros se convertiría en terreno fértil para todo tipo de operaciones ilegales y “lores de la guerra”.

En abril de 1990, luego de un viaje de dos meses recorriendo el Zaire, Mobutu declaró el comienzo de la “Tercera República” y decidió permitir la actividad política de otros partidos además del MPR (Deibert, 2013:38). Sin embargo la situación era irreversible. Entre 1991 y el 16 de mayo de 1997 -que terminó oficialmente su gobierno de 32 años-, hubo revueltas en varias partes del país con feroces represalias del ejército, al que le había dado rienda suelta y que no dudó en atacar a la población civil, a lo cual se sumó el insostenible estado de las provincias del este.

VAIVENES DE LAS POLITICAS DE NACIONALIDAD Y SU IMPACTO EN LAS POBLACIONES DEL ESTE DE LA RDC

Las políticas de Mobutu muchas veces fueron contradictorias, incoherentes o simplemente respondían a sus simpatías y alianzas momentáneas. Esto tuvo un fuerte impacto en las provincias del este del Zaire, de donde, debido también a otras causas regionales y locales, surgiría el movimiento que llevaría a Laurent-Désiré Kabila al poder.

Turner (2013:75) explica que los congoleños aprendieron en las escuelas que había cuatro clases de personas en su país: los de origen bantú, aquellos de origen sudanés o nilótico, y finalmente los pigmeos; todos los cuales tenían características físicas e idiomáticas distintivas. Todos los congoleños se asumen bantú, por ende, los sudaneses o nilóticos son necesariamente extranjeros, creencia esta que es compartida por los habitantes de las provincias del este del Congo (Turner, 75).

Se pueden distinguir tres momentos en los cuales hubo inmigración de banyaruanda hacia las provincias del este de la RDC. El primero se dio cuando ruandeses -y en menor medida burundeses- escapando de las campañas de impuestos y del poder de los *mwami*, se asentaron en lo que hoy son las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur previo a lo que fue el Estado Libre del Congo. Luego vinieron las olas migratorias de trabajadores traídos por los belgas durante la colonia,

especialmente hutu que se asentaron en Kivu del Norte, llegando a constituir la mitad de la población. Finalmente, hubo un éxodo masivo de refugiados tutsi en 1959 y los años venideros. En ese punto los banyaruanda tutsi que estaban desde la época pre-colonial, pasaron a denominarse banyamulenge –gente de Mulenge, una localidad de Kivu del Sur- para distinguirse de los recién llegados. El gran problema con estas comunidades fue que ni la colonia, ni luego las repúblicas definieron exactamente su situación legal, ni tampoco regularon apropiadamente el acceso a la tierra (Vlassenroot, 2006:54). Los banyaruanda y los banyamulenge al no ser autóctonos no tenían una autoridad nativa, y por ende no tenían acceso a la tierra por el sistema tradicional de uso del espacio que era otorgado en función de la pertenencia a una etnia o comunidad determinada y originaria. Entonces se volvió claro para los banyaruanda que únicamente la ciudadanía congoleña/zaireña los ayudaría a asegurar sus derechos económicos y políticos, por lo cual comenzaron a tener una participación más activa en política. Esto derivó en el “endurecimiento de las divisiones entre los distintos grupos de identidad, pero a la vez facilitó el cambio hacia la violencia masiva como una atractiva estrategia de control y resistencia” (Vlassenroot, 55).

Durante la rebelión de Pierre Mulele, los banyamulenge que hasta ese momento habían intentado mantenerse al margen de los conflictos políticos, se aliaron con las fuerzas de la ANC, en respuesta a los abusos que los rebeldes y las comunidades aliadas a estos comenzaron a cometer contra ellos, tales como robo de ganado y cobrarles impuestos (Turner, 2013:92). De este modo, la rebelión pasó a ser un conflicto étnico abierto entre los babembe y los banyamulenge, tanto así que algunos jóvenes de esta comunidad que originalmente se habían aliado con los mulelistas, desertaron para ir a integrar las filas de la ANC (Vlassenroot, 2002:504). Luego de que la rebelión fuera aplastada, en agradecimiento, el gobierno de la RDC les ofreció acceso a la educación, servicios sociales y oportunidades laborales, lo cual les permitió generar una elite socio-política, a sabiendas que su posición continuaba siendo delicada, ya que este apoyo de los banyamulenge al gobierno alteró las relaciones étnicas locales (Vlassenroot, 505).

Luego, desde 1967 a 1977, Barthélémy Bisengimana, un tutsi ruandés de los Kivus, fue asesor de Mobutu y, en tal capacidad, ayudó a redactar la ley del 5 de enero de 1972, por la cual se le otorgaba la ciudadanía zaireña a todos los ruandeses y burundeses que estaban en el Congo desde el 1º de enero de 1960 (Deibert, 2013:32), o cuyo al menos uno de sus padres fuera miembro de una de las tribus establecidas en el territorio del Zaire antes del 15 de noviembre de 1908 (Turner, 2013:93). Esto le dio nuevos aires a las comunidades de origen ruandés, que durante la zairinización de 1973 aprovecharon a adquirir importantes extensiones de tierra, especialmente en Masisi y Rutshuru (Deibert, 2013:32) provocando un mayor resentimiento de las elites autóctonas.

En 1981, Mobutu buscó reemplazar la ley de nacionalidad de 1972 por otra más restrictiva,

que ordenaba demostrar el linaje familiar a alguna de las tribus que vivían en el Congo antes de agosto de 1885 –fecha de la supuesta creación del Estado Libre del Congo-. Aunque finalmente esta ley no entró en vigencia, sirvió para caldear los ánimos, especialmente luego que cualquier candidato de origen banyamulenge fuera prohibido de presentarse entre 1982 y 1987. Para este momento los dos Kivus ya se encontraban muy poblados y con una intensa fragmentación étnica (Prunier citado en Deibert, 2013:37)

PRIMERA GUERRA DEL CONGO

Para los años '90 el estado zaireño estaba totalmente colapsado; habiendo finalizado la Guerra Fría, Estados Unidos ya no tenía mayor interés en un tirano como Mobutu y cortó la ayuda económica. Por otro lado, había comenzado la presión de los países donantes para que hubiera apertura política y elecciones democráticas, en sintonía con la nueva política hacia África Subsahariana. Pero Mobutu no tenía intenciones de dejar el poder. Dado que la destrucción de la economía había generado un mercado informal, así como nuevas cadenas de clientelismo que Mobutu ya no podía manejar desde Kinshasa¹¹ (Vlassenroot, 2006:56), era imperativo buscar otros métodos, y su preferido siempre había sido dividir y gobernar. Para ello impidió la creación de fuerzas opositoras significativas, las cuales se dividieron por líneas étnicas, atrayendo a ciertos grupos de base, mientras se excluía otros (Vlassenroot, 56), específicamente los banyaruanda y banyamulenge en los Kivus.

En el verano de 1991 llamó a la *Conférence Nationale Souveraine* (CNS), donde se presentaron cientos de pequeños partidos para discutir el futuro del país, y en la cual un líder de los babembe de Kivu del Sur, promovió la exclusión de los banyamulenge aduciendo que en realidad eran ruandeses, comenzando a cuestionarse nuevamente su ciudadanía (Turner, 2013:94). Cansados de los constantes ataques, hostigamientos y exclusión de los que eran objeto, y sumado a su creciente simpatía por la causa del FPR, muchos jóvenes se unieron a las filas de los rebeldes para luchar en Ruanda.

Con el asesinato de Melchior Ndadaye en Burundi en 1993, hubo un importante flujo de refugiados a Kivu del Sur; y al año siguiente a causa del genocidio y la victoria del FPR, más de un millón de hutu llegaron a Kivu del Norte, trayendo junto a los restos de las FAR y de los *Interahamwe*, fuertemente armados y con mucha plata. Esto generó un inmediato reconfiguramiento de las alianzas locales enfrentando a hutu contra tutsi (Lemarchand, 2004:64), a pesar de que, hasta ese momento, las divisiones entre estos en el Congo no habían sido pronunciadas como en Ruanda

¹¹ Mobutu había cambiado el nombre de Leopoldville a Kinshasa en 1966.

(Prunier, 1997:43). Debido a ello más jóvenes banyamulenge fueron a entrenarse con la *Armée Patriotique Ruandaise* (APR), mientras que otros armaban sus propias milicias en Kivu del Sur. Además como recuerda Vlassenroot (2006:57) “la crisis de los refugiados ruandeses tuvo el efecto de reforzar la creencia de que la violencia basada en la etnicidad y llevada a cabo por grupos móviles de jóvenes, era el medio predominante para crear cambios estructurales”; por lo cual no tardaron en surgir otras milicias integradas por jóvenes, con lealtades variables y que no dudaban en usar la extrema violencia para lograr sus fines.

Ante la ya innegable crisis humanitaria de Ruanda, la ACNUR estableció varios campos de refugiados en el Zaire cerca de las ciudades de Goma y Bukavu –capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur respectivamente-. Estos campos le dieron protección no solo a civiles inocentes, sino a los *génocidaires* que lograron cruzar (Carayannis, 2005:89). Los oficiales de las FAR y funcionarios del gobierno genocida pronto tomaron el control de los campos. Los integrantes de lo que fuera el ejército ruandés y los *Interahamwe* rápidamente se organizaron y comenzaron a entrenar en los alrededores para emprender ataques armados relámpago en Ruanda, por lo cual desde julio de 1994, el gobierno de ese estado comenzó a pedir que se desarme a los genocidas y se disperse la población de los campos, advirtiendo que si no lo harían ellos (Deibert, 2013:55). Mobutu que siempre había sido aliado de Habyarimana dio cobijo a las ex-FAR y a las milicias hutu, permitiéndoles las incursiones a Ruanda, aunque tampoco es factible que hubiera podido hacer mucho para impedirlo dado que el Zaire estaba colapsado, así como sus fuerzas armadas. A pesar de ello, vale recordar que el gobierno zaireño le pidió a la ACNUR que moviera los campos de refugiados a las localidades de Irebu, Lukandu y Kongolo, ubicadas en el oeste del Congo, a lo cual aquella institución se negó por el alto costo económico que tendría la relocalización de las personas (Reyntjens, 2009:20), sin prever el costo muchísimo más alto que traería en vidas humanas el no mover a los refugiados.

Por otro lado, los integrantes del Poder Hutu cada vez tomaban más control de la distribución de recursos de la ACNUR y de otras ONG que estaban brindando ayuda, ello como una forma de manipular a los refugiados para que no volvieran voluntariamente a Ruanda (Whitaker, 2005:66). De esta forma, las negociaciones que siguieron durante 1995 para separar a los refugiados inocentes de los *génocidaires* y repatriarlos, no tuvieron mayor éxito. Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue la alianza entre algunos políticos de Kivu del Norte y algunos oficiales de las FAZ con los hutu ruandeses y locales, que para ese momento ya se habían unido, luchado y derrotado a las milicias bahunde y banyanga del triangulo Masisi, Walikale, Rutshuru, pasando a controlar las tierras para agricultura, con un saldo de más de 30.000 víctimas y haciendo huir a los tutsis de la zona (Prunier, 1997:44). Luego, como una extensión de los ataques a los banyaruanda en Kivu del Norte,

acometieron contra los banyamulenge en Kivu del Sur, los cuales pidieron ayuda a Kigali ante la embestida, brindando otra excusa al gobierno de Ruanda para tomar cartas en el asunto (Prunier, 46).

A mediados de 1996 se llamó a una reunión en Kigali a la cual asistieron los líderes de varios movimientos opositores del Zaire, entre los cuales estaban André Kisase Ngandu del *Conseil National de la Résistance pour la Démocratie* (CNRD) y Laurent Kabila del *Parti de la Révolution du Peuple* (PRP), únicos dos que tenían poder militar (Deibert, 2013:55). Se decidió que los grupos se unieran bajo el movimiento rebelde *Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire* (AFDL), dirigido por James Kabarebe, que sería la punta de la lanza de la invasión ruandesa al Zaire (Deibert, 55) que comenzaría la próxima primavera. Esta creación ruandesa tenía como principal fin darle una “imagen local” (Prunier, 1997:47) a los enfrentamientos que vendrían. Efectivamente, en septiembre una fuerza combinada de la AFDL, de banyamulenge y de soldados de la APR, con algún elemento burundés, aseguraron las colinas de Uvira en apenas tres semanas para luego pasar al ataque directo a los campos de refugiados (Prunier, 47). El primero en caer fue un sitio, cerca de aquella ciudad, donde se refugiaban las FDD de Léonard Nangoma que huyeron a Burundi; luego, continuaron atacando otros campos entre la capital de Kivu del Sur, Bukavu, y el lago Kivu (Prunier, 48).

Para octubre había un franco combate en todo Kivu del Sur, y las tropas ruandesas y de la AFDL se encaminaban a Kivu del Norte. El 8 de octubre, el vice-gobernador de Kivu del Sur, les dio una semana a los banyamulenge que no fueran “rebeldes” para que evacuen la provincia, ya que pasado dicho lapso comenzaría la limpieza de las colinas (Reyntjens, 2009:50), dándole lugar al abuso de las tropas zaireñas que en seguida saquearon Uvira (Deibert, 2013:57). Para mediados de noviembre la AFDL lanzó un ataque masivo contra los campos cercanos a Goma y tomaron la ciudad, estableciendo su cuartel general; allí fue visitada por dos miembros del cuerpo diplomático de Estados Unidos, quien de esta manera le daba un guiño para que bajara a Mobutu (Kisangani, 2012:118). Campo tras campo fue atacado, muriendo miles de personas, mientras que otras huían desordenadamente hacia Ruanda o hacia el oeste del Zaire. Mobutu, por su parte, había pedido ayuda internacional, pero ni siquiera logró una condena del CS; solo Francia, a través de un grupo de mercenarios serbios, y los rebeldes de la União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a quien les brindaba santuario para preparar sus incursiones, fueron en su ayuda, y quienes junto a las ex-FAR y los *Interahamwe* presentaron el verdadero frente de batalla (Carayannis, 2005:91). Para finales de 1996, las FAZ –por lo menos los que no habían desertado para unirse al AFDL- y los hutu, estaban en franca huida, saqueando, matando y violando a civiles inocentes a su paso, mientras el AFDL incorporaba a los Mai Mai a su lucha, convenciéndolos que

su objetivo era derrocar a Mobutu; también se le unieron miles de niños soldados, llamados *kadogo*, y en enero de 1997 el gobierno de Angola mandaba tropas para apoyarlos (Kisangani, 2012:118).

Para ese entonces los rebeldes marchaban a Kinshasa sin mayor oposición, llamado a elecciones comunales libres en su paso por las distintas localidades, generando apoyo local (Carayannis, 2005:91), y aumentando sus fuerzas armadas, ya que muchos jóvenes desempleados y con un futuro incierto se unieron a los rebeldes (Haskin, 2005:79). Mobutu, ya muy enfermo y sin apoyo, huyó a Marruecos donde murió a los pocos meses. Finalmente, en mayo de 1997 entraron a Kinshasa, donde el día 17 Kabila se autoproclamó presidente. La misteriosa muerte de Kisase Ngandu del CNRD, en enero de ese mismo año, lo había dejado como indiscutido líder de los rebeldes (Deibert, 2013:60).

LA SEGUNDA GUERRA DEL CONGO

Una de las primeras medidas de Kabila fue cambiarle el nombre al Zaire, que pasó a llamarse República Democrática del Congo. Como recuerda Deibert (2013:61), irónicamente, el mismo día suspendió toda actividad política y asumió el derecho a gobernar por decreto hasta que se adoptara una nueva constitución. También le cambió el nombre al ejército que denominó *Forces Armées Congolaises* (FAC).

Las relaciones con la comunidad internacional y con los líderes regionales pronto se deterioraron. Al no permitir que se investiguen las masacres ocurridas, los países donantes no le aportaron ayuda económica alguna. Además, empezó a sufrir presiones internas por la fuerte presencia de ruandeses en las esferas de poder, ya que Kabila era visto en el Congo como el títere de Kigali, por lo cual empezó a distanciarse de Ruanda y la relación entre ambos gobiernos pronto se enfrió. También se apartó de Kampala y de Luanda, los otros dos estados que lo habían apoyado en su camino al poder (Lemarchand, 2004:65). Lamentablemente, su decisión de dejar de lado a los *kadogo*, metiendo a su comandante preso, y aceptar la oferta de las ex-FAR y los *Interahamwe* de luchar a su lado a cambio de protección (Deibert, 2013:64) fueron errores que le costarían caros.

En septiembre de 1997 los Maï Maï comenzaron una revuelta en las provincias del este, con un saldo de más de 10.000 muertos (Kisangani, 2012:119), que terminó el 27 de julio de 1998, cuando Kabila anunció que agradecía toda la ayuda recibida de Ruanda, empero ordenaba que retiren todas sus tropas del territorio del Congo y vuelvan a su país. Para este momento, Kigali y Kampala estaban convencidos de que Kabila era un incompetente, no tenía intenciones de mejorar la economía, ni de frenar los ataques de los rebeldes que se oponían a Ruanda y Uganda (Haskin, 2005:86). La respuesta no se hizo esperar, los soldados tutsi del ejército que mantenían tensas

relaciones con soldados de otras etnias, se negaron a deponer las armas, lo cual resultó en un ataque directo a los tutsi de todo el país que fueron arrestados y linchados (Haskin, 87). A su vez, dos unidades de banyamulenge de las FAC en el este de la RDC se amotinaron y tomaron la ciudad de Goma, mientras otras unidades hacían lo mismo en Kisangani y otras localidades (Kisangani, 2012:141). De esta forma comenzaba la segunda guerra del Congo.

A principios de agosto, con Goma ya tomada, James Kabarebe secuestró un avión del aeropuerto de dicha ciudad y llevó tropas a la provincia de Bas-Congo, con la intención de atacar Kinshasa y deponer a Kabila, reemplazándolo por alguien que respondiera mejor a los intereses de Ruanda y Uganda. En Kitona liberaron y reclutaron a soldados de Mobutu que estaban en una base militar siendo “re-educados” (Turner, 2007:6). El discurso de Kabila, mientras tanto, se había vuelto cuasi-genocida, refiriéndose a los tutsi como virus y basura que había que eliminar, instando a la población a través de los medios a que los masacre (Deibert, 2013:67). A su vez, Ruanda y Uganda se habían reunido en Goma donde, junto a opositores a Kabila, formaron el *Rassemblement Congolaise pour la Démocratie* (RCD), liderado por Ernest Wamba dia Wamba e integrada por banyamulenge de las FAC y ex-mobutistas, que inmediatamente tomaron Bukavu y Uvira, mientras tropas burundesas, ruandesas y ugandesas se encaminaban hacia el oeste (Haskin, 2005:87). En los años venideros el RCD se dividiría en varias facciones, como por ejemplo el RCD-Goma y el RCD-ML (*Mouvement de Libération*).

Para fines de mes una fuerza de más de 7.000 soldados del régimen anterior aguardaban en Congo-Brazzaville para atacar Kinshasa, pero nunca lo lograron, ya que tropas de Zimbabue, que habían venido a ayudar a Kabila, bombardearon las posiciones de los rebeldes que ya estaban en las cercanías del aeropuerto de N’Djili en Kinshasa (Turner, 2007:6). A su vez fueron atacados desde Cabinda por tropas angoleñas, habiendo José dos Santos inesperadamente cambiado de posición con respecto a Kabila en los últimos días y yendo en su ayuda. Mientras que Namibia aportaba armas y municiones al gobierno del Congo, Chad y Sudán se unieron a la coalición del presidente congoleño, de esta forma lo que comenzó como un conflicto interno, pronto se internacionalizó (Kisangani, 2012:141), costando la vida a casi cuatro millones de personas, entre 1998 y 2004 (International Rescue Committee report citado en Turner, 2007:3). Aunque este número implica la mayor cantidad de muertes por conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial, pasó mayormente desapercibido para los medios de comunicación.

Mientras Ruanda y sus aliados marchaban a paso acelerado a través del Congo para tomar Kinshasa, una enorme presión internacional consiguió que las partes –Namibia, Zimbabue, Angola, RDC, Ruanda y Uganda, pero no los grupos rebeldes- firmaran un acuerdo de paz en Lusaka en julio de 1999, por el cual todas las tropas debían ser retiradas inmediatamente. Al mes siguiente los

líderes de varios movimientos rebeldes también firmaron el acuerdo. En febrero de 2000, el CS desplegó la *Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo* (MONUC) para supervisar el alto al fuego (Adebajo, 2011:80); sin embargo el arreglo fue roto en incontables ocasiones por nuevos estallidos de violencia (Kisangani, 2012:141), por lo cual las fuerzas de Ruanda que se estaban retirando, se quedaron en los Kivus. Por otro lado, los enfrentamientos constantes entre grupos rebeldes autónomos como los Maï Maï, o entre estos y tropas de Burundi, Ruanda y Uganda, dejaban como resultado muerte y destrucción a su paso. Finalmente, el 16 de enero de 2001, Laurent Kabila fue asesinado y en tanto el Congo seguía librado a su suerte, su hijo, Joseph Kabila, un joven de apenas 29 años, pero que pronto la comunidad internacional le daría la bienvenida, asumió la presidencia. Una vez que se consolidó en el poder llamó a un nuevo acuerdo de paz con Ruanda que firmó en Pretoria el 30 de julio de 2002; haciendo lo mismo con Uganda, en la ciudad de Luanda, el 6 de septiembre del mismo año (Carayannis, 2005:97). Ambos estados, así como Burundi, retiraron sus tropas.

Por otro lado, un acuerdo firmado en Lusaka el 4 de mayo de 2001, había declarado los principios del Dialogo Inter-congoleño, el cual tuvo la virtud de “domestizar” las negociaciones de paz, ya que todos los participantes eran nacionales de la RDC, y de invitar a participar a la sociedad civil formalmente (Reyntjens, 2009:254). Luego de varias postergaciones, el Dialogo re-comenzó en la ciudad de Sun City en Sudáfrica, en febrero de 2002 (Reyntjens, 256), donde se firmaron varios acuerdos bilaterales entre el gobierno y algunos grupos rebeldes que no tuvieron mayores consecuencias (Kisangani, 2012:152). Finalmente, el Dialogo continuó en Pretoria, donde a instancias del enviado especial de NU, Moustapha Nyasse, todas las partes firmaron el 17 de diciembre el *Acte Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo* (AGI), donde se acordaban las bases del gobierno de transición (Kisangani, 152). Lamentablemente, aunque el AGI era global e inclusivo, las partes solo lo firmaron para no ser los “aguafiestas”, ya que, como con otros acuerdos anteriores, nunca tuvieron la voluntad real de honrar sus compromisos (Reyntjens, 2009:260). El acuerdo fue ratificado y firmado por todas las partes intervinientes en el Dialogo el 2 de abril de 2003 en Sun City, dándose inmediatamente inicio al gobierno de transición.

NI GUERRA, NI PAZ

A pesar del fin oficial de la segunda guerra del Congo, más de mil personas seguían muriendo por día en las provincias del este a causa del hambre, enfermedades, falta de atención médica y la violencia que realmente nunca cesó, impidiendo que llegará la ayuda humanitaria necesaria

(Autesserre, 2006:2). Al retirarse las tropas de los estados vecinos, se generó un vacío de poder en el este, con un aumento significativo de la violencia entre grupos cada vez más pequeños y divididos (Carayannis, 2005:98), pero no por eso menos violentos. A pesar de que para el 2003 Kabila había logrado implementar con los líderes de los principales movimientos rebeldes un gobierno de transición que duraría tres años, y por el cual hubo elecciones en 2006 que ganó cómodamente, la inestabilidad continuó.

Las ex-FAR y los *Interahamwe*, a pesar de las promesas de Joseph Kabila a Ruanda, nunca fueron desarmados ni repatriados; al contrario, se re-agruparon militarmente y continuaron activos en el este de la RDC, bajo un nuevo nombre: *Forces Démocratique de Libération du Ruanda* (FDLR). Por otro lado, los distintos grupos de Maï Maï siguieron asolando la región. Sus integrantes nunca parecen disminuir, lo cual es lógico si se piensa que son grupos compuestos por jóvenes marginalizados, sin estudios u oportunidades económicas, encontrando en los otros compañeros de lucha, la familia, la organización y la contención que necesitan. Las alianzas entre estos, los banyamulenge y el RDC-Goma cambian constantemente según las necesidades. Las provincias del este, además continuaron sirviendo de base a los movimientos rebeldes de Burundi como el PARMEHUTU-FNL, hasta que se integraron a la política en 2009. Nuevos grupos rebeldes como el *Mouvement du 23 Mars* o el *Raïa Mutomboki*, fueron surgiendo a lo largo de los años (este último particularmente para enfrentar a las FDLR), por lo cual se acusa a Uganda y Ruanda de apoyarlos y armarlos a cambio de acceso a las ricas áreas de extracción de minerales del Congo. Finalmente, como explica Autesserre (2006:25) hasta que no cesen las causas locales de conflicto como acceso a la tierra, a los recursos minerales, a las formas de poder tradicional y el estatus específico de ciertos grupos que se siguen considerando extranjeros, la violencia no van a terminar, aún más si las políticas de resolución de conflictos solo se enfocan en las causas regionales y nacionales.

LOS CONFLICTOS VISTOS A TRAVES DEL LENTE DE GÉNERO

Las guerras pueden ser explicadas desde muchos enfoques. Los autores recurren a todo tipo de justificaciones, algunas de las cuales pueden ser descartadas por su visión simplista y reduccionista de las causas de los conflictos, tales como las teorías de corte economicistas (Collier y Hoeffler, 2004; Keen, 1998), o aquellas que apuntan a las cuestiones étnicas o de apropiación de recursos naturales (Alao, 2007), o a la debilidad de los estados (Chabal y Daloz, 1999) como presupuestos únicos de los conflictos. Relacionado con estos temas pero con mayor sofisticación, otros autores señalan otros motivos como la dinámica de la política regional y nacional

(Lemarchand, 1994; Williams, 2011); sumadas a las cuestiones netamente locales como acceso a la tierra (Autesserre, 2010; Vlassenroot, 2006); o por cuestiones étnicas manipuladas desde la esfera política y social para la prosecución de los fines personales de las elites (Uvin, 2009; Vlassenroot, 2002; Mamdani, 2001; Newbury, D., 1998). Finalmente, otros se enfocan en la historia y el legado del impacto del periodo colonial (Omeje, 2013).

Sin dudas, compartimos el análisis de muchos de estos autores. No puede dudarse de la necesidad de obtener recursos para poder mantener un conflicto en marcha: a los soldados y mercenarios es necesario pagarles, así como a los traficantes de armas y a quienes proveen de vehículos, combustible, etc. Inclusive si un estado colabora económicamente con alguna de las facciones, lo hace para obtener ventaja, ya sea en contratos mineros o para sacar del medio a algún dictador que ya no les es funcional. Tampoco se puede poner en duda la manipulación étnica o racial por parte de las elites como motivador de conflicto, en definitiva la técnica de construir al “otro” y culparlo de todos los males no es un invento africano. Por otro lado, el impacto que tiene la política regional y las guerras en países vecinos con su consabido vuelco de refugiados en estados de por si inestables, son también motivo de estallidos de violencia (Whitaker, 2005); lo mismo que el legado colonial con la disrupción de los sistemas sociales y jerárquicos propios de los nativos, o con la movilización de personas de unas áreas a otras.

En definitiva todas estas explicaciones tienen sus fundamentos en hechos reales y objetivos; son causas que trabajaron para dar lugar a los conflictos pero no de forma única o excluyente, sino que cada una de ellas es coadyuvante de las otras en el inicio y la continuación de los estados de beligerancia, ya que ninguna por si sola consigue explicar el porqué del inicio de los conflictos o porque los ciclos de violencia se repiten una y otra vez. Como argumenta Fogarty (citado en Cockburn, 2010:149) la razón por la que hay múltiples teorías sobre la guerra, es porque cada una puede tener varias causas: por lo menos todas tienen causas inmediatas, causas antecedentes y condiciones favorables o causas de fondo.

Sin embargo, esos análisis no están completos ni siquiera tomados en su conjunto, porque son miradas parciales que no contestan muchas preguntas sobre los países que nos ocupan, como por ejemplo: ¿porque los estados de la región de los Grandes Lagos son más propensos a resolver sus diferencias a través de la violencia? ¿Porque hay tantos jóvenes y porque estos están dispuestos a unirse a las milicias o a perpetrar crímenes terribles? ¿Porque la violencia sexual ha sido usada como arma de guerra de forma masiva y sistemática?, entre muchas otras cuestiones que las teorías antes vistas no brindan respuestas satisfactorias. Entonces se puede concluir que está faltando el análisis de otros hechos y desde otro enfoque para explicar el comienzo y el prolongamiento de algunos conflictos, así como los ciclos recurrentes de violencia.

Al hacer los análisis llamados de “género neutro”, que en realidad significa que están centrados en los hombres (Hudson et al., 2012:5) se está excluyendo de por sí a la mitad de la población, se invisibiliza la mujer y su influencia directa o indirecta, voluntaria o no en el conflicto. La incapacidad de ver a la mujer en las teorías de relaciones internacionales y de ciencias políticas, permitió que el hombre se convierta en el ser central y universal (Pettman, 1996:5). Luego, esta exclusión de la mujer, a la cual se amalgamó con el hombre, borrando sus diferencias y haciéndola parte de este, derivó en que el ciudadano individual tenga características masculinas (Pettman, 5). Finalmente, ello resultó en que “el hombre, el estado y las guerras sean la base de las teorías” (Grant, citado en Pettman, 1996:6) excluyendo completamente a las mujeres.

Por tanto, ver a la mujer y como las problemáticas de género influyen la política nacional e internacional no es una tarea sencilla ya que no salta a la vista, especialmente porque siempre han sido descartadas como actores (Hudson et al., 2012:5). Para ello es necesario ver al mundo a través de los lentes de género. Un análisis de género, no implica ver únicamente el punto de vista de la mujer, o el rol que esta juega en una sociedad dada, en un momento determinado de la historia, en oposición al lugar que ocupan los hombres en el mismo contexto; es, como explica Cynthia Enloe (2010:xvii), un análisis que no toma ciertas cuestiones por sentadas, se hace otras preguntas, y explora las dinámicas simultáneamente y no por separado. Además, el análisis de género toma en cuenta la construcción de las masculinidades y femineidades en una sociedad, y como esas relaciones patriarcales de género forman parte de las causas de fondo como la militarización social (Cockburn, 2010:149). Esto no implica que el género sea la única dimensión de poder en juego en una guerra, ni busca disminuir la importancia de otras cuestiones como la política, la sobredimensión que se le da a las etnias o a la explotación de los recursos naturales como causas de los conflictos, sino que es una fuerza que perpetua la guerra, porque esta entrelazada inexorablemente a las otras causas (Cockburn, 140), coadyuvando al inicio y prosecución de los conflictos. Consecuentemente, las relaciones de género también son centrales a la hora de entender los procesos internacionales (Steans, citada en Sjoberg, 2010:2).

Sin embargo, y a pesar de la necesidad de enfatizar la importancia del examen de las relaciones de género en la sociedad como causas de fondo o condiciones que favorecen el estallido de los conflictos, estas solo echan más luz y responden a otras preguntas, pero de todos modos, esa explicación no se basta a sí misma, como tampoco lo hacen los otros análisis cuando este enfoque se deja de lado. Sin intentar hacer un examen exhaustivo de las relaciones de género que han jugado un rol central en el comienzo y prosecución de los conflictos, ya que excede el objeto de este capítulo y de este trabajo en general, se señalarán algunos puntos que se consideran importantes para explicar un poco más esta cuestión.

En este entendimiento, es interesante el trabajo de Caprioli (2005), la cual hace un análisis cuantitativo que predice una mayor posibilidad de conflictos intra-estatales en aquellos países donde la desigualdad entre el hombre y la mujer es mayor. Como explica Pettman (1996:3) hay una íntima conexión entre el estado y la guerra, ya que aquel es el único que tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el poder de determinar que uso de esa fuerza es legal o ilegal. Mientras que el estado asume estos derechos como prerrogativas inalienables, es sin embargo, el primero en amenazar a aquellos que debe proteger, por lo cual el estado se vuelve el enemigo y principal fuente de inseguridad para millones de personas (Booth citado en Pettman, 1996:3). Por ello, hay una continuidad entre la violencia a nivel de base del gobierno hacia parte de sus ciudadanos y la guerra civil (Caprioli, 2005:163). Ello así, porque el conflicto intra-estatal es más factible que comience y continúe en aquellas sociedades en las cuales la violencia es un modo legítimo de lidiar con las injusticias o los agravios (Caprioli, 163). La violencia estructural, es un proceso por el cual esta se institucionaliza y se sustenta a través de las normas culturales, volviéndose de esta forma parte del orden social (Galtung, citado en Caprioli, 2005:164). La discriminación por cuestiones de género, así como la violencia contra la mujer, son aspectos integrales de la violencia cultural y estructural. Ahora bien, cuando la tolerancia social de esa violencia es respaldada y legitimada en un ambiente de violencia estructural, la incidencia de conflictos intra e inter-estatales aumenta, porque la violencia se vuelve un modo de vida y una herramienta válida para resolver disputas (Caprioli, 165).

En esta misma línea, Melander (2005:710) concluye que una mayor igualdad de género, medida tomando en cuenta el porcentaje de mujeres en relación a los hombres con escaños en el parlamento y que hayan logrado acceder a estudios universitarios, está asociada a niveles más bajos de conflicto armado dentro de un estado. Ahora bien, de acuerdo al autor (Melander, 2005: 711), su trabajo solo responde de forma ambigua al nexo causal de aquella conclusión, es decir, a la relación entre la paz y el género. Sin embargo, una respuesta podría encontrarse en la investigación de Tessler y Warriner (1997:280) en cuyo artículo sobre el género y la actitud hacia el conflicto internacional en Oriente Medio, descubrieron que aquellas personas que estaban más preocupadas por el estatus y el rol de las mujeres, en particular la desigualdad, eran más proclives a que se buscaran soluciones pacíficas y diplomáticas a las disputas en las cuales estaban involucrados sus estados de origen.

Es de notar que la violencia contra la mujer forma parte de un proceso más amplio de opresión en las esferas de la vida social, que en el caso de los países bajo estudio se agravó durante la etapa colonial bajo la influencia del modelo patriarcal europeo que se impuso a los nativos, modificando su sistema propio de relaciones de género. De todos modos, el género es solo una

forma de organización social y estratificación, ya que la raza, clase, etnia, edad, etc. son espacios de intersección con aquel, desde donde se construyen múltiples masculinidades y femineidades que operan a través de distintas relaciones de poder (Freedman y Jacobson, 2012:5). Desde estas, no solo se subordina a la mujer, sino que se ejercen distintas hegemonías masculinas subordinando también a determinadas masculinidades, por lo cual muchos hombres no pueden alcanzar las expectativas normativas sociales de masculinidad, lo cual deriva en distintos tipos de violencia de género, tanto contra la mujer como contra el hombre. Esto, al devenir una forma legítima de resolver conflictos a nivel social y al trascender al nivel político, implica un sistema estructural de violencia que se utiliza para mantener las desigualdades y en última instancia, el poder.

Otra respuesta que explicaría el nexo causal entre la paz y el género podría encontrarse en los índices de natalidad, que es una de las mediciones que utiliza Caprioli (2005) para determinar la igualdad entre el hombre y la mujer. Según esta autora, un alto índice de natalidad no solo demuestra la discriminación sufrida por la mujer, sino que además está íntimamente relacionado con bajos niveles de educación, de acceso al empleo formal y de autoridad para tomar decisiones a nivel familiar y social (Caprioli, 2005:169), básicamente es la consecuencia de una falta de empoderamiento general de la mujer (Hudson et al., 2012:1-2). Aunque es necesario remarcar que las feministas africanas nunca concibieron a la natalidad como una forma de opresión a la mujer (Mikell, 1997:4) a diferencia de las occidentales, ya que entienden que tener hijos es su responsabilidad primaria y que su estatus de “mujer” depende de ello (Mikell, 9), no es menos cierto que los índices de natalidad de las africanas con acceso a la educación son bastante menores.

Particularmente en la región de los Grandes Lagos, y en Ruanda especialmente, debido a su concepción religiosa, donde la mayoría de la población es cristiana y cerca del 50% es católica, el promedio de hijos por mujer rondaba los 8.6 durante los años ‘70 y ‘80 (May et al., 1990:21), a pesar de que muchos de los embarazos no eran deseados (May et al., 25). En Burundi, por su parte, cada mujer tenía un promedio de 6.9 hijos en 1990 (Hausser, 1993:398). Los altos índices de natalidad, sumados a la falta de planificación familiar, el escaso uso y acceso a métodos anticonceptivos, y la reducción de los índices de mortalidad infantil volvieron a Ruanda y Burundi estados superpoblados. Por otro lado, en Ruanda en 1982 el ingreso per cápita era de apenas USD 239 y el 91% de sus casi 5.5 millones de habitantes vivían en zonas rurales y dependían de la agricultura de subsistencia (Randolph y Sanders, 1992:60), al igual que en su vecino Burundi donde además el ingreso promedio era aún menor, alcanzando apenas USD 219 por habitante a comienzos de la década del ‘90 (Hausser, 1993:398). Históricamente, en ambos estados la producción local de alimentos había mantenido el paso del aumento de la población; sin embargo, esto comenzó a cambiar en las últimas décadas del Siglo XX debido a una severa erosión del suelo y a las colinas

escarpadas imposibles de cultivar (Randolph y Sanders, 1992:60). Ello resultó en un aumento de la presión en la tierra arable, desilusión y abandono de la agricultura con el consiguiente incremento de migración hacia las áreas urbanizadas (Randolph y Sanders, 62; Hausser, 1993:398). Por otro lado, el uso extensivo de la tierra, aún a costas de la enorme deforestación sufrida tanto en Ruanda como en Burundi, ya dividida en pequeños lotes que apenas alcanzaban para alimentar a una familia, sumado a la cantidad de hijos por mujer, implicaba la imposibilidad de que un joven pudiera acceder a tener su propio terreno cultivable, a construir una casa y por consiguiente a casarse. Como se verá en el Capítulo III con mayor detalle, ello implicaba de acuerdo a las costumbres de estos países, que nunca alcanzaba el estatus de “hombre adulto”, sino que seguía siendo “joven”, lo mismo que la mujer que debía esperar a casarse y tener hijos.

El caso de Ruanda es paradigmático de los efectos de esa combinación de factores. Como explica Adam Jones (citando un informe de African Rights, 2002:66) en la sociedad ruandesa tradicional los jóvenes¹² tenían diversas opciones, tales como adquirir o heredar tierra para trabajar, deforestar nuevas áreas para volverlas cultivables, migrar a algún país vecino en busca de trabajo u obtener empleo formal, generalmente en el sector administrativo. Sin embargo, estas opciones se vieron drásticamente reducidas desde los años '80. Por un lado, los jóvenes se encontraron con la imposibilidad de heredar o adquirir lotes o encontrar espacios no utilizados; conseguir trabajo en la administración pública era casi imposible por los planes de ajuste estructural impuestos por los organismos financieros internacionales, y aunque en 1991 hubo un rápido aumento de reclutas para el ejército, eso solo absorbió una pequeña fracción de los jóvenes desempleados y sin futuro, que de cualquier forma serían luego desmovilizados en cumplimiento de los Acuerdos de Arusha (Jones, A., 66-67). Por ello, no es difícil imaginar que cientos de miles de adolescentes y hombres jóvenes sin educación, trabajo, futuro, y ni siquiera perspectivas de convertirse en “adultos” fueran fácilmente reclutables para llevar a cabo el genocidio. De hecho, como recordó el ahora Teniente General Dallaire en una conferencia¹³, la mayoría de las milicias estaban compuestas por jóvenes y adolescentes, muchos de los cuales rondaban los 14 o 15 años, lo cual además coincide con la última explosión demográfica en Ruanda y el comienzo de la crisis económica que afectó al país desde comienzos de los años '80.

En fin, todos estos estudios demuestran una importante interconexión entre los conflictos y las

¹² Según Naciones Unidas y a los efectos estadísticos solamente, se considera “joven” a una persona entre 15 y 24 años de edad (Sommers, 2011:297), mientras que la Unión Africana determina que se es joven entre los 15 y 34 años (Eguavoen, citado en Sommers, 298). Todo ello sin perjuicio de aquellas sociedades donde una persona es “joven” sin importar la edad que tenga, mientras no alcance a adquirir el estatus social de adulto. A los efectos de este trabajo, y atento a los estados bajo estudio, a menos que se indique lo contrario, se tomarán en cuenta los parámetros de la UA.

¹³ Conferencia “*Rwanda – 20 Ans Plus*”, presentada el día 22 de mayo de 2014 en la Universidad Laval, Quebec, Canadá.

cuestiones de género (Tessler y Warriner, 1997:280), o como lo llama Adam Jones (2002:66) una “crisis de género”. La falta de educación de las mujeres, de acceso a métodos anticonceptivos, la influencia de la religión en el estado y en la población, y un patriarcalismo incrustado en lo cultural que también les impedía decidir sobre sus propios cuerpos mantuvieron altísimos los índices de natalidad aún cuando no era viable absorberlos socialmente. Luego, la crisis económica, la falta de acceso a la tierra o a un empleo contribuyeron a poner en jaque la “masculinidad” de los ruandeses, por lo cual no es de extrañar que el gobierno tuviera de donde obtener fácilmente “mano de obra” para cometer las atrocidades que comenzaron en abril de 1994.

De todos modos, esta lectura debe hacerse de forma cuidadosa, ya que aunque la mayor parte de los conflictos armados ocurren en estados con altos porcentajes de población joven (Leahy et al., citado en Sommers, 2011:294) incluidos los estados bajo estudio, como advierte Sommers (2011:295) tomar como único factor la correlación entre inestabilidad política y cohorte de jóvenes solo brinda una explicación limitada y una visión distorsionada de otras realidades. Por ello, como se indicó en los párrafos precedentes, esta es solo una explicación más que contribuye a echar luz a algunas de las causas que facilitaron el comienzo del conflicto en Ruanda, y aplicado a otros contextos, su duración. En estados pobres, donde las mujeres no tienen los medios, educación o libertad para decidir el número de hijos que quieren tener, y por ende las tasas de natalidad son muy altas, mientras que no sea posible insertar social y económicamente a la mayor cantidad de esos niños que luego serán jóvenes, estos serán un factor potencial de conflicto, ya sea a través del secuestro de una fuente inagotable de niños/as para formar parte de los grupos rebeldes, o por que los jóvenes ante la falta de un futuro cierto se unen voluntariamente a las milicias, o por lo menos facilita su reclutamiento.

Otro tanto puede concluirse de Burundi, país en el cual, como en su vecino Ruanda se dio la combinación de dos factores críticos: el gobierno y la cultura (Sommers, 2011:297). A ellos se sumó, además, otro ingrediente pernicioso que subrayó el estado patriarcal: la militarización de la sociedad con la consiguiente hipermasculinización que conllevó. Así como los jóvenes son más propensos a apoyar la violencia política, es interesante recordar que en los regímenes dictatoriales los niveles de natalidad tienden a ser mayores que en las democracias (Weber, 2013: 336-351). Las feministas explican este fenómeno en relación a los regímenes nacionalistas donde las antipatías hacia los objetivos de las mujeres suelen ser muy marcadas, ya que se las considera como las guardianas de la cultura y la tradición, por lo cual cualquier reforma que aumente sus derechos puede ser vista como perjudicial para los esfuerzos nacionalistas (Elshtain, citada en Tessler y Warriner, 1997:256; Caprioli, 2005:166). Además se espera que sirvan a la nación teniendo hijos, en este caso la retórica nacionalista espera que las mujeres contribuyan con sus objetivos, pero

desde la esfera doméstica (Tessler y Warriner, 1997:256). Básicamente, el estado dictatorial que pretende controlar todo lo que ocurre dentro de sus fronteras, también controla los cuerpos de las mujeres, y por ende su capacidad de procrear. A su vez, un régimen de tales características para mantenerse en el poder necesita de una fuente inagotable de recursos para sostener el clientelismo – como fue el caso de Mobutu en el Zaire- o bien recurrir a la militarización del estado –como en Burundi.

Las instituciones militares son estructuras homofóbicas y misóginas que descansan en ideologías y relaciones hetero-patriarcales para funcionar, devaluando todo aquello que es femenino o civil (Chew, 2008:79). Como se verá con más detalle en el Capítulo III, esta hipermasculinización del soldado, que se lleva a cabo entre otras formas a través de la presión que se pone sobre su masculinidad, da como resultado un hombre violento del cual se espera que pase de matar sin piedad alguna al enemigo, pero luego “toque un botón” y se vuelva un ciudadano ajustado a las pautas sociales y culturales. Ello es prácticamente imposible, por lo cual, en muchos casos, el soldado lleva la violencia aprehendida a la esfera social y privada. Este desprecio de lo que es femenino durante el entrenamiento de los soldados así como la erotización de la violencia, sumada a la devaluación general del estatus de la mujer en sociedades como la burundesa, rigidizan los roles de género y exacerbaban las masculinidades, mientras que desvalorizan todo aquello que se asocia con la mujer, es decir la paz, la conciliación, la diplomacia. Todo ello, luego se vuelca a la sociedad desde el gobierno que se mantiene en el poder a través de la fuerza, generando mayores episodios de violencia que finalmente pueden devenir en abiertas guerras civiles.

Esta hipermasculinización del estado en tiempos de crisis, así como la expansión de las fronteras del conflicto las cuales ahora incluyen a la población civil, han puesto a la mujer directamente en la línea de fuego. Tanto en Burundi como en las provincias del este de la RDC, la mujer ha servido como objetivo militar de las fuerzas regulares y de los insurgentes como medio de control de la población, ya sea a través del secuestro de niñas y jóvenes para engrosar las filas de los rebeldes, o bien porque el uso de la violación como arma de guerra implica también una violación a las normas culturales e identidades de género, que resultan en el desmembramiento del tejido social y la cohesión de la familia y de la comunidad. Al atacar a la mujer se pasa un mensaje al hombre: este no pudo protegerla y para poder sanar su hombría es necesario que la rechace si es que la mujer sobrevivió. Más allá de las teorías que se verán oportunamente sobre la violencia sexual contra la mujer, el resultado es claro: una sociedad fragmentada y desgastada, niños abandonados y/o estigmatizados por ser el resultado de una violación o por el repudió que sufrió la madre víctima de violencia sexual, imposibilidad de trabajar la tierra por miedo a ataques de alguno de los bandos, abandono de los estudios por parte de los niños y adolescentes por imposibilidad de hacer frente a

los gastos que irroga, entre otros efectos. Nuevamente, esto genera una fuente de cuerpos disponibles donde hacer la guerra y para continuar con la maquinaria de guerra.

CAPITULO III

MASCULINIDADES Y FEMINEIDADES EN LA REGION DE LOS GRANDES LAGOS. EL IMPACTO DE LA GUERRA Y LA MILITARIZACION

“La guerra es un atentado contra el género humano” Plinio el Joven (62-113).

TODOS SON VICTIMAS

Los hombres y las mujeres experimentan la guerra de forma diferente, especialmente porque el impacto que tiene el estado de beligerancia no es vivido de la misma manera por ambos. Sin embargo, nadie está exento de los efectos del conflicto, ya que un hecho que a primera vista parecería afectar más al segmento femenino de la población por ejemplo, en cuanto se analice se vuelve evidente que también repercute en los hombres y en toda la sociedad, aunque de distintas maneras. Por ello, es insoslayable analizar las masculinidades y feminidades subyacentes en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en una sociedad dada, aún cuando el foco principal de estudio sea la relación de las mujeres y los conflictos armados.

Es significativo el gran número de académicos que afirman, especialmente cuando quieren enfocarse en las mujeres y su relación con la guerra, que la mayoría de las víctimas civiles en los conflictos son mujeres y niños, aunque esto en realidad dependa, de cómo se entiende el concepto de víctimas y que hechos, actos o crímenes se tomen en cuenta. Como explica Fernández de

Casadevante Romani (2012:39) no hay un concepto internacional de víctima, sino que hay “tantas definiciones como categorías de víctimas se vislumbran en las normas internacionales”. El denominador que las distintas clasificaciones tienen en común, es que todas las víctimas lo son como consecuencia de un crimen (Casadevante Romani, 39), sea este de guerra, contra la humanidad, etc. Por ello se puede concluir fácilmente que toda la población civil, independientemente del sexo o la edad, puede ser objeto de los distintos tipos de violencia. Además, si desagregamos la información –cuando está disponible- de las distintas categorías de acuerdo a los crímenes que mayormente sufren, entonces los porcentajes de afectados por un delito dado cambian significativamente de acuerdo al segmento de la población del que estemos hablando.

En el caso particular del combate directo, como la militarización esta tan ligada a la masculinidad, quienes cumplen los roles de combatientes y a quienes se apela para tomar las armas para defender a la nación o la etnia es a los hombres, por lo cual constituyen la mayor cantidad de fallecidos en enfrentamientos con el enemigo. A su vez, dado que las mujeres han sido excluidas mayormente de actuar en el frente, y sus lugares suelen ser de soporte de la maquinaria de guerra, el número de bajas femeninas es considerablemente menor. Sin embargo, cada vez podemos hablar menos de un teatro de la guerra o de una línea de frente (Byrne, 1996:31), ya que en el estado de guerra total e intra-estatal, el conflicto se libra junto y a través de la población civil, por lo cual ambos sexos pueden potencialmente ser víctimas. De esta forma, Li y Wen (2005) han argumentado que durante el conflicto mueren más hombres que mujeres; empero en el post-conflicto, los niveles de mortandad de las mujeres se equiparan con el sufrido anteriormente por los hombres, debido a los efectos persistentes de la guerra tales como: pobreza, falta de estructura sanitaria, desplazamiento forzado, violencia y falta de mecanismos institucionales de protección, etc.

Por su parte, en la región de los Grandes Lagos especialmente en Ruanda y en Burundi, como explica Adam Jones (2002), la mayor cantidad de muertos en los genocidios sufridos en ambos países fueron los hombres, a tal punto que este autor lo llama de “*gendercide*” (generocidio), siendo este un buen ejemplo de que el porcentaje de víctimas varía de acuerdo a que parte de la población se haga referencia en relación a determinados actos de guerra. Específicamente en el caso de Ruanda, los primeros en ser perseguidos y asesinados fueron los hombres: puntualmente aquellos tutsi que se sospechaba que podían tener alguna relación con el FPR (HRW, 1999:11) o que gozaban de una cómoda posición económica o de educación (Jones, A., 2002:72), los hutu opositores al régimen, y los bebés y niños de sexo masculino. Estos últimos, a pesar de no presentar una amenaza actual, eran eliminados recordando que el General Paul Kagame se había ido de Ruanda con solo tres años durante la Revolución Social del '59 (Jones, A., 73) y la Solución Final quería evitar repetir aquel error. Al contrario, las niñas tenían más posibilidad de sobrevivir porque

no solo no eran vistas como una amenaza, sino que además el día de mañana podían ser las esposas de los niños hutu, ya que como en toda sociedad fuertemente patriarcal en la cual la etnia se pasa a través del padre, se creía que era posible borrar ese rastro tutsi. En cuanto a las mujeres, aunque murieron masivamente y fueron especialmente perseguidas aquellas con medios económicos, educación o posiciones de poder, también era más factible que se les perdonara la vida, pero ello conllevaba el costo de volverse esclavas sexuales de sus captores.

Por otro lado, en cuanto a la violencia y explotación sexual, encontramos entre las mujeres y niñas al mayor número de víctimas; y aunque no es menos cierto que los hombres y los niños también padecen abusos sexuales, sin dudas estos hechos se dan en porcentajes menores, aunque parecen ir en aumento. De este modo, son las mujeres, especialmente jóvenes, quienes han sufrido la mayor cantidad de abusos por parte de los soldados de las operaciones de paz, ya sea por violaciones o mediante la prostitución a la que muchas se ven forzadas. Asimismo, son las mujeres y niñas que quedan embarazadas en las situaciones de violencia o explotación sexual, siendo ellas y sus hijos quienes sufren el estigma y el desprecio de la familia y la comunidad. También son las mujeres junto a los niños quienes forman el grueso de la población de los campos de refugiados, pero también son estas las primeras en intentar conseguir los medios de subsistencia necesarios para ellas y sus familias, mientras muchos hombres caen en la desesperación y por ende recurren al alcohol u otras drogas.

De esta forma puede observarse que la victimización no es exclusiva de las mujeres o niñas, sino simplemente que cada segmento de la población se ve más afectado por algunos crímenes o situaciones que por otros; mientras que algunas circunstancias que trae aparejada la guerra como pobreza, enfermedades y la disolución de las relaciones sociales o familiares afectan al grueso de la población sin distinción alguna.

LA VIDA DE LAS MUJERES DESDE EL PERIODO PRE-COLONIAL HASTA LAS GUERRAS CIVILES EN RUANDA, BURUNDI Y LA RDC

Para poder tener una visión global de como el conflicto afectó a las mujeres y poder determinar si luego de terminadas las guerras que asolaron a los países de la región de los Grandes Lagos, hubo cambios significativos en sus vidas o simplemente se volvió *al status quo antebellum* sin importar de que manera atravesaron el conflicto, es necesario hacer un breve recorrido por el lugar que históricamente ocuparon, y como este se fue modificando con el paso del tiempo, la irrupción del colonialismo y posteriormente durante la independencia.

PERIODO PRE-COLONIAL

Aunque los congoleños tuvieron su primer contacto con los europeos a fines del 1400, hay muy pocos registros escritos sobre la vida de las mujeres en aquellos tiempos. Aquellos que llegaban a las costas de África y los pocos que se internaban en el continente, eran obviamente hombres interesados en “cuestiones de hombres”, y las mujeres no eran de mayor interés salvo para usarlas (Coquery-Vidrovitch, 1997:3), o en su caso, esclavizarlas. Por eso, cualquier conocimiento que se tenga “ha sido filtrado por los prejuicios culturales y las percepciones de los hombres europeos del periodo de la esclavitud o del colonialismo” (Gordon, 2013:306).

El elemento central de las sociedades del Congo, Ruanda y Burundi era la familia, entendida como linaje, es decir, un grupo de individuos que se reconocían a sí mismos como descendientes de un ancestro común (Coquery-Vidrovitch, 1997:9). Las relaciones entre familia, clan y linaje eran el fundamento donde se asentaban las tradiciones y cultura, y se aseguraba su continuidad, pasándolas de una generación a otra (Adekunle, 2007:97). Los hombres y las mujeres tenían roles diferentes, aunque no rígidos, en estas sociedades. Entre las clases que se dedicaban a la agricultura o a la ganadería, la mujer era quien cultivaba la tierra y atendía a los animales; también debía proveer de alimentos a la familia, además de cocinar, cuidar a los niños, fabricar los enseres domésticos que se necesitaran y comerciar en pequeña escala en los mercados locales (Gordon, 2013:308). Mientras que los hombres se ocupaban de las guerras y los asuntos políticos, el comercio a mayor distancia y a desmalezar los campos y cazar (Coquery-Vidrovitch, 1997:10).

La maternidad y todo lo que conlleva, era una cuestión exclusiva de las mujeres; dado el gran valor que tenían los hijos en estas sociedades –incluidas las niñas-, ya que representaban riqueza, seguridad en la vejez y la continuidad del linaje, esto les daba a las mujeres un estatus más alto y mayor autonomía de la que gozaban en otras partes del mundo (Gordon, 2013:308). Inclusive, la mujer que no podía tener hijos seguía siendo esposa y el marido mantenía la obligación de cuidarla. La mujer era productora y reproductora, y de ahí su gran valor social y económico. Por ello, la práctica de pagar una dote por la esposa era muy corriente, la cual implicaba compensar a la familia de la novia por la pérdida de una hija y la riqueza que le aportaría a la familia del novio (Gordon, 308); pero a su vez, también significaba crear un lazo social y duradero entre las dos familias (Adekunle, 2007:104). De hecho, la mujer tenía la suficiente libertad para dejar a un marido abusivo y violento, y no le era difícil conseguir un nuevo esposo.

La poligamia, a diferencia de lo que creyeron los colonizadores, no era un símbolo de la inferioridad de la mujer, sino que, al contrario, demostraba la importancia de la mujer para la familia y su economía, por lo cual tener más de una esposa importaba riqueza y estatus (Adekunle,

2007:98). Tanto así que durante la época colonial, los únicos que conseguían cumplir la cuota de cultivos comerciales que les imponían los belgas, eran aquellos hombres que tenían más de una esposa. Por otro lado, la poligamia, les permitía a las mujeres compartir la demanda sexual del marido para no volver a quedar embarazadas hasta pasados alrededor de tres años del nacimiento del último bebé y de este modo asegurar su supervivencia.

En las sociedades de Ruanda y Burundi, si bien compartían todo lo dicho hasta aquí, como las jerarquías sociales eran más rígidas el lugar de la mujer también estaba determinado por la posición que tenía la familia donde nacía, ya que heredaba la clase y casta de su padre. Entonces, una mujer tutsi si bien era inferior a su padre, hermanos o marido tutsi, era superior a un hombre hutu y así por delante (ver Albert, 1963); y aunque no podían heredar inmuebles, ganado u ocupar posiciones de poder, ya que eran sociedades fuertemente patriarcales, muchas mujeres lograban poseer tierras, ganado y sirvientes (Albert, 1963:180). Como explica esta autora (Albert, 180) “la vida de un individuo estaba limitada, pero no totalmente determinada por las estructuras formales de la sociedad”. Así encontramos mujeres en Burundi que han tenido muchísimo poder y riqueza, y que han sido más temidas que el peor de los patriarcas, si bien su poder era ejercido a través de su hijo o marido. Una mujer, a diferencia de un hombre, no podía perder la posición social con la que había nacido, pero sí podía ser dada en matrimonio a alguien de una casta inferior; de este modo, una mujer tutsi si se casaba con un hutu debía obedecer a alguien inferior, pero seguía siendo tutsi; en cambio, si un hombre tutsi se casaba con una mujer hutu, pasaba a ser hutu también (Albert, 185). Las mujeres tutsi eran más deseadas por los hombres ya que, en teoría, no solo eran más bellas, sino que además eran más fértiles que las hutu, mitos que tristemente atravesaron la barrera del tiempo y fueron excusa para todo tipo de atrocidades durante el genocidio tutsi.

Finalmente, cabe recordar que las mujeres participaban de organizaciones -generalmente consejos- que actuaban de forma paralela a aquellas de los hombres (Gordon, 2013:307). De este modo, tenían autoridades en los mercados locales, sociedades secretas y hasta cortes para juzgar los asuntos considerados femeninos. Estas sociedades no eran controladas por los hombres, sino que al contrario, les daba libertad a las mujeres para influir en los “asuntos masculinos” y para generar sus propias redes de relaciones y pertenencias (O’Barr, 1984:143). Es evidente que, más que una subordinación de la mujer, lo que existía era una complementariedad de roles, por lo cual el hombre no necesitaba sentirse amenazado por la mujer, permitiéndoles a ambos funcionar de forma cohesiva como unidad social (Isike, 2012:22 y 24). Lo que es necesario entender, es que las mujeres tenían sus propias esferas de influencia, así como roles político, y aunque no fueran iguales a los de los hombres, aquellas gozaban de un poder, una libertad y un acceso a la vida pública, que no volverían a tener en mucho tiempo (O’Barr, 1984:144).

PERIODO COLONIAL

La interrupción de la vida de los africanos por los europeos a través, primero, del tráfico de esclavos, y más tarde con la colonización del continente, trayendo junto a ellos sus creencias religiosas, moralina y construcciones sociales, tuvieron como consecuencia la disrupción total del estilo de vida de los nativos, modificando los modos de producción existentes y con ello las relaciones de género (Isike, 2012:24). Además, la colonia se ocupó de inmiscuirse en todos los asuntos de la vida de los africanos, desde el uso de la tierra, hasta los ciclos de reproducción de las mujeres.

Con la creación de los estados africanos, su inserción en el mercado internacional como proveedores de materias primas, los administradores coloniales y los misioneros impusieron nuevas concepciones patriarcales sobre el lugar apropiado para la mujer, confinándola a roles marginales como amas de casa o empleadas domésticas (Isike, 2012:24-25). Por otro lado, la apropiación de la tierra de los nativos, que había sido predominantemente trabajada por las mujeres, dejó a estas al margen de las economías emergentes, deteriorando gravemente su situación económica y su acceso a la comida (Isike, 2012:25). Luego, la imposición de la agricultura comercial como café y algodón, las desplazó aún más, ya que en caso de que hubiera cualquier capacitación esta estaba destinada a los hombres, porque en la colonia todo estaba diseñado para servir a los hombres que trabajaban para los colonizadores (Coquery-Vidrovitch, 1997:3), o de los cuales estos podían sacar provecho. Estos nuevos cultivos impactaron en los roles de género de la sociedad pre-colonial; atento que la mayor parte de la tierra debía ser destinada a los cultivos comerciales para poder cumplir con los cupos que les imponían a los nativos, solo una pequeña porción quedaba para el cultivo de subsistencia, por lo cual ya no había excedentes para que las mujeres pudieran vender en los mercados locales y de este modo tener una cierta autonomía; y si había cualquier ganancia, esta era para los hombres que se la apropiaban.

Este desplazamiento de la mujer de cualquier actividad económica resultó en una mayor dependencia del hombre, lo que llevó a un sentido de superioridad y dominación masculina, tanto social como física y emocional, así como a una pérdida de la identidad femenina (Isike, 2012:25) y de los roles complementarios que otrora existieron. La violencia física y sexual contra la mujer no tardó en llegar. El hombre pasó a ser el único sostén económico de la familia; empero la presión de no poder cumplir con las responsabilidades tradicionales como jefe del hogar, derivaron en última instancia en una pérdida de poder, lo cual a su vez impactó profundamente en su masculinidad, generando sentimientos de frustración y comportamientos agresivos y violentos contra la mujer (Isike, 25-26), que terminó por ser el chivo expiatorio del fracaso del hombre y del maltrato que

este, a su vez, recibía de los europeos.

Por otro lado, como la colonia intentó impedir por todos los medios la poligamia, que era vista como un acto bárbaro y pre-cristiano, sumado al empobrecimiento constante de los nativos, era muy difícil que un hombre pudiera tener más de una esposa, por lo cual recaía sobre esta muchísimo más trabajo que antes era compartido con las otras mujeres de sus esposos. La monogamia, entonces, impedía que pudieran cumplir con los lotes de cultivos y tributos impuestos por los colonizadores, por lo cual muchos hombres eran forzados a abandonar sus familias para trabajar en las minas, o en las grandes plantaciones de los blancos, mientras que las mujeres permanecían en las áreas rurales, asumiendo las responsabilidades que antes recaían sobre los hombres (Gordon, 2013:309). Por supuesto que esto afectó inmediatamente los índices de natalidad, que cayeron drásticamente especialmente en el Congo Belga, deviniendo en una enorme preocupación para la colonia, ya que si no había nacimientos, faltaría mano de obra. La “solución” a este problema incluía la monogamia de acuerdo al ejemplo cristiano, los incentivos fiscales, expandir los servicios obstétricos y pediátricos y reforzar la autoridad de los maridos y los padres sobre las mujeres (Hunt, 2005:54).

De todos modos, la poligamia nunca pudo ser realmente erradicada, al contrario, las mujeres pedían a sus esposos que se casaran con otras mujeres para poder compartir la carga del trabajo y así cumplir con las imposiciones coloniales. Sin embargo, esto también fue un problema, ya que los jefes nativos, quienes obtenían los favores de la colonia y por ende las ventajas económicas, pagaban las dotes de la mayoría de las mujeres en sus áreas, demandando, a su vez, dotes mucho más altas de los hombres casamenteros que no podían pagarlas. Esa situación causó dos efectos: por un lado, muchos hombres emigraron a las ciudades, lo mismo que muchas de las esposas de los jefes que huían de sus “maridos” y terminaban dedicándose a la prostitución, que era su único medio de supervivencia (Hunt, 2005:35). Por otro lado, apareció el instituto de la “doble poligamia”, por el cual el jefe cedía una de sus mujeres para ser usada temporalmente por un hombre pobre, quien, por esta “pseudo-esposa” a la cual hacía trabajar, pagaba al jefe trabajando en sus campos (Hunt, 35).

Todas estas situaciones, sumadas a los prejuicios propios de los colonizadores, que solo trataban con hombres y era a los únicos que les daban cualquier posición de poder, además de reforzar la idea en los nativos de que debían imponer su autoridad sobre las mujeres, fue relegándolas cada vez más. De este modo, las mujeres que otrora habían tenido ganado o tierras, las fueron perdiendo, y con ellas cualquier autonomía o posibilidad económica (Gordon, 2013:309-310). Sin embargo, si continuaba la costumbre pre-colonial de que las mujeres debían mantenerse a sí mismas y a sus hijos, pero ante la pérdida de su modo de vida, imposibilitadas de conseguir

trabajos propios, no quedaban muchas opciones más que prostituirse, hacer trabajos domésticos o vender comida a otros hombres (Gordon, 310).

La administración colonial separó en líneas imaginarias, pero muy presentes, a los territorios coloniales en dos esferas legales: por un lado, las regiones gobernadas por las costumbres locales y por otro, los centros extra-consuetudinarios. La idea atrás de esta división era controlar el movimiento de personas y mantener a aquellos gobernados por la costumbre en sus espacios, separados de aquellos que estaban “evolucionando”; por ello cualquier persona que quisiera mudarse, ir a visitar a un familiar en otra provincia o ir a una ciudad, debía pagar un impuesto y obtener el permiso correspondiente, bajo pena de ser expulsado (Hunt, 2005:56). Por otro lado, los colonizadores no querían que haya migración de mujeres hacia las ciudades, y los permisos de residencia se otorgaban de acuerdo a los derechos que tenía el marido; empero, si una mujer sola se mudaba a la ciudad, era tratada como hombre y debía pagar impuestos (Hunt, 56). Esto respondía a que los colonizadores creían que las mujeres africanas tenían demasiada influencia sobre los hombres, y que sus demandas sexuales impedían que estos trabajaran adecuadamente (Mama, 1997:52). Entonces, en las principales ciudades del Congo, así como en Usumbura (hoy Buyumbura), se impuso un impuesto a las mujeres solteras, viudas o divorciadas que se llamó impuesto a “*les femmes vivant théoriquement seules*”, es decir, a las mujeres que vivían teóricamente solas; en swahili fue traducido como *kodi ya malaya*, o sea, impuesto a las prostitutas (Mama, 56-58). Básicamente, este tributo igualó a las mujeres solas con las prostitutas, ya que toda mujer que no tenía un marido era sospechada de tal y debía pagarlo. Otras de las razones por detrás de este impuesto también era que aquellos hombres ciudadanos que practicaban la poligamia a escondidas, esto es, que tenían una esposa oficial y las otras viviendo como mujeres solteras en otras residencias, tuvieran que responder tributando.

Finalmente, cabe hacer mención a otra forma de imposición de patriarcalismo europeo en las colonias a través de quienes los colonizadores llamaban *évolués*, que eran aquellos africanos que habían recibido una cierta educación europea –generalmente en las misiones- y se consideraba que estaban evolucionando hacia los estándares de civilización deseados (Bouwer, 2010:2). Estos empezaron a formar las pequeñas elites nativas y apoyaban –o más bien decían hacerlo- cuestiones como la monogamia, a la vez que se hacían eco de otras opiniones de los colonizadores (Bower, 14). De las esposas de estos hombres se esperaba el mismo comportamiento “evolucionado” y, por ende, debían aprender cómo manejar el hogar, cuidar a los hijos y al marido *à la mode* europea, o sea, se relegaba a la mujer al rol de esposa y madre. Por supuesto que esto excluyó a las mujeres de cualquier participación en la vida pública, forzándolas a mantenerse en la esfera privada. Además, la familia extendida como se la conocía en Ruanda, Burundi y el Congo, quedó reducida a la familia

nuclear europea: esposo, mujer y un pequeño número de hijos, con el hombre como la indiscutida cabeza de la familia y el sostén económico del hogar (Bower, 17), desnaturalizando así, las relaciones de parentesco y perdiendo el apoyo y la intermediación de la típica familia extendida nativa.

DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LAS GUERRAS CIVILES

La situación social de las mujeres no varió mucho luego de la descolonización, ya que las influencias coloniales habían permeado fuertemente la cultura tradicional (Coquery-Vidrovitch, 1997:5). Como recuerda Mama (1997:54), los discursos nacionalistas frecuentemente proclamaban la necesidad de recuperar la hombría dañada del africano, pero poco hicieron por las mujeres, las cuales quedaron excluidas de las discusiones políticas; por otro lado, los líderes tampoco cumplieron las promesas de transformación social luego de la independencia. De hecho, la mayoría de los estados africanos y sus instituciones “se volvieron replicas africanizadas de sus predecesoras coloniales” (Gordon, 2013:311).

En términos generales, en los tres países bajo estudio, las mujeres siguieron siendo responsables por el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, mientras participaban en el sector informal de la economía, inclusive trabajando sin remuneración alguna en las tierras de su familia, mientras eran excluidas del sector laboral formal (Brück y Vothknecht, 2011:91). Esa situación respondía a otras discriminaciones sufridas por las mujeres, como la falta de acceso a la educación, ya que siempre se prefería que asistieran los varones a la escuela; o la elección de hombres en lugar de mujeres para cubrir un puesto vacante, aún teniendo la misma capacitación (Brück y Vothknecht, 94). Por otro lado, tampoco tenían oportunidad de generar sus propios emprendimientos atento que las leyes les imponían restricciones al dominio y a la propiedad, no podían abrir una cuenta bancaria sin el consentimiento del marido, y el acceso al crédito era muy restringido (Brück y Vothknecht, 94).

Las mujeres continuaron teniendo la mayor carga en la producción de alimentos a través de los cultivos de subsistencia, pero la tierra pertenecía a los hombres. Por ejemplo, en el caso de la RDC, donde a pesar de que las mujeres tenían el derecho a heredar, este no se respetaba, y los familiares del difunto esposo podían echar a las mujeres y apropiarse de cualquier propiedad que hubieran adquirido juntos sin que las autoridades hicieran nada al respecto (Puechguirbal, 2003:1273). Además, necesitaban la autorización del marido para realizar cualquier actividad fuera de la casa, y a pesar de que seguían comerciando en los mercados locales (Puechguirbal, 1273), habían perdido todos los cargos que tenían en la época pre-colonial, donde comités de mujeres auto-

regulaban su actividad. La poligamia fue prohibida, aunque continuó ampliamente tolerada. En cuanto a los derechos políticos, Mobutu les dio el voto a las mujeres, pero estas no participaban de la política nacional o local, además perdieron el poder de influenciar a los hombres que tenían antaño, dado que el poder ya no se ejercía a través de la familia y de las organizaciones locales, sino desde el estado y las instituciones burocráticas (Gordon, 2013:312).

En la Ruanda pre-genocidio, las mujeres solo tenían acceso a la tierra a través de sus maridos, pero a diferencia del Congo, si quedaban viudas mantenían las propiedades hasta que sus hijos varones crecían y tomaban posesión (Adekunle, 2007:107). Las mujeres necesitaban el consentimiento de sus esposos para poder abrir una cuenta bancaria, dedicarse al comercio o contratar, aunque a veces estas exigencias no eran cumplidas a rajatablas (Sarlach, 1999:391). En cuanto a los valores sociales y familiares siempre se alentó la monogamia, inclusive a través de provisiones en la constitución post-independencia; sin embargo, nunca lograron erradicar totalmente la poligamia que era una costumbre muy enraizada en la cultura ruandesa, especialmente en las zonas rurales y sobre todo entre los hutu, que solían tomar más esposas que los tutsi (Adenkule, 2007:106).

Asimismo, a principios de los años '80 comenzó una campaña contra las mujeres solteras que vivían en áreas urbanas, bajo el pretexto de mejorar la moralidad pública (Taylor, 1999:161). Fueron víctimas de esta campaña especialmente aquellas mujeres que se vestían muy a la moda o tenían relaciones sentimentales con hombres extranjeros; muchas fueron atacadas o intimidadas por las fuerzas de seguridad inclusive en plena calle (Taylor, 161). Acusadas de prostitución y vagabundeo, cientos de mujeres fueron llevadas a establecimientos de detención rurales, que eran llamados “centros de enderezamiento moral”; la gran mayoría de las detenidas eran tutsi y sufrieron todo tipo de abusos e inclusive violaciones en estos lugares (Taylor, 161). Aunque algunas eran prostitutas, la gran mayoría eran mujeres educadas que tenían muy buenos empleos, inclusive en embajadas; justamente debido a ese hecho y a la protesta de varios diplomáticos extranjeros el programa fue cortado abruptamente, aunque no sin consecuencias perdurables: primero, porque las leyes que habían impuesto esas nuevas medidas “morales” no fueron totalmente derogadas; y en segundo lugar, las mujeres tutsi quedaron muy impresionadas y cuidaban extremadamente su comportamiento en público, inclusive usar sandalias y tener las uñas de los pies pintadas era mal visto (Taylor, 161-162). Pero tal vez, el daño más grande que causó esa represión fue implantar la idea que, muy probablemente, una mujer tutsi soltera era prostituta; imagen que resurgiría años más tarde en la propaganda pre-genocidio (Taylor, 162).

Tal vez, la única ganancia que habían obtenido las mujeres, era una mayor libertad para elegir marido, por lo cual los matrimonios interétnicos eran bastante comunes; mayormente eran mujeres

tutsi que se casaban con hombres hutu, siendo menos común el caso opuesto, ya que, a pesar de todo, las diferencias de clase aún existían (Twagiramariya y Turshen, 1998:111). El profundo catolicismo de la elite ruandesa, que permitía que la Iglesia fuera un estado dentro del estado, solo trajo aparejado la rigidización de los roles de género y una profunda hipocresía (Taylor, 1999:163). Entre otras consecuencias, esa “religiosidad” resultó en la prohibición de los métodos anticonceptivos, por lo cual las mujeres no tenían medios de protegerse ante enfermedades de transmisión sexual o embarazos, lo que provocó un rápido incremento de los casos de HIV. Finalmente, según el Código de Familia de 1992, el marido era oficialmente la cabeza de la casa, y si una mujer ruandesa se casaba con un extranjero perdía la nacionalidad, lo mismo que sus hijos (Sarlach, 1999:391). En Burundi la situación de la mujer no era mejor, inclusive se llegó al extremo de prohibirle que le pase la nacionalidad a los hijos, ni siquiera por opción, en caso de casarse con un extranjero.

En cuanto a la participación política de las mujeres tanto en Ruanda como en Burundi se les otorgó el derecho a votar y ser electas en 1961, pero no participaban activamente salvo alguna excepción como Sylvie Knigi en Burundi, ya que la mujer desde el periodo colonial quedó excluida de esa esfera. En Ruanda, ninguna mujer formó parte del Poder Ejecutivo hasta 1992, cuando fue nombrada la infame Pauline Nyiramasuhuko como Ministra de Familia y del Progreso de la Mujer. Tampoco había mujeres prefecto, y solo un 3,2% de los subprefectos eran de sexo femenino (Sarlach, 1999:391). Luego, en 1993 Agathe Uwilingiyimana, fue nombrada primera ministra en cumplimiento a los Acuerdos de Arusha, y siendo una hutu moderada, intentó por todos los medios lograr una tranquila transición que nunca llegó (Maier, 2012-2013:7-8). Sin embargo, los medios nunca dejaron de retratarla como una prostituta que se acostaba con otros hutu opositores (Maier, 8). Como se observa, a pesar de que estas sociedades desde la época pre-colonial y por su estructura social siempre estuvieron altamente politizadas, después de la colonización las mujeres fueron perdiendo toda influencia en la vida política, salvo excepciones, y esas eran desvalorizadas y vapuleadas moralmente por su calidad de mujeres restándoles, de este modo, autoridad. Al fin y al cabo si hay algo en la que los africanos y los belgas lograron ponerse de acuerdo fue que la política era “cosa de hombres” (Bouwer, 2010:28).

LAS CONSTRUCCIONES DE LAS IMAGENES DE FEMINEIDAD Y MASCULINIDAD EN LA REGION DE LOS GRANDES LAGOS

Aunque normalmente se los pasa por alto, el sexo y los roles de género son dos elementos importantes a la hora de analizar los conflictos armados, así como para definir programas y

estrategias de reconstrucción en el post-conflicto y para que la ayuda humanitaria sea realmente eficaz. Para ello es necesario entender las masculinidades y femineidades como construcciones propias de una sociedad, como estas se ven afectadas o exacerbadas por el conflicto, y que repercusiones tienen estas alteraciones.

Esta falta de perspectiva de género en la aplicación de políticas y programas de ayuda humanitaria tiene serias consecuencias tanto para los hombres como para las mujeres. Por ejemplo, los programas de desarme, desmovilización, y reintegración (DDR) raramente están proyectados para incluir a las mujeres, sea que hayan participado en los conflictos como combatientes o como soporte de las milicias. Lo mismo ocurre, pero en el caso inverso, con los planes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia o explotación sexual en el contexto del conflicto o del post-conflicto. Estos proyectos se enfocan en las mujeres y raramente toman en cuenta a los hombres también víctimas de violencia sexual, o en aquellos que ven sus masculinidades afectadas por la victimización de las mujeres de su familia o entorno. Esta exclusión tiene varias ramificaciones: básicamente trata a los hombres como si todos fueran perpetradores, y las mujeres todas víctimas. En segundo lugar, dado que la innegable realidad es que mayormente (pero no excluyentemente) los hombres son perpetradores y las mujeres las víctimas, los programas de ayuda y concientización deben estar dirigidos también al segmento masculino para contribuir al control de la violencia contra la mujer, concientizando sobre sus efectos y para orientarlos en la toma de decisiones con respecto a este tema. En tercer lugar en sociedades con costumbres tan arraigadas como, por ejemplo, en Kivu del Norte y Kivu del Sur, una mujer víctima de violencia sexual podía ser echada de su casa por manchar el honor de su esposo, padre, o del hombre que estaba a su cargo, por lo cual es necesario tomar en cuenta esas construcciones masculinas propias de la situación espacio-temporal si en verdad se quiere ayudarlas.

A este respecto, una de las teorías que define que es masculino y que es femenino es el esencialismo. Este término denota, como explica Steans (2013:11), la creencia que ciertas características que poseen los individuos o los grupos sociales, tales como el género, la raza o inclusive la sexualidad son inmutables. Así el enfoque esencialista imprime atributos de género, que en lugar de ser adquiridos a través de la socialización o de la construcción permanente del sujeto, están enraizados en las diferencias biológicas, por lo cual “los hombres naturalmente exhiben atributos y comportamientos masculinos, mientras que las mujeres son femeninas y entonces se comportarán de forma que expresen esa femineidad natural” (Steans, 11). De acuerdo a esta visión, una de esas cualidades masculinas es la tendencia del hombre hacia la violencia, la agresión, a tomar las armas como un guerrero para proteger su propiedad, su familia y su nación, mientras que las mujeres son pacíficas, maternales y compasivas. De esta forma, la guerra sería inherentemente

masculina, mientras que la tendencia a la resolución de los conflictos a través de medios pacíficos es una característica femenina. Irónicamente, los mismos hombres que hacen la guerra son los que luego se sientan en las mesas de negociación de la paz, mientras que a las “pacíficas” mujeres se las ignora.

El uso de esta teoría no es menos que problemático. Por un lado acentúa las divisiones de género, imprimiendo características, a veces inexistentes, al portador de la marca. De este modo un hombre pacífico, que se niega a combatir puede ser tildado de cobarde, o inclusive en un caso extremo como en Ruanda, un hutu que se hubiera negado a participar en el genocidio podía ser acusado de colaborador y ser asesinado. A su vez, la mujer que toma las armas y comete atrocidades como el caso paradigmático de Pauline Nyiramasuhuko, Ministra de Familia y Promoción de la Mujer –nombrada por Habyarimana antes del genocidio- se la ve como una aberración, una anomalía, porque no responde a las características femeninas de maternidad y compasión. Sin embargo, como se verá en el Capítulo IV, ella demostró esas últimas características con respecto a su familia y no a los tutsi, porque una mujer puede ser esposa y madre, y al mismo tiempo genocida, ya que un rol no excluye al otro (Brown, 2013:2). En segundo lugar, el uso de esta teoría acentúa la dicotomía hombre/mujer y los roles de género que socialmente se espera que cumplan, manifestando una intolerancia absoluta a los cambios o a la diferencia; ello fue, por ejemplo, evidente en la reacción del segmento masculino de las provincias del este de la RDC a las mujeres que trabajaban fuera de la casa.

Asimismo, la aplicación de esta teoría genera injusticias y problematiza situaciones que deberían ser vistas sin prejuicios *a priori* sobre el género de la persona, así como también facilita la comisión de ciertos delitos. Con respecto a la manipulación de la imagen que genera esta visión esencialista, fue evidente el uso que hizo la defensa de Beatrice Munyenyezi, nuera de Pauline Nyiramasuhuko y esposa del infame Arsène Shalom Ntahobali, cuando debió presentarse ante una corte federal de los Estados Unidos acusada de haber mentido sobre su rol activo en el genocidio (Brown, 2013:16). Sus abogados alegaron que era imposible que una mujer y madre hubiera victimizado a otros, o que hubiera saqueado y mucho menos asesinado a nadie; la defensa no aportó evidencia alguna sobre el carácter moral, religioso, o siquiera sobre una posible ideología moderada de parte de esa mujer para probar los extremos alegados, simplemente se limitaron a enfatizar el sexo y la maternidad de su defendida (Brown, 16). Ese argumento fue suficiente para que el jurado no pueda llegar a un veredicto y se declarara el juicio nulo, según las leyes estadounidenses (Brown, 16).

Esta visión esencialista que toma a la mujer solo como una víctima indefensa y no reconoce su accionar es el que facilita, por otro lado, que las mujeres puedan traficar armas pequeñas y

livianas, escondidas en sus ropas, a través de las fronteras de los países de África Sub-Sahariana; al fin y al cabo, el entendimiento de los hombres en los controles fronterizos es que no es probable que una mujer este llevando un arma. Finalmente, es particularmente problemático mantener nociones fijas e incuestionables de masculinidad y femineidad en un momento en que, las identidades de género, se encuentran en un permanente cambio debido al conflicto (Byrne, 1996:33).

A pesar de lo antedicho, algunos autores hablan de un uso estratégico del esencialismo. En esa línea de ideas, Steans (2013:12) explica que mientras el género prevalezca como un marcador de desigualdad social, es necesario usarlo en la generación de políticas de protección para abordar prácticas injustas y discriminatorias, como sería el caso de la falta de perspectiva de género en los programas de DDR. Por otro lado, es una forma de fijar las identidades para luchar contra las arbitrariedades que sufre un grupo, un segmento social como los niños o una etnia (Gayatri Spivak citada en Steans, 12). Finalmente, Charli Carpenter (citada en Steans, 12) también sustenta el uso estratégico del esencialismo argumentando que los defensores de los derechos humanos trabajan en ambientes con prácticas culturales y restricciones políticas pre-existentes, por lo cual encuentran útil utilizar un lenguaje que pueda ser entendido y aceptado por los locales, a pesar de que reproduzca estereotipos de género. En definitiva, dada la extendida existencia de este como marcador social de identidad, es casi imposible no caer en algún momento en el esencialismo, pero ello no debe hacerse a costa de contradecir otras teorías que se esgriman, sino solo mientras se tenga en cuenta que se está utilizando a sabiendas de su significado y los efectos que causa o puede causar su uso, para evitar dar lugar a las consecuencias negativas vistas *ut supra*.

De todos modos, el género, ya sea que se lo tome desde una posición esencialista o como una acción performativa –algo que se “hace” en lugar que se “es- y que está en constante cambio y reformulación, es solo una forma de organización y estratificación social. Otros marcadores como la raza, posición económica, etnia, religión, etc., atraviesan esa organización, construyendo múltiples masculinidades que operan a través de esta, las cuales a su vez, interactúan entre sí a través de relaciones de poder (Freedman y Jacobson, 2012:5). Por ello, entre los hombres también hay distintos grados de hegemonía y de subordinación, aunque no ya referentes al género, sino a estas formas de masculinidades hegemónicas que están en constante adaptación y movimiento. Luego, la hegemonía masculina se sostiene desde la oposición a otras masculinidades subordinadas y devaluadas como, por ejemplo, la homosexualidad, pero aún más, sobre su relación con la femineidad devaluada (Tickner, 1992:6). Empero, a pesar de ello, el hombre pasa -o tiene más facilidad de hacerlo- de la esfera pública a la privada, mientras la mujer es mantenida y constreñida a esta última.

En sociedades profundamente patriarcales como la de Burundi, Ruanda y la RDC, los roles de

género tienen una fuerte impronta cultural y tradicional que a pesar de haberse visto afectados por los conflictos, no siempre consiguieron flexibilizarse y readaptarse ante el cambio de circunstancias. De este modo, excepto algunas excepciones y como regla general, se siguió manteniendo una imagen idealizada de que se entendía por masculinidad y femineidad en esa región.

Uno de los elementos principales necesarios para alcanzar la edad adulta, y con ella la masculinidad, en gran parte de África Sub-Sahariana, incluida la región bajo estudio, era tener una cierta independencia económica que permitiera poder construir o adquirir una casa, casarse e iniciar una familia. Como explica Lwambo (2013:50) estas normas se mantenían en la retórica y se traspasaban en la socialización de los niños, a pesar de que las realidades económicas y sociales hicieran imposible mantener esa imagen en la práctica. Entonces, la dificultad de cumplir con esa imposición social relacionada con la identidad masculina, podía generar un sentimiento de fracaso (Lwambo, 50) cuyo desahogo solía involucrar violencia doméstica, sexual o inclusive en estos ambientes de conflicto armado, unirse a las milicias o grupos insurgentes intentando, de este modo, construir esa masculinidad fallida. Ello así, ya que la violencia es una forma de afianzar el poder en un sistema de dominación, pero al mismo tiempo, es una medida de su imperfección (Connell, citada en Freedman y Jacobson, 2012:6).

Normalmente la imagen masculina existente en la región solía ser positiva, se lo veía al hombre como proveedor, protector, encabezando su familia, con capacidad para negociar y para resolver problemas (Lwambo, 2013:51). Este ideal de masculinidad era compartido tanto por los hombres como por las mujeres, quienes lo reforzaban con las expectativas que ponían sobre estos. El “verdadero hombre” adquiriría el respeto de la mujer, de la familia y el social, no a través de la violencia sino gracias a la posibilidad de proveer (Lwambo, 52). Por su parte, la mujer llegaba a la edad adulta cuando se mudaba a la casa de su esposo y le daba hijos (Sommers y Uvin, 2011:3). Las mujeres en estas sociedades creían que un “hombre real” no se dejaba mandar por su esposa, y mientras que esta se sometiera a él, habría armonía en el hogar (Lwambo, 2013:53).

Lamentablemente, los intermitentes pero siempre presentes conflictos en la región dificultaron el cumplimiento de esas perspectivas de género. El principal efecto práctico de esta construcción de masculinidad del hombre proveedor, y que se manifestó con más fuerza en Ruanda, era que un hombre que no lograba construir una casa y no podía mantener a una esposa, no conseguía casarse y por ende, socialmente nunca dejaba de ser un “joven”, independientemente de la edad que tuviera, es decir, era un hombre “fallido”. En Burundi, las expectativas se fueron flexibilizando considerablemente, ya que si bien los ideales de masculinidad se mantuvieron, la sociedad entendió que ciertas costumbres culturales debían ser revisitadas y vistas a través de la realidad que vivían los burundeses; por ende, aunque la masculinidad no se pudiera construir perfectamente, era posible

aceptar alternativas como, por ejemplo, simplemente adicionar una habitación a la casa de los padres (Sommers y Uvin, 2011:4-5).

Sin embargo, no todos los hombres aceptaban psicológica y emocionalmente ese cambio en la imagen de la masculinidad, así como tampoco las distintas sociedades comprendieron la necesidad de readaptar las expectativas sobre los roles de género. Como la riqueza era vista como uno de los requisitos necesarios para construir la imagen masculina aceptada socialmente, en las provincias del este de la RDC ciertas actividades tradicionales empezaron a ser vistas con recelo, como por ejemplo la agricultura y unirse al ejército. En el Congo, una de las peores versiones de la masculinidad estaba asociada a la vida militar, la cual traía pobreza, duras condiciones de vida, pocos a inexistentes ingresos y la presión para cometer actos de violencia (Lwambo, 2013:58). En cambio, en Burundi, entrar a servir a las fuerzas armadas o de seguridad antes de la guerra civil traía prestigio, la posibilidad de una vida económicamente holgada y de ascenso social (Uvin, 2007:7-9). Aunque esto cambió hasta cierto punto dado el peligro que enfrentaban los soldados durante el conflicto armado, aún luego de este, los combatientes desmovilizados de los grupos rebeldes que tuvieron la oportunidad de unirse a las *Forces de Défense Nationale* o a la policía, sintieron sus expectativas masculinas realizadas (Uvin, 9).

Con respecto a la agricultura y la ganadería, actividad que otrora implicaba riqueza y prestigio, luego de comenzada la guerra ya no proveía los medios económicos necesarios para alcanzar el status social que buscaban los jóvenes. Además, se sumó la inseguridad que trajo aparejada las incontables milicias que asolaban las provincias del este de la RDC; estas robaban el ganado, usurpaban las tierras y hacían que los caminos fueran muy inseguros para el comercio, por lo cual los granjeros no podían mantener a sus familias (Lwambo, 2013:53). Un cuadro similar ocurría en Burundi y en Ruanda durante las guerras civiles, acompañado a la falta de espacio que había en esos pequeños países con alta densidad demográfica. Finalmente, los ataques constantes y la violencia de la que eran víctimas las mujeres e hijas de los granjeros, así como ellos mismos, redujo la productividad de los hombres –y de las mujeres- que se sentían desesperanzados, exhaustos e inclusive emasculados (Lwambo, 54), echando por tierra cualquier intento de mantener una imagen masculina. Por ello la agricultura se volvió una actividad de los hombres débiles, y un hombre débil en dicha sociedad era equiparado a una mujer. El resultado de esa asociación de ideas fue que la agricultura y la ganadería eran cada vez más vistas como actividades femeninas, siendo las mujeres quienes producían y comercializaban los productos agro-ganaderos (Lwambo, 54). Esta feminización de las labores agrícolas tuvo un fuerte impacto en la vida de las mujeres y las niñas. En primer lugar corrían más peligro al tener que trabajar muchas veces solas o, solo con la compañía de sus pequeños hijos, en sus lotes de cultivo. Por otro lado, las niñas debían dejar de

estudiar para colaborar con las tareas domésticas y las labores en el campo, impidiendo de esta forma que progresaran.

Esta situación contribuyó a la feminización de la pobreza, mal que asola a toda África Sub-Sahariana por igual. De todos modos, irónicamente, la mujer pobre cumplía con los ideales femeninos porque dependía económicamente del hombre –aunque ella hiciera la mayor parte del trabajo- y se volvía su subordinada. Además de esta, otras características esperadas en la mujer era que siempre debía estar sexualmente disponible para su esposo y ocuparse de los hijos, porque si no se era madre, no se era realmente mujer. Por otro lado, una mujer que no podía darle hijos a su marido solía perder cualquier privilegio del que pudiera gozar, ya que no era infrecuente que el hombre se buscara una segunda esposa. Aunque esta práctica era tolerada por las autoridades, en términos legales estaba prohibida, como por ejemplo en Ruanda. Asimismo, tampoco era infrecuente que el marido se divorciara de la primera mujer, cuando la segunda le daba hijos, o simplemente que se la maltratara a fin de que se fuera.

Como se explicó en el apartado anterior, la intromisión de los europeos en las sociedades bajo estudio a través de la colonización tuvo un fuerte impacto en los roles de género y en las construcciones de la masculinidad y la femineidad en esta región. Muchas creencias y concepciones que los nativos llamaban de “cultura”, en realidad eran prácticas patriarcales inventadas e introducidas por los colonizadores, que adulteraron el patriarcalismo propio de estos países (Isike, 2012:29). El colonialismo reforzó todas las formas de desigualdad social al introducir la estratificación y la discriminación en los territorios dominados, por lo cual la pérdida de poder que sufrieron las mujeres fue explotada por los hombres, quienes en un intento de mantener algún privilegio asumieron la forma más peligrosa de masculinidad (Isike, 28). De esta forma, la concepción del hombre africano cambió y en lugar de continuar viendo a la mujer como su complemento y dadora de vida, pasó a cosificarla como sirvienta, esclava sexual y alguien que no tenían valor alguno hasta que le diera hijos (Isike, 28). Luego, existía una correlación entre como los hombres percibían a las mujeres y como las trataban: la visión más común era que las mujeres eran oportunistas, materialistas, prostitutas, poco confiables, infieles y tercas –especialmente cuando se negaban a mantener relaciones sexuales-, y que si el hombre no les daba dinero, irían a buscar a otro para que las mantenga, por lo cual las golpeaban para demostrar quién mandaba (Isike, 27; Eriksson Baaz y Stern, 2009:507). Esta imagen devaluada y sexualizada de la mujer, creó una posición hostil del hombre hacia la mujer que solo podía concluir con una violencia generalizada contra estas.

De este modo, una mujer independiente que trabajaba fuera de la casa y ganaba tanto o más que su marido, que cuestionaba su autoridad y ya no era su subordinada, representaba una amenaza

adicional a la imagen de masculinidad que pretendían proyectar los hombres de esa región. Amenaza que se sumaba a la que ya sufrían por la violencia y los hostigamientos propios del estado de beligerancia constante. Por ello, una de las narrativas a través de las cuales se presentaba y, también se desacreditaba, a la mujer económicamente independiente era la de la prostituta. Esta percepción implicaba dos cosas: por un lado, que la mujer que no se subordinaba al marido y trabajaba fuera de la casa era promiscua e infiel; y por otro lado, que la mujer no podía adquirir independencia económica o tener éxito sin recurrir a favores sexuales. Esta visión también se aplicaba a las jóvenes que iban a la universidad, quienes aparentemente debían estar sexualmente disponibles para sus profesores y superiores para poder tener éxito en sus estudios (Lwambo, 2013:58), según el mito popular. Estas percepciones de las mujeres, que eran contrarias a la imagen idealizada por la sociedad de femineidad, eran totalmente opuestas al rol que ocupaba la mujer en el periodo pre-colonial y, ciertamente, representaban un peligro para su bienestar.

Efectivamente, uno de los grandes impactos que generan los conflictos armados en general en las sociedades, es el cambio en los roles de género preconcebidos, ya sea porque estos se subvierten o porque se rigidizan. La pobreza, el desplazamiento interno de personas, la vida en los campos de refugiados, el desequilibrio demográfico, entre otras causas repercuten drásticamente en los roles tradicionales que ocupan los hombres y las mujeres antes de los estados de beligerancia, lo cual no siempre es bien sobrellevado por quienes originalmente detentan el monopolio de poder sobre las mujeres, especialmente en el hogar. El sugestivo título del artículo de Lwambo (2013) “*Antes de la Guerra, Yo era un Hombre*”, citado textualmente de un testimonio recogido por la autora, sin dudas es muy representativo de como estos sintieron esa transformación social, aunque aquella raramente durara más allá del propio curso del conflicto. Esto no implicó, de ninguna manera, que estos cambios de hecho fueran necesariamente bienvenidos por todas las mujeres, muchas de las cuales se sentían solas en la magnitud de las tareas que debían enfrentar, las cuales, antes eran compartidas con los hombres y, a veces, también con las familias extendidas.

Otro motivo por el cual se alteraron las masculinidades y los roles de género en estos países, pero especialmente en Burundi y la RDC, fue la violencia sexual contra los hombres. Si bien los efectos psicológicos como miedo, depresión, etc., y los físicos tales como: contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, heridas que necesitan cirugías reparadoras, entre otros –excepto el embarazo, claro está- son iguales en hombres y mujeres víctimas de violación u otro tipo de violencia, tortura o explotación sexual, los hombres enfrentan otra situación: la pérdida de la identidad masculina. Para empezar, la mayoría de los hombres víctimas de violación no creían que ello existiera o siquiera fuera posible, porque era una situación que solo vivían las mujeres; por ello, estos hombres eran inmediatamente relacionados con aquellas, por ellos mismos, por los

perpetradores y por la sociedad en general (Wikstøl, 2012). Aunque algunas de las violaciones se daban en oportunidad de los ataques y saqueos de los pequeños poblados por parte de los grupos rebeldes, otras veces los hombres eran secuestrados y llevados a los campamentos en la selva donde cumplían las mismas funciones que una mujer, convirtiéndose en la “esposa” de algún combatiente y cumpliendo tareas femeninas como cultivar la tierra, cuidar niños, etc. (Christian et al. 2011:235).

Al igual que las mujeres, eran acusados de haber querido que suceda o haber provocado la situación; lo cual, sumado a la dificultad de probar la falta de consentimiento, importaba que estos hombres se vieran expuestos a ser acusados de homosexuales (Wikstøl, 2012). Ello implicaba un mayor estigma e inclusive mayor necesidad de ocultar lo sucedido ya que, por ejemplo en Burundi, la homosexualidad conllevaba penas de hasta dos años de prisión. A su vez, muchas de estas víctimas se encontraron aún más confundidas ante la respuesta fisiológica de su cuerpo, dado que era posible que hubieran eyaculado durante la violación (Wikstøl), sintiéndose aún más “mujeres”.

Como la esposa no podía echar de la casa a un hombre que hubiera sido víctima de violencia sexual, ya que era de su propiedad, muchos decidían auto-exiliarse argumentando que dos “mujeres” no podían vivir juntas bajo el mismo techo como pareja (Christian et al., 2011:238). Huelga aclarar que una mujer era la esposa, mientras la otra “mujer” era el marido abusado sexualmente; es que, los hombres víctimas de violencia sexual, se transformaban ante sus propios ojos, los de su familia y comunidad en “mujer”. Por supuesto que esta situación no afectaba solo al hombre, ya que la esposa de un hombre que había sido violado y luego la abandonó junto a sus hijos, también era estigmatizada y considerada inferior a las otras mujeres de la comunidad (Christian et al., 238). Por otro lado, como una respuesta psicológica ante la pérdida de su identidad masculina, no era extraño que se volvieran violentos, desahogando su frustración golpeando a otras personas (Christian et al., 236). Finalmente, muchos han expresado, al igual que las mujeres, que temían trabajar en los campos o salir de sus casas por miedo a que pudieran ser víctimas de nuevos ataques sexuales, lo cual ponía una carga extra en la mujer para mantener la casa y la familia, generando estrés y problemas conyugales (Christian et al., 238). Generalmente, todo ello tenía como corolario que la mujer saliera a trabajar, mientras el hombre permanecía en el hogar asumiendo aquellas tareas que antes cumplía la mujer: cocinar, limpiar y cuidar a los niños, subvirtiéndose de esta forma los roles de género y las construcciones de masculinidad y femineidad típicas de la región.

Durante el conflicto era frecuente que las masculinidades adquirieran una de dos identidades opuestas: por un lado, aquellos hombres que habían sido incapaces de proteger a la familia y/o no lograban proveer lo necesario económicamente, veían sus masculinidades erosionadas, como se ha visto en párrafos anteriores; otros, en cambio, adquirirían una masculinidad agresiva y militarizada

(Sideris, 2001:51). Esta visión no dejaba lugar a una masculinidad no violenta y más positiva, aquella en la cual un hombre podía elegir no luchar y por ello no ser tildado de cobarde, o que no se sintiera emasculado porque en una situación imposible como la guerra, no lograba cumplir con ciertas expectativas. Debido a esta imposibilidad social de permitir que surja esta masculinidad alternativa, la identidad masculina emergía del conflicto mucho más dañada que la femenina; mientras que la mujer adquiría o reunía las fuerzas para seguir adelante y reconstruir su vida y la de su familia, inclusive como jefas del hogar, los hombres se sentían amenazados por esa capacidad de sobrevivir e intentaban reafirmar su masculinidad en el único lugar donde lo veían posible: dentro de las relaciones íntimas (Sideris, 52), con todas las consecuencias negativas que ello implicaba para la mujer.

Por su parte, muchas mujeres se construyeron socialmente y a sí mismas como víctimas pasivas e inocentes de las circunstancias, recurriendo a las nociones tradicionales como madres y hacedoras de la paz (Sideris, 2001:49-50). Algunas, inclusive, utilizaron esas visiones conservadoras para resistir las circunstancias y de esa forma poder trabajar para salvar y proteger a los otros, protestar contra la guerra y, en algunos casos, participar activamente en asociaciones o grupos que buscaban poner fin al conflicto, estrechar lazos entre las diferentes etnias o simplemente, mejorar sus propias vidas y las de otras personas en su comunidad. Muchas veces la respuesta que recibían, inclusive por parte del gobierno o las fuerzas de seguridad, eran amenazas ya que se oponían a su activismo (Sideris, 54). Esto era una reacción normal, lamentablemente, ante mujeres empoderadas que, aduciendo que trabajaban desde los roles de género tradicionales, buscaban poner fin a la guerra y extender los lazos para lograr la paz social.

Entre los cambios de patrones sociales que tuvieron lugar en el pos-conflicto, era posible observar el aumento de mujeres trabajando fuera de la casa y de familias encabezadas por mujeres, la proliferación de armas livianas con el consiguiente aumento de violencia sexual y de criminalidad en general, embarazos fuera del matrimonio, aumento de las enfermedades de transmisión sexual y alteraciones en las prácticas matrimoniales, entre otros. Sin embargo, esto no implicó una transformación de las relaciones patriarcales, muy por el contrario, lo que se manifestó fue una profundización y endurecimiento de las posiciones de poder del hombre sobre la mujer durante el periodo de reconstrucción social y política del post-conflicto. Los cambios que parecieron tener lugar, en realidad, cuando se los examina con atención respondieron a los mismos patrones de hegemonía masculina existentes en el pre-conflicto, inclusive exacerbados por el miedo de los hombres ante la posible pérdida de lo que ellos entendían por masculinidad en su ámbito social, por lo cual las desigualdades de poder entre hombres y mujeres se mantuvieron.

Esta aparente contradicción entre el cambio de roles y la profundización de los mismos se

explica porque en cualquier sociedad hay múltiples nociones de género que compiten unas con otras (Byrne, 1996:33), y que si bien por un lado ciertos roles propios de los hombres y las mujeres se ven seria y profundamente afectados durante el conflicto, otras identidades de género se profundizan y se politizan (Byrne, 33). Esto es particularmente cierto en las sociedades altamente militarizadas, donde se exageran ciertas características que se consideran tradicionalmente propias de cada sexo.

LA MILITARIZACION DE LA SOCIEDAD: SU RELACION CON LOS ROLES DE GENERO Y LA VIOLENCIA SOCIAL

La vida de los africanos se ha visto profundamente militarizada desde la colonización. Burundi, Ruanda y la RDC no han escapado a esta tendencia, la cual tuvo un enorme impacto en las relaciones sociales y en las construcciones de la identidad del hombre y la mujer, así como de la identidad étnica.

Uno de los elementos necesarios para justificar la militarización es la meta-narrativa. Este concepto habla, en términos simples, de una gran idea o relato, que tiene como propósito brindar una explicación omnicomprendensiva de la experiencia humana o de la historia (Steans, 2013:144). Además le proporciona un contexto a las “pequeñas historias”, que son narrativas que tienen sentido dentro del marco que provee la gran historia o narrativa principal. La meta-narrativa, de este modo, es el medio para justificar y legitimizar formas específicas de relaciones de poder (Steans, 144). Esta herramienta fue usada especialmente en Ruanda y Burundi, donde se construyó en el primer caso a los tutsi, y en el segundo a los hutu, como el “otro”, legitimizando, a su vez, el uso de la violencia contra la etnia rival y justificando la necesidad de un estado controlador y militarizado. Sin embargo, la militarización de la sociedad en estos países y en la RDC, no fue producto de las últimas décadas, sino que comienza con el colonialismo europeo.

El estado es mayormente una construcción masculina y está dominado por los hombres (Pettman, 1996:3). Desde la formación de los primeros estados en la Antigüedad se ha excluido a la mujer de participar en la vida política, relegándola al ámbito privado, es decir, al hogar, cuidando de los hijos y atendiendo la casa; mientras que el poder político y la centralización de la autoridad quedaban en manos del hombre, que de este modo monopolizaba la vida pública, política y laboral. Luego, el estado moderno occidental se desarrolló impregnado de las mismas divisiones de género que, a su vez, impuso en los territorios que colonizó, entre ellos África. De esta forma, el modelo europeo de masculinidad se extendió por todo el mundo colonial a través del imperialismo y la cristiandad, ya que el colonialismo no solo se construyó sobre la jerarquía de razas, sino también

sobre masculinidades hegemónicas –del hombre blanco- y subordinadas o marginalizadas –del nativo- (Daley, 2008:29). Para poder mantener ese dominio, era necesario centralizar el poder en las instituciones operadas por los europeos, legitimizando de esta forma la violencia desde el estado; mientras la violencia social que traía aparejada este militarismo iba extendiéndose en la esfera pública, cada vez se hacía más presente en la vida privada, intensificándose de acuerdo a la respuesta, o más bien a la falta de ella, de la autoridad colonial (Daley, 30).

Más tarde, los movimientos nacionalistas también se enfocaron en los valores militares para alcanzar sus metas independentistas, por lo cual cuando llegó el periodo de descolonización, las elites que habían luchado contra la ocupación extranjera mantuvieron la forma del estado: dominándolo en lugar de cambiarlo (Pettman, 1996:4); una vez logrados estos objetivos requirieron la ayuda militar de las metrópolis para sostener sus regímenes represivos (Daley, 2008:30).

Esa apropiación del orden colonial por los nativos es bastante evidente cuando se piensa en las fuerzas armadas coloniales formadas por los europeos y en los ejércitos de liberación nacionales. Mientras los primeros, forjados a semejanza de los occidentales estaban repletos de sexismo, racismo y sus integrantes eran exclusivamente hombres, las fuerzas de liberación estaban integradas por mujeres que se unían voluntariamente y participaban activamente de la lucha política (Mama, 2013). Pero una vez que estos movimientos llegaban al poder, olvidaban la mayor parte de las promesas hechas a las mujeres, se adaptaban a las formas estatales dejadas por los colonizadores y se reforzaban nuevamente las divisiones de género, mientras se excluía a aquellas mujeres que habían combatido o apoyado los movimientos nacionalistas. La esfera pública volvía a ser para el hombre y la privada para la mujer, porque la mujer que durante los movimientos de liberación nacional había sido cooptada como esposa, prostituta o esclava, era donde se esperaba que volviera luego de la independencia (Daley, 2008:30). De todos modos cabe hacer una referencia casi obvia. Si bien a través del estado fuertemente patriarcal y del poder centralizado el hombre dominó a la mujer, no todos los hombres tenían acceso a la esfera política o al poder en general, ya que, como se ha visto *ut supra* dependía de la posición hegemónica o de subordinación que ocupara en la organización y estratificación social.

La colonización, con su legado de violencia institucionalizada, las luchas de independencia y los intermitentes pero siempre presentes conflictos posteriores, así como la necesidad de mantener el poder por parte de las elites, resultaron en la militarización de la sociedad en estos países bajo estudio. Luego, un estado que está permanentemente organizado para la guerra, inevitablemente se reproduce así mismo como un estado en guerra, por lo cual sus instituciones, sus divisiones de género, la sociedad en general, etc., son directamente influenciadas por la naturaleza del estado militarizado (Daley, 2008:28). Esta ideología asume que los humanos tienen una tendencia al

conflicto, que las tensiones pueden resolverse en última instancia a través de la fuerza y que las relaciones jerárquicas son esenciales para que las acciones sean efectivas (Enloe, citada en Daley, 28). De esta forma, el poder militar se extiende a la política y a la economía de una nación, y el proceso de militarización continua haya guerra o no (Kelly, 2000:49).

El militarismo enfatiza un modo de masculinidad que depende del poder del hombre y de la dominación sobre la sociedad, en otras palabras, del estado patriarcal (Daley, 2008:28). Por ello, tiene una influencia directa sobre las ideologías, las expectativas sociales y las construcciones de género, exacerbando aquellas que le son útiles y eliminando las formas que no lo son a través de reformas legales, cambios en los patrones laborales, propaganda, relatos culturales, educación y la socialización de los niños (Byrne, 1996:33). De esta forma el estado militar y la violencia que trae aparejada se naturalizan, volviéndose invisibles.

A su vez, a lo largo de ese proceso se construye a la mujer y al hombre asignándole características y lugares en la sociedad. La mujer, como ser débil necesita ser protegida, especialmente en tiempos de crisis, mientras que el hombre pasa a ser el protector, y en caso de que se niegue, pierde sus características masculinas (Enloe, citada en Daley, 2008:28). Los cuerpos de las mujeres, a su vez, son presentados como el territorio a conquistar y los vehículos a través de los cuales la nación o grupo se reproduce (Kelly, 2000:50), así como las guardianas de la cultura de la comunidad. Además, la mujer es construida como necesitando disciplina, “porque las pasiones fémicas pueden atrapar o distraer al hombre, o ponerlos en competencia unos contra otros” (Pettman, 1996:5). Entonces, los roles de género se rigidizan y básicamente se vuelve a las ideas tradicionales y esencialistas. Ello pone al segmento femenino en una posición peligrosa ya que sus derechos pueden verse restringidos, así como aumentar la presión para que conciban más hijos o ser víctimas de violencia tanto por los mismos hombres del grupo como por el enemigo.

Por otro lado, la masculinidad se militariza cuando prácticas características de lo militar son traídas a la vida civil y se las asocia a concepciones populares de masculinidad (Sjoberg y Via, citadas en Meger, 2012:44), comenzando a jugar un rol importante en la construcción de lo que es considerado masculino ya desde la infancia. De esta forma, los niños aprenden que sus cuerpos son armas: puños, botas y, eventualmente, el pene, son instrumentos a través de los cuales imponer su voluntad (Cockburn, citada en Meger, 2012:43). Ello porque, el estado militarizado, necesita ciertas masculinidades determinadas, especialmente aquella de la hipermasculinidad hegemónica, donde el hombre es presentado casi como una caricatura –absolutamente irreal- de la masculinidad (Heeg Maruska, 2010:236): agresivo, racional y restringido emocionalmente, dominante, valiente, etc. (ver Zurbriggen, 2010). De hecho, este tipo de masculinidad que necesita la militarización no aparece fácilmente, sino que requiere una acción cuidada y sistemática por parte del estado que juega con

los miedos, las vulnerabilidades, los orgullos y prejuicios de los hombres (Byrne, 1996:34), e inclusive, utiliza a las mujeres para movilizarlos.

De hecho, según Eriksson Baaz y Stern (2009:499) los soldados raramente se identifican con esa masculinidad militarizada, ni tampoco guardan esa imagen de sus experiencias o de las condiciones reales de la vida militar, por lo cual la fragilidad y la imposibilidad de esa masculinidad requiere un continuo esfuerzo de ocultamiento a través de las practicas institucionales militares y en las expresiones individuales de esa masculinidad. Posiblemente, esto se deba a que la hipermasculinidad no sea un estado permanente, sino que generalmente ese comportamiento extremo deviene como reacción a una amenaza o necesidad interna o externa (Heeg Maruska, 2010:239).

Justamente, como la esfera militar es una institución misógina, homofóbica y, usualmente racista, que descansa sobre una ideología hetero-patriarcal, necesita que sus componentes, así como aquellos hombres a los que trata de militarizar, expresen esa hipermasculinidad. Una de las maneras que utilizan para ello es devaluar, menospreciar y deshumanizar todo aquello que tradicionalmente está relacionado con lo femenino (Chew, 2008:79). Así, los soldados son moldeados para adoptar una masculinidad violenta que glorifica la dominación (Chew, 79). El lenguaje usado por los militares, así como su simbología, imaginario sexual y metáforas reflejan esta construcción de la masculinidad, especialmente cuando se apunta directamente a la sexualidad tildando al hombre de mujer o de homosexual (Byrne, 1996:34; Kelly, 2000:50), figura íntimamente asociada a lo femenino, porque lo peor que puede sucederle a un hombre es “volverse mujer”.

Inclusive, si el soldado se construye sobre la producción de una cierta masculinidad violenta, no es sorprendente que hasta las mujeres soldado puedan ejercer el mismo tipo de violencia que los hombres, inclusive la sexual (Informe de African Rights, citado en Eriksson Baaz y Stern, 2009:499), volviéndose esta masculinidad, de algún modo, asexual (Eriksson Baaz y Stern, 499). Básicamente, lo que se busca es borrar cualquier trazo o característica femenina, aún en las mujeres militarizadas.

Las instituciones militares, a su vez, deliberadamente incitan a que se erotice la violencia (Chew, 2008:80), a través de la dominación heterosexual, el impulso hacia la competencia y la pertenencia a un grupo privilegiado (Cohn, citada en Kelly, 2000:50). De este forma, muchos soldados afirman que matar los excita sexualmente (Slim, citado en Leatherman, 2011:139), lo cual tiene una relación directa con la violencia sexual durante los conflictos armados y con la misma violencia que experimentan muchas mujeres en las fuerzas armadas, a lo cual la institución militar hace ojos ciegos. La descarga de poder y violencia viene acompañada de una subversión de las jerarquías de la guerra a través de actos de violencia gratuitos (Slim, citado en Leatherman, 139); de

este modo, la exaltación que sienten los soldados al tener el poder de cerrar los caminos, establecer puestos de control, efectuar redadas en los pueblos, e inclusive saquear, robar, contrabandear, violar o mantener esclavos sexuales sin consecuencias son actos directamente relacionados a esa erotización del poder.

Las conexiones hasta aquí vistas entre la militarización y la sociedad han estado presentes en los procesos de construcción del estado de Ruanda, Burundi y el Congo. No solo estos países estuvieron mayormente bajo presidencias militares, sino que esas elites intentaron mantenerse en el poder a través de las meta-narrativas construyendo permanentemente enemigos u “otros”, a los cuales mantenía a raya a través del poder militar o de grupos militarizados, tales como las bandas armadas de los partidos políticos; por lo cual estos estados estaban en un pie de guerra permanente. Se utilizaron, además, herramientas tales como la desvalorización de la mujer, restringiéndole toda clase de derechos como comerciar sin autorización del marido o siquiera heredar, e inclusive se utilizó la religión como pretexto –en el caso de Ruanda- para controlar la procreación; mientras que en Burundi, por su parte, la homosexualidad fue declarada ilegal; rigidizando, de esta forma, los roles de género que alguna vez supieron ser fluidos y complementarios en lugar de antagónicos. El aparato militar, por otro lado, estaba compuesto casi exclusivamente de hombres, a excepción del Congo –en aquel entonces Zaire- que como se verá en el Capítulo IV reclutó a la fuerza a algunas mujeres; además en Ruanda y Burundi, los componentes de las fuerzas armadas, y en especial la plana mayor, pertenecían a la misma etnia que la elite que ostentaba el poder de turno. La hipermasculinidad necesaria en los soldados para que sean maquinas de matar, sumado a la erotización de la violencia y la falta de control sobre estos, llevó a que se cometan toda clase de abusos: desde la explotación y violencia sexual hasta saqueos, robos, contrabando, limpieza étnica, tortura, etc., aún por parte de las mujeres que conformaban las fuerzas, todo lo cual derivó en guerras civiles sangrientas en los tres estados. Lamentablemente, estas no fueron las únicas consecuencias sociales de la militarización.

También es necesario tener en cuenta que la introducción de fuerzas militares, aunque estas tuvieran como mandato restablecer la paz y reconstruir el estado, contribuyeron al proceso de militarización social, derivando en un aumento de la violencia y la explotación sexual de las mujeres (Byrne, 1996:36). Ello así, porque no puede esperarse que una institución que forma a los soldados para la guerra y exalta características tales como la agresión y la brutalidad, pueda tomar a sus componentes y transformarlos en operadores imparciales y sensibles, que puedan trabajar de forma no violenta, en ambientes culturalmente diferentes, devastados económicamente y a la vez altamente militarizados (Higate y Henry, 2004:484).

Asimismo, cabe recordar que como ese ideal masculino no era natural sino que fue

construido, muchos hombres que no lograban cumplir con esas expectativas de masculinidad, ni con aquellas tradicionalmente impuestas por la sociedad, podían sentirse menos hombres, creyendo que habían perdido poder e influencia, lo que resultaba en una autoestima dañada (Byrne, 1996:34), recurriendo, generalmente, a la violencia doméstica como descarga de esa frustración. Otro factor contributivo de la violencia en el hogar y en la comunidad fueron los soldados desmovilizados. El campo de batalla y el hogar no son dos esferas separadas como parece pensarse, así como tampoco quedan en el primero los efectos psicológicos, físicos o traumas de quienes vivieron en la zona de combate (Kelly, 2000:59). Por otro lado, como afirma Sideris (2001:52) los combatientes eran desmovilizados pero no desmilitarizados; por ello, quienes volvían con sus familias luego de estar años luchando en la selva se encontraban desocializados de la vida civil, y no hallaban un lugar para recomenzar. Además, muchos no tenían los conocimientos o las oportunidades para jugar un rol positivo en el post-conflicto, por lo cual entraban en depresión con aumento significativo de suicidios entre ellos (Sideris, 52). Otros se volcaban al alcohol y las drogas, o se involucraban en actividades criminales, desahogaban su fracaso golpeando o violando mujeres como medio de recuperar una identidad masculina y una idea de masculinidad irreal, que en verdad nunca tuvieron.

Otra de las conexiones que existe entre un estado militarizado y el impacto que tiene en la sociedad es el gasto militar. Especialmente en países en vías de desarrollo como los que nos ocupan, los presupuestos nacionales eran limitados, por lo cual un gasto excesivo en mantener el aparato militar implicaba desatender otras necesidades de la población. De este modo, la educación y la salud fueron dos esferas que rápidamente vieron reducidos sus recursos para sostener a aquel. Si bien esto afectaba a la población en general, como siempre se prefirió que estudiaran los varones en lugar de las niñas, el impacto era mayor en estas. En cuanto a la falta de atención sanitaria, contribuyó a que, por ejemplo en Burundi, la expectativa de vida bajara de 50 años en 1983 a 46 en 2003 (Daley, 2008:32). Esa retracción del estado, creó un espacio de desprotección social que muchas ONG intentaron llenar, situación que se intensificó por los constantes conflictos (Daley, 32). Lamentablemente ello también derivó en consecuencias indeseables y a una falta de responsabilidad de estas organizaciones, dado que algunos de sus trabajadores no dudaban en explotar sexualmente a las mujeres que requerían asistencia. Por otro lado, la ayuda humanitaria le quitó a los hombres el rol de protectores, haciendo que se sientan impotentes y fracasados (Meintjes, 2001:68), recurriendo a medidas como las antes vistas para intentar recuperar su masculinidad frustrada.

Pero no solo la educación y la salud sufrieron en detrimento de lo militar, sino todo el aparato estatal. Instituciones vacías, sin personal capacitado o directamente corrupto como por ejemplo la justicia, poco podían hacer ante los interminables abusos que sufría la sociedad en general y las

mujeres en particular. Porque si la violencia en sociedades militarizadas está normalizada en épocas en que no hay conflicto, mucho menos es tratada durante la guerra.

Para concluir, es necesario hacer mención a un factor que contribuyó profundamente con la militarización en África y en estos países de los Grandes Lagos: la masiva proliferación de armas. Que la descolonización se haya producido en el preciso periodo histórico de la Guerra Fría fue desastroso para los africanos, especialmente porque la reivindicación de los derechos de los nativos quedó subsumida en la lucha por la “seguridad” global (Daley, 2008:31). Este proceso, además, solo contribuyó a una mayor militarización de estos países. Ya que haya sido por las nuevas relaciones militares entre los occidentales y las recientes autoridades nativas, o por el uso de África como campo de guerra entre las superpotencias, lo cierto es que la asistencia militar y armamentística tanto para las fuerzas regulares como para los grupos armados fue enorme (Volman, 1998:151). Luego, el involucramiento de las potencias y las metrópolis en los asuntos internos de las ex-colonias, como se ha visto en el caso de Burundi, Ruanda y la RDC, fue responsable en gran medida del conflicto y otros tipos violencia que sufrieron sus ciudadanos (Volman, 150).

Cuando la Guerra Fría llegó a su fin y la importancia de África en el nuevo orden internacional comenzó a declinar, las potencias eliminaron los programas que proveían armas gratuitamente o a precios muy bajos; por ello, los presupuestos de los estados africanos –incluidos aquellos bajo estudio- ya no eran suficientes para solventar la compra a precios de mercado de armamento pesado como tanques o aviones (Volman, 1998:154). Sin embargo, ello no impidió que el flujo de armas continuara siendo importantísimo en todo el continente, solamente cambiaron el tipo, pasando a adquirir aquellas pequeñas y livianas de menor costo, tales como: armas de puño, rifles, ametralladoras, minas terrestres, etc.; siendo provistas en gran parte por organizaciones criminales y traficantes de armas. Ello contribuyó significativamente en la escalada y propagación de los conflictos y, con ello, a la militarización social; además tuvo un impacto terrible en la vida de las mujeres, las cuales se encontraron bajo constante amenaza por la proliferación del número de grupos armados que tenían poco o ningún control y que utilizaban tácticas tales como aterrorizar a la población civil para controlar áreas y obtener recursos con los cuales mantener la maquinaria de guerra funcionando (Volman, 155).

Por otro lado, como muchos combatientes son desmovilizados pero no desmilitarizados, muchos pasaron a formar parte de los cada vez más presentes grupos de mercenarios profesionales y de seguridad privada que entraron en el mercado (Sideris, 2001:52; Volman, 1998:157). Ello ocurrió especialmente en las provincias del este de la RDC donde estas firmas, como la infame Executive Outcomes con base en Sudáfrica, protegían las excavaciones de las empresas mineras que operaban en la zona. Pero ese no era su único trabajo, sino que muchas veces entrenaban milicias

que luego jugarían importantes roles en los conflictos africanos (Volman, 157).

Como se ha visto en este apartado, la violencia organizada y legitimada desde el estado, la utilización de meta-narrativas para distinguir y crear al “otro”, la construcción de determinadas masculinidades, la proliferación de armas, etc., e inclusive, la intervención de fuerzas de paz, han contribuido para mantener a estos países en un permanente estado de guerra, militarizando la sociedad y agravando irremediabilmente su situación.

CAPITULO IV

LA ACTUACION DE LAS MUJERES EN EL TEATRO BELICO

“Simplemente hay hombres y mujeres buenos y malos en todos lados” Twagiramariya y Turshen (1998:103)

ROLES PLURALES DE LAS MUJERES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Durante los conflictos, y en la etapa post-conflicto, no se considera a las mujeres como actores políticos, económicos o sociales; sino que parecen diluirse en el trasfondo de los acontecimientos, para ser representadas tan solo como víctimas, o a veces como pacifistas maternas, preocupadas con la pérdida de vidas y el sufrimiento que trae el estado de beligerancia. Cuando se las convoca, es solo a fines de que movilicen a los hombres o, en su caso, para mantener la maquinaria de guerra, sea a través de la procreación o para dejar de lado sus inquietudes femeninas para alinearse con la ideología de quien las convoca. Esta situación, invisibiliza su accionar y deja que la guerra sea vista como una cuestión únicamente masculina, manteniendo y reproduciendo de esta forma, los valores patriarcales tanto durante el conflicto como durante la paz (Coulter et al., 2008:7)

Una de las grandes dificultades a la hora de categorizar la actuación de las mujeres en los

conflictos armados, reside en la pluralidad de roles que asumen. De este modo, una mujer hutu que al momento de ser entrevistada estaba presa en la cárcel de Gitarama, Ruanda, como sospechosa de genocidio, contó como durante este vistió el uniforme militar para franquear los puestos de control y así salvar a su sobrina tutsi que había sido atacada pero seguía viva en una zanja (Hogg, 2010:80). Luego, cuando fue descubierta, se ofreció de *femme de viol*¹⁴ al jefe de la milicia local para evitar que violaran a su sobrina, que fue liberada y sobrevivió la masacre (Hogg, 80). Su *mari de viol*, sin embargo, no la dejó ir luego de pasados los 100 días que duró el genocidio; sino que su cautiverio continuo en el campo de refugiados del Zaire (Hogg, 81).

Ante un testimonio de esta naturaleza, es muy difícil recurrir a las categorías tajantes de víctima o perpetradora para explicar el accionar de aquella mujer. Las mujeres viven complejas realidades durante los conflictos armados, y las decisiones que tienen que tomar en esos momentos de miedo, presión, e inclusive odio y desprecio, o amor y compasión, son demasiado intrincadas para encasillarlas como víctimas o autoras, ya que como resalta Hogg (2010, 81) eso impide ver los matices de sus experiencias.

Sin embargo, y a pesar de esta dificultad, tantos los programas de las ONG de ayuda humanitaria, los organismos internacionales o sus entidades especializadas, así como muchos académicos, tratan a las mujeres casi exclusivamente como víctimas. De hecho, se las suele nombrar en tándem junto a los niños y a los ancianos o discapacitados, ya que se asume que están indefensas y necesitando protección (Haeri y Puerchguibal, 2010:108). De este modo, se niega la participación de las mujeres durante los conflictos armados y se invisibiliza su actuación como combatientes, perpetradoras de crímenes de guerra o activistas políticas, relegándolas al lugar de aquellas personas que están en total indefensión y son víctimas, no solo del conflicto, sino también de los vaivenes del destino sobre el cual no tienen posibilidad de operar o modificar. Con esto no se busca negar la enorme cantidad de mujeres que son realmente víctimas de las guerras, sino comprender que no es el único lugar que ocupan, el único rol que juegan y que su participación es activa en muchos casos. Soslayar esta realidad, implica hacer un análisis incompleto de cualquier conflicto, ya que de esta forma no se estudia cómo vive y actúa un porcentaje importante de la población.

Algunas mujeres han sacado provecho de la imagen maternal y pacifistas que les es proyectada socialmente para estrechar lazos con los rivales en los conflictos, para aportar soluciones cuando el estado está ausente porque no puede o no le interesa resolver ciertas cuestiones sociales, para generar conciencia de la situación de las mujeres durante los conflictos, para intentar participar

¹⁴ Significa literalmente “mujer de violación”, usado como eufemismo para “esclava sexual”.

en las mesas de paz, entre otras actividades. De esta forma, las mujeres juegan un rol importante como activistas, a pesar de que mayormente se las ignora.

Así como algunas mujeres cumplen con las expectativas esencialistas de género y su accionar está dirigido a terminar con el conflicto de forma pacífica, otras mujeres deciden tomar las armas. Algunas las hacen enrolándose en los ejércitos nacionales, como en el caso de la RDC; o luchando junto a los insurgentes, como aquellas que decidieron voluntariamente unirse a las filas del FPR cuando este invadió Ruanda para terminar con el régimen de Habyarimana. Cualquiera sea el caso, lo cierto es que han demostrado tener la misma capacidad de infringir daño que sus compañeros hombres.

Siempre están las mujeres que no luchan, pero sin embargo son esenciales en tareas relacionadas con la maquinaria de guerra. Entre ellas podemos encontrar a quienes colaboran con el reclutamiento de hombres, especialmente a través del uso de roles género, en donde aquel hombre que no quiere luchar ve cuestionada su masculinidad y es tildado de cobarde; así como las que recaudan fondos para las milicias, ya sea a través de la venta de productos caseros, manejando pequeñas cantidades de dinero en efectivo que se van sumando para lograr los objetivos económicos, o a través de la presión sobre la diáspora para que colabore con el esfuerzo bélico.

Otras mujeres, sin embargo, aún no habiendo elegido unirse a las milicias que asolaban Burundi o la RDC por ejemplo, terminaron engrosando sus filas, las menos como combatientes, la gran mayoría como esclavas sexuales y cumpliendo otras tareas consideradas “femeninas” como lavar la ropa de los rebeldes, cocinar o cuidar las plantaciones. La mayoría de esas mujeres fueron secuestradas y forzadas a irse con sus captores, por lo cual muchas de ellas, cuando tuvieron la oportunidad, escaparon para volver a sus hogares; empero muchas prefirieron quedarse y terminaron por adoptar las ideologías de los grupos insurgentes. En estos casos, nuevamente nos encontramos con la pluralidad de roles que puede asumir una mujer en un conflicto armado. No puede negarse que si su inserción en las filas de los rebeldes fue a través de la fuerza, fueron víctimas de distintos crímenes y violaciones a sus derechos humanos; sin embargo, algunas al aceptar esa nueva realidad pasaron a ser activas colaboradoras. Ahora bien, cuándo termina el conflicto ¿cómo deben ser tomadas estas mujeres? ¿Son combatientes o son víctimas? ¿Qué lugar se les debe asignar en el post-conflicto y cuál es la ayuda específica que deben recibir? Indudablemente, estas son apenas algunas de las preguntas que pueden ser hechas en referencia a este tema.

Por otro lado se puede encontrar aquel grupo de mujeres que no tomaron ninguna iniciativa para participar en el conflicto; sin embargo ante los acontecimientos, actuaron de acuerdo a sus convicciones. El relato de una mujer hutu cuya historia aparece entre los “justos anónimos” durante

el genocidio de Ruanda en el libro de Hatzfeld (2005:114-115) ilustra este punto. Martienne Niyiragashoki, estaba casada con un hombre de su misma etnia, los cuales tenían una excelente relación con sus vecinos tutsi, quienes les habían enseñado a criar ganado. Debido a la profunda amistad y confianza, ellos y sus vecinos habían juntado todos los animales en un único rebaño, el cual estaba cuidando una tarde su esposo cuando fue atacado por milicias hutu que lo mataron pensando que era tutsi. Martienne, huyó junto a sus vecinos tutsi, escondiéndose en el pantano. Su hijo Gahutu, quien participaba activamente en el genocidio, la llamó varias veces, diciéndole que la protegería, pero a diferencia de otros hutu que abandonaron a sus familias para salvarse, ella permaneció con sus amigos. Su cuerpo fue encontrado tiempo más tarde cortado en pedazos. Se podría concluir de esta historia que ella fue una víctima, pero eso sería restarle voluntad a su decisión. También se podría inferir que lo hizo solo por miedo a tener el mismo fin que su marido, pero serían solo especulaciones.

Por fin, están aquellas mujeres que fueron víctimas propiamente dichas durante los conflictos bélicos y/o en la etapa posterior. Entre ellas encontramos a todas aquellas que sufrieron abusos o explotación sexual de todo tipo; las que se vieron obligadas a marcharse de sus hogares y perdieron todo, muchas veces familia y bienes por igual; las que murieron; las que fueron torturadas; entre muchas otras atrocidades.

Como es evidente, los roles de las mujeres en los conflictos armados están llenos de matices en lugar de absolutos, y de idas y vueltas, en vez de cuestiones lineales. Si bien por una cuestión de orden es necesario categorizar a quienes forman parte de la esfera de influencia que extiende el estado de beligerancia, debe hacerse de forma tal de estar preparados para encontrar más grises que negros, flexibilizando las categorías y a sabiendas de que estas podrán superponerse en gran parte de los casos.

MUJERES EN LAS FUERZAS ARMADAS

No son muchas las mujeres que formaban parte de las fuerzas armadas de Burundi, Ruanda y la RDC. Como se ha visto en el Capítulo III en el apartado sobre la militarización de las vidas de los hombres y las mujeres en la región de los Grandes Lagos, y en concordancia con la visión mayoritaria sobre la vida militar en el mundo, el ejército no se considera lugar para mujeres, excepto para cumplir funciones de orden administrativo, de enfermería o logística, pero no para combatir en el frente. Otros, de todos modos, creen que las mujeres pueden hacer inteligencia con mayor facilidad que el hombre, dado que inspiran mayor confianza y pueden usar sus “encantos” para hacer hablar a un hombre.

Entre las pocas mujeres militares que tenían un cargo jerárquico y un poder significativo en la Ruanda del genocidio, se encuentra la Mayor Anne-Marie Nyirahakizimana. Esta fue sentenciada a muerte en 1999 por el Tribunal Militar de la Cámara Especializada de Kigali, aunque finalmente no fue ejecutada, sino sentenciada a prisión perpetua luego de que se la juzgara nuevamente por una corte *Gacaca* (Hogg, 2010:88). Fue acusada de incentivar a cometer genocidio, conducir ataques militares y participar directamente de la estructura nacional de poder que organizó el genocidio (Hogg, 88-89).

En el caso de la RDC, a fines de 1960 durante la dictadura de Mobutu, se implementó un plan inspirado por Muamar el Gadafi, para reclutar a la fuerza a jóvenes mujeres para formar brigadas solo femeninas en las FAZ¹⁵ (Eriksson Baaz y Stern, 2013:717). Aunque este plan nunca se implementó, muchas mujeres recibieron entrenamiento, inclusive fuera del país, y fueron la primera generación de mujeres oficiales del ejército del Zaire (Eriksson Baaz y Stern, 717). Ellas inspiraron a otras mujeres a unirse a las fuerzas armadas, pero estas, a diferencia de las primeras, no recibieron el mismo entrenamiento, ni obtuvieron el mismo status (Eriksson Baaz y Stern, 2011:569-570). A su vez, más mujeres se unieron a las filas de las FAC durante el comienzo de la Segunda Guerra del Congo en 1998. Debido a ello, las mujeres llegaron a sumar un 5% de sus integrantes; de todos modos, era un número significativamente bajo. Igualmente este porcentaje continuó cayendo, a pesar que después de la implementación de los programas de DDR a partir de los acuerdos de paz en 2002, los cuales incluían la posibilidad de que miembros de los grupos insurgentes se integraran a las fuerzas regulares del estado, un nuevo grupo de mujeres que anteriormente habían combatido junto al RDC y los Mai Mai, se sumó a las fuerzas armadas congoleñas (Eriksson Baaz y Stern, 2013:717). Esto no impidió que el porcentaje de mujeres se viera disminuido a solo un 2%, ya que la mayoría de los nuevos componentes de las *Forces Armées de la République Démocratique du Congo* (FARDC) -nombre que recibieron las fuerzas armadas de la RDC a partir del gobierno de transición en el 2003- eran hombres.

La falta de integración de las mujeres que previamente combatieron en los grupos rebeldes responde a varios motivos como explican la autoras Eriksson Baaz y Stern (2013:717): en primer lugar, muchas mujeres eligieron desmovilizar en lugar de incorporarse a las FARDC; por otro lado, el requisito de portar un arma para ser considerada combatiente, llevó a que a muchas mujeres no se les reconozca este estatus; finalmente, en general, los comandantes de las milicias rebeldes no incluyeron en las listas de los combatientes a desmovilizar a gran parte de las mujeres, ni las

¹⁵ Así como el nombre del país que ha cambiado varias veces, las fuerzas armadas también han ido cambiando de denominación. En este trabajo se usa el que corresponde a cada periodo histórico del que se hable.

animaron a participar en estos programas por miedo a parecer débiles por haberlas tenido en sus filas.

Por otro lado, la falta de mujeres interesadas en optar por unirse a las FARDC como una posible carrera confirma ciertas cuestiones asociadas a la constitución de las fuerzas armadas en general, así como otras razones propias de la sociedad y de la constitución del ejército de la RDC. Al primer motivo correspondía la discriminación en el entrenamiento, la falta de promociones de rango y de asignaciones de posiciones justas, ya que el trabajo militar era entendido como una tarea masculina en la cual la mujer no tenía lugar (Stearns et al., 2013:56). Los motivos que eran propios del Congo, en realidad afectaban tanto a los soldados hombres como mujeres, entre los que se podían encontrar: la fuerte estigmatización y desprecio social que tenía ser miembro de las FAC/FARDC; la difícil vida que llevaban en las zonas de combate; los bajos salarios que percibían, cuando se les pagaba; y la falta de un lugar donde dejar a los niños para que sean cuidados, por lo cual las mujeres soldado debían elegir entre dejar a sus hijos por largos periodos de tiempo – a los soldados no se les daban licencias pagas durante el tiempo de servicio- al cuidado de otros familiares, o llevarlos con ellas a los sitios donde estaba desplegada la unidad a la que pertenecían, con el consiguiente peligro que ello conllevaba, además de que las distraía de cumplir su trabajo y las retrasaba para conseguir promociones de rango (Stearns et al., 55-56).

Justamente porque era muy difícil conseguir licencias, y estas no se pagaban, además de los bajos salarios recibidos, cuando de hecho se les pagaba, y para evitar que pasen años sin que las familias se reúnan, las esposas e hijos de ciertos soldados los seguían a donde los enviaban, viviendo en precarios refugios cerca de los campos militares. Cuando sus maridos eran desplegados a otra área y debían seguirlos, muchas lo hacían a pie junto con los niños a lo largo de largas distancias, ya que no tenían los medios de pagar algún tipo de transporte (Stearns et al., 2013:55). Por otro lado, las continuas rotaciones impedían que las mujeres pudieran mantener algún tipo de cultivo de subsistencia, e interrumpía la educación de los pocos niños que estaban inscritos en una escuela (Stearns et al., 35; Leatherman, 2011:139).

Asimismo, y aunque se considere que fue un éxito en sí mismo el “*brassage*”, es decir los ex-rebeldes que pasaron a formar parte de las fuerzas armadas del Congo a través de los programas de integración, ello dio lugar a que las FARDC, que de por sí ya tenían una estructura débil e importantes problema de organización y jerarquía, se vieran aún más fracturadas, con cadenas de comando paralelas y conflictos internos (Eriksson Baaz y Stern, 2013:716). De ese modo, los soldados incorporados respondían a sus anteriores líderes rebeldes y no a la cadena de mando integrada (Eriksson Baaz y Stern, 2011:568). Por otro lado, al mantenerse los rangos que los insurgentes enlistados tenían en sus milicias, resultó en que hubiera más oficiales que soldados.

También contribuyó a la falta de disciplina la llamativa brecha entre el modo de vida de los oficiales y los soldados, quienes se sentían engañados por sus superiores (Stearns et al., 2013:57). Por su parte, las mujeres que obtuvieron los rangos de oficiales a través de la carrera militar, se distanciaban de aquellas nuevas reclutas que se unieron por los programas de DDR, argumentando que dañaban la reputación de las mujeres en las FARDC por su bajo entrenamiento y educación, además que la gran mayoría fueron transferidas a posiciones lejos del combate (Eriksson Baaz y Stern, 2013:717-718).

A pesar de todas aquellas dificultades algunas mujeres todavía consideraban unirse a las FAC/FARDC. Las razones que tenían eran variadas. Algunas fueron secuestradas y forzadas a enlistarse en las FAZ, FAC o FARDC, de la misma forma que aquellas pertenecientes a las milicias insurgentes (Eriksson Baaz y Stern, 2013:719). Otras llegaron como un “último recurso”, debido a la pobreza, a familias desintegradas, a la imposibilidad de continuar sus estudios, o a cuestiones aún más personales como no poder cumplir con algunos de los aspectos que implicaba la identidad de género femenino en la RDC, como tener hijos (Eriksson Baaz y Stern, 719). Finalmente, la gran mayoría entró por voluntad propia, como una elección personal, seducidas por la dignidad, el orden y la disciplina de las fuerzas armadas, e inclusive por la anticipación de estar en combate y defender la Nación (Eriksson Baaz y Stern, 719-721). Esto implicaba una tendencia diferente a los soldados hombres que mayormente aducían que fueron forzados a entrar o que lo hicieron únicamente como “último recurso” (Eriksson Baaz y Stern, 722); mientras que aquellos que entraron para avanzar en una carrera militar, obtener algún tipo de formación y educación para sus hijos, vieron sus expectativas frustradas (Leatherman, 2011:139).

Para una mujer optar por la vida militar no es una elección fácil en ningún lado, pero menos en sociedades fuertemente patriarcales como la del Congo. Una de las problemáticas a las que se enfrentaban era la resistencia familiar a que se unan a las fuerzas armadas. Dado el historial de violencia, la mala reputación y los bajos salarios, la carrera militar no era una opción bien vista en la RDC, por lo cual enlistarse muchas veces conllevaba distanciamiento social y familiar (Eriksson Baaz y Stern, 2013:722). Por su parte, las que tenían hijos debían lidiar con la falta de la infraestructura adecuada para cuidar a los niños como se ha visto *ut supra*.

Asimismo, es una cuestión notoria y global la discriminación de las mujeres en las fuerzas armadas, y las FAC/FARDC, obviamente, no constituían una excepción. Sin embargo, las mujeres que seguían la carrera militar abogaban por una total inclusión en todas las esferas de actuación del ejército, inclusive en combate. Las mujeres militares no prestaban mayor atención a la cuestión de género, ni a su femineidad. Como expresó una de las mujeres soldado entrevistada en el trabajo de Eriksson Baaz y Stern (2013:723) al mostrar una herida de bala recibida durante una emboscada en

las provincias del este de la RDC, "...a una bala no le importa. No dice 'eres mujer entonces no voy a pegarte'. No le importa si eres hombre o mujer. La bala no elige". A su vez, ello implicaba que no se vieran a sí mismas como menos violentas que los hombres; al contrario, disculpaban la violencia, inclusive sexual, desplegada por sus compañeros.

Las mujeres soldado admitían haber participado en actos de violencia contra los civiles de la misma forma que los soldados hombres, y expresaban las mismas excusas que aquellos. Entendían que los soldados se veían "forzados" a violar a las mujeres civiles debido a la falta de recursos para pagar una prostituta o por falta de licencias que les permitieran visitar a sus esposas y calmar sus urgencias sexuales; todo ello sin que demostrasen ningún tipo de empatía con las civiles por el hecho de ser ellas mismas mujeres (Eriksson Baaz y Stern, 2013:725). Lo que se desprende de esta línea de razonamiento que esas mismas soldados avalaban, es que desvalorizar a la mujer al punto de que sirva como objeto de satisfacción sexual proviene de la misma fuente que alimenta el desprecio que los soldados hombres sienten por las mujeres militares, especialmente cuando aducen que no deben estar en combate y que solo sirven para puestos administrativos, de enfermería, o de inteligencia, es decir, del entrenamiento recibido en una institución misógina y homofóbica como la militar, donde todo lo femenino es despreciado.

Justamente, una de las razones que esgrimían tanto los hombres como las mujeres de las fuerzas armadas para probar que las mujeres soldado eran ideales para hacer inteligencia tenía que ver con su condición de tal. En ese entendimiento la mujer podía "cautivar" al enemigo para obtener información usando sus dotes de mujer, de seductora. Esta imagen sexualizada está íntimamente asociada con la mujer como prostituta, tentadora, quien solo puede obtener lo que necesita mediante el engaño. De esta forma, las mujeres soldado del Congo terminaban reproduciendo los mismos roles que impedían su empoderamiento y, de ese modo, ocupar aquellos puestos que realmente anhelaban, mientras que la idea masculina de las fuerzas armadas se mantenía intacta, porque "la contribución de las mujeres soldado se ve devaluada y desmilitarizada a través de la sexualización" (Eriksson Baaz y Stern, 2013:726-727) de su cuerpo y de su imagen.

Esta imagen de la mujer como ser sexualizado, que corresponde a la narrativa de la mujer como prostituta, solo contribuye a la cristalización de la idea que los soldados hombres manifiestan hacia las reclutas mujeres, a las cuales consideran débiles física y psicológicamente, y poco confiables. Por lo cual, la única posible salida al dilema que les representa a los militares hombres la presencia física de la mujeres es a "asexuar" a sus compañeras, disminuyendo de este modo, la amenaza que significa la mujer en las fuerzas armadas. Entonces una mujer que hace un buen trabajo como soldado, que es capaz de internalizar la mentalidad militar, ya no es una mujer, sino que se convierte en un hombre, porque la mentalidad militar es la mentalidad masculina, y la prueba

irrefutable de ello es que cuando los soldados hombres la ven ya no la desean (Eriksson Baaz y Stern, 2011:581). De esta forma los soldados hombres palean la amenaza de verse emasculados por la presencia de mujeres, al mismo tiempo que reafirman su imagen masculina teniendo el “poder” de “quitarle” la sexualidad y femineidad a la mujer soldado. Así, el trabajo de las mujeres en las fuerzas armadas en lugar de implicar un avance en la igualdad entre los dos sexos, termina reforzando el dominio patriarcal de la esfera militar.

MUJERES PERPETRADORAS DE GENOCIDIO

Este apartado trata sobre las mujeres que colaboraron activamente en la perpetración del genocidio de Ruanda en 1994. Si bien, muchos autores consideran que las matanzas de 1972 en Burundi constituyen un “genocidio selectivo” (Lemarchand, 2008; Uvin, 2009; Reyntjens, 2000), o por lo menos el intento de perpetrarlo, contra la elite educada hutu, lo cierto es que no hay información desagregada sobre la participación en particular de las mujeres. Esto responde a varios motivos: primero, en aquellos años el estudio de los conflictos armados se hacía desde una perspectiva de género neutro, o de acuerdo a Pettman (1996:5) usando ese eufemismo para invisibilizar a la mujer, transformado al hombre en el ser universal y neutral, además de la falta de datos en general que hay sobre participación de las mujeres aun hoy en día; en segundo lugar, Burundi, en general, es un país menos estudiado que sus vecinos de los Grandes Lagos y, por lo tanto, es más difícil obtener información académica confiable; finalmente, porque las matanzas contra los hutu fueron mayormente llevadas a cabo por las fuerzas armadas del estado, lo cual dificultó cualquier intento de investigación posterior a los hechos acaecidos. Por otro lado, ni las guerras que asolaron a la RDC, así como tampoco el conflicto de las provincias del este de Kivu del Norte y Kivu del Sur, entran dentro de esta categoría.

La cuestión de la activa participación de las mujeres en el genocidio ha despertado un enorme interés tanto en la academia como en los medios. Posiblemente esto se debe a esa visión esencialista de las masculinidades y las femineidades, en la cual no cabe entender que una mujer sea capaz de cometer, ordenar o participar voluntariamente en una masacre que dejó al mundo atónito. Sin embargo, esta interpretación de que aquella mujer que es capaz de cometer actos de violencia se distingue de las otras que no lo han hecho como un ser perverso o monstruoso, solo refuerza los estereotipos de género y niega el accionar de la mujer como ser político. La participación de la mujer como perpetradora de violencia, es vista como la violación no solo de “las normas criminales, sino también las normas de género” (Gentry, 2012:79). La resistencia a ver esta realidad no la borra, simplemente entorpece su estudio. Como explica Brown (2013:4), una mujer puede ser madre,

esposa, hermana y genocida, porque estos roles no son mutuamente excluyentes; aunque uno pueda sufrir en detrimento del otro, ya que una mujer hutu que haya denunciado a su marido tutsi, ha valorizado más su rol de genocida que el de esposa.

Durante el genocidio las mujeres hutu, y algunas tutsi casadas con hutu, participaron activamente matando, denunciando donde había tutsi escondidos, saqueando propiedades e inclusive desvistiendo y robando las pertenencias de los muertos, alentando a sus maridos e hijos a matar y violar, organizando masacres y hasta ordenando ataques sexuales. Estos hechos no fueron cometidos solo por mujeres pobres o sin educación, sino que estuvieron involucradas líderes comunales y de la política nacional, monjas, comerciantes y todo tipo de profesionales. El genocidio fue una cuestión de todos, independientemente de sexo, edad o estatus social.

En general el genocidio se llevó a cabo matando con machetes o con garrotes que tenían clavos en la parte superior, llamados *masu*, para infringir un mayor daño. También se usaban granadas donde había importantes concentraciones de personas escondidas para debilitar y desparramar a los grupos. A su vez muchos tutsi corrieron a refugiarse en sitios donde pensaban que estarían a salvo como iglesias, conventos, escuelas u hospitales. En esos sitios de concentración de tutsi fue donde ocurrieron las masacres, donde se les cortaba los tendones de Aquiles a las víctimas para evitar que escapen cuando los genocidas se retiraban a comer o descansar.

Sarlach (1999:392) explica que las madres tutsi creyeron que las madres hutu las ayudarían a esconder y salvar a sus hijos, por lo cual se los confiaban para protegerlos, pero no fue el caso, sino que los entregaban a las milicias sin piedad alguna. Como sostiene esta autora, “el nacionalismo hutu superó cualquier sentido de hermandad con las mujeres tutsi” (Sarlach, 392). Es muy posible que esa “conexión” entre las mujeres se haya perdido porque parte de la propaganda pre-genocidio estaba dirigida a las mujeres hutu específicamente; la cual las adoctrinaba que las tutsi eran sus enemigas y que debían temerles y odiarlas. Las tutsi siempre fueron representadas como superiores, más hermosas, deseables y altaneras y, a la vez, como seductoras traicioneras y espías que trabajaban para el enemigo, por lo cual debían ser eliminadas (Maier, 2012-2013, 6).

Entre las mujeres que organizaron el genocidio, las cuales formaban parte de la *Akazu*, se encontraba la viuda de Habyarimana, Agathe Kanziga, quien escapó a Francia donde vive hasta el día de hoy apenas tres días después de que su marido muriera en la explosión del avión. Se la acusa de ser instrumental en la creación de los medios extremistas *Kangura* (¡Despiértate!) y la RTLM, así como de establecer y formar a los *Interahamwe* y de preparar la lista de políticos que debían ser asesinados por la Guardia Presidencial (Hogg, 2010:82). Otra de estas mujeres directamente involucradas fue la Ministra de Justicia Agnes Ntamabyariro; a la cual, entre otros crímenes, se le acusó de ordenar matar al Prefecto de Butare, y organizar las matanzas en el distrito de Kibuye de

donde era originaria, distribuyendo armas, exhortando a matar y denotando un especial ensañamiento contra las mujeres tutsi casadas con hutu (Maier, 2012-1013:9-10)

Pauline Nyriamasuhuko, Ministra de Familia y Progreso de las Mujeres, era miembro de la *Akazu*, y no solo fue organizadora del genocidio, sino que participó activamente en el terreno. Nyriamasuhuko era originaria de Butare, la única Prefectura que en aquellos días contaba con un Prefecto tutsi y un número significativo de matrimonios interétnicos, por lo cual las dos primeras semanas después de comenzado el genocidio los tutsi de Butare estuvieron a salvo (Maier, 2012-2013:8). A fin de terminar con esa resistencia, el gobierno interino envió a la “hija preferida de Butare”; para ello y antes de su llegada, se anunció por altoparlante por las calles de la ciudad que la Cruz Roja había llegado y estaba proveyendo alimentos y seguridad en un estadio cercano (Landesman, 2002). Era una trampa. Una vez que los tutsi estaban congregados, Nyriamasuhuko, que ya había llegado a Butare y había distribuido armas entre las milicias (Maier, 2012-2013:8), dio la orden a los *Interahamwe* que los masacraran, pero previamente a matar a las mujeres estas debían ser violadas (Landesman, 2002). Otro hecho, de los muchos que se le imputaron a la ex-Ministra, fue ordenar que quemaran vivas a un grupo de alrededor de 70 mujeres y niñas que estaban bajo la custodia de las milicias armadas; ante la protesta de que no tenían combustible, Nyriamasuhuko les dijo que tomen los bidones de combustible que estaban en su auto, exigiendo además, la violación de las prisioneras antes de su muerte (Landesman, 2002). Como ese grupo de *Interahamwe* estaban cansados de matar durante todo el día, solo se limitaron a prenderlas fuego (Landesman, 2002). Aunque fue acusada de múltiples crímenes, solamente un hombre atestiguó haberla visto cometer un asesinato con sus propias manos, el resto de las atrocidades fueron ordenadas pero no perpetradas personalmente. Nyriamasuhuko continuó supervisando el genocidio durante los dos meses siguientes, hasta que llegaron las tropas del FPR y la ex-Ministra huyó a un campo de refugiados en el Zaire (Maier, 2012-2013:9). Fue la única mujer condenada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre los crímenes por los cuales fue sentenciada a cadena perpetua se incluía la violación como acto de genocidio.

En los meses previos al genocidio y, durante este, como explica Maier (2012-2013:4) los periodistas que apoyaban el régimen podían decir e imprimir lo que les viniera en ganas sin miedo a sanciones legales. Medios como el diario *Kangura* movilizaron a la población, incluidas las mujeres, al reproducir, por ejemplo, “*Les Dix Commandements du Hutu*” (los Diez Mandamientos de los Hutu). Sin embargo, la RTLTM fue más efectiva en llegar a la población y divulgar el mensaje genocida. El ahora Teniente General Dallaire contó en una Conferencia¹⁶ que muchos de los

¹⁶ Conferencia “*Rwanda – 20 Ans Plus*”, presentada el día 22 de mayo de 2014 en la Universidad Laval, Quebec, Canadá.

milicianos adolescentes, los cuales rondaban los 14 o 15 años, circulaban por las calles de Kigali con machetes y *masus* en sus manos, buscando víctimas mientras escuchaban la RTLM. Como esta radio era extremadamente popular entre las mujeres, se procuró incluir en su programación mensajes dirigidos a ellas directamente (Brown, 2013:9). Algunas de las locutoras, como Valery Bemeriki, estuvieron entre las más brutales en sus expresiones. Ella era una mujer, hablándole a otras mujeres desde el mundo femenino; las hutu se vieron reflejadas y entendieron el mensaje, tomándola como modelo y logrando de esta forma un sentido de empoderamiento (Brown, 10). No solo hacia encendidos monólogos exhortando a la audiencia con expresiones como: “no maten a esas cucarachas con una bala, córtelos en pedazos con un machete”, sino que leía las listas de los tutsi que debían ser asesinados, y proveía información sobre el progreso del genocidio (Maier, 2012-2013:10).

Como matar, especialmente a machetazos, era un trabajo físico extenuante y el uso de este elemento para el trabajo en contextos de paz era empleado exclusivamente por los hombres, según uno de los genocidas entrevistados por Hartzfeld (2005:109), las mujeres no mataban a las víctimas –adultas por lo menos-, sino que una de las actividades en que participaron mayormente fue en el saqueo de las propiedades de aquellas personas que habían huido o que ya estaban muertas; así como en el robo de las pertenencias de quienes habían sido asesinados, desvistiendo los cuerpos y quitándoles cualquier objeto de valor que pudieran haber tenido.

Saquear y denunciar a las milicias el lugar donde había tutsi escondidos no fue lo único que hicieron. Hubo mujeres que activamente participaron en las matanzas como Athanesie Mukabatana, una profesora de la Escuela de Enfermería de Kaduha, quien lideró a los *Interahamwe* al hospital, sacando a rastras a los enfermos tutsi y luego matándolos a machetazos (Maier, 2012-2013:12). Otras mujeres, especialmente las más jóvenes y solteras, marchaban con las milicias en busca de víctimas y cuidaban las barricadas y puntos de control. A tal extremo llegó el desenfreno que se vivió en Ruanda, que inclusive mujeres hutu casadas con hombres tutsi mataron a sus propios hijos, aunque en dos casos que hemos encontrado –uno de los cuales colaboraron los abuelos hutu en el asesinato de los niños- fue siempre bajo la premisa de que se hizo de ese modo por miedo a que los *Interahamwe* los encontraran y los mataran a todos (Brown, 2013:11), o porque era preferible que los matara la madre en lugar de que murieran a machetazos (Hogg, 2010:76). Particularmente, según la mujer que usó esta última justificación, su accionar devino como último recurso luego que todos sus parientes hutu se negaran a esconder a sus cuatro hijos, a los cuales envenenó; según su relato, ella también tomó veneno, aunque se sobrevivió (Hogg, 76).

Tal vez uno de los temas más paradigmáticos y menos tratado, fue la exhortación de violencia sexual contra las mujeres, ordenado por otras mujeres, o la participación de estas en ataques

sexuales. El caso de Pauline Nyiramasuhuko es ciertamente ejemplificativo, aunque no es el único. Otra mujer de nombre Zainabu Mukundufite se la acusó de liderar un grupo de *Interahamwe* notorio por torturar sexualmente a las mujeres tutsi antes de matarlas (Maier, 2012-2013:12). También se han denunciado casos en que mujeres hutu obligaron a niños tutsi a mantener relaciones sexuales con estas, por deseo de venganza y humillación (Brown, 2013:12). Esta autora entrevistó en Kigali a un joven que recuenta haber sido drogado, atado a una cama y violado repetidamente por cuatro mujeres a lo largo de tres días (Brown, 12). Según esta persona, hubo otros hombres que pasaron por experiencias similares, aunque era difícil que quisieran denunciar estos hechos debido a la creencia en Ruanda que la violencia sexual es algo que sufren las mujeres, y reportar haber sido víctima de violación importaba ser estigmatizado como mujer y condenado al ostracismo (Brown, 12).

Finalmente cabe decir que aunque muchas mujeres hutu participaron activamente en el genocidio, no fue la mayoría, la cual simplemente tuvo un papel más bien pasivo negándose a esconder sus vecinos tutsi, apoyando a sus maridos o dejándolos que actúen sin enfrentarse con aquellos que salían a matar; pero si llevándoles comida y bebida a los bloqueos de calles, haciendo de cuenta que nada estaba pasando. En definitiva ese “mirar para otro lado” implicó también un tipo de comportamiento: la decisión de no actuar es un curso de acción por derecho propio (Brown, 2013:3). Como explicó Josée Mukandamage, ex-Ministra de la Corte Suprema de Ruanda, (citada por Hogg, 2010:79):

“La participación de las mujeres en el genocidio fue más sutil que la de los hombres (...) no formaban parte de los escuadrones de la muerte, pero sus acciones en favor de los otros eran limitadas. (...) se les había enseñado que era normal que los tutsi murieran. (...) aún cuando intentaran ayudar, no solían resistirse si llegaba alguien que buscaba a esa persona, ni arriesgaban su vida por los demás.”

De todos modos, según las estadísticas del año 2001, antes del establecimiento de las cortes *Gacaca* en el 2004, solo un 3,4% de la población carcelaria de Ruanda correspondía a mujeres acusadas de actos de genocidio, es decir alrededor de 3.000 mujeres (Brown, 2013:13). Muchos creen que las condenas posteriores no fueron representativas del número real de mujeres que efectivamente cometieron actos genocidas, dado que hasta un 40% de las 96.653 imputadas y cuyos casos fueron presentados ante las cortes *Gacaca* fueron declaradas inocentes, y solo 6 fueron condenadas a muerte, de las cuales solo una fue ejecutada (Adler, 2007:212). Sin dudas, las mujeres se vieron beneficiadas con la caballerosidad de los hombres que, debido a los estereotipos de género, “no pueden percibir a las mujeres como criminales o experimentan un sentimiento de protección hacia ellas pese a su criminalidad, sea esta presunta o comprobada” (Hogg, 2010:72); a lo cual se suma la negativa de la sociedad en general a la cual le cuesta aceptar que una mujer sea

una asesina (Hogg, 73). En realidad, se niegan a ver lo evidente: que las mujeres, aunque fuera en menor proporción que los hombres, actuaron de la misma manera que estos.

MUJERES EN LAS MILICIAS DE LA REGION

En el caso de las mujeres¹⁷ que participaron de los grupos insurgentes el foco de concentración estará sobre aquellas que contribuyeron al inicio y continuación de la guerra civil en Burundi, y aquellas que asolaron las provincias del este de la RDC, aunque las milicias de este último país presentan ciertas aristas que es necesario comentar brevemente. Las mismas aparecían y luego muchas veces, simplemente, se desintegraban o fusionaban con otras, cambiando de nombre, de alianzas y de objetivos. Muchas parecían no tener ideología alguna, ni objetivos políticos claros o determinados, sino que aparentemente respondían a intereses puramente económicos que les garantizara la subsistencia y la continuación del conflicto, controlando los sitios de obtención de recursos naturales para sí o para otros. Otros grupos se formaron meramente como medio de protección a un pueblo o ciudad para luego desaparecer, cuando ya no corrían peligro, esto se dio especialmente con algunas milicias Mai Mai. Finalmente, otros rebeldes respondieron a intereses momentáneos de etnias determinadas, ante situaciones específicas y una vez que el problema que había dado lugar al alzamiento mínimamente era resuelto, ese grupo se desbarataba. Por otro lado, mientras algunos grupos desaparecieron o se fusionaron, otros nuevos aparecieron, generalmente como consecuencia directa de los conflictos en los países vecinos, perpetrando el ciclo de violencia que vivían esas provincias y que hasta ahora no se ha sabido resolver.

Es de notar que hay poca información sobre las mujeres que participaron en los grupos insurgentes hutu durante la guerra civil burundesa; aunque se sabe que una gran cantidad fue conscripta por la fuerza, esta información se conoce más por los relatos de ex-combatientes hombres, que por la cantidad de mujeres que se beneficiaron de los programas de DDR. Lo mismo sucedió en la RDC donde los hombres jóvenes y niños desmovilizados informaron que hasta un 40% de sus unidades estaban compuestas por mujeres, lo que sumaría alrededor de 12.500 jóvenes en el año 2005 de acuerdo a la ONG Save the Children (Save the Children, 2005, citado en Coulter et al., 2008:19). Por otro lado, un informe del *Immigration and Refugee Board of Canada*, de septiembre de 2002 afirmaba que no pudo encontrarse información sobre el reclutamiento forzado

¹⁷ Aunque se usa el término mujeres, debe entenderse que la mayoría transitaban la adolescencia. Por lo cual en este apartado se hablara indistintamente de mujeres, jóvenes o adolescentes haciendo referencia siempre a personas de sexo femenino desde la adolescencia en adelante. Cuando se hable de personas de sexo masculino se hará la pertinente aclaración.

de mujeres hutu por rebeldes hutu de Burundi, aunque en comunicación con el Secretario Ejecutivo de la *Ligue Burundaise des Droits de l'Homme* (ITEKA), una organización de derechos humanos afiliada a la *Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme* (FIDH), este informó sobre la participación de mujeres en los ataques de los insurgentes, pero que no se sabía a ciencia cierta si esas combatientes habían sido reclutadas por la fuerza o si habían entrado voluntariamente; empero sí tenía conocimiento que, especialmente en las áreas rurales, las milicias hutu secuestraban mujeres que luego eran usadas como soldados, como mano de obra esclava y hasta como escudos humanos. Finalmente, el Secretario Ejecutivo afirmó que desconocía si las mujeres eran de origen hutu o tutsi; si bien, al parecer, cuando mujeres tutsi eran secuestradas, las mataban en lugar de usarlas como soldados.

Sin dudas, este informe es representativo del tenue esfuerzo que se ha hecho por desagregar por sexos la información sobre los combatientes rebeldes en general, pero especialmente en Burundi, y del obstáculo que ello representa para conocer en profundidad los alcances de los conflictos en referencia a todos los segmentos de la sociedad, así como cuales son las medidas que deben ser tomadas en los programas de reconstrucción de la paz. La invisibilización de la participación de la mujer durante el conflicto es inevitable que continúe después que este ha “oficialmente” terminado.

En los hechos, pocas mujeres decidieron unirse voluntariamente a estos grupos armados, e inclusive aquellas que aducían haberlo hecho, eran muy jóvenes como para otorgarles el beneficio de haber brindado un consentimiento verdaderamente libre e informado. Además, a veces, las opciones que enfrentaban eran tan limitadas que solo podían elegir entre “unirse a las milicias, volverse un niño/a de calle, o morir” (Refugees International citado en Mazurana et al., 2002:106), por lo cual muchas niñas optaban por unirse como una estrategia de supervivencia (Coulter et al., 2008:10). Según Uvin (2007:3), la edad promedio de reclutamiento entre las milicias rebeldes de Burundi era de 11 años, lo que prueba que gran parte del conflicto se desarrolló a expensas de niños/as soldados. En su informe para el Banco Mundial sobre el *Programme National de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration* (PNDRR) de Burundi, este autor entrevistó a tres ex-combatientes desmovilizadas, dos de las cuales se unieron a las filas del FNL (brazo armado del PALIPEHUTU) con tan solo 12 y 13 años, según ellas porque compartían las doctrinas de este movimiento, la cual era una combinación de ideología pro-hutu, religión y disciplina (Uvin, 5).

Tanto los grupos rebeldes de Burundi como los del Congo usaron diferentes métodos para atraer a mujeres y niñas a sus filas, que a veces se superponían entre ellos, pudiendo distinguirse principalmente: el reclutamiento, la presión de grupo y el secuestro, además de aquellas que se ofrecían voluntariamente (Mazurana et al., 2002:105). Una de las razones para incorporar mujeres y

niñas a las milicias era para aumentar el número de sus combatientes y superar la cantidad del enemigo (Coulter et al., 2008:12). Pero además, las mujeres cumplían otra variedad de funciones que luego resultaban en detrimento de su imagen como combatientes y que, sin embargo, eran necesarias para mantener la maquinaria de la milicia funcionando. Entre estas encontramos tareas tales como: recolección de madera y agua, lavar ropa, cocinar, cuidar y criar a los niños, cuidar los cultivos de subsistencia, vigilar los alrededores del campamento e, inclusive, desempeñando roles religiosos como aquellas jóvenes vírgenes que cantaban y preparaban pociones que los guerreros Mai Mai creían que los protegían (Verhey, 2004:10). Coulter et al. (2008:17) afirman que los servicios sexuales no eran la razón principal para la incorporación forzada de las mujeres, sino que su capacidad de trabajo las volvía estratégicamente esenciales.

En general, las mujeres y adolescentes que formaban parte de esas milicias armadas fueron secuestradas, o simplemente forzadas a seguirlos, lo mismo que muchos hombres. El CNDD/FDD, fue uno de los grupos rebeldes que secuestró mujeres, entrenando a algunas de ellas como combatientes; muchas de las cuales terminaron por acostumbrarse a la vida en las milicias (Uvin, 2007:6). En las provincias del este de la RDC miles de jóvenes mujeres fueron secuestradas mientras trabajaban en el campo o cuando los pueblos donde vivían eran atacados (Verhey, 2004:10), muchas veces inclusive se las hacía cargar los bienes saqueados de sus propias casas. Este método fue usado por todos los grupos que rondaban la región (Verhey, 10); aunque fueron los rebeldes quienes mayormente se sirvieron de este, las fuerzas armadas regulares también recurrieron al secuestro y al reclutamiento forzado (Mazurana et al., 2002:107). Por otro lado, muchas de las adolescentes fueron secuestradas en países vecinos como en Ruanda y en Uganda, para ser luego trasladadas a las provincias del este de la RDC (Mazurana et al., 108).

En seguida de ser secuestradas u obligadas a seguir a las milicias, las mujeres eran invariablemente amenazadas de muerte, con el daño que sufrirían sus familias o, inclusive, se las hacía presenciar actos de violencia contra civiles, todos usados como métodos para disuadirlas de huir (Verhey, 2004:13); lo cual, de todas maneras, no ocurría frecuentemente. Como la mayoría de las jóvenes eran inmediatamente violadas luego de llegar a los campamentos, lo que suponía una vergüenza difícil de sobrellevar, ya que el haber perdido la virginidad fuera del matrimonio –aún en ocasión de ser víctima de violencia sexual- implicaba la pérdida del valor social, tenían más a la estigmatización de sus familias y comunidades que a los rebeldes que las habían secuestrado (Verhey, 13). Por otro lado, en algunos casos en que la mujer lograba escapar y volver con la familia, no era infrecuente que el comandante de la milicia mandara hombres a buscarla, por ello muchas familias, además de la vergüenza social de tener una hija “sin valor” que difícilmente podría casarse, tenían miedo que los rebeldes los atacaran cuando fueran a recuperar a quien había

huido. Esto significaba que, a veces, las familias debieran mudarse a otro pueblo para escapar de la venganza y de las represalias de los combatientes.

De las mujeres se esperaba que además de cumplir funciones propias del combate o del soporte de este, proveyeran servicios sexuales a los insurgentes. Como explica Mazurana et al. (2002:111) los cuerpos de las jóvenes secuestradas e, inclusive, aquellas que se unían voluntariamente, eran usados como mercancía para ser comerciados. De esta forma, se las utilizaba en algunos casos como espías, aunque ello implicara prostituirse para obtener la información (Refugees International citado en Mazurana et al., 110). Por otro lado, era frecuente que se convirtieran en “esposas” -llamadas de esta forma, aunque por supuesto, no hubiera ningún tipo de legalización de la unión- de los combatientes o de sus comandantes, quienes a veces tenían varias. Por supuesto, muchas de ellas quedaban embarazadas, dando a luz en pésimas condiciones y sin ningún tipo de acceso a centros sanitarios, corriendo serios riesgos físicos tanto ellas como los bebés, a veces resultando en secuelas de por vida. Generalmente tener un “esposo” implicaba una cierta seguridad; por lo menos eso impedía que fuera pasada y usada sexualmente por los distintos insurgentes (Verhey, 2004:13).

Las mujeres que participaban como combatientes en el frente, así como los hombres, cometían los mismos actos de violencia contra la población civil (Coulter et al., 2008:13). Ahora bien, cuando las mujeres actuaban igual que los hombres se le agregaba un poder simbólico importante al grupo rebelde, dado el contraste con las expectativas de género de que ellas fueran menos violentas y más compasivas (Coulter et al., 13). Estas combatientes generalmente eran obligadas a perpetrar actos de violencia contra la población civil, como una especie de iniciación que les permitía convertirse en alguien “capaz de matar” (Eriksson Baaz y Stern, 2013:724). El castigo por fallar en esta prueba podía ser la muerte misma, pero si lograban superarla, perderían el miedo y estarían listas para luchar (Eriksson Baaz y Stern, 724). Luego, esto les permitía aprender nuevas habilidades y hasta obtener cargos de poder, lo cual previamente habría sido imposible (Coulter et al., 2008:14). Asimismo, muchas mujeres aducían que tener armas les daba una sensación de poder, control y pertenencia, a la vez que ya no estaban sujetas al abuso de los hombres, debido a su, de otra forma, estatus inferior (Coulter et al., 15).

Finalmente, es necesario hacer mención al caso particular de las mujeres que formaron parte del FPR, el cual si bien se transformó en la APR como ejército regular de Ruanda, durante el periodo de la guerra civil y hasta que tomaron Kigali en julio de 1994 después del genocidio, es posible clasificarlo como un grupo armado rebelde. A diferencia de las milicias insurgentes de Burundi y de la RDC, el FPR siempre fue una fuerza bien disciplinada, que tenían una ideología determinada y un objetivo bien claro: derrocar el régimen de Habyarimana, tomar el poder y

retornar a Ruanda después de más de 30 años de exilio. Sus filas respondían a una jerarquía militar estricta y ordenada, ya que muchos habían formado parte del *National Resistance Movement* (MNR) de Yoweri Museveni y luego de su victoria, de las fuerzas armadas de Uganda.

En octubre de 1982 Milton Obote, presidente de Uganda, ordenó a los jefes locales y a la juventud del *Uganda's People Congress* que desalojaran a los refugiados ruandeses que se encontraban fuera de las áreas oficiales del ACNUR (Onoma, 2013:167). Sus propiedades fueron saqueadas y quemadas, y muchos tutsi fueron golpeados y asesinados (Watson, 1991:10). Estos ataques se produjeron porque el gobierno acusaba a los tutsi de apoyar a los rebeldes del NRM, lo cual hasta ese punto no había sucedido (Onoma, 2013:170). Ese movimiento, liderado por Yoweri Museveni, que en 1981 había empezado su “guerra en la selva”, solo contaba con dos ruandeses en sus filas en los comienzos de la revuelta: Fred Rwigyema y Paul Kagame (Watson, 1991:10). Este conflicto concluyó con el derrocamiento de Tito Lutwa Okello¹⁸ y la derrota definitiva de Obote en 1986. Como una profecía auto-cumplida, el ataque continuo a los refugiados ruandeses había conseguido que muchos jóvenes se unieran a las filas del NRM, y cuando Museveni tomó el poder en Kampala el 26 de enero de 1986, la comunidad tutsi de Uganda festejó con él (Scherrer, 2002:39). Un cuarto de sus filas estaban integradas por Banyaruanda (Onoma, 2013:172), y su recompensa fue ocupar cargos de poder en el nuevo gobierno y en el ejército.

El FPR tuvo su origen como consecuencia de los ataques que sufrieron los refugiados tutsi en Uganda a manos de Obote y de Idi Amin Dada. Por ello formaron en 1979 el *Rwandan Refugee Welfare Foundation*, con el fin de asistir a las víctimas de los ataques del gobierno ugandés de turno. Luego lo rebautizaron *Rwandese Alliance for National Unity* (RANU), e incluyeron entre sus objetivos volver a Ruanda (Kuperman, 2006:66). Por otro lado, alentaban a los jóvenes tutsi a que se unieran a las filas del NRM, para que tuvieran algún entrenamiento en caso de darse la posibilidad de invadir su país de origen (Otunnu, 1999:16), opción que era tenida cada vez más en cuenta debido a la negativa de Habyarimana de recibir a los refugiados. El triunfo de Museveni le permitió a RANU –que estaba exiliado- volver a Uganda y organizar sus actividades militares; aunque no lo hicieron abiertamente para que el nuevo presidente no cuestionara la lealtad tutsi (Kuperman, 2006:66). Para marcar el comienzo de esta nueva etapa, se rebautizó la organización en diciembre de 1987 a *Front Patriotique Rwandais*, lo cual atrajo a muchos más refugiados (Kuperman, 67) dispuestos a luchar para volver a su país. En su comienzo el FPR estaba formado por 4.000 soldados, incluyendo 120 oficiales, que desertaron del *National Resistance Army* (NRA), los cuales dejaron su barracas el 30 de Septiembre de 1990 (Mamdani, 2001:186), llevándose sus armas pero solo parte de su equipo de campaña para que Museveni no sospechara (Kuperman,

¹⁸ Este gobernó durante 6 meses, luego de derrocar a Obote en julio de 1985, junto a Bazilio Ollara-Okello.

2006:70). La excusa era movilizarlos para festejar el día de la Independencia de Uganda el 9 de Octubre (Kuperman, 70). A estos se le sumaron espontáneamente otros 3.000 tutsi, al enterarse que el esperado regreso a Ruanda por fin había sido dispuesto (Kuperman, 70).

Este breve repaso de los comienzos del FPR explica el orden, jerarquía y desarrollo de estrategia militar desplegada en la invasión a Ruanda y durante la prosecución de la guerra civil, y marca una notable diferencia con las milicias más desorganizadas y sanguinarias de los otros dos países. Además, también se diferencia porque las mujeres que integraron sus filas lo hicieron por voluntad propia, de acuerdo a su ideología y, en algunos casos, ocupando puestos jerárquicos como la Teniente Coronel Rose Kabuye, quien se unió al FPR a principios de los años '80, y participó en la invasión a Ruanda con el cargo de Mayor. A Kabuye se la podía ver cargando una ametralladora china junto a los soldados del FPR, luchando por el derecho a volver a su país y liberando a los tutsi de los *génocidaires*, según se cuenta.

Otras mujeres, como la Capitán Apophia Batamuliza, quien nació y creció en los campos de refugiados tutsi de Uganda, decidió tomar las armas cuando tuvo noticias de la próxima invasión del FPR (IRIN, 2004). La Capitán luchó en el frente, junto a sus compañeros hombres, hasta 1993 que fue puesta a cargo de servicios sociales para ayudar a las víctimas de genocidio. Luego de la victoria del FPR en 1994, optó por dejar la vida militar (IRIN, 2004). Otro ejemplo lo encontramos en Inyumba Aloisea, quien, aunque no combatió, fue una de las mujeres más productivas con las que contó este grupo rebelde (Kinzer, 2008:82). Ella estuvo a cargo de las finanzas del FPR, viajando por el mundo para obtener fondos para “nuestros niños en el campo de batalla” como llamaba a los combatientes; asimismo, fue quien les consiguió los uniformes en Alemania oriental (Kinzer, 82). Igualmente, las mujeres fueron instrumentales en otras aéreas, tales como movilizar a los hombres a unirse a las filas del FPR, inclusive recurriendo a métodos conservadores como avergonzarlos o compararlos con mujeres (Kinzer, 83).

Entonces, a excepción de algunos cientos de mujeres y a diferencia de otros grupos rebeldes de África-Subsahariana, el FPR contó con poco personal femenino entre sus filas de combatientes, a pesar de que algunas, así como hombres, se fueron sumando a su lucha desde el momento que estuvieron reagrupándose en la zona de Virunga hasta su paso liberando ciudades y pueblos en Ruanda. De todos modos, muchas de estas mujeres inmediatamente después de tomar Kigali dejaron las armas; mientras que algunas pasaron a ocupar cargos administrativos y contribuyeron a la reconstrucción del país, otras simplemente fueron olvidadas.

LA VIOLENCIA EJERCIDA POR LAS MUJERES

Es innegable la cantidad de mujeres que participaron en las milicias de la región de los Grandes Lagos. Especialmente aquellas que eligieron tomar las armas demostraron ser tan capaces de infringir daño como sus contrapartes masculinas, testificando la población local, inclusive, que eran más crueles y brutales que los soldados hombres (Coulter et al., 2008:7-8). Esto debe entenderse a la luz de la necesidad de desplegar mayor crueldad para demostrar su valor en un ambiente tradicionalmente masculino (Alison, 2004:457). Sin embargo, esto también podría responder no a una verdadera mayor violencia cometida por las mujeres de los grupos rebeldes, sino al hecho que fuera una mujer en sí la perpetradora de la violencia y la sorpresa que conllevaba esa demostración de brutalidad. Ello así, porque su imagen de mujer inmediatamente la asociaba con un ser más pacífico y compasivo, entonces la víctima con seguridad esperaba un tratamiento diferente proveniente de una mujer que de un hombre. Aunque estadísticamente quienes cometen la mayor cantidad de actos de violencia son hombres (Coulter et al., 2008:8), la violencia perpetrada por la mujer no se puede analizar como un fenómeno aislado, ya que siempre ha existido y va en franco aumento.

Si bien es cierto que este tema es cada vez más estudiado y reconocido en la academia, no es menos cierto que aceptar esta realidad fue objeto de una enorme resistencia, inclusive por parte de las feministas (Gentry, 2012:80). De hecho mientras algunos grupos proclamaban su derecho a luchar, otros horrorizados ante la posibilidad de que la mujer se asemeje al hombre, utilizaban conscientemente las conexiones entre las mujeres y las nociones de paz como base cultural para sus movimientos anti-militares (Elshtain, 1995:8) con lo cual terminaron endosando el mito de la no-violencia de las mujeres (Dhavernas, citada en Cardi y Pruvost, 2011: párrafo 12). Ahora bien, habiéndose superado esta aversión ante la innegable realidad que la mujer es también capaz de tomar las armas y así lo ha hecho, es hora de profundizar el análisis del accionar de las mujeres que han cometido u ordenado la comisión de actos de violencia de todo tipo, inclusive sexual, así como de aquellas mujeres que han elegido tomar las armas. Este análisis no busca conocer el porqué de esa decisión, que puede tan variado como cantidad de mujeres hayan combatido, sino para reconocer su existencia y su actuación como parte del conflicto en lugar de descartarlas como excepciones. En definitiva, este análisis problematiza el género de la naturaleza de la guerra, sitio donde la mujer siempre fue vista como víctima o activista por la paz, en lugar de participe voluntario (Åhäll, 2012:289).

Dado que no se puede encontrar algún elemento biológico que impida que la mujer pueda actuar en la esfera militar como combatiente, la resistencia a incluirla debe ser buscada en las

construcciones sociales, culturales y discursivas de género (Steans, 2013:102). La figura de la mujer soldado, y aún más, aquella que en cumplimiento de su rol ha cometido actos que desde lo legal serían simplemente crímenes, pero que socialmente se ven como hechos aberrantes, desafía la dicotomía “masculino/guerra” y las construcciones culturales dominantes de las identidades masculinas y femeninas (Steans, 102). Hasta aquí se puede decir que las feministas que trabajan en las relaciones internacionales reconocen que: la violencia no está relacionada biológicamente al hombre; la masculinidad, así como la femineidad son constructos; hay grandes variaciones en cómo estos dos son representados; y el inherente carácter pacífico de la mujer es tan mítico como la innata violencia masculina (Steans, 103).

En su artículo sobre género y las actitudes hacia el conflicto en Oriente Medio, Tessler y Warrimer (1997:280) llegan a la conclusión que la evidencia obtenida en el trabajo sugiere que las mujeres no son más pacíficas que los hombres en su disposición hacia el conflicto; a pesar de que entienden que este resultado contradice los argumentos utilizados por algunas escuelas feministas e inclusive por otra literatura. No es difícil, luego, ver que la tendencia hacia la paz o la guerra no tienen que ver con diferencias biológicas entre los sexos, sino que parten de construcciones sociales, culturales y políticas patriarcales que imponen determinadas características a cada una de las identidades de género y, a partir de estas, esperan determinados comportamientos. En definitiva, como explica Cockburn (2010:143), al conocerse hombres pacifistas y mujeres que celebran la guerra se puede descartar cualquier visión determinista sobre la impronta biológica de estas tendencias. Sin embargo, la realidad es que como existe la división sexual del trabajo, también existe la división sexual de la guerra (Cockburn, 145), y así como el hombre es más visible en el campo de batalla, la mujer es más visible en los movimientos que abogan por la paz y las soluciones diplomáticas; aunque también quede mayormente excluida de las mesas de negociación que buscan poner fin a los conflictos.

Es que, como señala Elshtain (1995:4) somos herederos de una tradición que asume una afinidad entre la mujer y la paz y entre el hombre y la guerra, tradición que se trasmite a través de mitos y memorias. De esta forma el hombre es construido como violento, ya sea que lo desee o no, mientras que a la mujer se la recrea ofreciendo socorro y compasión, a pesar de que estos mitos poco tengan que ver con la realidad de los roles de los hombres y las mujeres durante un conflicto armado (Elshtain, 4). Estos paradigmas no solo contraponen el fervor marcial con el maternalismo, sino que hacen sombra a otras voces y otras narrativas: de hombres pacíficos y mujeres belicosas (Elshtain, 4).

Una de esas narrativas es la imagen de una mujer en algún país en vías de desarrollo cargando un rifle y un bebe. Este es un símbolo popular sobre la mujer que por un lado apoya los objetivos de

su grupo y, al mismo tiempo, mantiene el orden social (Enloe, 1983:166) que le impone su identidad femenina. Sin embargo, entrelazar estas imágenes de mujer combatiente y madre sugieren que tan pronto como los objetivos del grupo sean alcanzados o el conflicto termine, esa mujer dejará el arma y seguirá cargando el bebe (Enloe, 166). Ello así, porque la división sexual del trabajo como de la guerra no se ha erosionado durante el estado bélico, sino que la identidad maternal de la mujer continua de forma indiscutida, y mientras la mujer depone el rifle y vuelve a sus tareas domesticas, el hombre continua cargándolo y manteniendo la autoridad pública que esa arma simboliza (Enloe, 167).

Pero tal vez la más inquietante de todas las narrativas sobre la mujer que lucha es la del monstruo. La violencia femenina es vista como una aberración, una erupción de un sujeto no disciplinado; mientras que la violencia del hombre es una actividad estructurada, en la guerra por ejemplo, y debe ser despersonalizada e idealizada, la de mujer nunca trae bien alguno (Elshtain, 1995:169); puesto que la mujer que comete actos de violencia y, especialmente violencia sexual, pierde su identidad femenina adquiriendo aquella considerada masculina (Elshtain, 50; Le Bodic, 2011:7). Al ser percibida como habiendo adoptado características masculinas y haber transgredido las diferencias de género se la ve como víctima de una confusión de identidad de la imagen de mujer y madre (Le Bodic, 7). La imagen de “la buena madre” por definición: reconfortante, protectora, no agresiva, inclusive vista como asexuada, constituye una barrera infranqueable; mientras que la imagen de la mujer que comete u ordena cometer ataques sexuales está en la antípodas de aquella representación social (Saradjian, citada en Le Bodic, 8). Por otro lado, otra teoría sostenida por la criminóloga Pat Carlen (citada en Le Bodic, 9), asegura que la mujer criminal no existe, que no debe ser tomada como una categoría, sino que se deben estudiar los grupos de mujeres provenientes de cada medio. En fin, tomando ambas teorías, Le Bodic (2011:10) concluye con acierto que no debe prescribirse de manera unilateral lo masculino al hombre y lo femenino a la mujer, en su lugar es necesario superar las barreras biológicas y analizar los actos de criminalidad sin tomar en cuenta el sexo *a priori*.

Ahora bien, como la violencia política siempre ha sido una arena masculina, cualquier sociedad que quiera respaldar la violencia femenina debe justificar este quiebre del orden social a sí misma para evitar que las conductas de esas mujeres sean consideradas como desviadas o aberrantes y como pertenecientes al orden social desde donde cometen los actos de violencia (Ness, 2007:87). De esta forma el caso de Ruanda es paradigmático: de acuerdo a African Rights, las mujeres se involucraron en el genocidio como parte de una estrategia político-administrativa y militar que tenía como objetivo que cada segmento de la población fuera cómplice de las matanzas (Byrne, 1996:35). Por ello, se buscó un motivo considerado legítimo para que excepcionalmente dejen de lado los

comportamientos esperados de las mujeres.

Como explica Sarlach (1999:388) en la Ruanda de 1994 la lealtad a la etnia superaba cualquier posible hermandad con las mujeres de la otra etnia, lo que curiosamente no ocurrió en la misma medida en Burundi, donde mujeres hutu y tutsi trabajaron codo a codo intentando poner fin al conflicto. Una de las explicaciones que se encuentra para la actuación de las mujeres ruandesas es que los marcadores sociales como la etnia o la religión, sobrepasaron otros marcadores como el género que, como se ha visto, en épocas de conflicto armado y social rápidamente puede ser subvertido desafiando las expectativas de comportamiento femenino existentes antes de la guerra. El llamado desde el género hecho a las mujeres, exhortándolas a que exterminen a sus enemigos, especialmente a las mujeres tutsi, fue altamente efectivo durante el genocidio. Una de las herramientas más usadas para movilizar a la población en general fue el miedo instalado durante décadas y exacerbado durante la guerra civil a través de la propaganda.

Con respecto al grueso de las mujeres hutu en particular, se jugó con el miedo que estas les tenían a las mujeres tutsi, un temor que fue utilizado desde el género y apelando en alguna instancias a los roles tradicionales de madres, esposas, etc. De esta forma el diario *Kangura*, publicó el 6 de diciembre de 1990 “*Les Dix Commandements du Hutu*”, cuyos tres primeros mandamientos estaban dedicados a las mujeres, los cuales rezaban: “1. Todo Muhutu debe saber que una mujer Mututsi, donde quiera que ella esté, trabaja para los intereses de la etnia tutsi. Por consiguiente, es traidor todo Muhutu que se case con una mujer Mututsi; que haga de una mujer Mututsi su concubina; que haga de una mujer Mututsi su secretaria o su protegida. 2. Todo Muhutu debe saber que nuestras hijas Bahutu son más dignas y más conscientes de sus roles de mujer, de esposa y de madre de familia. ¿No son ellas hermosas, buenas secretarias y más honestas? 3. Mujeres Bahutu sean vigilantes y hagan entrar en razón a sus maridos, hermanos e hijos”. Como explica Brown (2013:8) el primer mandamiento demonizaba a la mujer tutsi, convirtiéndola en el “otro”, comprometiendo de esta forma la identidad femenina que deberían haber compartido las tutsi y las hutu. El segundo punto, en cambio, revalorizaba a la mujer hutu a costillas de la tutsi; mientras que el tercer mandamiento apelaba directamente a que las hutu tomen cartas en el asunto enfrentándose a los hombres hutu para que entren en razones (Brown, 8) y no deseen a las mujeres tutsi. Este último precepto les daba claramente autorización a las mujeres hutu para que se comportaran de forma diferente a las conductas que demostraban y eran esperadas en tiempos de paz.

Brown (2013:9) considera este permiso como revolucionario, sin embargo, el mismo apelaba a la mujer para que actuara desde su rol tradicional como madre, esposa, hermana, etc.; era limitado a un accionar específico en un momento de crisis; y era dispensando a nivel social para evitar que la mujer que acataba dichos preceptos se volviera una “excepción”, una díscola que no cumplía con

las expectativas de comportamiento; es decir, este permiso operaba desde la estructura patriarcal. Empero, aunque el permiso fue “controlado”, ya que esa actitud debía ser depuesta una vez concluida la Solución Final, en medio del quiebre del orden social absoluto en el cual se vio sumergida Ruanda durante el genocidio, algunas mujeres sobrepasaron los límites del permiso y actuaron fuera de las fronteras impuestas, especialmente aquellas que abusaron sexualmente de hombres y niños. Esos comportamientos, entendemos, corresponden ser explicados a través de otras teorías psicológicas o sociológicas como por ejemplo el descenso a la perversión ante la fractura del tejido social o la psicología de masas, que no hacen a la cuestión a tratar, si bien es necesario remarcar este punto para demostrar que la mujer puede actuar de la misma manera que un hombre aún en cuestiones sexuales. Ahora bien, el análisis antes visto, en principio, explicaría el accionar del grueso de la población femenina, pero sin embargo no da cuenta de la violencia ejercida por las mujeres que estaban en los cargos jerárquicos y que formaron parte de las cabezas que elaboraron la excusa que les permitió participar a las otras mujeres.

Usar una narrativa para justificar la supuesta excepcionalidad de la violencia femenina, demostrando la particularidad de la situación, solo conduce otra vez a la invisibilización de la violencia perpetrada por la mujer, porque se considera que esa violencia es rara, ejercida solo como resultado de una crisis y, en fin, catalogándosela como heroica o como prueba de la disolución del orden social (Cardi y Pruvost, 2011: párrafo 31), dependiendo de donde se mire. A su vez, al ser inusual, rápidamente puede volverse al orden sexual pre-establecido una vez pasada la crisis (Cardi y Proust, párrafo 31).

Por ello, para entender más acabadamente la violencia perpetrada por la mujer durante los conflictos, en lugar de categorizar, particularizar o usar teorías sobre la supuesta “identidad femenina”, es más útil recurrir a la idea de acción voluntaria, donde el sujeto actúa, no de acuerdo a las expectativas de comportamiento de género que le impone la sociedad normalmente, sino de acuerdo a sus propios intereses, los cuales pueden coincidir o no con aquellas expectativas. Sin embargo, la actuación femenina en el conflicto es negada constantemente o bien es explicada a través de una maternidad truncada, en fin, siempre relacionada con lo doméstico, lo privado; de esta forma una mujer decide tomar las armas como último recurso, ya sea porque falló en su rol como mujer al no poder tener hijos, porque su matrimonio fracasó, etc. (Åhäll, 2012:291). Pero este no tiene porque ser el caso, muchas mujeres que han cometido espantosos actos de violencia y son feroces combatientes pueden continuar exteriorizando todas las características propias de la identidad femenina, ya que un rol no actúa en detrimento del otro: la maternidad no es un obstáculo insuperable para la violencia política de acuerdo a lo que se ha visto en varios ejemplos. La realidad es que la asociación entre la mujer maternal con la promoción de la paz y la compasión no resiste el

menor análisis desde que, no obstante la activa participación femenina en los movimientos de paz en algunos contextos, también se encuentra al frente de las demandas de agresión en defensa de sus grupos (El-Bushra, 2000:81) a pesar de lo que intentan inculcar las narrativas sobre la mujer pacífica. Inclusive cuando actúa desde las propias expectativas de género que le impone la sociedad, la mujer no solo es instrumental en perpetuar la desconfianza intra-comunal a través de su trabajo como educadora y de inculcar ideologías y odios como en el caso de Ruanda (Brown, 2013:15), sino que es tan capaz de dañar como su contraparte masculina (El-Bushra, 2000:81).

Si bien es cierto que muchas veces fueron arrastradas a los grupos rebeldes e inclusive a los ejércitos regulares a la fuerza, la coerción por sí sola no explica la cantidad de mujeres que participan como combatientes en las guerras (Ness, 2007:85). De acuerdo a Brown (2013:3), y al respecto del genocidio de Ruanda, ese accionar donde las mujeres eligen participar sostiene y a la vez desafía el sistema de estructura patriarcal existente antes del conflicto, porque cuando las mujeres deciden formar parte voluntariamente no están únicamente siguiendo órdenes sino dándole una nueva forma al patriarcalismo. Es que, por un lado, se encuentran aquellas mujeres que deciden tomar las armas porque son incitadas por la guerra y las expectativas sociales que hay sobre ellas en ese momento dado de la historia, como por ejemplo la propaganda induciendo a las mujeres hutu a odiar a las tutsi. Estas mujeres operan dentro de la estructura patriarcal, sosteniéndola y reforzándola, y su actuación se limita a aquella que dicho arreglo les permite al igual que la narrativa sobre la mujer cargando el rifle y el bebe: en el nombre de la causa pueden abandonarse ciertas costumbres, sin que esto signifique un cambio social fundamental de efectos prolongados, ya que ese accionar se desarrolla dentro de la misma sociedad patriarcal que lo autoriza, y mientras opere en colaboración con los objetivos de esta, la desviación de las normas tradicionales deviene aceptable.

Por otro lado, se ubican aquellas mujeres que trabajan por fuera de ese sistema y sus acciones se contraponen abiertamente a las expectativas de género sociales; son las mujeres que toman las armas por convicción propia, como por ejemplo las que se unieron al FPR o a los movimientos rebeldes en Burundi por ideología personal. Este comportamiento transforma el patriarcalismo, lo pone en evidencia, aunque ello no tenga la fuerza suficiente para hacer cambios reales, ni de fondo, ya que “esa participación no es indicativa de un progreso hacia la igualdad de género” (Ness, 2007:86) a nivel social. Si bien podría argumentarse que estas mujeres continúan trabajando desde el patriarcalismo que sostiene la violencia estructural y por ende la sociedad militarizada que lleva a la guerra civil, no es menos cierto que su actuación es voluntaria y proviene de sus propios intereses; por lo cual, no obstante su accionar no haya implicado una transformación social, bien puede haber significado un empoderamiento personal, aunque ello implique un costo.

Finalmente cabe agregar que la invisibilización de las mujeres que combaten, son reclutadas por la fuerza por los grupos insurgentes, o participan de alguna manera en la violencia del conflicto perjudica no solo los análisis políticos sino también imposibilita crear programas efectivos de ayuda humanitaria, así como tratar las causas de fondo que llevaron a la guerra. Por otro lado, el negar la violencia cometida por las mujeres invocando su identidad femenina y rol de madre, las beneficia a la vez que las perjudica. Las beneficia en el aspecto que la insistencia de verlas como compasivas y pacíficas les da un pase libre para cometer atrocidades sin responder por las mismas, de forma tal que logran mucho más fácil que un hombre pedir asilo o estatus de refugiadas sin que se cuestione sus actividades pasadas. Como argumenta Pearson (citada en Hogg, 2010:94) no se puede seguir insistiendo en la fuerza y capacidad de la mujer en aquellas áreas tradicionalmente masculinas y, por otra parte, seguir exonerando a la mujer de las consecuencias del poder, aduciendo su impotencia cuando esos caminos se vuelven más oscuros, ya que esto se ha convertido en una paradoja incómoda del argumento feminista. Sin embargo, obsesionarse con el género perjudica a la mujer, porque la narrativa de la mujer “monstruo”, genera un dilema moral al juzgar sus acciones: ¿Cómo una madre pudo cometer semejantes atrocidades? Ambos argumentos “son deshumanizadores en sí mismos” (Sperling citada en Durham y O’Byrne, 2010:47), ya que no debe verse a quien perpetró actos de violencia como hombre o mujer, sino como ser humano y, es ello, no su femineidad o falta de ella, lo que debe acentuar la gravedad de los crímenes que pueda haber cometido (Durham y O’Byrne, 47).

LAS MUJERES ESTRECHAN LAZOS Y BUSCAN LA PAZ

Como se vio al principio de este capítulo, los roles de las mujeres son múltiples durante los conflictos armados. Además de las mujeres que eligen tomar las armas o se ven forzadas a ello, y aquellas otras que eligen infringir al enemigo la mayor cantidad de daños posible, encontramos otro grupo de mujeres que aboga por la paz, la hermandad entre las partes y la resolución del estado de beligerancia; aunque, como señala Ahmed Ali (2007:67) aún falta reconocerlas como transformadoras del conflicto y constructoras de la paz. Este tema se estudia desde dos enfoques, uno que analiza la participación de las mujeres en las mesas de negociación y, el otro, a través de un recuento de las diferentes iniciativas de base donde participan intentando abordar las necesidades sociales (Ali, 68). Este segundo enfoque es el que se usará aquí, dejando el primero para el apartado correspondiente del Capítulo VI, donde más que estudiar la participación de las mujeres durante las mesas de paz, se verá como hicieron lo imposible por no quedar totalmente excluidas.

Las mujeres, de acuerdo con la visión esencialista, siempre se las relaciona con los procesos de pacificación, tal vez porque son más visibles en estos movimientos desde donde luchan por la

justicia social y la paz (Ahmed Ali, 2007:75). Son siempre las primeras en pedir el fin del conflicto y bregar por el orden y la reconstrucción; aunque a las mujeres se las marginaliza en la toma de decisiones, desde sus organizaciones de base trabajan como pueden para superar las diferencias y lograr la reconciliación, muchas veces desafiando a las autoridades, a los combatientes y a sus propias discrepancias. Lamentablemente, gran parte del trabajo que realizan las mujeres para estrechar lazos entre las partes beligerantes o poner fin a los conflictos no suele tener ningún tipo de reconocimiento, excepto para ser blanco de violentas amenazas por parte de quienes se oponen a sus esfuerzos y activismo (Sideris, 2001:54).

De todos modos, esa fue la lucha que emprendieron las mujeres hutu de Busoro y las tutsi de Musaga, dos barrios divididos por una calle polvorienta y una guerra en Buyumbura (Idriss, 2000:57). Estas mujeres, cruzando las barreras étnicas que dividieron el país durante la guerra civil, unieron esfuerzos para ayudarse mutuamente. Ellas, todas pobres, todas habiendo perdido algún familiar o amigo, se juntaban en un pequeño edificio de la Administración local para demostrar su solidaridad hacia las otras y para mantener el contacto entre las comunidades, a pesar de los tiros que se escuchaban a la distancia (Idriss, 58). Además de compartir los alimentos que llegaban en camiones para brindar ayuda, compartían un mensaje de paz, el cual cantaban todas juntas en kirundi: “Somos las mujeres de Busoro, somos las mujeres de Musaga, dennos paz, dennos paz, dennos paz ahora” (Idriss, 59). Estas mujeres, además, viajaron a otras ciudades para reunirse con otras asociaciones, a fin de pasar su mensaje y contribuir a alcanzar la paz (Idriss, 61).

En Burundi también se encontraba el trabajo de Marguerite Barankitse, quien durante la guerra civil organizó la defensa de los niños amenazados de muerte por su etnia (Klen, 2010:337). Esta mujer tutsi, con la ayuda del Obispo de Ruyigi, transformó una escuela cercana a la frontera de Tanzania en el refugio para niños Shalom (Klen, 337). Barankitse recibió varios premios por su trabajo, y tenía planes para abrir más refugios, a pesar de haber arriesgado su vida en varias ocasiones, especialmente cuando fue amenazada a punta de pistola para que entregara a los niños hutu, a lo cual se negó terminantemente (Klen, 338).

Otras asociaciones de mujeres se formaron luego del alto al fuego y el recuento de los daños y las pérdidas, como en el caso de Ruanda la conocida *Association des Veuves du Genocide Agahoso* (AVEGA) que fue fundada en 1995 para ayudar a las viudas del genocidio. Entre sus objetivos se encontraba brindar apoyo para superar el trauma de la guerra y para que las personas pudieran reconstruir sus vidas. Otra asociación que había sido fundada en 1991, *Haguruka* (¡Levántate!), volvió al trabajo luego de esos fatídicos 100 días, especializándose en brindar asesoramiento jurídico a mujeres y niños en temas relacionados con las propiedades y la orfandad (Tuininga, 2003:94). En pocos años contaba con más de 300 para-asesores formados gracias a la iniciativa de

esta ONG, la cual además presionó para lograr que se apruebe en 1999 la ley que otorga el derecho a heredar de las mujeres (Tuininga, 94).

Lamentablemente la desconfianza instalada en la sociedad ruandesa durante décadas fue permeando todos los niveles comunitarios, inclusive la solidaridad entre mujeres. Mientras que los grupos de ayuda iban reapareciendo para reconstruir Ruanda, las diferencias entre las mujeres no mermaban; aunque ya no fuera por la etnia, ahora lo era por otros motivos y uno de ellos fueron los hombres (Turshen, 1998:9). De este modo, no se consideraba que coincidieran los intereses de las mujeres casadas con los de aquellas que habían quedado viudas. En realidad, la raíz de estas “diferencias” era la competencia entre las mujeres sobre potenciales maridos, y la “amenaza” que las viudas podían representar para las casadas en un país donde la poligamia estaba prohibida pero que aún entonces se sugería como posible solución para la cantidad de mujeres solas –viudas y solteras- luego de la guerra (El-Bushra, 2000:74; Turshen, 1998:9). Esto se vio reflejado en la composición de los grupos de mujeres; mientras que algunos estaban compuestos solo por viudas, otros lo estaban solo por mujeres casadas (El-Bushra, 2000:74). Otro motivo de desconfianza provino de la actuación misma de muchas mujeres ruandesas durante el genocidio. Dada la falta de solidaridad entre estas durante la guerra civil y la activa participación de muchas en las masacres, ya sea matando, denunciando los lugares de escondite de tutsi o bien saqueando casas y cadáveres, o simplemente negándose a ayudar a quienes estaban siendo perseguidos, se instaló un recelo social que ha operado inclusive entre los miembros de las ONGs (Sarlach, 1999:392).

En la RDC también las mujeres han trabajado desde sus organizaciones en busca de la paz y para buscar soluciones a las problemáticas cotidianas. Esto lo hacían desde el seno de las organizaciones femeninas, ya que las políticas del país, les impedían trabajar desde otros foros (Daviau, 2013:185). Una de estas organizaciones era *Mama Boboto* (Mamás por la Paz), fundada en 1983 por la hermana Cécilia Biye, de la *Congrégation des Filles de la Sagesse* (Daviau, 189). El objetivo de este grupo era bastante simple y, aunque algo utópico, no difería del todo de otros métodos modernos de resolución de conflictos como la mediación, mientras tenía mucho que ver con los roles tradicionales de las mujeres como madres y esposas. Básicamente, la idea reposaba en que las mujeres fueran una fuente de felicidad para sus familias y comunidades, de esta forma si ellas vivían en la paz, esto se transmitiría a sus hijos, ya que las madres son las primeras educadoras; luego, esto repercutiría en toda la sociedad (Daviau, 195). A su vez enseñaban a no juzgar o condenar a los otros, a no regodearse con la desgracia ajena y, en cambio, ayudar a los débiles, ofrecerles ayuda y abrir sus corazones (Daviau, 195), lo cual era un mensaje muy positivo en medio de la guerra constante, la miseria que sufría tanta gente y la estigmatización que padecían las mujeres que habían sido víctimas de violación u otro tipo de explotación sexual en el Congo.

Pero las mujeres no son las únicas que trabajaron para ayudar a otras mujeres. No solo muchos hombres se unieron a las filas de *Mama Boboto* a lo largo de los años, enfocando sus esfuerzos en la aplicación de la justicia en sus medios de actuación (Daviau, 2013:192), sino que hay hombres como el caso del Dr. Denis Mukwege que merece ser mencionado. Este médico y cirujano, a pesar de numerosas amenazas contra su vida y la de su familia, continuó trabajando en el Hospital Panzi en Bukavu, el cual fundó en 1999 en una pequeña casa y fue creciendo con el tiempo, tratando a más de cuarenta mil mujeres por daños ginecológicos, la mitad de ellos causados por violencia sexual (Beiser, 2015), de forma totalmente gratuita. El Dr. Mukwege se especializó en tratar la fistula (ver Capítulo V) producida por violaciones muy violentas o complicaciones al dar a luz, situación que sufrían muchas mujeres, especialmente aquellas internamente desplazadas que no recibían la asistencia médica necesaria o tenían a sus bebés en condiciones extremadamente insalubres. Muchas mujeres llegaban a su hospital en pésimas condiciones luego de haber sufrido horribles episodios de violencia sexual que a veces requerían varias operaciones para recuperarse (Beiser, 2015). Por ello, además de tratamiento médico, el Hospital Panzi ofrecía a las mujeres terapia psicológica, viviendas temporarias, capacitación laboral y otros servicios necesarios para que estas mujeres pudieran volver a rearmar sus vidas (Beiser, 2015), especialmente porque como se verá en el Capítulo V, muchas nunca podrían regresar junto a sus familias y comunidades.

CAPITULO V

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS CONFLICTOS ARMADOS DE LA REGION DE LOS GRANDES LAGOS

“Sin importar si estoy en el campo, o en casa, o en el mercado, nunca me sacaré el olor a semen de mis fosas nasales” Testimonio de una mujer víctima de esclavitud sexual durante el genocidio de Ruanda, citada por S. Lewis (2009:2).

VIOLENCIA Y EXPLOTACION SEXUAL

Sin lugar a dudas una característica que marcó la violencia contra las mujeres en Ruanda y en la RDC fue el uso masivo y sistemático de violaciones y otros tipos de explotación sexual como arma de guerra. Los primeros datos sobre la cantidad de mujeres que sufrieron violaciones u otro tipo de violencia sexual durante el genocidio de Ruanda, aparecen en el *Report on the Situation of Human Rights in Rwanda* del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas de 1996. El Relator Especial René Degni-Ségui, estimó que de acuerdo a la cantidad de bebés nacidos como consecuencia de las violaciones, donde un embarazo se produce cada cien violaciones, durante el genocidio entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron víctimas de abuso sexual u otro tipo de explotación directamente relacionada. Por su parte Bijleveld et al. (2009:219), calcularon el número

de violaciones perpetradas en algo más de 350.000, cantidad que es un poco menor a la mitad del conjunto total de pérdidas humanas durante los cien días del genocidio, y que incluye tanto a las sobrevivientes, como también a quienes murieron. Comparando estas cifras con la cantidad de mujeres que se cree podrían haber sido víctimas de crímenes sexuales antes del genocidio, la cual se estima en alrededor de 5.200 casos por año, implica que en Ruanda se hubieran tardado 220 años en llegar a la cantidad de mujeres que sufrieron violencia sexual durante el genocidio (Bijleveld et al., 220). Estos cálculos no incluyeron hombres ni niños.

Por su parte en la RDC se estiman que entre 1.69 y 1.80 millones de mujeres congoleñas fueron víctimas de abuso sexual (Peterman et al., citado en Bartels et al., 2013:341), y más específicamente en las provincias del este un 39,7% de las mujeres y un 23,6% de los hombres experimentaron algún tipo de violencia sexual (Johnson et al., citado Bartels et al., 341). Aunque estos porcentajes son altísimos, se cree que el número de víctimas es aún mucho mayor, desconociéndose la verdadera cifra debido a varias causas, pero principalmente, por la falta de denuncias a las autoridades por el estigma que acarrea socialmente haber sufrido algún tipo de violencia sexual, el miedo a venganzas o represalias (OCHA/IRIN, 2007:12), y el hecho de que muchas mujeres son asesinadas o mueren por las heridas luego de ser violadas.

Aunque la violencia sexual ha estado relacionada históricamente con los procesos bélicos, hasta las guerras de la ex-Yugoslavia y Ruanda no había sido reconocida como arma de guerra, ni como un crimen internacional. Al contrario, siempre estuvo cubierta de un manto de silencio, por lo cual las provisiones en los tratados internacionales de Derechos Humanos que se refieren a esta particular temática son escasas (de Ruiter, 2011:7) y raramente hacen expresa mención a la cuestión sexual propiamente dicha, sino que es necesario subsumirlas en otras figuras como la tortura o los tratos inhumanos o degradantes. Inclusive en los Convenios de Ginebra solo se hace referencia en el art. 27 del Convenio IV a delitos contra el honor, tales como violaciones, prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor, volviendo luego a repetirlo en el art. 76 del Protocolo Adicional I. Por lo cual estas pocas provisiones, que eran las únicas existentes en el ámbito de las normas internacionales cuando comenzaron las guerras en esta región de África, no podían otorgar una verdadera protección contra estos crímenes, que ni siquiera son considerados como violaciones graves a los Convenios.

A pesar de esa falta de un enunciado legal, y a los fines de este trabajo, es necesario definir la violencia sexual, la cual puede ser entendida como aquel tipo de violencia que cubre un amplio abanico de delitos tales como violación, esclavitud sexual, abuso deshonesto, mutilación y tortura sexual, matrimonio forzado, aborto forzado, esterilización forzada, prostitución forzada, embarazos forzados y tráfico sexual (de Ruiter, 2011:8). Todos estos delitos tienen en común la falta de

consentimiento libre de la víctima y tienen una relación directa con la sexualidad y el sistema reproductor del cuerpo. De todos modos, esta lista no debe entenderse de forma taxativa, ya que la depravación y perversión humana parecen no tener límites, como sucedió por ejemplo en Ruanda, donde además hubo casos de necrofilia, incesto forzado y contagio forzado de enfermedades de transmisión sexual, actos que también forman parte de la violencia sexual.

Durante el conflicto en Ruanda, no solo las mujeres tutsi fueron víctimas de violencia sexual, sino también aquellas mujeres hutu que estaban casadas con hombres tutsi, o que se las consideraba muy cercanas a este grupo (Bijleveld et al., 2009:219). Como dijo el Relator Especial Degni-Ségui (1996: pto. 16) “la violación fue la regla y su ausencia la excepción”. Se cometieron toda clase de aberraciones y los perpetradores de violencia sexual no excluían a nadie, fueron víctimas: monjas, mujeres embarazadas y parturientas que ya se encontraban en los hospitales, niñas, ancianas e, inclusive, los cadáveres de las mujeres que acababa de matar (Degni-Ségui, pto. 17). Se obligó a padres a violar a sus propias hijas, y a hijos a violar a sus madres, se usaron objetos para infringir todo tipo de tortura sexual, así como hubo mutilaciones de los genitales (Degni-Ségui, pto. 18) y se abrió la panza de las mujeres embarazadas para que vean como morían los fetos antes que ellas se desangraran hasta la muerte. Las violaciones casi siempre eran en banda y, a veces, las víctimas eran violadas hasta la muerte. Otras mujeres, en cambio, fueron mantenidas en cautiverio como esclavas sexuales, llamadas “esposas” por sus captores, en un intento, según especula Bonnet (citada en Sarlach, 1999:395) de mantener las apariencias en una sociedad donde la violación estaba fuertemente estigmatizada; muchas de estas mujeres fueron obligadas a seguir a sus “*mari de viol*” a las campos de refugiados en los países vecinos, donde permanecieron largo tiempo. En muchas ocasiones las mujeres conocían a los perpetradores de los crímenes, ya que eran sus vecinos e incluso sus familiares, especialmente en los casos de matrimonios mixtos. Asimismo, hay informes que indican que se practicó la necrofilia y que se profanaron los cuerpos de las mujeres violadas y asesinadas, desvistiendo los cadáveres y dejándolos con las piernas abiertas (Sarlach, 1999:394).

Aunque no se sabe con seguridad si fue planeado o un mero resultado del conflicto armado, dado que Ruanda era uno de los países con mayor índice de infectados de HIV en el mundo, hay una amplia creencia que se usaron deliberadamente hombres que padecían esta enfermedad para que violaran a las mujeres tutsi y, de este modo, contagiarlas. En cuanto a las provincias del este del Congo, existe la misma presunción (Mukwege, 2009:2). Como dijo Tuner (2013:128), “lo crímenes cometidos en Ruanda y luego en el este del Congo, son suficientemente horribles sin necesidad de añadirles este giro adicional”. Lo cierto es que las violaciones con extrema violencia y en banda aumentan significativamente el riesgo de trauma genital y, por ende, el contagio de enfermedades venéreas, entre ellas el HIV, ya que solo hace falta una mínima herida interna o externa para

“proporcionarle al virus acceso a células que pueden ser infectadas” (Klot y DeLargy, 2007:23). Por ello, en Ruanda, donde según una clínica que trató víctimas de violación, más de la mitad de las mujeres eran HIV positivas (Sarlach, 1999:393), así como en Burundi y la RDC, países donde ya había una alta preponderancia del HIV, la violencia sexual que tuvo lugar en estos conflictos armados dio como resultado la extensión de la epidemia.

En la RDC, la violencia sexual masiva y sistemática comenzó en 1994 cuando los *génocidaires* llegaron a las provincias del este, provenientes desde Ruanda. De todos modos, tanto las FAZ en aquel entonces (luego FAC y más tarde FARDC), como todos los grupos rebeldes e insurgentes e, inclusive, los componentes de las fuerzas de paz, han sido perpetradores de violencia sexual contra mujeres y niñas, con casos de víctimas que iban desde bebés hasta ancianas, mujeres embarazadas y hasta cargando niños. Las violaciones solían ser en banda, lo cual aumentaba el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, así como de lesiones físicas graves (Bartels et al., 2013:346). Asimismo, se trataba de infringir la mayor cantidad de daño posible, habiendo casos realmente estremecedores. En estas provincias del este, una práctica común era insertarles objetos en la vagina a las mujeres, como por ejemplo armas de fuego y luego disparar, milagrosamente algunas sobrevivieron esas tragedias (Jones, A., 2008:17). Otras mujeres fueron cegadas o les cortaban la lengua para prevenir cualquier identificación, y muchas veces en caso de denuncias, que raramente llegaban a alguna acción por parte de la policía o de la justicia aún cuando los perpetradores fueran civiles, era común que se tomaran venganza contras las mujeres denunciantes o sus familias. Los perpetradores obligaban a familiares a cometer violaciones incestuosas y mataban en el acto a quienes se negaban; mientras que muchas veces, las mujeres eran violadas en presencia de sus hijos y marido (Jones, A., 18). Era también común que luego de atacar sexualmente a las mujeres se las diera por muertas y se las dejara abandonadas en la selva o a lo largo de los caminos.

Como dijo el Mayor General Patrick Cammaert, ex-comandante de la MONUC: “En [ese] momento [era] más peligroso ser una mujer que ser un soldado en el este del Congo” (citado en Jones, A., 2008:17), y las mujeres no estaban a salvo en ningún lado. Eran atacadas cuando iban a los campos a trabajar, a lo largo de los caminos y en sus propias casas. No había medida de seguridad alguna que las ayudara a evitar los ataques, ya que no había diferencia si estaban solas o con otras personas. Si estaban con otras mujeres las atacan sexualmente a todas, y si estaban con hombres estos podían ser asesinados en el acto, o sufrir ellos mismos violencia sexual. De hecho, de acuerdo a una medición realizada en 2010 se estima que un 23.6% de los hombres de las provincias del este de la RDC habían sufrido algún tipo de violencia sexual (Johnson et al., citado en Bartels et al., 2013:341). La noche solía ser el horario preferido por los perpetradores. Muchas mujeres eran

sexualmente atacadas más de una vez a lo largo de los años por diferentes bandas e, incluso, se han reportado casos de mujeres que han sido atacadas en los caminos cuando volvían de ser tratadas en algún hospital por violación (Jones, A., 2008:18).

Otros hechos de violencia informados por las víctimas incluían, además de los robos y saqueos, canibalismo, forzar a las víctimas a beber fluidos corporales como orina, matar a bebés y niños delante de sus madres o quemar a familiares vivos (Bartels et al., 2013:351), así como a la propia víctima o a su choza (Longombe, 2008:138). Todo lo cual indica que la gran mayoría de esos casos poco tenían que ver con el deseo o el oportunismo sexual, sino que tenían una clara motivación política: aterrorizar e intimidar a la población, infringiendo tanto daño como fuera posible para que la vergüenza y la humillación hagan imposible la recuperación personal, familiar y social (Bartels, 2013:351).

Lamentablemente en el caos del conflicto, algunos hombres locales aprovechaban la situación para cometer actos de violencia sexual sin miedo a ser castigados (OCHA/IRIN, 2007:15). Uno de los motivos para perpetrar este tipo de violencia, era la creencia local que el hombre que tuviera relaciones sexuales con una virgen quedaría inmunizado ante el virus del HIV (Jones, A., 2008:17). Pero en una sociedad como la congoleña, no pueden mantenerse relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo cual se recurría a la violación, aunque eso implicara atacar niñas y bebés.

Con respecto a Burundi, durante los años de la guerra civil y en el post-conflicto, el panorama no fue más alentador. Tanto las FDN como los rebeldes cometieron toda clase de atrocidades. El uso de violencia sexual fue masivo, aunque se desconoce su verdadero alcance durante la guerra civil (Amnesty International [AI], 2007:7). El crimen sexual más denunciado fueron las violaciones, con un promedio de alrededor de 1.300 casos por año desde el 2004 hasta el 2006 (*Médecins sans Frontières* citado en AI, 2007:1). La liga ITEKA, por su parte calculaba unos 1.900 casos, es decir unos 37 por semana durante el 2006 (AI, 2007:5), aunque la guerra civil para ese entonces ya había llegado oficialmente a su fin. De todos modos, estas cifras con seguridad eran mucho menores a la cantidad de casos reales de violencia sexual. En Burundi, la estigmatización de la mujer víctima de agresión sexual no era menor que en las comunidades de sus países vecinos, pero contaba con un ingrediente adicional: en esa sociedad se culpaba a las víctimas, ya que consideraban que la violación fue consecuencia de su comportamiento o de su forma de vestir (AI, 13). También había un profundo miedo a denunciar los casos por una posible venganza de los perpetradores o de sus familias, habiendo ejemplos en que las víctimas debieron retirar las denuncias por constantes acosos y amenazas (AI, 10 y 14). Por otro lado las mujeres no confiaban en que las autoridades investigaran los casos adecuadamente, ya que daban poca importancia a los crímenes de naturaleza sexual (AI, 5)

Asimismo, las mujeres han contraído enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el HIV, como consecuencia de este tipo de violencia. Lo mismo que en las provincias del este de la RDC, muchos civiles se aprovechaban del caos general, de la falta de recursos, pero especialmente de voluntad del estado para investigar estos crímenes, para actuar impunemente. Al igual que sus vecinas congoleñas, las mujeres eran atacadas en sus casas, en los caminos o cuando salían a recolectar madera o a buscar agua y, también al igual que en el este del Congo, las víctimas iban desde niñas pequeñas hasta mujeres ancianas, aunque los dos grupos de mayor riesgo eran el de las niñas y adolescentes, y el de las mujeres entre los 18 y los 30 años (AI, 2007:11).

Las mujeres que dejaban sus hogares durante el conflicto para ir a los campos de refugiados corrían peligro de ser víctimas de violencia sexual no solo durante el trayecto hacia los campos, especialmente en las zonas fronterizas, sino también dentro y alrededor de los campos mismos. En el caso de Burundi, para agosto de 1997 a consecuencia de la guerra civil había más de 60.000 personas en el distrito de Kibondo, Tanzania, a pesar de que las autoridades tanzanas habían ordenado cerrar la frontera a mediados de 1995 (Nduna y Goodyear, 1997:6). Ello no impidió que los burundeses eludiendo tropas de las FDN y de las distintas milicias del lado de Burundi, así como las fuerzas armadas tanzanas, en el país vecino, consiguieran llegar a los campos de refugiados por decenas de miles.

Según el informe del *International Rescue Committee* (IRC) sobre la situación de las mujeres en los campos de refugiados en Tanzania, en el campo de Kanenbwe un 26% de las 3.800 mujeres que había en 1997 había sido víctima de algún tipo de agresión sexual (Nduna y Goodyear, 1997:3). Los perpetradores eran soldados, policía, civiles burundeses y tanzanos, otros refugiados y parientes (Nduma y Goodyear, 3). Aunque en menor medida, algunos hombres y niños también informaron haber sido víctimas de violencia sexual. Como la mayoría de las personas pasan más de tres años promedio en un campo de refugiados, las probabilidades de que las mujeres sean víctimas de violencia sexual aumentan considerablemente (Nduma y Goodyear, 19).

Finalmente, cabe mencionar que la presión social que tuvieron las mujeres en su vida diaria en Burundi durante las épocas de paz, se trasladó directamente a los campos de refugiados, donde las mismas normas, prácticas y tradiciones patriarcales, y las mismas divisiones de género imperaron, por lo cual si una mujer era víctima de violencia sexual en el campo de refugiados los efectos sociales eran los mismos que si hubiera estado en su comunidad de origen en Burundi (Nduna y Goodyear, 1997:10).

VIOLENCIA Y EXPLOTACION SEXUAL POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LAS OPERACIONES DE PAZ Y OTROS TRABAJADORES DE AYUDA HUMANITARIA.

Aunque las operaciones de paz, las cuales no están mencionadas en la Carta de Naciones Unidas, se las toma como un invento de la Guerra Fría como excusa para intervenir en territorios en conflicto donde alguna de las súper-potencias podía estar maniobrando para lograr influencia política, la realidad es que fueron originalmente diseñadas para garantizar la descolonización y la soberanía territorial (Barnett, 1995:415). Luego, la segunda generación de operaciones de paz surgieron como una preocupación ante la enorme cantidad de conflictos en los países en vías de desarrollo, y se concentraron en dos cuestiones: por un lado, en la seguridad interna y el orden doméstico; y por otro, en el desarrollo de las tres etapas de estas operaciones (Barnett, 417). La primera de las fases es la prevención de conflictos que importa medidas diplomáticas para gestionar los focos de tensión y evitar su escalada; la segunda fase es la imposición de la paz y/o mantenimiento de la paz, las cuales son operaciones de campo bajo el comando de NU con el mínimo uso de la fuerza posible; mientras que la última fase es la consolidación de la paz e implica distintas tareas que tienen como objetivo la transición entre la guerra civil y el gobierno civil, desarrollando una paz sustentable (Barnett, 417). De todos modos, los límites entre estas fases son cada vez más difusos ya que el despliegue de una misión normalmente cumple varias de estas etapas, por lo cual suele estar mucho tiempo en el terreno, generando distintos impactos en la población local.

Por otro lado, las misiones de paz de NU en estos países de los Grandes Lagos bajo estudio, no solo involucraron militares y policías militares pertenecientes a distintos contingentes enviados por varios países, sino que también hubo una significativa participación de personal civil, además de aquellos civiles que trabajaban para otros organismos especializados como la ACNUR.

Las misiones de paz siempre han tenido un profundo impacto cultural, social y económico en las comunidades donde se establecieron, especialmente porque proporcionaron oportunidades para generar ingresos tanto a los individuos como a los grupos locales, los cuales se podían volver proveedores de mercancías a las tropas (Higate y Henry, 2004:485). Desafortunadamente, debido a los altos ingresos de los soldados de las operaciones de paz, especialmente en comparación con aquellos de los nativos, ya que podían llegar hasta 1.000 veces más que el ingreso de un congoleño promedio por ejemplo, los proveedores locales solían aumentar los precios de las mercaderías y de los alquileres en donde las misiones estaban estacionadas, lo cual implicaba un impacto negativo en la economía de los habitantes de la zona (Higate y Henry, 485). Debido a ambos factores, y sumado

a que el tiempo que duraría la misión es finito y luego se quedarían sin esa fuente de ingreso, los hombres y las mujeres locales solían intentar obtener empleos en el sector formal o informal relacionado con la misión de paz (Higate y Henry, 486).

Sin embargo, debido a que el contexto donde se establecían estas operaciones de paz estaba caracterizado por una total falta de recursos, un estado débil y una corrupción generalizada, así como marcado por subjetividades de género e identidades que acentuaban los factores étnicos y de estatus económico (Higate y Henry, 2004:486), las relaciones entre las soldados de las operaciones de paz y los locales solían estar afectadas por una enorme diferencia de poder, lo cual implicaba un incremento en la vulnerabilidad de los locales, especialmente de las mujeres (Ndulo, 2009:130).

La primera denuncia de violencia y explotación sexual por parte de los integrantes de las fuerzas de las operaciones de paz de la que se tiene noticias fue en Camboya, en 1992 (Simic, 2010:191). Lamentablemente, la respuesta del Representante Especial de NU para dicho estado, Yasushi Akashi, para disculpar a estos militares fue: “boys will be boys” (OCHA/IRIN, 2007:79), frase que se acercaría a la escuchada “los hombres son hombres”. A pesar de otras denuncias que le siguieron y también fueron calladas, la ONU se vio finalmente obligada a actuar ante un artículo periodístico publicado en el Washington Post, en noviembre de 2004, en donde figuraban alrededor de 150 denuncias de explotación sexual, contratación de prostitutas e inclusive de algunas violaciones y sexo con menores por parte de los integrantes de la MONUC en el este de la RDC; no obstante hasta la más inocua transacción sexual con una mujer local estaba totalmente prohibida (OCHA/IRIN, 81).

La investigación que siguió a esta denuncia pública llevó a que cada vez se reportaran más casos de abusos y explotación sexual cometidos por las diferentes misiones, aunque la que más acusaciones cosechó fue la MOMUC (Ndulo, 2009:143). Las denuncias no solo estuvieron relacionadas con violencia o explotación sexual de mujeres y niños, sino que incluyeron también tráfico de personas, intercambio de oro con las milicias locales para proveerles de armas, tráfico de drogas e inclusive el uso de un helicóptero de NU que posó en el Parque Virunga para intercambiar municiones por marfil (Leatherman, 2011:135). Por su parte, y a pesar del corto tiempo que estuvo la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB), desde mayo de 2004 hasta enero de 2007, un informe del Consejo de Seguridad (2006:2) reveló que también surgieron denuncias contra los soldados de las operaciones de paz en ese país. Si bien hubo cientos de acusaciones, Naciones Unidas estaba convencida que la cantidad no correspondía con el verdadero número de víctimas, ya que muchas mujeres al sentirse indefensas y atemorizadas preferían no denunciar estos hechos (Ndulo, 2009:143).

Entre las numerosas denuncias por violaciones, abusos, pedofilia e intercambio de comida por

sexo -especial pero no únicamente en los campos de refugiados-, y contratación de prostitutas, esta última fue la acusación más repetida, implicando a todos los grandes contingentes de soldados estacionados en el Congo, tales como: Marruecos, Pakistán, Uruguay, Nepal, Túnez, India y Sudáfrica (OCHA/IRIN, 2007:82), entre otros. Las excusas que abonaron esta práctica fueron variadas, aunque interesantemente todas respondieron a la misma lógica. El personal militar y civil explicó que las mujeres y niñas se les ofrecían constantemente, que a veces era difícil inclusive “sacárselas de encima”, o que se levantaban las polleras cuando pasaban los vehículos de Naciones Unidas para “mostrar que es lo que tienen”, y como estos hombres se sentían como “playboys” rodeados de tantas mujeres que los deseaban (Higate, 2007:106). También argumentaron que trabajadores locales les ofrecían el “servicio” de mujeres y niñas, y que algunas estudiantes de secundario podían pagar sus estudios gracias al dinero que obtenían por prestar “servicios” a los miembros de las operaciones de paz (Higate, 107). Todos estos relatos indican a los hombres como meras presas pasivas del accionar virulento de las mujeres que son “instrumentales en saciar las necesidades biológicas de sus clientes” (Higate, 107).

Pero, lo que es necesario comprender, es que ese accionar no implica una voluntad real de las mujeres, porque la explotación de estas y de niñas como prostitutas, no puede ser vista como una transacción entre dos adultos que consienten, ya que como explicó Jean-Marie Guéhenno, ex-sub Secretario General para las Operaciones de Paz, a comienzos del 2005 “el término ‘prostitución’...puede enmascarar la naturaleza de explotación en esta dinámica. En varios casos en la RDC, las llamadas trabajadoras sexuales han sido pagadas con migajas de comida, y han sido niñas de 13 y 14 años” (citado OCHA/IRIN, 2007:82). Además, aunque estos actos puedan parecer voluntarios, o que la mujer está a cargo de su propio cuerpo, eligiendo participar en una transacción sexual (Spencer, citado en Higate, 2007:108), no quiere decir que esté tomando esa decisión libre y voluntariamente, sino porque se ve obligada por las extremas circunstancias de necesidad que la rodean. De esta forma el personal militar y civil que contrata servicios sexuales en estos ambientes de extrema pobreza, y sin importar que tan dispuestas puedan parecer las mujeres, en realidad están explotando a quienes deben proteger (OCHA/IRIN, 2007:82).

Además de la explotación propia que supone la prostitución a la que se vieron reducidas mujeres y niñas, otras consecuencias que tuvieron lugar debido a esa práctica fue la gran cantidad de bebés que nacieron de padres soldados de estas operaciones; niños que no solo crecieron sin un padre y con el estigma que ello acarrea en comunidades fuertemente tradicionales, sino que además implicó una enorme presión económica extra para la madre (Higate, 2007:100), que en definitiva quedó embarazada debido a las necesidades que pasaba que la hicieron verse obligada a prostituirse en primer lugar. Naciones Unidas no ha dado una respuesta satisfactoria a ese fenómeno que fue en

aumento a pesar de la tolerancia cero, ya que nunca llevó algún registro de los bebés engendrados por su personal (Nduno, 2009:129). Otro de los efectos, es la discriminación que sufrieron las mujeres consideradas prostitutas, y la propagación de enfermedades venéreas incluido el HIV (Ndumo, 100). Ello, además de las problemáticas propias que sufrieron las mujeres y niñas víctimas de violaciones por parte del personal civil y militar de Naciones Unidas, las cuales eran comunes a cualquier persona objeto de ese tipo de violencia.

Este tipo de comportamiento desplegado por una amplia parte del personal civil y militar de Naciones Unidas, no solo ha sido una mancha a la reputación de esta organización internacional, sino que generó la desconfianza de los lugareños y socavó la efectividad de estas misiones; confianza y efectividad que eran esenciales para el éxito de las mismas. Una de las cuestiones que debilita la posición de la ONU para contrarrestar los abusos cometidos por el personal militar, es la imposibilidad que tiene de sancionar a los mismos, ya que no cuentan con los medios o la autoridad para llevarlos ante la justicia, desde que los hombres que componen estas fuerzas están bajo la exclusiva jurisdicción de sus países de origen (OCHA/IRIN, 2007:82). Naciones Unidas solo puede recomendar la repatriación del perpetrador, y esperar que el país de origen tome las medidas necesarias para sancionarlo, aunque tampoco tiene como controlar que esto realmente ocurra o supervisar la transparencia del proceso (OCHA/IRIN, 82).

Entre las varias soluciones que se pretendió dar a esta problemática, estuvo la idea de incorporar más mujeres en las operaciones de paz, las cuales nunca superaron el 2% del personal militar (Stiehm, 2001:40); además de capacitación al personal sobre “cuestiones de género” (Kuehnast et al., 2011:9), como si la sensibilización de género solo correspondiera a las mujeres. Quienes apoyaron este enfoque argumentaron que la presencia de personal femenino disminuía los índices de criminalidad (Kuehnast et al., 9); que la disciplina del personal masculino mejoraba alrededor de colegas mujeres, especialmente de su propia nacionalidad; que la presencia de mujeres era pacificadora y por ende reducía la agresividad e hipermasculinidad de los soldados; que las mujeres soldado servían como ejemplo a seguir para las locales (Simic, 2010:189); y que la confianza de las nativas era mayor en el personal femenino (Kuehnast et al., 2011:11).

Sin embargo, algunos autores cuestionaron que incorporar una mayor cantidad de mujeres pudiera resolver el problema. Además de implicar un serio esencialismo, donde las mujeres eran vistas como civilizadas y a su vez civilizadoras, reforzaba los estereotipos de género representando a las mujeres como pacíficas y a los hombres como proclives a la violencia (Simic, 2010:190). Aquella línea de razonamiento dejaba fuera, asimismo, la visión y opinión de las mujeres que componían las fuerzas de paz, que no necesariamente respondían como se esperaba de ellas por el mero hecho de ser mujeres; muy al contrario, ellas se acomodaban al ambiente hipermasculino

militar en lugar de cambiarlo (Simic, 194). Así como en el caso de las mujeres que componían las FARDC, las cuales “entendían” y justificaban la violencia sexual desplegada por sus colegas (Eriksson Baaz y Stern, 2013:725), las mujeres soldados de las operaciones de paz tampoco denunciaban a sus compañeros (Jennings, citado en Simic, 2010:195).

Finalmente, es necesario volver a recordar que una mujer por el hecho de serlo, no implica que tenga mayor empatía con otras mujeres, o siquiera conciencia de identificación con el género femenino, o que su presencia colabore en lo absoluto en la mejora de la situación de las mujeres. Finalmente, recurrir a los estereotipos de género implica dar lugar también a todas aquellas identidades masculinas y femeninas que forman parte de la subyugación y desvalorización de la mujer, las cuales a su vez permiten que esa violencia y explotación ocurran.

EFFECTOS DE LA VIOLENCIA Y EXPLOTACION SEXUAL EN LAS MUJERES Y EL IMPACTO EN EL ENTORNO SOCIAL

La violencia y explotación sexual generaron numerosos efectos en las mujeres que lo padecieron; pero a su vez, este especial tipo de violencia tuvo un enorme impacto también en las familias de las víctimas y en las comunidades donde vivían. Estas consecuencias se alimentaban y retroalimentaban unas de las otras, encerrando a la víctima, a la familia y a la sociedad en un círculo del cual no podían salir. Además, la discriminación y estigmatización que padecían esas mujeres, comprometían su bienestar social, así como profundizaban la vergüenza, la humillación y la culpa que sentían por haber sufrido esos crímenes.

IMPACTO A NIVEL PERSONAL

La vergüenza y humillación que sentían las víctimas de violencia o explotación sexual las llevaba a aislarse para evitar todo tipo de situaciones donde pudieran sentirse aún más rechazadas y maltratadas (Josse, 2010:142). Ello resultó en que muchas mujeres decidieran voluntariamente irse de sus pueblos, mientras que otras fueron echadas del seno de sus familias o enviadas a vivir con parientes en otras comunidades; finalmente otras se mudaron con toda su familia a zonas urbanas en busca de mayor seguridad, ya que muchas veces sin importar la cantidad de medidas que tomaran, tales como dormir en grupos en la selva, tarde o temprano eran encontrados por los soldados o insurgentes y la familia entera corría peligro.

Las mujeres víctimas de violencia o explotación sexual, y/o que han visto a sus familias exterminadas han sufrido toda clase de efectos psicológicos que les han traído diversas

consecuencias a corto, mediano y largo plazo, impidiéndoles funcionar adecuadamente luego de la experiencia traumática. Por ejemplo se estima que el 80% de las mujeres que sobrevivieron a la guerra en Ruanda, padecían de graves trastornos psicológicos (Coomaraswamy, 2005:62). Según los expertos, el miedo se volvió el elemento central en sus vidas, el cual normalmente derivaba en depresión (Coomaraswamy, 62), aislamiento, falta de concentración, incapacidad de socializar, trabajar, estudiar, desgano generalizado, pesadillas, etc. También era recurrente pensar en cometer suicidio, ya que estas mujeres no manifestaban ningún deseo de seguir vivas. Por otro lado también eran frecuentes las manifestaciones psicósomáticas por las cuales experimentaban problemas estomacales crónicos, palpitaciones, náuseas e insomnio, entre otros padecimientos (Coomaraswamy, 62). En la mayoría de estos países, en los que nunca se tomó a la violencia contra la mujer seriamente, mucho menos se iba a considerar la necesidad de recibir atención psiquiátrica o psicológica, y aunque lo hubieran tenido en cuenta, nunca tuvieron los recursos para hacerlo.

Lamentablemente, en estas sociedades donde la víctima de violencia sexual se sentía tan estigmatizada y aislada, no había con quien hablar de esos temas, lo cual solo aumentaba la culpa, la tristeza y la vergüenza. La culpa podía manifestarse respecto de su propio comportamiento, en una suerte de autoacusación, especialmente por haber padecido la violación en lugar haber luchado a muerte (Josse, 2010:147). Este sentimiento también era impuesto por la sociedad, que, como en el caso de Burundi, culpaba a la víctima por haber sido atacada.

Por otro lado el daño a la salud también ha tenido importantes consecuencias, muchas permanentes. Cuenta Coormaraswamy (2005:61) que en Ruanda, luego del genocidio solo había 5 ginecólogos en todo el país, por ello muchas mujeres debieron recurrir a las medicinas caseras como ungüentos y pociones hechas de hierbas para poder curar sus heridas. Sin embargo, esto no era suficiente para curar o tratar las muchas heridas y lesiones físicas resultantes de la violencia desplegada contra las mujeres en estas guerras.

En las provincias del este de la RDC, de acuerdo al Dr. Mukwege y Nangini (2009:2) los ataques sexuales a las mujeres se han dado de forma extremadamente violenta, implementando normalmente una o todas las siguientes características: violaciones en banda, con entre 3 y 4 perpetradores, lo cual aumentaba considerablemente el riesgo de daño físico; mutilación genital; y propagación intencional de enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y el HIV. Además un 72% de las mujeres que se trataron en el Hospital Panzi de Bukavu (Kivu del Sur) denunciaron haber sido torturadas durante la violación, sufriendo golpes, quemaduras, heridas con machetes o cuchillos, etc.; mientras que un 12% reveló que les habían insertados en sus cavidades distintos objetos tales como palos, botellas y armas (Mukwege y Nangini, 2).

Como resultado de este tipo de violaciones extremadamente violentas, era bastante frecuente

que se provocara la fistula genital. Esta es la comunicación anormal entre la vagina y el tracto urinario, normalmente la vejiga, o entre la vagina y el recto, lo cual lleva a una pérdida constante e incontinente de orina o heces, o ambas, a través de la vagina (Longombe, 2008:133). Normalmente las causas de fistula en el mundo suelen darse por partos extremadamente complicados en zonas rurales de los países en desarrollo (Longombe, 133); mientras que en las provincias del este de la RDC se han dado por la brutalidad de los abusos sexuales. Como consecuencia, muchas mujeres debieron someterse a una o más cirugías reconstructivas; dependiendo de la gravedad de los casos que padecían, a veces el daño era irreparable presentando la cavidad vaginal totalmente destrozada, siendo la única solución posible para frenar la incontinencia vaginal desviar la evacuación urinaria al área del recto (Longombe, 134 y 137). Este tipo de daño genital también se producía comúnmente cuando mujeres que estaban en los últimos meses de embarazo eran violadas, con la lamentable pérdida del bebe que solía nacer muerto. Las heridas muchas veces eran tan severas y profundas que la capacidad reproductiva de las mujeres se veía seriamente comprometida, cuando no la perdían totalmente (Longombe, 139).

Hasta que las mujeres eran llevadas a un hospital donde hubiera personal capacitado para atenderlas, lo cual muchas veces implicaba un viaje largo y peligroso, sus pérdidas constantes producían un olor fétido que hacía que las personas se alejaran de ellas. Por cuestiones relacionadas con sus costumbres y tradiciones las mujeres raramente aceptaban una colonostomía o un desvío del tracto urinario de manera permanente (Longombe, 2008:139). De cualquier forma, este tipo de situaciones, implicaban para la mayoría de las mujeres afectadas la muerte social y el fin de sus matrimonios, por lo cual muchas mujeres luego de recibir terapia y algún tipo de capacitación no volvían a sus comunidades de origen, sino que permanecían con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares.

Los hijos nacidos como resultado de la violencia o explotación sexual habitualmente eran rechazados, discriminados y muchas veces maltratados (Josse, 2010:140) por los mismos padres de las víctimas, por la familia inmediata y/o extendida, y por la comunidad en general. Era común que familiares y vecinos se refiriesen a estos niños con expresiones derogatorias para que no quedara duda alguna de su origen.

Muchas de las mujeres secuestradas por los grupos insurgentes, que lograron retornar a sus hogares, a veces después de meses o años de cautiverio y esclavitud sexual, volvieron con los hijos que habían tenido. En estos casos la situación de la mujer solía ser más precaria aún, ya que, a diferencia de otras mujeres que quedaron embarazadas por la violencia sexual sufrida, estas normalmente tenían profundos lazos de afecto por sus hijos. Por ello, los insultos, el maltrato y las diferencias que hacían otros familiares con respecto a esos pequeños, eran motivo de mucho dolor,

angustia y estrés para sus madres (Verhey, 2004:16). Las familias directas no querían compartir sus magros recursos con un niño cuyo padre podía ser un enemigo o un extranjero; en el caso de un bebe engendrado por un *Interahamwe*, este podría crecer para convertirse en una amenaza para todos, por ello las jóvenes madres de estos niños se veían mucho mas presionadas para procurarse medios de subsistencia para ellas y sus hijos (Verhey, 16).

Los embarazos resultantes de las violaciones en Ruanda fueron estimados entre 2.500 y 5.000 (Degni-Ségui, 1996: pto. 16). Estos niños son llamados frecuentemente “pequeño *Interahamwe*”, “niños de los malos recuerdos” o “niños del odio”, entre otros apelativos que les recuerdan permanentemente su origen y el sufrimiento de la madre. Como la gran mayoría de las ruandesas profesaban la religión católica, muchas se negaron a hacerse un aborto cuando supieron que estaban embarazadas como producto de los abusos sexuales (Coomaraswamy, 2005:62). Sin embargo, y aunque esta opción estaba prohibida por ley, el nuevo gobierno miró para otro lado cuando muchas mujeres recurrieron a las curanderas locales o a los médicos para terminar con los embarazos (Twagiramariya y Turshen, 1998:116, nota 24). Por otro lado, muchos de estos bebes fueron abandonados, pero la gran mayoría fueron criados por sus madres (Coomaraswamy, 2005:62), a pesar de la carga psicológica y económica que les significó. Muchas mujeres confesaron odiar a sus propios hijos, maltratarlos y golpearlos por cualquier motivo, mientras otras, luego de concurrir a grupos de ayuda comenzaron a comprender que ellos no eran culpables de lo sucedido. Pero esa no era la única preocupación que tuvieron las madres de esos niños.

Uno de los resultados de la violencia sexual masiva y sistemática que se vivió en estos tres países de la región de las Grandes Lagos, fue el contagio del HIV. Muchas mujeres que quedaron embarazadas, también fueron infectadas con este virus. Como el sistema de salud de Ruanda nunca pudo hacer frente a las necesidades médicas de las mujeres infectadas, salvo aquellas que pudieron procurarse los tratamientos por sus propios medios, el resto quedo sin atención. Con el tiempo, cuando la enfermedad se manifestó, generó una nueva preocupación y carga psicológica a estas mujeres: ¿qué pasaría con sus hijos? Tanto aquellos niños que sobrevivieron, como los que nacieron de las violaciones, corrían el riesgo de quedarse huérfanos y solos en la vida si la madre moría, ya sea que las familias de esas mujeres habían sido eliminadas completamente durante el genocidio, o porque la mayoría de estas no tenían ninguna simpatía por este segundo grupo de niños. Además, los bebes nacidos a causa de los abusos sexuales, y otros niños que pudieron haber tenido años más tarde, tenían altas posibilidades de contraer el virus del HIV al momento de nacer, y sus madres, en general, nunca los llevaron a que les hagan el test para comprobar si eran HIV positivos, a veces por miedo a una mayor discriminación de la que ya sufrían debido a sus orígenes, a veces porque ellas mismas no sabían que portaban el virus hasta que la enfermedad se manifestó.

REPERCUCIONES EN LA VIDA FAMILIAR

La familia puede ser pensada como una estructura cultural que consiste en un sistema de unidades que definen el mundo, la manera como sus componentes se relacionan entre sí, y que deben ser y hacer (Schneider, citado en Fox, 2011:280). Por ello, cualquier ataque a uno de sus componentes, puede perturbar este sistema, complicando las relaciones familiares y alterando las normas de reciprocidad y cuidado existentes.

De este modo, en las familias insertas en esas sociedades fuertemente patriarcales y tradicionales, donde a la mujer se le acuerda un valor social que fácilmente puede perder, era común que las víctimas de violencia sexual fueran rechazadas por sus familias. Entre esposos, podía darse el caso que el hombre abandonara a la mujer, y muchas veces a los hijos también; que la repudiara públicamente y la echara de su casa; o inclusive que se buscara otra esposa, negándose a mantener relaciones sexuales con su primera esposa, quien fuera víctima de violencia sexual. Como explica Josse (2010:140) las razones para que el marido aparte a su mujer eran varias: temía que hubieran contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, ya que se creía ampliamente que la mayoría de las milicias eran HIV positivas, entonces como consecuencia directa, las sobrevivientes de abusos sexuales habían sido infectadas (Trenholm et al., 2011:143); o que hubiera quedado embarazada; o porque ellos mismos se sentían humillados y temían ser el hazmerreir de la comunidad; o porque se sentían deshonrados por un acto tradicionalmente comparable al adulterio. Por ello, para volver a obtener el respeto de la familia y vecinos, el hombre no tenía otra opción más que echar a la esposa (Jones, A., 2008:16).

A su vez, para muchas mujeres representó una vergüenza y humillación muy difícil de sobrellevar el haber sido víctimas de abusos sexuales delante de sus hijos. Peor aún cuando se obligó a alguno/s a participar de la violación de la madre, sea por ejemplo sosteniéndole las piernas abiertas o inclusive a perpetrar la violación. Situaciones de esa naturaleza podían tener alguno o más de estos efectos: disminuían la autoridad parental de la madre; resultaban en la desobediencia de los hijos; la culpaban por no haber podido detener lo sucedido; o simplemente la despreciaban pudiendo, incluso, recurrir a la agresión (Josse, 2010:140).

Lo mismo ocurría con las mujeres jóvenes y solteras, quienes podían ser echadas de la casa por su padre, o eran mandadas a vivir con la familia extendida a otra localidad para evitar la vergüenza dentro de la comunidad donde vivían originalmente. Esto se daba especialmente porque la víctima ya no tendría posibilidad alguna de casarse, dado que aunque algún joven, de todas formas, estuviera interesado, la sociedad le haría saber que no era el tipo de mujer conveniente para contraer matrimonio. A veces, las familias se mudaban con ella; esto se dio mayormente entre

aquellas que habitaban en zonas rurales, las cuales decidieron irse a alguna de las ciudades como Goma o Bukavu en busca de más seguridad.

Un caso particular que se daba era el de las jóvenes que habiendo logrado escapar del cautiverio al que las habían sometido los insurgentes, volvían a sus casas. Estas eran despreciadas, muchas veces no se les permitía comer junto al resto de la familia, o no podía intercambiar ropa u otros objetos de aseo personal con sus hermanas o parientes próximas, entre otros casos. Además las familias temían que padecieran enfermedades que pudieran contagiarles, o que los comandantes de las milicias vinieran en busca de las mujeres que habían huido, sembrando más violencia a su paso (Verhey, 2004:15).

Dado que en África Sub-Sahariana mayormente cuidar los cultivos es una tarea femenina y Burundi, Ruanda y las provincias del este de la RDC no son la excepción, una de las consecuencias que tenía la violencia sexual contra las mujeres (y las familias en general) era el deterioro económico. Dado que muchas víctimas fueron atacadas mientras trabajaban en el campo, luego de recuperarse no querían retornar por miedo a sufrir otro ataque del que tal vez no salieran vivas; o a veces la tristeza y miedo eran tal que psicológicamente les impedía retomar su trabajo; a veces el daño físico sufrido les impedía volver a realizar labores pesadas como trabajar en el campo. De esta forma se desatendían los cultivos que, al ser mayormente de subsistencia, eran los que alimentaban a la familia (Jones, A., 2008:18). Ello solía derivar en un aumento de la malnutrición de todos los componentes del grupo familiar, pero repercutía especialmente en los niños. A su vez, sin el excedente de los cultivos para comerciar, y la peligrosidad de los caminos que solían estar plagados de malvivientes y milicianos a la espera de víctimas, las familias se quedaban sin medios de subsistencia.

Por otro lado, esa falta de recursos económicos impedía que pudieran mandar a los niños a la escuela, por lo cual estos se quedaban sin educación alguna, reducidos a un estatus social del cual nunca podrían salir, afectando a niños y niñas por igual. Con respecto a estas últimas, el conflicto y el miedo a que las ataquen en el camino a la escuela, así como la preferencia que estudien los varones y el uso de las mujeres en las tareas domésticas, afectaba más su concurrencia a la escuela; no obstante, los niños eran más proclives a abandonar los estudios para unirse a las milicias insurgentes (Brück y Vothknecht, 2011:108).

La siguiente historia contada en el informe OCHA/IRIN (2007:92-93) es un claro ejemplo y representativo de la realidad descrita. Una joven mujer de Masisi estaba trabajando en el campo a unos 15 km. de su casa, junto a su pequeña hija de 4 años y con su bebé atado en la espalda, de esa forma tan tradicional de las africanas de la región, cuando aparecieron seis insurgentes quienes inmediatamente las tiraron al piso y comenzaron a violar tanto a la mujer como a su niña. A su vez,

cuando ella fue empujada cayó sobre el bebé, al cual además golpearon y patearon varias veces. El infante estuvo bajo la madre todo el tiempo que duró ese horror. Luego que los hombres terminaron de golpearlas y abusar de ellas se fueron, llevándose a la pequeña, a la cual no volvió a ver. También le habían robado todo, hasta la ropa, por lo cual se tapó con unas hojas y cargando a su hijo, que estaba muy malherido, caminó hasta que unas personas la ayudaron.

Como resultado del ataque, su marido que se había vuelto a casar pero con el que mantenía una buena relación la repudió completamente, su bebé murió una semana después debido a las heridas, y a su hija no la volvió a ver nunca más. Además, como consecuencia de los golpes su espalda quedó severamente dañada, por lo cual ya no podía cargar nada pesado, ni trabajar en el campo; ello sin mencionar el daño psicológico, como el desgano, las pesadillas y el miedo que le producía volver a su *shamba* (pedazo de tierra dedicado al cultivo de frutas y vegetales). Debido a ello, comenzaron a pasar hambre y no tenía como alimentar a sus otros hijos, ni mucho menos los medios para mandarlos a la escuela. Esta mujer, sin embargo, tuvo la suerte –si se puede llamar de ese modo- que su comunidad la ayudó y que *Doctors On Call Services* (DOCS) una ONG que proveía atención médica y ayuda psicológica, le donó una cabra y unas herramientas con las que pudo rehacer su vida (OCHA/IRIN, 2007:93).

Otra consecuencia de la violencia sexual y su subsecuente impacto económico en las familias, era la falta de acceso a la atención sanitaria. Las guerras llevaron al deterioro de la salud pública, a través de la destrucción de los puestos de salud, la reducción de personal calificado y el gasto estatal en esta área (Brück y Vothknecht, 2011:105). Además, no solo los largos viajes, que a veces implicaban varios días de caminata, eran extremadamente peligrosos, sino que no tenían los medios económicos para pagar la atención recibida cuando estaba disponible. Ello implicó la muerte por enfermedades que podían ser tratadas como colitis, malaria y neumonía (Jones, A., 2008:18).

Finalmente, en los casos en que el marido o padre no echaba o repudiaba a su esposa o hija/s víctimas de abuso sexual, veía como las relaciones con otros familiares se deterioraban paulatinamente, cortando los lazos y el apoyo de la familia extendida que siempre había sido una de las características principales de las relaciones de parentesco en esta región del mundo. Como explica Fox (2011), refiriéndose a las violaciones en masa del genocidio de Ruanda, la vergüenza y la culpa de la víctima, pero también de su familia, era tan grande que impedía que se miren a los ojos, o mucho menos que hablen del tema, prefiriendo hacer de cuenta que no había pasado. Lamentablemente, ello solo resultaba en un mayor aislamiento y desencuentro de los miembros del grupo familiar.

CONSECUENCIAS A NIVEL SOCIAL

Las comunidades donde ocurrían estas atrocidades no fueron inmunes a la miseria de estas mujeres, aunque raramente fue para dar apoyo o ayudar a los sobrevivientes de esas terribles experiencias. La guerra afectó no solo las relaciones familiares, sino también los lazos de hospitalidad y ayuda que solían identificar, especialmente en las zonas rurales, las relaciones entre vecinos. Además, el tejido social se deterioró a tal punto que las violaciones perpetradas por civiles contra otros civiles también se volvieron moneda corriente, lo cual además se vio facilitado por el clima de impunidad imperante durante los conflictos armados y el periodo posterior.

Las víctimas de abuso normalmente eran injuriadas, molestadas y humilladas por miembros de sus comunidades (Josse, 2010:141). No era extraño que un niño se burlara de otro cuando su mamá o hermana había sido víctima de violencia sexual, o que los hombres se refirieran a esa mujer como “la prostituta”. Whitman (2006:46) cuenta el caso de una niña de 12 años que fue violada por un combatiente, lo que la obligó a dejar la escuela: sus compañeras se reían de ella diciéndole que era la “niñita que se acostaba con soldados en la selva”. También era muy frecuente que perdiera cualquier derecho social a expresar una opinión en público o si algo sucedía, esa mujer era la primera en ser señalada como culpable. Inclusive era normal que las víctimas más jóvenes tuvieran que dejar sus estudios porque los padres se negaban a pagarlos, o porque eran expulsadas de las escuelas. En Burundi, además, la víctima era considerada culpable de haber sido atacada sexualmente, ya sea por su comportamiento o su forma de vestir (AI, 2007:1). Por esto, las mujeres que podían esconder el hecho de haber sido victimizadas por un crimen sexual preferían callarlo, esconderlo de sus familias y comunidades, para evitar el maltrato posterior; pero ello implicaba que no buscaran ayuda médica para prevenir un posible embarazo o tratar alguna enfermedad venérea que pudieran haberle contagiado el o los perpetradores.

Las mujeres solteras perdían el prospecto de poder casarse y formar una familia en el futuro, ya que cuando algún hombre demostraba atracción por ella, enseguida la comunidad le hacía saber la “condición” de la mujer, por lo cual rápidamente perdía el interés (Verhey, 2004:14). Aquellas que ya estaban comprometidas veían como sus novios rompían las promesas de matrimonio en busca de otra mujer que no estuviera “sucía” (Verhey, 14). Como explica Josse (2010:141), la virginidad refleja el honor de la familia, así como su pérdida, a pesar de que sea a través de un acto impuesto mediante una agresión sexual, es una vergüenza. Por ello, la mujer que había sido víctima de este tipo de crímenes perdía su valor a los ojos de un futuro novio y de la sociedad, y nadie pagaría una dote matrimonial por una mujer que había perdido su valor. Lamentablemente como en esas sociedades las mujeres nunca han tenido muchas oportunidades de prosperar o adquirir estatus

fuera del matrimonio, la posibilidad de no poder casarse y formar una familia, equivalía a una condena a vivir de la caridad de su familia.

Pero no solo las mujeres que habían sufrido violencia sexual eran estigmatizadas, sino que muchas veces sus familias también eran objeto y blanco de burlas y humillaciones por parte de sus vecinos (Josse, 2010:143), lo cual llevaba a un mayor aislamiento tanto de la víctima como de la familia, o al resentimiento de la familia hacia la víctima que les hizo perder el lugar que ocupaban socialmente.

Además, cuando la violación era perpetrada en público “grabando la vergüenza en la memoria de la comunidad” (Mukwege y Nangini, 2009:2) la cohesión y la identidad social se iban desgastando hasta imposibilitar las relaciones sociales y alterar las lealtades. Porque en definitiva hay muchas maneras de cometer genocidio, y mientras que el de Ruanda luego de que la comunidad internacional dejó de mirar para otro lado levantó un coro de voces horrorizada, el lento y silencioso genocidio que se siguió llevando a cabo en las provincias del este del Congo, apenas era recordado de cuando en cuando por algún medio internacional y en algunos trabajos académicos. Mientras tanto, Naciones Unidas y los restantes países despejaron sus conciencias con algún contingente de soldados que parecía que más que defender a la población, estaban en el terreno para hacer turismo sexual.

En fin, todas estas creencias populares hacían que las mujeres y niñas secuestradas por las milicias temieran retornar a sus comunidades, siendo todavía mucho peor si habían tenido hijos de los rebeldes (Verhey, 2004:13). Por otro lado, las comunidades no tenían tolerancia hacia las mujeres que se no se comportaban correctamente según los estándares tradicionales, y aquellas mujeres que habían formado parte o se habían relacionado con las milicias en alguna capacidad, aún en contra de su voluntad, eran consideradas groseras y agresivas, dos cualidades que era impensable que una buena mujer poseyera (Verhey, 14). Además, las comunidades compartían los temores de la familia en cuanto a que pudieran ser portadoras de enfermedades, o que los comandantes de las milicias vinieran por ellas, atacando a la población en el proceso (Verhey, 15). Asimismo, los vecinos buscaban evitar que tengan contacto con sus hijas, por miedo a que la mujer que estuvo con las milicias, pudiera incitar a las otras a desarrollar comportamientos promiscuos (Verhey, 15).

Finalmente, es necesario tener presente que los efectos personales, familiares y sociales de los crímenes de violencia sexual que se han visto en este apartado, si bien eran las ocurrencias comunes y generalizadas, no constituían reglas pétreas. En muchos casos bien documentados las mujeres que experimentaron violencia sexual durante los conflictos en estos países de la región de los Grandes Lagos consiguieron salir adelante, muchas se casaron o se volvieron a casar en el caso de las viudas, y algunas hasta tuvieron más hijos; otras lograron establecerse y generar una fuente de ingreso

mediante algún micro emprendimiento con la ayuda de las asociaciones de mujeres u ONG internacionales que apoyaban a las víctimas de violencia sexual; otras terminaron por aprender a amar a sus hijos, a pesar de que fueron producto de horribles experiencias, y ellos se volvieron su apoyo y sostén; muchos hombres no se divorciaron, ni echaron a sus esposas o hijas víctimas de violencia sexual, al contrario, las ayudaron y apoyaron; y cuando algunas de las más jóvenes consiguieron volver a sus casas luego de ser secuestradas por grupos insurgentes, encontraron familias cariñosas que las habían extrañado y las recibieron con alegría.

EL PORQUE DE LA VIOLENCIA SEXUAL

La brutalidad de la violencia y explotación sexual que tuvo lugar durante los conflictos armados en la región de los Grandes Lagos, obliga a visitar este tema para intentar dilucidar cuales fueron los motivos que llevaron a la perpetración sistemática y masiva de estos crímenes. Varias teorías se han elaborado para explicar este fenómeno durante los conflictos armados, y aunque los estudiosos del tema no necesariamente están de acuerdo con las causas, si concuerdan en la necesidad moral de llamar la atención sobre esta cuestión, y de desentrañar los motivos y condiciones que promueven esta problemática (Gottschall, 2004:129). Ello así, con el objetivo de, por lo menos, disminuir su uso indiscriminado, ya que creer que es posible evitar que vuelva a suceder, por ahora, no es menos que utópico lamentablemente.

Según Gottschall (2004:129), las cuatro teorías principales para explicar la prevalencia de violencia sexual durante los conflictos armados son: la teoría de la patología cultural, la teoría biosocial, la teoría feminista clásica, y la teoría del uso estratégico de la violencia sexual. Por su parte Gerecke (2010:138) también identifica cuatro teorías: la teoría de la oportunidad y colapso social; la teoría basada en el militarismo, es decir por su estructura y organización; la teoría de desigualdad de género e identidad, la cual tiene algunos matices en común con la que Gottschall (2004) llama “teoría feminista clásica” por lo cual se verán juntas; y la teoría de género y etnicidad, la cual será analizada junto la teoría del uso estratégico de la violencia sexual por su conexidad.

Aunque estas tesis se verán brevemente, teniendo algunas un alto valor explicativo, adelantamos que no creemos que ninguna de las mismas pueda esclarecer en su totalidad el porqué de la violencia sexual que se presenta en los conflictos armados, así como tampoco en el caso de las guerras que se estudian en este trabajo. La realidad es que no son iguales las conductas de violencia sexual desplegadas por las FAZ/FAC/FARDC o los civiles en Burundi por ejemplo, a las violaciones y explotación sexual perpetrados por los genocidas en Ruanda o por los grupos insurgentes de las provincias del este del Congo. Sin embargo, si creemos que algunos elementos de

estas teorías están presentes en todos los casos como por ejemplo la desigualdad de la mujer como factor determinante de la violencia, aunque ninguno es suficiente para entender este fenómeno acabadamente. Una teoría debe explicar y dar coherencia a la información (Gottschall, 2004:129), empero si es necesario tomar algunos hechos, mientras se descartan otros igualmente importantes e innegables para favorecer una determinada explicación, entonces es más oportuno tomar un enfoque ecléctico que una teoría única para dar cuenta del porque de esa violencia sexual.

La primera tesis es la de la patología cultural, según la cual se deben observar los antecedentes históricos de una nación e identificar los factores en su desarrollo que contribuyeron a que caigan en actos viles (Gottschal, 2014:131) como la violencia sexual. La crítica que se le hace a esta teoría es que no responde porque hombres que vienen de experiencias socializadoras totalmente diferentes recurren a las mismas expresiones de violencia sexual (Gottschal, 131), o viniendo de antecedentes sociales similares actúan de distinta manera.

Luego, la teoría biosocial explica que las violaciones durante la guerra ocurren en todo tipo de sociedades, sin importar su composición racial, religiosa, étnica, económica o social, por lo cual la violencia sexual sería “natural” en los hombres (Gottschal, 2004:134). Entonces dada la prevalencia cultural e histórica de esta problemática, y el promedio de edad de las principales víctimas –mujeres jóvenes en edad reproductiva- lo teóricos biosociales concluyen que un motivo prominente para las violaciones durante la guerra es el deseo sexual de los combatientes; argumentando, de esta forma, contra la idea generalizada de que la violencia sexual no es sobre sexo (Gottschal, 134-135). Sin embargo, como muchos soldados teniendo la posibilidad de cometer actos de violencia sexual deciden no hacerlo, esa conducta o no-conducta, se explicaría por las influencias socio-culturales (Gottschal, 134) las cuales actuarían como una suerte de barrera disuasoria para no llevar a cabo un comportamiento socialmente prohibido pero que ocurre masivamente. Entonces esta tesis se funda sobre la premisa de que los factores socio-culturales juegan una parte integral de la incidencia, prevalencia y salvajismo en las violaciones durante las guerras (Gottschal, 135). A pesar de los méritos que pueda tener esta explicación, solo demostraría parcialmente el porqué de las violaciones durante los conflictos armados, ya que ve a la agresión sexual como oportunista; sin embargo, no da cuenta de otros hechos como la esclavitud sexual; la violencia sexual contra hombres, ancianas, niños y niñas; ni tampoco sobre los campos de embarazos forzados, entre otros casos, así como tampoco de la violencia sexual perpetrada u ordenada por mujeres. Por otro lado, si la teoría estuviera enfocada únicamente en las violaciones y no en otro tipo de violencia sexual sería inútil y vacía de contenido, porque todo ese tipo de violencia responde a los mismos patrones que la engendran y la sostienen.

Gerecke (2010:140), por su parte, comienza explicando la tesis que se basa en el oportunismo

y colapso social; de acuerdo a esta teniendo la oportunidad el hombre elige naturalmente cometer actos de violencia sexual. Como durante la guerra caen tanto la defensa de la población civil, especialmente la de las mujeres, así como las pautas de constreñimiento social y legal, aumenta la posibilidad de perpetrar violaciones, lo cual explicaría el agudo incremento de este fenómeno (Gerecke, 140). Esta proposición está íntimamente ligada a la teoría biosocial, según la cual el hombre estaría predispuesto biológicamente hacia la depredación sexual, tendencia que, además puede liberar al no haber barreras sociales “artificialmente” –en oposición a lo “natural” o “biológico”- creadas que le impidan desplegar dicho comportamiento. Sin embargo, contra esta línea teórica se podría argumentar que el uso masivo de violencia sexual es, en sí mismo, un factor contributivo del colapso social, resultando en el dilema del huevo y la gallina; además tampoco explica el porqué se de ese resultado particular (Gerecke, 140).

La organización y estructura militar es causante de los altos índices de violencia sexual durante la guerra, de acuerdo a otra teoría (Gerecke, 2010:140-141). De este modo, los grupos de combatientes serían propensos a violar cuando su entrenamiento fuera pobre, las compensaciones económicas fueran bajas o inexistentes y la jerarquía fuera débil, así como la cohesión de grupo (Gerecke, 141). Según Seifert (citada en Skjelsbæk, 2001:79) sería, además, una forma de reafirmar la masculinidad, ya que la estructura militar se basa en la reducción de la identidad y su cohesión en la camaradería: masculina y heterosexual (Enloe, citada en Skjelsbæk, 79-80). Por otro lado, ser un “hombre de verdad” implica suprimir cualquier sentimiento considerado femenino como inseguridad o gentileza (Skjelsbæk, 80), características que son desvalorizan constantemente. La combinación de todos o algunos de estos factores facilita la comisión de actos de violencia sexual durante los conflictos armados (Skjelsbæk, 80). Esta tesis, de todos modos, no responde el porqué algunos soldados se inclinan por perpetrar esos actos en lugar de abstenerse, como lo hacen otros. Las soluciones que se proponen para frenar este fenómeno, como por ejemplo mayor presencia femenina o una cadena de mando firme, apenas corregirían los síntomas, sin explicar ni tratar las causas subyacentes a esa actuación. Por otro lado, es conveniente recordar las críticas hechas a estas supuestas soluciones en el caso de los soldados de las operaciones de paz, ya que el personal femenino en el terreno no impide que los soldados se comporten de igual manera, especialmente porque las mujeres suelen encubrir a sus compañeros y hasta justificar sus acciones.

Las feministas estudiosas de las Relaciones Internacionales, así como de otras disciplinas, fueron las primeras en llamar la atención sobre el uso masivo de violencia sexual durante las guerras. De acuerdo a Gottschall (2004:131) las teorías feministas clásicas, explican que las violaciones tanto en tiempos de paz como de guerra no son un crimen de pasión sexual, sino un crimen motivado por el deseo de ejercer poder sobre la mujer, por ende la presión no es libidinal

sino misógina (Gottschal, 130). De acuerdo a la visión simplista de este autor de las teorías feministas, cuando los combatientes violan están demostrando su desprecio por las mujeres al mismo tiempo que imponiendo y perpetuando los arreglos de género patriarcales de los cuales todos los hombres se benefician. La crítica que hace a esta tesis es que la evidencia demuestra que la violación en tiempos de paz esta universalmente proscripta y que la violencia sexual en tiempos de guerra es un resultado común a todos los conflictos en todos los continentes (Gottschal, 131). Empero, estas críticas no se sostienen ni en hechos, ni en la teoría. En primer lugar la violación u otras formas de explotación sexual no están prohibidas en todas sus formas en tiempos de paz ni de guerra universalmente; sin ir más lejos la gran mayoría de la sociedades del mundo no reconoce la violencia sexual dentro del matrimonio; asimismo, en algunos países donde se aplica la ley islámica, una mujer no puede ser víctima de violación, ya que o está manteniendo relaciones pre-matrimoniales, o está cometiendo adulterio en caso de ser casada, por lo cual puede ser pasible de penas de prisión o hasta de muerte como en Afganistán. Por otro lado, de poco sirve que la violación este tipificada como delito cuando las autoridades miran para otro lado y no actúan ante los hechos como fue el caso de Burundi y las provincias del este de la RDC. En cuanto a la segunda crítica, la violencia sexual no es común a todos los conflictos; al contrario, es posible encontrar algunos donde justamente las violaciones no fueron la norma como en el caso de la guerra de independencia de Eritrea.

De forma más sofisticada, Gerecke (2010) explica la teoría sobre desigualdad de género e identidad, la cual es un avance de la vista en el párrafo precedente. Esta tesis se basa en la idea de las desigualdades de poder entre ambos géneros, por lo cual la violencia sexual durante los conflictos armados se debería a una extensión de la tergiversación de las identidades de género y la exacerbación de la desigualdad existente en tiempos de paz (Gerecke, 2010:141). A su vez, durante la guerra, las masculinidades militarizadas ahondan más las diferencias entre los géneros, profundizando el patriarcalismo que lleva a un mayor abuso de poder; entonces la violencia sexual es una demostración de esa desigualdad de poder (Gerecke, 141). Por ello, el perpetrador y su víctima –sin importar a que sexo pertenezca cada uno- se manifiestan condicionados por el género: el rol masculino como poderoso y el femenino como débil (Gerecke, 142). Como el género es performativo, algo que se “hace” en lugar que se “es”, un hombre puede ser agresor a la vez que víctima, lo mismo que una mujer, ya que en ese caso el rol de género de la mujer perpetradora, así como del hombre víctima de violencia sexual se estarían modificando: la mujer estaría asumiendo un rol masculino, de poder; mientras que al hombre se lo debilita y feminiza (Gerecke, 142). Esta postura puede ser objetada en base a su uso esencialista de los conceptos de poder y debilidad asociados a lo masculino y femenino respectivamente, en otras palabras, a la idea de que la mujer

que comete actos de violencia sexual se masculiniza en cuanto el hombre víctima de tales actos se ve feminizado. Como se ha explicado en el antepenúltimo punto del Capítulo IV, compartimos la idea de que la criminalización del perpetrador de violencia sexual no debe estar tachada por cuestiones de género *a priori*, así como partimos de la base de que dichos actos pueden ser cometidos por hombres y mujeres independientemente de sus roles de género, ya que forman parte de su propio accionar y de acuerdo a los intereses de quien los comete.

Asimismo, se encuentra la teoría que explica la violencia sexual en los conflictos que tienen un fuerte componente étnico, es decir, en las guerras en que las cuales aquellas divisiones se han usado para movilizar políticamente a la población como en Ruanda y Burundi. Esta tesis es una variante de la antes vista y se relaciona con aquella del uso estratégico de la violencia sexual como arma de guerra. Partiendo desde la premisa de la desigualdad entre los géneros, se estudia como ese desequilibrio se entrecruza con las identidades étnicas como catalizador de la violencia sexual masiva (Gerecke, 2010:147-148). En su variante más extrema, la “violación genocida”, se utiliza para aniquilar un pueblo, raza, etnia, o una cultura. Las sociedades con estrictas expectativas de género, en las cuales la mujer encarna los valores simbólicos asociados a la castidad y a la capacidad reproductiva, cualidades que se encuentran íntimamente ligadas al honor del hombre y la comunidad, proveen la estructura adecuada para que el uso de la violencia sexual como acto político sea un recurso racional y estratégico (Gerecke, 148; Steans, 2013:55). De este modo, los perpetradores reafirman su poder sobre la víctima y por extensión sobre la etnia a la que pertenece, ya que el ataque a la mujer implica un ataque a la comunidad y pasa un claro mensaje: la humillación a los hombres que no pudieron defenderla (Gerecke, 2010:148). Esta teoría es muy limitada, ya que solo da cuenta de las violaciones y otros ataques sexuales en conflictos en los cuales se apela a la cuestión étnica; asimismo, al centralizar tanto el rol de la mujer como guardiana de la cultura y de la comunidad a la que pertenece, no termina de responder a la ocurrencia de violencia sexual contra los hombres.

La tesis del uso estratégico de la violencia sexual es una de las teorías más difundidas y sostenidas por activistas y académicos (Gottschal, 2004:131). Básicamente, propone con mucho acierto que las violaciones son otro recurso del que los combatientes pueden echar mano para lograr sus objetivos. Aunque algunos de quienes sostienen esta tesis no argumentan necesariamente que haya un mandato expreso de violar, está claramente implícito en sus órdenes: la violación en tiempos de guerra es coherente, coordinada, lógica y brutalmente efectiva (Gottschal, 131). Sus efectos son muchos, ya que esparce terror y debilita la resistencia de la población civil, además de que desmoraliza, humilla y emascula a los soldados enemigos que no pueden cumplir su rol de protectores (Gottschal, 131). La crítica que se le hace a esta teoría es que confunde las

consecuencias con los motivos que hacen que suceda, ya que el hecho de que se den ciertos resultados como comunidades atemorizadas y familias quebradas no implica que este era el fin buscado (Gottschal, 132). Además, Gottschal (2004:132) aduce que el resultado podría ser distinto, en lugar de amedrentar a la población, esta podría reaccionar violentamente como en un hecho que se dio en Bunia, en la RDC, a fines de 1997, cuando unos soldados de las FAC violaron a un puñado de niñas de una escuela secundaria local; como resultado la población civil reaccionó violentamente ajusticiando a algunos de los perpetradores (Amnesty International citado en Gottschal, 132). Lo que este autor parece olvidar cuando eligió este ejemplo, es que los patrones de violencia sexual desplegados por las fuerzas armadas del Congo solían ser oportunistas y, normalmente, estaban impregnados por necesidades físicas y no como estrategia de guerra.

Como ocurre con la mayoría de los hechos que suceden durante los conflictos, la violencia sexual no es fácilmente encasillable en una teoría única, ya que ninguna por sí sola explica los alcances de este fenómeno en su totalidad. Los distintos actores -civiles, grupos insurgentes, y las fuerzas regulares, compuestos indistintamente por hombres y mujeres-, presentan motivaciones diversas para perpetrar este tipo de actos. Los patrones –sistemáticos, oportunistas, con mayor o menor violencia, etc.- también son diferentes de acuerdo a quien los cometa, y dichos actos pueden haber sido expresamente ordenados, tolerados o perpetrados aún estando prohibidos. Por ello, y sin ánimo de intentar llegar a una teoría única que pueda explicar el porqué de esta problemática en cualquier guerra, lo que excedería, por otro lado, el propósito de este trabajo, se aplicarán las teorías antes vista para dilucidar porque se usó la violencia sexual de forma masiva en los conflictos que nos ocupan.

En las provincias del este de la RDC las milicias operaban con escasos recursos, poca tecnología y acceso limitado a las armas, por lo cual las violaciones eran un arma ideal (Bartels et al., 2013:342). Además muchos combatientes –tanto insurgentes como del ejercito- obtenían pagos muy bajos, o a veces ninguno, por sus servicios; apenas se les proveían algunas necesidades básicas, aunque la falta de comida era un problema persistente; todo ello resultó en que dependieran del saqueo de los pueblos locales para satisfacer sus necesidades materiales (Bartels et al., 342; Eriksson Baaz y Stern, 2009:501). Esta necesidad de saquear fue, por lo menos, parcialmente responsable de poner a las milicias y a las fuerzas regulares en contacto directo con la población civil (Bartels et al., 2013:342) facilitando las violaciones y la explotación sexual.

En el este del Congo, la violencia sexual también fue tolerada porque los comandantes y los combatientes, tanto rebeldes como soldados, tenían poco entrenamiento y poco o ningún conocimiento de las leyes de derecho humanitario. Esta observación no implica que su conocimiento hubiera garantizado el cumplimiento, ya que las milicias en cuestión eran

notoriamente indisciplinadas y se hubiera necesitado mucho esfuerzo a nivel del comando para ponerlos en línea con los estándares aceptables del comportamiento militar en la guerra (Bartels et al., 2013:342). La indisciplina en las fuerzas regulares aumentó más luego de la integración de ex-rebeldes a las FARDC, generando líneas de comando paralelas y soldados que respondían a sus jefes insurgentes, en lugar de al comando integrado (Eriksson Baaz y Stern, 2009:501). Las estimaciones de los actos de violencia sexual cometidos por esta fuerza y recopilados por varias agencias de NU y otras ONGs internacionales son contradictorias; sin embargo MONUC estima que junto a la Policía son responsables de alrededor del 40% de las violaciones perpetradas en Kivu del Norte y del Sur (Eriksson Baaz y Stern, 496-497).

En su trabajo sobre las motivaciones tras las violaciones perpetradas por los componentes de las FARDC, las autoras Eriksson Baaz y Stern (2009) distinguen, de acuerdo a los testimonios de soldados de dichas fuerzas, dos tipos de violaciones: por deseo o lujuria y por maldad. El primero se debía a las “inevitables” consecuencias que tenían lugar cuando un hombre era privado de la posibilidad de tener sexo, o en su defecto dinero para pagar por este, o licencia para ver a su esposa y “saciar sus necesidades” (Eriksson Baaz y Stern, 2009:513). La violación por maldad, en cambio, no ocurría por el apetito sexual, sino por una necesidad de destruir, de dañar; era particularmente violenta y podía resultar en mutilaciones o hasta la muerte de la víctima (Eriksson Baaz y Stern, 510). La motivación por detrás de ese tipo de violencia era el sufrimiento y la frustración fruto de la pobreza, el hambre, la locura de la guerra y el amplio uso de drogas (Eriksson Baaz y Stern, 513). La mayoría de los soldados entrevistados intentaron distanciarse de este segundo tipo de violencia sexual, a pesar de que esas líneas se volvían borrosas en la lógica por la cual las violaciones se volvían posibles y se normalizaban (Eriksson Baaz y Stern, 514). De todos modos, de estos relatos, así como de aquellos de las víctimas, según las cuales los grupos insurgentes eran mayormente responsables de los ataques con patrones de violencia consistentes con la llamada “violación por maldad”, es posible suponer que el tipo de violación cometida por los soldados de las FARDC se acercaba más al primer tipo, es decir por deseo, siendo de corte más oportunista. Finalmente, cabe notar que todos los soldados y oficiales entrevistados sabían que cualquier tipo de violencia sexual estaba prohibida socialmente, tanto en tiempos de guerra como de paz; sin embargo todos justificaron su uso de una forma u otra, con lo cual cabe concluir que dicha práctica fue altamente tolerada por los comandantes.

Por otro lado, no todos los grupos armados en las provincias del este de la RDC cometían actos de violencia sexual, como por ejemplo algunas bandas de Mai Mai que no podían mantener relaciones sexuales, ya que el hacerlo hubiera implicado perder la protección mágica que creían tener estos guerreros, a semejanza de los Simbas lumumbistas. Sin embargo, la mayoría si lo

hacían. Según Meger (2012) la violencia sexual durante este conflicto respondió a tres factores primarios: ambición económica, construcciones sociales de hegemonía masculina (como se ha visto en el Capítulo III) y la debilidad del estado y sus instituciones (visto en Capítulos I y II). En el primer caso, las violaciones tenían una relación directa con la apropiación de recursos naturales. Las provincias del este del Congo son ricas en minerales: coltán, oro, diamantes, uranio, casiterita, cobre, entre otros; muchos de los cuales aumentaron su valor considerablemente en la última década del Siglo XX como, por ejemplo, el coltán, que pasó de costar USD 65 el kilogramo en 1998 a USD 600 en 2001 (Leatherman, 2011:117). Para poder obtener los recursos naturales sin oposición alguna era necesario despejar las zonas de habitantes, para lo cual, la violencia sexual se volvió un arma eficaz y oportuna. Por otro lado se destruyó la infraestructura civil como escuelas o puestos sanitarios. Todo ello contribuyó a perpetuar el estado de violencia y terror que permitía a los grupos armados continuar con sus agendas económicas (Meger, 2012:54), quedando la tierra a disposición de estos y sus cambiantes alianzas, compitiendo o conspirando entre ellos y con los intermediarios y las corporaciones multinacionales (Meger, 118).

El 52% de las víctimas identificaban a los perpetradores como combatientes (Leatherman, 2011:119), lo cual concordaría con el restante 40% de los ataques llevados a cabo por el ejército y la Policía del Congo. Los patrones de violencia entre estos dos grupos también diferían: cuando el objetivo era infundir terror a los civiles normalmente los ataques eran llevados a cabo en banda y la violencia era extrema, incluyendo mutilaciones, asesinatos, y todo tipo de torturas sexuales. Además, los perpetradores solían saquear los pequeños poblados, despojando a sus habitantes de ganado, comida, dinero y cualquier otro objeto de valor que pudieran encontrar (Leatherman, 119), muchas veces inclusive incendiaban las chozas. Este tipo de violencia sexual debe ser entendida no como un fin en sí misma, sino como un medio para lograr un fin, ya que se vuelve una forma de violencia política, utilizándose como medio de cambio en las relaciones sociales y de desestabilización de las estructuras existentes (Meger, 2012:41-42). Básicamente, se buscaba que la violencia sexual infringiera el mayor daño y humillación posible, no solo contra las víctimas sino a sus familias y comunidades, al apuntar a través de la violencia sexual a creencias firmemente arraigadas socialmente sobre la mujer y su sexualidad (Meger, 53).

Leatherman (2011:139) explica citando a Hugo Slim que la hiperagresividad se conecta con un número de mecanismos psicológicos y sociológicos, en los cuales la violencia se vincula con lo erótico y que su ejercicio excita sexualmente a los hombres; además la violación durante la guerra conlleva el ejercicio de un poder que parece ser la fuente principal de placer, un poder absoluto sobre el cuerpo de la mujer que, normalmente, está prohibido. Por otro lado, el difundido uso de drogas para aumentar la actuación esconde el propio miedo del perpetrador a su muerte, el odio de

sí mismo y, un sentimiento de insuficiencia personal que externaliza y proyecta hacia la víctima, la cual es al mismo tiempo el instrumento y el chivo expiatorio de su propia degradación (Leatherman, 140). Ello resulta en que el perpetrador –un hombre o mujer fallido- obtenga a través de la violencia sexual el poder que funciona como un rechazo o negación de la ley, ya sea como costumbres o código de conducta, lo cual subvierte el orden sexual de la sociedad y cruza los límites previamente establecidos (Leatherman, 141). Luego que esas fronteras son atravesadas y cualquier tabú destruido, se vuelve más difícil ejercer ese poder con el mismo impacto, por lo cual es necesario traspasar nuevos umbrales de violencia, para ello hay dos estrategias: por un lado, formas más extremas de profanación de la víctima; por otro, atacar a categorías especiales de víctimas: bebés, niños o niñas, personas mayores u hombres (Leatherman, 143-144). Este es el patrón que mostró la violencia sexual de forma organizada y coherente en las provincias del este de la RDC.

Finalmente, otra ocurrencia común en el este del Congo, desde el comienzo de la Primera Guerra, fue la violación perpetrada por civiles. Estas normalmente eran cometidas por personas individuales y no incluían ataques a la familia o a la propiedad (Leatherman, 2011:119), además las víctimas eran mujeres. Uno de los motivos de este fenómeno fue la creencia difundida de que si un hombre tenía “relaciones sexuales” –aunque fuera un eufemismo de violación- con una mujer virgen, aquel quedaría protegido de enfermedades como el HIV. Asimismo, en aquellos periodos en que la violencia sexual cometida por los grupos armados decrecía porque estaban luchando entre ellos, la violaciones perpetradas por civiles aumentaba hasta un 1733% (Leatherman, 118-119), indicando la normalización social de la violencia y la falta de respuesta de las autoridades. En un clima de impunidad generalizado, por falta de mecanismos sociales e institucionales, así como por una corrupción policial y judicial extendida, las víctimas no tenían defensa alguna; por ello, cualquier hombre podía atacar sexualmente a una mujer y quedar impune.

Todo lo visto nos lleva a concluir que varias teorías responden de forma parcial al uso sistemático de la violencia sexual en el Congo. Por un lado, la tesis de la (des)organización y estructura militar, responde al tipo de violencia sexual que fuera desplegada por muchos soldados integrantes de las fuerzas regulares de la RDC en las provincias del este. Su pobre entrenamiento, las compensaciones económicas bajas o inexistentes y una débil jerarquía militar, que asimismo presentaba una por demás desmedida tolerancia a dichos actos, dieron lugar a este tipo de conductas. Esta violencia sexual presentaba fuertes características oportunistas marcadas por la falta de satisfacción de sus “necesidades sexuales”, pero también de frustración y violencia interna por parte de los componentes de las fuerzas. Por otro lado, de acuerdo al tipo de violencia perpetrado por los grupos armados encontramos que la tesis sobre el uso estratégico de la violencia sexual para infundir terror y desarmar las familias y el tejido social de esas provincias de la RDC, responde a la

actividad desplegada por aquellos. En cuanto a la teoría sobre el oportunismo y colapso social daría un comienzo de respuesta a las violaciones cometidas por civiles, que fueron mayormente producto de supersticiones místicas infundadas pero ampliamente difundidas y el quiebre social e institucional que trajo como consecuencia la normalización de la violencia. Dicho esto, no suponemos que todos los hombres tengan una predisposición natural a cometer actos de agresión sexual; empero, al caer las contenciones sociales e institucionales aquellos que se inclinarían por perpetrar dichos actos, ven su camino allanado. Finalmente, cabe agregar que la proliferación de armas livianas por el conflicto, así como hipermasculinidades exacerbadas y una marcada desigualdad de los roles de género y del estatus social y familiar inferior de la mujer en toda la región, contribuyeron al uso extendido de las distintas formas de violencia y explotación sexual.

Las consecuencias físicas y psicológicas de las víctimas de violencia sexual fueron muy similares en las tres sociedades, como se ha visto *ut supra* en este capítulo. Pero los patrones de violencia difirieron en Ruanda y Burundi con respecto a la RDC: en los dos primeros casos la mayor parte de las víctimas fueron atacadas por su pertenencia a una etnia determinada; aunque según Turner (2013:130) más de un tercio de las víctimas en Kivu del Sur eran bembe, mientras más de un cuarto eran shi, lo cual podría haberse dado ya que vivían cerca de la fronteras y fueron dos grupos que estuvieron activamente involucrados en los conflictos con los banyamulenge y con los ruandeses en general. De todos modos, Turner (2013:130) concluye que la violencia sexual fue una guerra contra las mujeres en la cual nadie estuvo a salvo. También los tres países tenían en común la desigualdad de la mujer, pero fue en RDC y Burundi durante el conflicto, y especialmente en el periodo posterior, donde hubo un aumento marcado de violencia sexual perpetrada por civiles y por soldados o rebeldes desmovilizados.

En Ruanda la violencia sexual estuvo definida por la etnia a la que pertenecía la víctima. Como explica Butler (citada en Sarlach, 1999:397), los cuerpos manifiestan diferentes marcas, entre ellas el sexo y la etnia; aunque estos marcadores pueden cambiar temporal y contextualmente, en el caso de Ruanda durante la guerra, la etnia pasó a ser el marcador principal (Sarlach, 397), a pesar de que para ello fuera necesario consultar listas o chequear las tarjetas de identificación. Las mujeres que estaban en edad reproductiva fueron especialmente victimizadas, pero eso no ocurrió como un efecto colateral del genocidio, sino que fueron blancos de una política específica dirigida por los organizadores con el propósito de destruir a todos los tutsi (Newbury, D., 1998:92). Además, las mujeres fueron objeto de todo tipo de violencia sexual, desde violaciones seguidas o no de muerte, hasta mutilaciones y esclavitud sexual, entre otros casos (Newbury, D., 92). Para ello, como se vio en el Capítulo IV, se usó la propaganda a través de los medios como la RTL M y el diario *Kangura* entre otros, ya sea a través de tiras cómicas gráficas de corte pornográfico, reforzando los

estereotipos que supuestamente presentaba la mujer tutsi, es decir, belleza e hipersexualidad; o usando elementos como “*Les Dix Commandements du Hutu*”. De esta forma, la campaña gubernamental para sexualizar y denigrar a las tutsi crearon un clima en el cual el uso de la violencia sexual masiva pareció una forma apropiada de retribución para su supuesta arrogancia, sexualidad exacerbada e inmoralidad (Sarlach, 1999:394). Por lo cual, fue común que muchas sobrevivientes contaran que en algún momento antes, durante o después de ser victimizadas sexualmente, los perpetradores hicieran expresa referencia a su etnia con frases como: “Uds. las mujeres tutsi son demasiado altaneras”, “Queremos ver si una mujer tutsi es como una mujer hutu”, o “Si hubiera paz jamás me aceptarías” (Nowrojee, citada en Sarlach, 394).

Por otro lado, dadas las expectativas de género en la sociedad ruandesa, una mujer que hubiera sido violada tenía menos probabilidades de casarse, bajando aún más cualquier posibilidad si a causa de la violencia sexual sufrida resultó en una infertilidad permanente o embarazada y tuvo al bebé; por lo cual, otra vez, cualquier tipo de agresión sexual sufrida, era coherente con los fines de los *génocidaires*. De todos modos, no solo mujeres tutsi fueron víctimas de violencia sexual o de asesinato, sino que también muchas mujeres hutu lo fueron, especialmente aquellas que no compartían la visión extremista de aplicar la Solución Final; pero inclusive, mujeres comunes, sin afiliaciones políticas, que habían logrado obtener un buen pasar económico por sus propios medios también fueron victimizadas (Taylor, 1999:160-161). A pesar de ello, fueron las tutsi quienes se llevaron la peor parte. La violación se utilizó como medio de tortura antes del asesinato en la gran mayoría de los casos, ya que el mero exterminio de los tutsi no era suficiente para algunos, se necesitaba dañarlos lo más posible, llegando a niveles de sadismo inimaginables (Sarlach, 1999:395-396). Otros, en cambio, se negaban a matar a las víctimas, ya que creían que dejarlas vivas luego de haber sufrido espantosos abusos sexuales, padeciendo los daños físicos y psicológicos, era un castigo peor que la muerte (Sarlach, 396). Asimismo, cabe señalar que en muchas oportunidades los militares alentaban las violaciones cometidas por las milicias pero no tomaban parte en ellas, por lo cual fueron responsables de parte, pero no de la mayoría de las violaciones (Nowrojee, citada en Sarlach, 395).

Según las autoras Twarigamariya y Turshen (1998:103), luego que el FPR obtuvo la victoria en Ruanda, los soldados comenzaron a violar mujeres por venganza, es decir, como retribución por lo que habían sufrido las tutsi a manos de los hutu. Además, abusaron sexualmente de aquellas que estaban presas en prisiones como Butare, afirmando que eran violaciones retributivas (Amnesty International, citado por Twarigamariya y Turshen, 103). Especialmente violento, de acuerdo a Twarigamariya y Turshen (1998:105-106) fue el tratamiento recibido por mujeres acusadas de haber pertenecido a los *Interahamwe* a manos de los soldados del FPR, a quienes culparon de

haberlas violado salvajemente, mutilarlas y humillarlas sexualmente haciendo que permanezcan desnudas. Además, se acusó a estos soldados de acosar a las mujeres tutsi para que los “recompensen” por el esfuerzo de haberlas librado de los hutu, mientras que los comandantes, otrora exigentes con la disciplina, toleraban esas conductas (Twarigamariya y Turshen, 106-107). Sin embargo, la ONG African Rights desacredita a Twarigamariya, aduciendo que su trabajo estaba impregnado de propaganda que tenía como intención representar a su propio grupo étnico, los hutu, bajo una luz más favorable (Sarlach, 1999:395). Dado, lamentablemente, lo común de ocurrencias tales como mujeres violadas en prisión por guardias de seguridad, tanto en tiempos de paz como de guerra en el mundo entero, no es de extrañar que esa denuncia hubiese sido real; además, esa información fue recopilada por Amnesty International (1995) y no por la autora cuestionada; por lo cual dadas esas entre otras consideraciones, encontramos que el trabajo citado tiene fundamentos verosímiles y aceptables.

Los casos de violencia sexual presentados en Ruanda durante el genocidio responden a la teoría del uso estratégico de este tipo de violencia, así como su uso en conflictos con movilización política de las cuestiones étnicas, en su variante más extrema: la violencia sexual genocida. En este caso, las milicias, a veces recibieron órdenes directas de usar este tipo de violencia, mientras que en otros casos fueron inducidas, a través del tiempo y la propaganda. Además, la violencia sexual fue usada de forma organizada y lógica, con un claro objetivo político que, como se ha ido viendo, no fue improvisado, sino que fue preparado con tiempo y consideración, buscando un resultado determinado: destruir a los tutsi para mantener a la elite hutu en el poder. Asimismo, y al igual que en los casos de violencia sexual en la RDC, es posible encontrar un claro componente misógino, así como una marcada desigualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad ruandesa, factores contributivos al tipo de violencia desplegada, lo cual es especialmente evidente, en el caso de las mujeres hutu que sufrieron el mismo destino que sus compatriotas tutsi, solo por el hecho de ser mujeres y no encajar en las expectativas sociales de género.

Finalmente, cabe analizar la violencia sexual desplegada en el conflicto de Burundi. Por un lado encontramos la violencia perpetrada por los componentes de las FDN desde septiembre de 1996 hasta marzo de 1997 para implementar un programa de “reagrupamiento” en campos de concentración, que desplazó forzosamente a más de 350.000 civiles hutu desde su efectivización hasta fines de 1999, con el fin de “proteger” a los civiles de los posibles ataques de los grupos rebeldes hutu (Informe de HRW, 1998:33; Feller, 2001:17). Las FDN ejecutaron una verdadera campaña de terror, usando cualquier tipo de violencia a su disposición: asesinatos, violaciones, torturas, saqueo y destrucción de propiedad, etc., para forzar a la población a reagruparse en los campos; violencia que luego continuó en y alrededor de los mismos (HRW, 1998:33). Las

violaciones de mujeres y niñas fueron moneda corriente, tanto durante el proceso de reagrupamiento, como luego dentro de los campos (HRW, 54). Además de la violencia sexual contra las mujeres hutu, los soldados de las FDN también violaron a numerosas mujeres tutsi, a las que obligaron a intercambiar favores sexuales a cambio de comida o refugio en los campos para personas internamente desplazadas (HRW, 09).

No todos los grupos rebeldes fueron perpetradores de violencia sexual. Los integrantes de las FNL, brazo armado de PALIPEHUTU, tenían prohibido por religión cometer violaciones u otros actos de violencia sexual bajo pena de muerte, por lo cual aparentemente los abusos sexuales cometidos por estos rebeldes fueron infrecuentes (HRW, 2004:7). Sin embargo, los restantes grupos rebeldes y para-militares tutsi perpetraron todo tipo de atrocidades sexuales contra la población civil, especialmente violaciones, en algunos casos seguidas de muerte, saqueo y destrucción de la propiedad (HRW, 1998:2). Gran parte de los abusos sexuales incluyeron tortura, mutilaciones y todo tipo de daño físico contra las víctimas, como quemarles parte del cuerpo o prenderlas fuego vivas. A su vez, como los grupos rebeldes luchaban entre ellos, los civiles de los cuales se sospechaba que ayudaban a un bando u otro eran castigados, ya sea por las fuerzas regulares, o por uno u otro bando insurgente.

Se puede concluir que la violencia sexual usada por los soldados de las FDN para infundir terror en la población y obligarlos a reagruparse en los campos, coincide con la teoría del uso estratégico de la violencia sexual como arma de guerra, especialmente dirigida contra una etnia determinada. Sin embargo, en el caso de la violencia desplegada contra las mujeres internamente desplazadas de la propia etnia de los soldados de las FDN, es decir tutsi, cabría recurrir a la teoría de la (des)organización militar, por la cual quedaba la vía libre para que los soldados abusaran de su poder explotando sexualmente a quienes estaban indefensos. Asimismo, como no hay evidencia que indique que el personal militar fuera disciplinado por su accionar debido, por un lado, a la debilidad del sistema militar de justicia y, por el otro, a la reticencia de enjuiciar a miembros de las fuerzas armadas (AI, 2004:9) -como mucho eran transferidos a otro campo o pueblo (Feller, 2001:19-20)-, a pesar de lo masivo y notorio de la violencia sexual, indicaría que o bien fue ampliamente tolerado o, inclusive, alentado por sus superiores (HRW, 1998:54) reforzando la aplicación de ambas teorías.

En cuanto a los grupos rebeldes, especialmente las FDD, cometieron toda clase de atrocidades sexuales, sin distinciones étnicas, más aún cuando su misión era castigar por “ayudar” a un bando enemigo. En este caso el uso de la violencia sexual fue sistemático y pensado para infundir terror en la población para evitar que apoyara a un grupo enemigo –también hutu- o a las fuerzas armadas de Burundi. Sin embargo, cuando se punía a una familia o grupo particular, es necesario cuestionar si la violación era usada también como forma de represión, o si simplemente respondía a un

oportunismo de quien detentaba una posición de poder al aplicar el castigo. Por otro lado encontramos que, en algunos casos, la violencia sexual desplegada por estas fuerzas insurgentes era oportunista, generalmente cuando venía acompañada de saqueos y robos individuales a la población civil. En muchas oportunidades esos robos, además, incluían secuestros de las mujeres, las cuales, después de un tiempo, les era permitido marcharse.

Finalmente, tanto en el caso de las FND como las FDD utilizaron la violencia sexual de forma retributiva. De esta forma, patrones de violación como represalia y contra-represalia fueron cometidos contra mujeres tutsi por las FDD, por las violaciones cometidas contra las mujeres hutu por las FND en un ciclo interminable de violencia (AI, 2004:11). Este tipo de violencia sexual respondería limitadamente a la teoría de las violaciones por motivo del marcador étnico, ya que si bien el blanco eran mujeres de una etnia determinada, no parece que se hayan usado como arma de guerra o que la etnia de la mujer haya sido el catalizador de la violencia. En cambio, este tipo de violencia sexual selectiva respondería a lo que Seifert (citada por Skjelsbæk, 2001:79) considera como una forma de comunicación entre hombres: la humillación simbólica del oponente. En un conflicto, cuando un hombre viola a una mujer perteneciente “al otro bando”, este acto comunica que el marido, padre, soldado, etc. no pudo proteger no solo a la mujer, sino también a su propiedad, su nación (Skjelsbæk, 79).

Todas estas teorías, aplicadas inclusive a los casos particulares, explican cuando o porque se usó la violencia sexual, pero no terminan de dar cuenta de las verdaderas causas subyacentes que, entendemos, fueron las que permitieron que se ejerciera ese tipo particular de violencia. A este respecto es necesario hacer mención a dos elementos que suponen y promueven la violencia sexual contra las mujeres en los tres estados: el primero de ellos fue la militarización de las tres sociedades. Esta, construyó un sistema de impunidad y una tendencia a utilizar la violencia y la represión como único medio de control de la ciudadanía y de resolución de los conflictos, lo cual requirió de masculinidades violentas y femineidades subordinadas. Ahora bien, si los hombres fueron socializados para reprimir todo lo femenino en ellos, necesariamente iban a tener que oprimir y controlar todo lo femenino de su entorno, ya que para poder cometer atrocidades contra las mujeres, necesitaban una construcción psicológica que redujera a las mujeres a una simple propiedad y fuera cosificada como el “otro” (Pillay, 2001:43). Justamente, esa percepción de “alteridad” fue la que permitió que los hombres perpetren los actos más viles contra las mujeres (Pillay, 43).

Inclusive el odio étnico, solo fue otro argumento que usaron los hombres para excusar la violencia contra la mujer, a la cual se atacaba en parte por su etnia, pero principalmente por su identidad de mujer (Twagiramariya y Turshen, 1998:103). El odio a la mujer, el más antiguo de todos, es el odio al “otro”; la violencia deviene, entonces, completamente justificada, especialmente

cuando ese odio se vuelve parte de la ideología misma del estado (Zajovic, citada en Kelly, 2000:55), entonces el cuerpo de la mujer se vuelve figurativa y literalmente un sitio de combate (Twagiramariya y Turshen, 1998:103).

Luego, el segundo elemento, es la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres que sirvió como cultura de soporte a la violencia sexual. De esta forma, cuando se utilizó a las violaciones como arma de guerra y medio de destrucción del tejido social y familiar, ese uso racional y estratégico no surgió de una idea al azar, sino que fue fomentado por un sistema de creencias determinado. Como se vio en el Capítulo III la colonización desvirtuó las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres, generando un sistema de violencia social donde se privilegió al hombre nativo, el cual, de todos modos, era subordinado al europeo, pero superior a la mujer africana. Esa violencia debe verse en su totalidad, ya que permeó todos los niveles de la sociedad y se expresó en la vida de las mujeres en el ámbito económico, político, cultural y laboral (Pillay, 2001:42), pero especialmente, en la esfera familiar, donde la mujer dejó de tener un rol complementario al del hombre, pasando a ser su dependiente y subordinada, es decir, de su “propiedad”. Entonces encontramos que las fuerzas del orden acosaron a las mujeres y no las defendieron; los gobiernos abusaron de ellas verbalmente y sistemáticamente les negaron sus derechos; las religiones les vedaban autonomía y justificaban su sometimiento; luego las familias, pero especialmente los maridos, las rechazaban cuando habían sido víctimas de violencia sexual. Como las causas subyacentes nunca fueron tratadas, la violencia continuó. Su generalización apunta a un complot de las fuerzas sociales –de la cual participaron muchas mujeres, ya que eran las primeras en inculcar ciertas nociones de masculinidad en los niños- para mantenerlas en un estatus inferior y, de esta forma, manejar la amenaza que ellas suponían para los hombres (Pillay, 43).

CAPITULO VI

NO HAY POST-CONFLICTO PARA LAS MUJERES¹⁹

“I am now convinced, that no great improvements in the lot of mankind are possible, until a great change takes place in the fundamental constitution of their modes of thought” John Stuart Mill (Autobiografía, 1873).

MESAS DE PAZ

En términos generales, y como se verá que también ocurrió en las negociaciones de paz de los países bajo estudio, las mujeres están llamativamente ausentes de las mesas de paz en roles oficiales (UN Women, 2012:3). Como argumenta Whitman (2006:31), es sugestivo como los hombres que frecuentemente planean las guerras, luego se espera que también diseñen los procesos de paz. Estos llegan a las negociaciones directamente desde el teatro bélico, mientras las mujeres suelen hacerlo desde las organizaciones civiles de base o desde sus casas y, sin embargo la actitud tradicional sobre la guerra y la paz es excluir a las mujeres, quienes son ignoradas o vistas solo como víctimas (Hunt y Posa, 2001:38). Esta verdad es irrefutable y los números hablan por sí mismos: desde 1992

¹⁹ Este título fue tomado del primer capítulo de la obra de Meintjes, Pillay y Meredith (2001).

hasta 2009 solo un 2,4% de los firmantes de un tratado de paz en cualquier conflicto del mundo han sido mujeres (Informe de NU, citado en Ellerby, 2013:436). Ello resulta en que la mayor parte de los acuerdos raramente hagan mención a las cuestiones de seguridad que les preocupan a las mujeres (Ellerby, 436), a pesar de que las pocas que participan los tengan presentes o les sean recordados.

Esta situación responde a que en el clima tenso de las negociaciones se tienden a reforzar las actitudes sociales prevalecientes de exclusión de las mujeres, donde el poder se mantiene firmemente en las manos de una elite compuesta por hombres, los cuales ven la actuación y las preocupaciones femeninas como separadas de la esfera política (Anderlini, 2000:10). Además, la mayor parte del activismo de las mujeres durante el conflicto es normalmente devaluado como accidental, por lo cual deviene marginalizado cuando la política requiere mayor estructura y jerarquía como en los procesos de paz (Meintjes et al., 2001:8 y 9). Específicamente en el caso de África, un oficial de Naciones Unidas expresó que las mujeres son excluidas de los equipos de negociación porque los líderes temen que ellas cedan y hagan demasiadas concesiones (Hunt y Posa, 2001:46).

En el caso de los tres países bajo estudio, Burundi, Ruanda y la RDC, hubo negociaciones con mediación internacional para alcanzar la paz, aunque con resultados muy dispares que, sin embargo, tuvieron en común que difícilmente podrían considerarse un éxito de la diplomacia internacional. Los Acuerdos de Arusha para resolver la guerra civil de Ruanda, según la visión de algún autor (Jones, B., 1999) impuso condiciones de imposible cumplimiento para los elementos extremistas de Kigali, por lo cual luego de estos acuerdos en lugar de llegar la paz, sobrevino la ejecución de la Solución Final. El conflicto, en principio, terminó luego que el FPR tomó la ciudad de Kigali, liberando el país a su paso de las FAR y de las milicias armadas. Como no se ha encontrado evidencia sustentada en criterios académicos que hayan participado mujeres en estos acuerdos de Arusha por ninguna de las dos partes, en este apartado ya no se tratarán estas negociaciones.

Por su parte, en la RDC, los acuerdos de paz abrieron un periodo de transición que duraría tres años bajo la presidencia de Laurent Kabila y cuatro vice-presidencias repartidas entre dos líderes rebeldes, un representante del gobierno anterior y otro de la oposición no armada (Kisangani, 2012:152), lo cual marcó oficialmente el fin de la llamada Segunda Guerra del Congo. Lamentablemente, el conflicto realmente no terminó, y mucho menos en el este del país, donde más de 1.000 civiles seguían muriendo diariamente (Autesserre, 2006:2), debido a desavenencias políticas y económicas locales que continuaban generando masacres y desplazamientos forzados de personas (Autesserre, 3). Estas, a su vez, no tardaron en reavivar el resurgimiento de milicias, especialmente mediante nuevas injerencias de los países vecinos.

El 14 de diciembre de 1999 el ex-Presidente de Botsuana, Sir Ketumile Masire fue nombrado como mediador para el Dialogo Inter-congoleño por la OUA (Whitman, 2006:34). Después de muchas demoras y obstáculos, por fin decidieron en 2001 que, en las rondas venideras, participarían delegados de las provincias, los grupos insurgentes, la oposición no armada, el gobierno y representantes de todas las esferas de la sociedad civil: grupos de mujeres y religiosos, activistas de los derechos humanos, grupos de jóvenes y representantes de los sectores profesionales y comerciales (Whitman, 36). Después de tres años de negociaciones y los convenios parciales de Sun City en febrero de 2002, el proceso terminó con la firma de un acuerdo en la ciudad de Pretoria el 19 de abril de 2002, el cual constaba de 34 resoluciones, que luego fueron ratificadas en Sun City, en abril del 2003 con la implementación del gobierno de transición.

La incorporación de las mujeres no fue un proceso sencillo, ya que el acuerdo que abrió el Dialogo no preveía su participación y de los 73 delegados que habían elegido las provincias solo 6 eran mujeres, habiendo varias recibido expresas instrucciones de no promover temas relacionados con cuestiones consideradas femeninas, además de que solo estaban ahí porque eran esposas o novias de participantes clave del encuentro (Whitman, 2006:38). A su vez, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), había mantenido charlas con Masire para promover la participación de más mujeres, por lo cual el mediador pidió a los partidos políticos que aumentaran el número de delegadas (Whitman, 39). Finalmente, participaron un total de 40 mujeres en las rondas del Dialogo en Sun City, lo cual representaba solo un 9% del total de los delegados, ya que a pesar del expreso pedido del mediador, como no era obligatorio incorporar más mujeres, no se hizo (Whitman, 39-40). Por su parte UNIFEM patrocinó un grupo de 14 mujeres para asesorar a las delegadas participantes, todas las cuales se habían reunido previamente en Nairobi; lideradas por Ruth Sando Perry (ex-presidente de Liberia) redactaron en dicho encuentro la Declaración de Nairobi y un Plan de Acción (UN Women, 2012:3).

Una de las mayores contribuciones que hicieron las mujeres fue durante la primera ronda de negociaciones en Sun City, en donde bloquearon la salida de los delegados cuando estos estaban prestes a echarse atrás por cuestiones técnicas, no permitiéndoles marcharse hasta que no se firmaron los acuerdos provisorios (Whitman, 2006:42).

Burundi también tuvo su larga etapa de negociaciones que finalizó con la firma de los Acuerdos de Arusha por el gobierno y algunos de los grupos rebeldes, mientras que otros se fueron incorporando con el paso del tiempo. Las rondas de negociación se abrieron en julio de 1998 con la mediación del ex-presidente tanzano Julius Nyerere y, luego de su fallecimiento, ocupó su lugar Nelson Mandela. A la sociedad civil no se le permitió participar (Anderlini, 2000:21) y por supuesto no había mujeres entre las partes presentes, a pesar de que se estaba debatiendo el futuro

del país (Reyntjens, 2000:20). Pero las mujeres no se quedaron calladas, tutsi y hutu por igual, comenzaron a protestar ante esta exclusión y a pedir un lugar en la mesa de negociaciones (Aderlini, 2000:21). La respuesta de los delegados no se hizo esperar y le expresaron al mediador que: “Las mujeres no son parte del conflicto. Este no es asunto de ellas. No vemos porque vinieron y porque nos molestan. Nosotros estamos acá y las representamos” (Anderlini, 10). Ante esa negativa decidieron buscar apoyo de los otros líderes regionales.

En un encuentro de mujeres llevado a cabo en Uganda, las delegadas burundesas le pidieron ayuda al Presidente Yoweri Museveni, quien les dio su aprobación además de ayuda financiera a través de donaciones internacionales para que viajaran a Arusha y sometieran la cuestión a Nyerere (Anderlini, 2000:21). A pesar de explicarle al mediador que ellas constituían el 52% de la población y que no aceptaban ocupar únicamente el lugar de víctimas, de argumentar que durante las crisis ellas eran quienes debían “recoger los pedazos”, y la solidaridad expresada por el entonces presidente tanzano, la respuesta fue la misma, eran sus propios hermanos burundeses que no aceptaban su participación (Anderlini, 21). Finalmente, al ver que las mujeres no cedían, que permanecían en los pasillos durante las sesiones y continuaban presionando a los donadores internacionales, les permitieron asistir a solo siete como observadoras (UN Women, 2012:9).

Luego, Nelson Mandela continuó involucrando a las mujeres y facilitando su inclusión. En julio del 2000, las mujeres lograron llevar a cabo una conferencia de paz que duró cuatro días e incluía a las observadoras y delegadas de los 19 partidos que se habían sentado en la mesa de negociación (Reyntjens, 2000:30). Durante este encuentro, redactaron una declaración con propuestas que le presentaron a Mandela para su aprobación, incorporándose la mayoría de aquellas al acuerdo final (UN Women, 2012: 10).

Como se puede ver la participación de las mujeres en las mesas de paz estuvo llena de altibajos, una escasa presencia y casi ninguna posibilidad de ejercer poder o presión sobre los hombres que participaban en las negociaciones, muchos de los cuales eran responsables directos de las agresiones que llevaron a las guerras que sufrieron esos países. Aunque es verdad que la presencia de mujeres no garantiza que se traten temas que beneficien o les preocupen a las mujeres en general, y que las mujeres son tan vulnerables a caer en divisiones étnicas, políticas o religiosas como los hombres, también es cierto que, mayormente, llegan a las mesas de paz desde el activismo civil y que sin su participación las cuestiones de género femenino jamás hubieran formado parte de la agenda (Anderlini, 2000: 32-34). Es que las mujeres se presentan a las negociaciones con otras preocupaciones; mientras ellas buscaban terminar el conflicto, aún a costa de hacer concesiones, los hombres estaban más preocupados en cómo se va iba dividir el poder y que posición iban a ocupar al final de los acuerdos (Anderlini, 33). Tal vez por ello, los representantes de los distintos partidos

políticos de Burundi no solo les negaron participación a las mujeres sino que, además, trataron de romper sus filas argumentando que las delegadas debían apoyar a sus respectivos partidos, en lugar de actuar como un corte transversal a estos (Anderlini, 29).

Las mujeres burundesas al alinearse de acuerdo a su identidad de género, eligieron compartir sus experiencias como mujeres, madres y viudas sobreponiéndose a las líneas divisorias que les exigían los hombres; rechazando, de esta forma, el control masculino que aquellos pretendían imponerles a través de la identidad étnica. El catalizador para oponerse al marcador étnico en favor del de género, ocurrió cuando las mujeres se definieron a sí mismas, adquiriendo el control de su propia sexualidad y potencial de reproducción, rechazando la violencia étnica y su posición de “hito fronterizo de la etnia” (Handrahan, 2004:439). A su vez, como aquellas mujeres que decidieron romper con este control corrían mayor riesgo de ser apartadas de su propia comunidad, no es extraño que hayan buscado la solidaridad y apoyo en otras mujeres que intentaban lograr el mismo corte con la identidad étnica impuesta por el orden patriarcal (Handrahan, 440).

Una de las consecuencias de la exigua participación y de la falta de poder de las mujeres en estas mesas de paz, fue la poca cantidad de provisiones referentes a temas de seguridad considerados de género femenino como, por ejemplo, en el caso de la RDC donde la violencia sexual contra las mujeres y su incorporación forzada a las milicias tuvo proporciones epidémicas, no hubo ninguna manifestación expresa sobre el castigo a los perpetradores o a las mujeres combatientes (Whitman, 2006:42). Sin embargo, el concepto de “seguridad inclusiva” que tiene un enfoque hacia la estabilidad global, debe verse enfatizando el accionar de las mujeres y no su vulnerabilidad (Hunt y Posa, 2001:38), dado que son ellas quienes generalmente están en el centro de los movimientos que procuran poner fin a los conflictos. Esta perspectiva amplía las herramientas disponibles para las estructuras políticas, militares y diplomáticas, y las pone en contacto directo con las fuerzas de base para lograr la paz (Hunt y Posa, 38); en pocas palabras, es una cuestión de eficiencia contar con la colaboración de la sociedad civil -y notablemente de las mujeres-, cuando realmente se busca terminar una guerra. Pero nuevamente, se dejó pasar la oportunidad.

Las pocas disposiciones que se incorporaron a los acuerdos referentes a las mujeres, tuvieron un aún menor cumplimiento. Como explica Enloe (citada en Whitman, 2006:33), los hombres son los jugadores clave en hacer y deshacer la gobernabilidad de una sociedad, entonces son sus preocupaciones sobre seguridad las que encabezan la agenda. De todos modos, se podría considerar que las cláusulas incorporadas fueron una victoria de las delegadas y observadoras dadas las circunstancias.

De este modo, y como un primer paso en el camino correcto, se reconoció durante el Dialogo

Inter-Congoleño la violencia contra las mujeres y niños; y se le otorgó a la Comisión de Verdad y Reconciliación jurisdicción para tratar cuestiones referentes a violencia sexual contra mujeres y niñas durante la guerra (Ellerby, 2013:449). Otro tanto hizo el Acuerdo de Arusha para Burundi, donde también se reconoció la vulnerabilidad de mujeres y niños, comprometiéndose a erradicar la violencia de base que sea violatoria de los derechos humanos de las mujeres, así como asegurar la protección de las viudas (Ellerby, 349-350). A su vez este acuerdo, manifestó la necesidad de reformar los desequilibrios de género existentes en las fuerzas de defensa y seguridad; así como la participación de las mujeres en la Comisión de Justicia Transicional, y también se incluyó la necesidad de que estas participen en los programas de DDR (Ellerby, 448), lo que tuvo un escaso éxito a pesar de la normativa.

CONSECUENCIAS EN EL POST-CONFLICTO

Si bien el post-conflicto se refiere al periodo de tiempo en el cual los combatientes “oficialmente” dejan de enfrentarse en combate (Handrahan, 2004:429), no quiere decir que sus fronteras de comienzo y fin sean fácilmente identificables. Ello así, porque por lo menos en un primer momento el conflicto suele persistir aunque menguado, en focos más o menos esporádicos o recurrentes, aún habiéndose firmado un tratado de paz (Brück y Vothknercht, 2011:87). A su vez, determinar el fin del post-conflicto es más difícil aún, tomándose la realización de elecciones libres como una forma de juzgar la normalización social y administrativa (Brück y Vothknercht, 87).

Aunque sea académicamente oportuno hacer estas distinciones, para las mujeres que han vivido el conflicto, sin importar que lugar hayan ocupado en este, la diferencia no solo es netamente teórica, sino que no guarda ninguna relevancia. La violencia en el post-conflicto sigue en niveles tan altos como durante la guerra; empero, mucha pasa de ser perpetrada por los combatientes en el campo de batalla para convertirse en violencia doméstica; el activismo es tan o más necesario que durante el conflicto debido a la falta de recursos para normalizar la educación, la salud, o brindar apoyo a las víctimas y a los ex-combatientes desmovilizados; la situación económica de las mujeres -y de la población en general- no varía; gran parte de esta sigue desplazada, ya que aunque hayan intentado volver a sus propiedades, muchas fueron destruidas o están ocupadas; y la inseguridad general debido a la proliferación de armas es rampante. Ello sin mencionar los continuos focos de conflicto con grupos insurgentes que no firmaron los acuerdos de paz y por ende no depusieron las armas.

Por ello es muy difícil no solo tratar el post-conflicto como una fase definida, sino también hablar de las consecuencias en general de la pos-guerra, ya que los escenarios que se presentan son

tan variados como los conflictos mismos (Meintjens et al., 2001:4). Lo único que es casi posible generalizar, es que la situación de las mujeres no mejora, que la violencia contra ellas es tan endémica que se vuelve invisible y aceptable como la norma (Handrahan, 2004:430), y que mientras que una gran mayoría ven sus posibilidades de progreso truncadas, otras en el mejor de los casos, logran volver a la estabilidad pre-conflicto, e inclusive aquellas que parecen haber obtenido ganancias, raramente pueden mantenerlas.

LA VICTIMIZACION CONTINUA

SITUACION FAMILIAR Y SOCIAL

Las guerras en estos países de la región de los Grandes Lagos, fueron especialmente perjudiciales para los amplios lazos de amistad y solidaridad comunitaria que existían en el periodo anterior (Newbury y Baldwin, 2000:3). Especialmente en Ruanda, donde las divisiones a lo largo de las líneas étnicas, desmembraron familias y pusieron a amigos y vecinos en contra de quienes antes eran parte de sus redes sociales, implicaron un legado de miedo, desconfianza e inseguridad en el post-conflicto. De este modo, muchas mujeres que perdieron toda o parte de sus familias y amigos, se encontraron solas y desamparadas sin tener a quien recurrir, ya que tampoco tenían el sistema de apoyo con el que hubieran contado en el pasado. Asimismo, muchas mujeres tutsi sobrevivientes, no quisieron volver a sus viviendas por miedo a sus vecinos hutu, de los cuales sospechaban que habían participado del genocidio (Newbury y Baldwin, 4).

Una importante cantidad de mujeres quedaron en un estado de completa indigencia, sin siquiera tener un lugar donde vivir, lo cual les dificultaba sobremanera poder mantener a sus hijos o ayudar a los familiares sobrevivientes, especialmente dadas las limitaciones legales de obtener acceso a las propiedades (Newbury y Baldwin, 2000:3) imperantes en dichas sociedades, tales como la imposibilidad de heredar en Ruanda o la costumbre de los parientes por parte del marido, a pesar de la expresa igualdad de derechos sucesorios en el Congo, de quitarle los bienes a las mujeres viudas. Aunque con el tiempo la ley cambió en Ruanda, el daño ya estaba hecho.

Aquellas mujeres cuyos hombres jamás volverían, no solo tuvieron que enfrentar el dolor de la pérdida de un ser amado, sino la disminución de su estatus social, ya que, en estas sociedades donde el valor de una mujer siempre estuvo asociado no a su propia identidad, sino en relación con ser la “esposa de alguien”, afectó su posición en la sociedad y su seguridad económica (Handrahan, 2004:436). Entonces, mujeres que antes de las guerras civiles habían gozado de una buena posición económica, o aunque más no fuera una cierta seguridad junto a sus maridos, en el post-conflicto se

encontraron en la indigencia, dependientes de la buena voluntad de los parientes o de los escasos servicios sociales (Turshen, 1998:16). Por otro lado, aquellas viudas que habían formado parte de matrimonios inter-étnicos en Ruanda, eran vistas con recelo por sus parientes hutu o tutsi, ya que sin importar a que etnia pertenecían debían responder a la pregunta: “¿porque seguían vivas?” y, normalmente, se les negaba acceso a las propiedades de sus esposos (Newbury y Baldwin, 2000:4; Twagiramariya y Turshen, 1998:111).

A su vez, aquellas mujeres que retornaban de los campos de refugiados se vieron impedidas de volver a sus propiedades. Uno de los motivos fue la falta de registro legal de los matrimonios, ya sea porque se habían realizado en los campos, o bien porque se habían concretado antes del genocidio pero por falta de dinero para pagar la dote el matrimonio no había sido registrado (Newbury y Baldwin, 2000:8). Pero, además, en el caso de Ruanda, muchas de las propiedades habían sido ocupadas ilegalmente por los refugiados tutsi que habían vuelto de los países vecinos (Twagiramariya y Turshen, 1998:112). A pesar de que ese bien le hubiera pertenecido al recién llegado tutsi antes de exiliarse, según las leyes ruandesas, aquellos que habían estado fuera del país por más de 10 años no podían reclamar automáticamente las propiedades (Twagiramariya y Turshen, 112).

Otro grupo vulnerable de mujeres en Ruanda fueron aquellas cuyos maridos se encontraban en prisión acusados de haber participado en el genocidio; estas eran vistas con recelo y a veces excluidas de sus comunidades dado que se sospechaba que habían colaborado de alguna manera con la masacre (Newbury y Baldwin, 2000:4). Estas mujeres no solo debían mantener a sus familias, sino que se esperaba que llevaran alimentos a sus maridos en prisión (Newbury y Baldwin, 4). Aunque no eran técnicamente viudas, se encontraban tan desamparadas como aquellas, ya que muchas veces también se les impedía el acceso a sus propiedades, y mantener a sus familias además de un hombre en prisión mermaba considerablemente sus escasos recursos (Newbury y Baldwin, 8). Por otro lado, estas mujeres solían ser víctimas de extorsiones, ya que según Twagiramariya y Turshen (1998:108) los soldados u otras autoridades que estuvieran a cargo de las prisiones exigían algún “favor” a cambio de autorizar las visitas. De este modo, como era posible considerar que estas mujeres habían prestado consentimiento, no podían recurrir a la justicia (Twagiramariya y Turshen, 109)

VIOLENCIA SEXUAL

Lamentablemente, la violencia sexual no cesa en el post-conflicto, al contrario, en algunos casos como en Burundi se agrava. El hecho de que la guerra haya llegado “oficialmente” a su fin,

no implica en lo absoluto el cese inmediato o total de las hostilidades y, mucho menos, contra la población civil. Puntualmente, hubo dos hechos que permitieron la continuación de la violencia y explotación sexual contra las mujeres: el primero fue el masivo flujo de armas pequeñas y livianas, las cuales no fueron, evidentemente, recuperadas en los programas de DDR y que, por otro lado, eran constantemente traficadas a través de las fronteras; y en segundo lugar, la cultura de impunidad que se generó en estas sociedades, sumada a la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades de poner un freno a estas situaciones. Estos extremos generaron que en el escenario de post-guerra gran parte de los perpetradores fueran civiles sin conexión con el conflicto armado. Finalmente, muchos de los soldados e integrantes de las milicias desmovilizadas al retornar a sus casas no encontraban un rol positivo que jugar o, siquiera, la forma de re-acomodarse a la vida civil, lo cual derivó en continuos estallidos de violencia doméstica e inclusive sexual, formación de bandas criminales y abuso de drogas y alcohol.

Aunque no hay estadísticas confiables en Burundi sobre los ataques sexuales en el post-conflicto, Médicos sin Fronteras reportó atender alrededor de 120 nuevos casos por mes (Zicherman, 2007:48). Lamentablemente, la mayoría de los casos denunciados habían sido cometidos por maestros o familiares no cercanos, lo que demuestra que la guerra civil tuvo un fuerte impacto en la observancia de normas sociales que otrora se respetaban; así como la ausencia total del estado, ya sea en su poder de policía o a través de la justicia, para poner un freno a aquellas situaciones (Zicherman, 48). Las mujeres solas o viudas eran especialmente vulnerables, ya que se las veía como desprotegidas, por lo cual eran presas fáciles de agresión sexual, atento que los perpetradores no temían retribución alguna (Zicherman, 48). A su vez, los mismos miembros de los gobiernos locales exigían “favores” sexuales a las mujeres a cambio de alimentos u otro tipo de asistencialismo (Zicherman, 48). Por otro lado, y a pesar de la prevalencia de ese flagelo, continuó siendo tabú hablar de ello, y muchas veces se resolvió mediante los métodos tradicionales: el pago de una compensación económica al padre o marido de la víctima o el casamiento forzado de esta con el agresor (Zicherman, 49).

En Ruanda no era extraño que los soldados del FPR presionaran a las jóvenes tutsi a mantener relaciones con ellos en ‘reconocimiento del sacrificio’ que estos habían hecho durante la guerra (Newbury y Baldwin, 2000:5). Estos actos, que no siempre eran consensuados, se los conocía como *intsinzi*, y muchas mujeres fueron obligadas a ofrecerse por miedo a ser acusada de colaboración con el régimen depuesto y enviadas a prisión (Twagiramariya y Turshen, 1998:109). Otras jóvenes, mayormente tutsi, a las cuales se las conoció como “niñas del cielo raso”, porque era donde solían encontrarlas escondidas los combatientes tutsi, eran consideradas como botín de guerra; aunque normalmente eran enviadas con los comandantes, no siempre lograron liberarse de

sus “salvadores” sin pagar un precio (Twagiramariya y Turshen, 108). A su vez, muchas mujeres hutu denunciaron haber sido acusadas de pertenecer a los *Interahamwe* por lo cual fueron golpeadas, violadas o maltratadas por los soldados del FPR, quienes, en algunos casos argumentaron que lo hacían para vengar a las mujeres tutsi; otras mujeres detenidas, por ejemplo en la prisión de Butare y en la Escuela Técnica de Gienyi, también denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte del FPR (Twagiramariya y Turshen, 106). Por otro lado, no mucho tiempo después de terminado el genocidio, comenzaron las incursiones armadas de los *Interahamwe* que cruzaban desde el Zaire para atacar a las poblaciones que vivían cercanas a la frontera, muchas mujeres tutsi sobrevivientes fueron atacadas brutalmente para, supuestamente, borrar testigos (Newbury y Baldwin, 2000:5).

Por su parte en las provincias del este de la RDC, la violencia sexual continuó a niveles altísimos durante el gobierno de transición, ya que si bien esto marcó el fin oficial del conflicto, esas provincias continuaron plagadas de grupos insurgentes y distintas milicias. A su vez, los propios soldados congoleños fueron responsables de una importante cantidad de los crímenes sexuales cometidos contra las mujeres. Las mujeres del Congo vieron como, las practicas de la guerra, continuaron siendo usadas ininterrumpidamente durante la “paz” (Jones, A., 2008:18). Este país solo contaba con una limitada definición de violación, no habiendo otras leyes que expresamente tipificaran ese tipo de delitos, por lo cual quedaban excluidos todos los agravantes como tortura y mutilación sexual; además el sistema de justicia no tenía la capacidad de lidiar con esa problemática (International Crisis Group [ICC], 2006:10). Si bien hubo una ley bajo estudio para dar una respuesta a ese fenómeno, por lo menos hasta el año 2006 la comisión que la estudiaba no había hecho progresos significativos, tanto por falta de interés como por ineficiencia propia (ICC, 10).

Por otro lado, con el fin del conflicto, muchos de aquellos combatientes que habían formado parte de los grupos insurgentes se unieron a las FARDC, por lo cual las mujeres vieron como aquellos rebeldes que las habían sometido a toda clase de abusos y torturas sexuales eran incorporados al ejército y promovidos. A pesar de la oposición de grupos activistas, eso no pareció importarle a las altas esferas del poder (ICC, 2006:17). Esto no solo contribuyó a cimentar la idea de impunidad, sino que contribuyó directamente con el miedo de las mujeres, quienes vieron como los violadores de ayer eran las nuevas autoridades a las que estaban sujetas (ICC, 17).

VIOLENCIA DOMESTICA Y SOCIAL

La violencia contra las mujeres puede tomar muchas formas. Mientras que las

manifestaciones de maltrato son las más comunes, hay otros tipos de violencia menos visibles, pero no por eso menos eficaces tales como: la desigualdad en la distribución de los recursos económicos, en el acceso al poder, en la distribución de las tareas domésticas (Giberti y Fernandez, 1989:16), o en los silencios que se les imponen a las mujeres, entre otros. Quienes sobrevivieron a los conflictos en Ruanda, Burundi y las provincias del este de la RDC sufrieron alguna o todas ellas. Sin embargo, como esta violencia se dio en la esfera privada, la cual no es del dominio público, esta problemática fue siempre marginalizada políticamente en el post-conflicto, tanto por los mediadores de paz como por quienes ocupaban cargos de poder en el gobierno (Meintjes, 2000:9)

El reintegro a la vida civil y a un entorno doméstico, no ha sido simple ni para los hombres, ni para las mujeres en el post-conflicto. El retorno de los combatientes hombres significó un aumento de la violencia intra-familiar (Handrahan, 2004:434) en muchos hogares. Por un lado, las mujeres perdieron la autonomía y poder de decisión que adquirieron por la ausencia de los hombres, y estos quedaron impactados frente a este empoderamiento femenino (Handrahan, 435). Como explica esta autora, sin importar que situaciones pasaron las mujeres no combatientes y que tuvieron que enfrentar, se esperaba que ellas consagraran su tiempo a los “héroes” que volvían de la guerra; minimizando o negándoles, así, las experiencias a las mujeres e, inclusive, acallando cualquier herida o dolor, especialmente de naturaleza sexual, que pudiera haber traído vergüenza al hombre.

Como las cuestiones de la reintegración social no fueron tratadas durante los procesos de DDR, y muchos hombres no tenían roles masculinos alternativos a aquellos aprendidos durante la vida militar, muchos de estos encontraron como manera desahogar la frustración y violencia contenidas maltratar a sus familias o, inclusive, violar a alguna mujer desconocida o vecina (Meintjes, 2000:9).

Es una verdad de perogrullo decir que quienes eran más vulnerables en el periodo de post-guerra eran los pobres y desempleados (Meintjes, 2000:9). La reconfiguración de las relaciones de género durante la reconstrucción, especialmente entre las personas de baja posición social y los refugiados, normalmente volvió a implicar el poder del hombre y la subordinación de la mujer. Cualquier recurso disponible se otorgaba a los primeros, quienes de esta forma podían mantener el control de las mujeres; ello implicaba que si estas osaban desafiarlos de alguna manera, los hombres recurrían a la violencia debido a su propio sentido de vulnerabilidad (Meintjes, 9). Por ejemplo en Burundi, el 65% de las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica tenían una baja posición económica, mientras que el 86% de estas eran huérfanas (Ogunsanya, 2007:11-12), no contando con el apoyo de una familia para esas situaciones. Pero aún en los casos en que la mujer no estaba subordinada económicamente al hombre, también corría peligro y, tal vez aún más, ya que la propia identidad masculina se veía atacada.

Asimismo, en aquellas familias donde las esposas eran quienes proveían los ingresos necesarios para su manutención por falta de trabajo de los maridos, estas eran vistas con sospecha por los hombres, quienes no creían que tuvieran trabajos “decentes”, sino que se estaban dedicando a la prostitución, lo cual generaba desconfianza y episodios de violencia intrafamiliar (Maclin et al., 2015:124). A su vez, estos hombres no cuidaban a los niños mientras las mujeres trabajaban: algunos porque pasaban sus días buscando trabajo, otros porque se habían vuelto alcohólicos o, simplemente, porque se habían vuelto abusivos con los hijos, por lo cual muchos se iban de sus hogares volviéndose niños de la calle (Maclin et al., 125), que tarde o temprano, pasaban a engrosar las filas de los insurgentes. Por otro lado, las familias muy afectadas por la pobreza intentaban casar a sus hijas lo antes posible para tener una boca menos a la cual alimentar; a veces, apenas eran menores que aún no se habían desarrollado como mujeres (Zicherman, 2007:48), lo cual derivó en matrimonios precipitados, donde las jóvenes esposas estaban sujetas a todo tipo de maltratos por parte de sus nuevos maridos.

Finalmente, resta decir que esas situaciones de desconfianza, violencia doméstica y desintegración de la familia solo han creado más obstáculos para recomponer estas sociedades devastadas por las guerras.

TRABAJO Y ECONOMIA

En estas sociedades patriarcales donde las mujeres han estado totalmente sometida al hombre, por lo menos desde el periodo colonial en adelante, las limitaciones que tenían para desarrollarse económicamente antes de las guerras persistieron en el post-conflicto, atento a que se volvió a lo que se consideraba socialmente “normal”, quitándoles cualquier posibilidad de empoderamiento (Brück y Vothknecht, 2011:96). A su vez, aquellas mujeres que debían mantener sus hogares mayormente estaban en la más abyecta pobreza y tenían menos probabilidades de salir de esta, especialmente dado el escaso acceso a la tierra (Brück y Vothknecht, 104).

Luego del genocidio, muchas mujeres ruandesas se vieron forzadas a hacerse cargo de parientes discapacitados o enfermos y, además de mantener a sus propios hijos sobrevivientes, muchas adoptaron huérfanos de parientes, amigos o inclusive niños desconocidos (Newbury y Baldwin, 2000:5). Si bien no se puede quitar el mérito a estos actos de compasión, sin dudas les agregó un peso extra a sus ya limitados medios económicos y una carga psicológica adicional ya que aquellas que consiguieron trabajo temían perderlo ante personas más jóvenes o más capacitadas. En definitiva, todas esas personas dependían de una mujer para comer, tener una vivienda y los niños, además, para que les pagaran las cuotas escolares (Newbury y Baldwin, 5).

Por ello, las mujeres viudas, o cuyos maridos estaban presos, o las adolescentes jefas de hogar, ya no contaban con un hombre para que les ayudara económicamente, o para que soportara parte de las tareas que antes del genocidio se llevaban a cabo de a dos (Newbury y Baldwin, 6).

De hecho, estos acontecimientos cambiaron el patrón de distribución de tareas domésticas y de empleo. En las familias que había un hombre como cabeza del hogar, el trabajo volvió a los patrones pre-conflicto de división de tareas de acuerdo al género, donde la mujer era quien se ocupaba de los quehaceres de la casa y el hombre el que comerciaba en los mercados, o trabajaba fuera como asalariado, ocupándose ambos por igual de los cultivos comerciales y de subsistencia en las zonas rurales (Schindler, 2011:15). De todos modos, la carga laboral siempre pesaba más sobre las mujeres del hogar que sobre los hombres, especialmente mujeres adultas o adolescentes (Schindler, 15). Mientras, en los hogares dirigidos por mujeres solas, estas se ocupaban menos de tareas domésticas y más de trabajos que le significaran un ingreso de dinero, cumpliendo los dos roles simultáneamente; además había una mayor igualdad de quehaceres entre los otros componentes de la familia, ocupándose por igual hombres y mujeres de la casa y de tareas que generaran ingresos, alterándose de esta forma los roles tradicionales de género (Schindler, 15-16).

Ello demuestra que nada cambió laboral y económicamente para aquellas mujeres que estaban casadas, las cuales enseguida volvieron a asumir los roles que tradicionalmente les correspondían (Schindler, 2011:16). A esto se le sumó, además, un ingrediente adicional: debido a la escasez de hombres jóvenes en edad de contraer matrimonio, las mujeres de ese segmento etario trabajaban más arduamente cumpliendo con las expectativas de género para demostrar su conformidad con el ideal de femineidad de la sociedad ruandesa (Schindler, 16) y, de ese modo, tener mayores probabilidades de contraer matrimonio.

Por otro lado, los hogares que eran llevados adelante por mujeres eran especialmente vulnerables a la pobreza debido a la falta de acceso a la tierra -por ejemplo en Ruanda cada casa tenía un promedio de media hectárea para trabajar-, al ganado y a la falta de trabajo (Newbury y Baldwin, 2000:7). Pero especialmente la poca cantidad de tierra cultivable que tenía cada familia obligaba a buscar trabajo fuera de la casa, por lo cual en el post-genocidio no era extraño encontrar mujeres trabajando como jornaleras en los campos o en algún sitio de construcción (Newbury y Baldwin, 6-8). Debido a las costumbres tradicionales de esos países la gran mayoría de las mujeres no estaban adecuadamente preparadas para llevar adelante un comercio, pagar impuestos o siquiera manejar una cuenta bancaria (Newbury y Baldwin, 8), además de no tener acceso alguno al crédito, todo lo cual dificultaba enormemente no solo mantener a la familia, sino ejercer cualquier tipo de actividad comercial.

Por la falta de capacitación y acceso al crédito, la mayoría de las mujeres que dirigían sus

hogares y dependían de la agricultura para ganarse la vida, se volcaron a los cultivos básicos de subsistencia (Brück y Vothknecht, 2011:100). Lamentablemente esos sembradíos, si bien podían llegar a alimentar a la familia, eran insuficientes para generar un ingreso adecuado que cubriera el resto de las necesidades de cosas tan básicas como, por ejemplo, jabón. La vulnerabilidad de las mujeres les impedía que se arriesgaran a usar sembradíos comerciales que podían implicar un mayor riesgo, ya que ante la pérdida de la cosecha no tenían ningún ahorro o sistema de amparo donde apoyarse (Brück y Vothknecht, 101).

En cuanto al sector formal de la economía, muy pocas mujeres tuvieron acceso a este, a pesar de que en el post-conflicto el sector privado suele aumentar sus actividades debido a la reconstrucción social (Brück y Vothknecht, 2011:102). Esa situación respondía a varias razones: primero, las mayoría de las mujeres no tenían la capacitación o conocimientos necesarios para trabajar en el ámbito privado; en segundo lugar, la responsabilidad que recaía sobre las mujeres de cuidar y criar a sus hijos así como la falta de guarderías para los pequeños, contribuían a la marginalización de las mujeres (Brück y Vothknecht, 102); finalmente, se les dio prioridad a los ex-combatientes hombres en la adquisición de empleos, aunque estos tampoco tuvieran los conocimientos necesarios; ello así, porque se esperaba que las mujeres retomaran sus tareas tradicionales domésticas de la pre-guerra, bloqueando cualquier apariencia de un proceso transformativo (Brück y Vothknecht, 102; Meintjes, 2001:69).

Entonces, la falta de acceso al empleo formal, así como la escases de tierra y acceso al crédito para generar cultivos comerciales, contribuyeron con la “feminización” del empleo informal (Bouta et al., citado por Brück y Vothknecht, 2011:100), ya que era desde el único lugar donde podían generar ingresos. Sus actividades eran de lo más variadas, desde la venta de comida hecha hasta la elaboración casera de cerveza de banana, o la venta ambulante de productos básicos (Brück y Vothknecht, 102). Sin embargo, la pobreza imperante a veces forzaba a las mujeres recurrir a actividades ilegales como el contrabando, inclusive de armas pequeñas a través de las fronteras.

También fue muy común que debido a extremas necesidades económicas muchas mujeres se vieron forzadas a prostituirse (Handrahan, 2004:434) para poder mantenerse ellas mismas o sus familias. Esta línea de trabajo aumentó considerablemente en el post-conflicto; azuzada, a su vez, por la llegada de los soldados de las operaciones de paz y de los trabajadores de ayuda humanitaria. El caso de Ruanda luego del genocidio es paradigmático, aunque no el único, con un importante crecimiento de la cantidad de mujeres jóvenes y adultas que se dedicaron a la prostitución como medio de supervivencia (Newbury y Baldwin, 2000:9). Este fenómeno que en la pre-guerra civil era excepcional y solo ocurría en las ciudades, tuvo también su expansión a las áreas rurales (Newbury y Baldwin, 9).

En las provincias del este de la RDC, el aumento de la prostitución como único medio de vida también fue alarmante. Sumado a todo lo visto, en esas provincias se adicionó otro ingrediente: como más del 50% de los ataques sexuales contra las mujeres ocurrían en sus casas, alrededor de un 16% tenían lugar mientras trabajaban los campos y los restantes en la selva o a lo largo de los caminos, por cuestiones de seguridad muchas familias tomaron la decisión de mudarse a los centros urbanos en busca de mayor protección, de esta forma la ciudad de Goma vio la cantidad de habitantes triplicada entre 1993 y 2003 (Maclin et al., 2015:120-121). Dado que las mujeres tenían muy pocas opciones para ganarse la vida en dicho medio, una porción de ellas se volcó a la prostitución, ya sea voluntariamente u obligadas por sus propias familias (Maclin et al., 121). A pesar de que siempre fue una línea de trabajo muy estigmatizada en esa sociedad, se distinguía la diferencia entre aquellas mujeres que lo hacían “por mal comportamiento” y aquellas que no tenían otra opción, aunque no justificaran el hecho de recurrir a la prostitución para mantener a la familia (Maclin et al., 123). Por supuesto, esa actividad tuvo un enorme impacto en la vida familiar de esas mujeres; especialmente los maridos o padres de estas se veían imposibilitados de cuestionarlas porque dependían de esos ingresos, pero ello no impedía que esa misma impotencia de cumplir sus roles masculinos no terminara por explotar en continuos episodios de violencia doméstica (Maclin et al., 124).

EDUCACION

Una vez llegado el fin oficial del conflicto, y con el endurecimiento de las relaciones de género que volvían a las estructuras patriarcales de la pre-guerra, nuevamente se acentuaron las disparidades en el acceso a la educación para las mujeres y niñas, las cuales fueron una vez más excluidas por razones económicas, culturales o de seguridad (Brück y Vothknecht, 2011:108).

El analfabetismo era rampante en Burundi luego de finalizada la guerra civil. El 70% de las mujeres no sabían leer ni escribir, ya que el 65% de las deserciones escolares cuando comenzó el conflicto había sido de niñas (Ogunsanya, 2007:11), las cuales, 10 años más tarde, cuando este terminó, eran adultas que no contaban ni siquiera con una educación básica. Si bien el idioma oficial de Burundi era el francés, pocas mujeres hablaban este idioma con fluidez, mientras que había muy pocas publicaciones en kirundi, lo cual no facilitaba terminar con el analfabetismo que, en algunas zonas rurales, llegaba al 100% del segmento femenino (Macauley et al., 2012:1). Por otro lado, hubo muy pocos programas en el post-conflicto que ofrecieran una solución a esa falta de conocimiento, además que era muy difícil para las mujeres encontrar tiempo para educarse, cuando enseguida debieron volver a ocuparse de las tareas domésticas y de agricultura (Macauley et al., 1).

En Ruanda la situación fue similar: en el post-genocidio las escuelas se encontraban destruidas y no había maestras ni material escolar (Newbury y Baldwin, 2000:9). Además los gastos que conlleva mandar a los niños a la escuela, los niveles de desnutrición, la necesidad de que ayuden en las tareas domésticas y agrícolas, entre otras cuestiones, precipitaron la deserción escolar especialmente entre las niñas (Newbury y Baldwin, 9). Por ello, los niveles de analfabetismo no han cesado de crecer desde comienzos de la guerra civil en 1990, alcanzando un 57,2% de las mujeres (Newbury y Baldwin, 10).

SALUD

Debido a la destrucción de puestos de salud, saqueo de hospitales, la huida del personal médico capacitado y la falta de fondos en general, los habitantes de los países bajo estudio se encontraban dificultados de acceder a la atención médica necesaria, aún luego de terminada la guerra. A su vez, los pocos puestos de salud existentes a veces se encontraban a días de caminata, lo que implicaba un enorme peligro para quienes buscaban asistencia sanitaria, no solo porque la persona enferma no estaba en condiciones de enfrentar dicho esfuerzo, sino por la cantidad de rebeldes y otros criminales que atacaban a quienes se aventuraban a hacer el viaje. Ello implicó que, por ejemplo, en las provincias del este de la RDC, aproximadamente 38.000 personas siguieran muriendo por mes, aún luego de finalizado “oficialmente” el conflicto, debido en gran parte a desnutrición y enfermedades fácilmente tratables (ICC, 2006:8).

Por otro lado, el impacto en la salud mental que tuvieron la violencia y explotación sexual en las mujeres, así como la pérdida de sus familias y los horrores vistos en general, no podían ser curados en puestos de salud, los cuales raramente contaban con la asistencia psicológica necesaria (Turshen, 1998:17). Miedo, angustia, pesadillas recurrentes, depresiones profundas, fantasear con la muerte e intentos de suicidio, automutilaciones, enfermedades somáticas, etc., son solo algunos de los muchos padecimientos mentales que sufrieron las mujeres en el post-conflicto (ver Josse, 2010). Aunque muchos de estos síntomas deberían haberse ido disipando progresivamente a medida que las mujeres procesaban las distintas experiencias que las llevaron a estos estados mentales alterados, por ciertas razones como, por ejemplo, vulnerabilidad individual, podían volverse incurables (Josse, 2010:143). Empero, tal vez una de las razones de mayor peso fueron las características especiales del entorno de recuperación: falta de apoyo adecuado, tanto familiar como social; estigmatización y discriminación; violencia social a través del reproche a la víctima, entre otros, lo cual llevo a que los trastornos de muchas mujeres persistieran hasta volverse crónicos (Josse, 143-144).

A su vez, como la mayoría de los abusos sexuales habían sido cometidos en banda, las

probabilidades de contraer enfermedades como el HIV fueron altísimas. De hecho, un importante número de mujeres sobrevivientes a las guerras civiles y a los ataques sexuales cargaron con esa enfermedad en estos países donde difícilmente había tratamientos disponibles y cuando existían, eran casi prohibitivos por su costo. De esta forma muchas mujeres que se enteraron que padecían HIV sentían que se las había condenado a muerte. Lo cual les sumó una nueva presión psicológica, el miedo de haber contagiado a sus hijos, especialmente aquellos que fueron producto de una violación, y no tener quien se hiciera cargo de esos niños si la madre fallecía cuando aún no podían valerse por sí mismos. No solo esos menores eran hijos del enemigo, concebidos a través de un acto de agresión sexual y por lo tanto víctimas de estigmatización y desprecio social, sino que podían ser HIV positivos, lo cual dificultaba muchísimo más que alguien los cuidara en caso de que la madre muriera.

El aumento de la prostitución como medio de subsistencia de las mujeres aumentó luego de las guerras civiles en los países de la región, a pesar del riesgo de contraer enfermedades como HIV que conllevaba dicha “profesión” (Newbury y Baldwin, 2000:9).

Finalmente, la falta de acceso a los puestos sanitarios y servicios de maternidad, la malnutrición por falta de recursos económicos o acceso a la tierra, juntamente con la dificultad de trabajarla por la violencia que no cesaba en el post-conflicto, las enfermedades de transmisión sexual durante las violaciones o debido al ejercicio de la prostitución como único medio de subsistencia afectaron la salud de las mujeres, reduciendo aún más su esperanza de vida que, de por sí, en estos países no superaba los 43 años.

REFUGIADOS Y PERSONAS INTERNAMENTE DESPLAZADAS (PID)

Aún luego de la finalización del conflicto, cientos de miles de personas continuaban viviendo en los campos de refugiados en los distintos países vecinos, o en los campos de PID. Las mujeres eran especialmente vulnerables en estos campos, donde no tenían ningún control sobre la distribución de los recursos y muchas se veían forzadas a intercambiar favores sexuales por comida, agua potable, o un refugio para ella y su familia (Kuehnast et al., 2011:8). Además, los campos solían no contar con el personal de seguridad necesario, por lo cual terminaban siendo manejados por los propios refugiados hombres, muchos de los cuales en realidad eran rebeldes que se encontraban momentáneamente en los mismos para reagruparse, reclutar nuevos combatientes o quitarle los escasos recursos que tenían quienes se encontraban allí, como sucedió en los campos de refugiados en las provincias del este de la RDC que eran manejados por los ex-FAR y los *Interahamwe*. Todo ello hacía que esos sitios fueran especialmente peligrosos para las mujeres, que

estaban sujetas a todo tipo de violencia o explotación sexual. Asimismo, aunque en general los niveles de fertilidad aumentaban en los campos de refugiados o de PID, los índices de supervivencia de los bebés eran significativamente menores que aquellos nacidos fuera de estos (Verwimp y Van Bavel, citados en Brück y Vothknecht, 2011:106).

Por otro lado, las personas que se encontraban en los campos de refugiados o de PID no estaban exentas de ataques armados que tenían como fin hacer “limpiezas” de aquellos considerados insurgentes o *genocidaires*, a los cuales no había manera de distinguir de quienes no lo eran. Los ejemplos hablan por sí mismos: en el campo para PID cercano a la localidad de Kibeho en el sur-oeste de Ruanda, 4.000 personas –según cifras oficiales- fueron asesinadas por soldados del FPR en abril de 1995, mientras que muchas de las que lograban escapar a la balacera eran atacadas por tutsi buscando venganza. Todo ello ocurrió bajo la mirada atónita e impotente de los trabajadores internacionales que se encontraban allí e, inclusive, de un contingente de la UNAMIR que tenía órdenes expresas de no inmiscuirse. Otro tanto sucedió con las limpiezas en los campos de refugiados en las provincias del este de la RDC, cuando el gobierno de Ruanda decidió terminar por la fuerza con las incursiones de los *génocidaires* a su territorio. Estas son apenas dos historias de esa terrible realidad.

Un fenómeno que tuvo lugar entre los hombres que vivían en los campos de refugiados fue el sentimiento de castración, de verse reducidos al estatus de mujer. Al no poder adaptarse a las nuevas realidades que les imponía la guerra y no poder proveer alimentos y seguridad a sus familias, simplemente se abandonaron a sus miedos e inseguridades, dejando que sus esposas tomen las riendas de la situación haciéndose cargo de los niños, mientras ellos se volcaban a la bebida (ICC, 2006:20).

Cuando por fin los exiliados o desplazados consideraban que la situación había mejorado y era seguro volver a sus hogares, se encontraron con que ya no tenían un lugar. En Ruanda, en 1997 con el retorno de los refugiados de los campos del Congo y de Tanzania, muchas mujeres hutu se vieron no solo en situaciones de indigencia económica, sino que eran vistas con sospecha como si hubieran participado del genocidio. Además, en la mayoría de los casos se les impidió el acceso a sus propiedades, muchas de las cuales habían sido ocupadas por otros refugiados o desplazados que habían vuelto antes o inclusive por hombres que habían luchado con el FPR.

RE-VICTIMIZACION

El subtítulo de este apartado sin dudas es problemático y necesita ser explicado. Por un lado, parecería indicar que todas las mujeres fueron víctimas, lo cual es negarles accionar y voluntad

propias, y eso sería incoherente con la línea teórica de este trabajo. Empero, la realidad es que una gran mayoría de las mujeres fueron victimizadas de distintas formas durante los conflictos armados bajo estudio. Es de mención, a los efectos de ilustrar este punto, que la gran mayoría de las mujeres no llegaron a formar parte de los grupos rebeldes por voluntad propia, sino que fueron secuestradas y forzadas a participar dándose en este caso la primer victimización. Luego, al quedar excluidas de los programas de DDR por los diferentes motivos que se verán, entendemos que se las re-victimizó. Sin embargo, esto no debe interpretarse de ninguna manera como quitando la voluntad de aquellas que eligieron libremente combatir y participar de la guerra a través de las armas, ya sea uniéndose a grupos insurgentes o a las fuerzas armadas de alguno de estos países, o aquellas que decidieron perpetrar el genocidio.

PROGRAMAS DE DESARME, DESMOVILIZACION Y REINTEGRACION (DDR)

El *Multi-Country Demobilization and Reintegration Program* (MDRP) para la región de los Grandes Lagos, fue el programa de DDR más extenso del mundo, incluyendo 7 países y más de 450.000 combatientes, entre ellos niños soldados, fuerzas regulares del estado y rebeldes (UNIFEM, 2005:10). El MDRP, tenía un programa diseñado para cada país de la región, donde era manejado y supervisado por varios actores, entre ellos los estados nacionales, los comandos de las operaciones de paz, y otras agencias de Naciones Unidas, mientras que la financiación provenía del Banco Mundial y otros donantes internacionales. No obstante el “diseño” por estado, los programas de DDR para estos países se hicieron sobre la base de “género neutro”, a pesar de alguna provisión particular, es decir, visibilizando a los hombres y haciendo desaparecer de escena a las mujeres. Debido a ello no se tomaron en cuenta las especiales necesidades del segmento femenino que había formado parte de las milicias, y tampoco se distinguió si esas mujeres se habían unido voluntariamente, si habían sido secuestradas o si solo formaban parte del soporte de los insurgentes, así como tampoco se tomó en consideración porque habían estado con los grupos rebeldes. Justamente uno de los problemas que presentaban los programas de DDR de estos países fue la falta de una definición única sobre que significaba “mujer combatiente” o “mujer asociada a los grupos armados”, por lo cual esa distinción se hizo para cada estado en particular (UNIFEM, 2005:4); empero, ello implicó que muchas mujeres quedaran excluidas de los programas de desmovilización. La principal razón de esa exclusión fue simple: se otorgaba el beneficio a los hombres que combatieron, no a las mujeres, porque simplemente a ellas no se las consideraba combatientes, siendo vistas solo como personal de soporte (Houngbedji et al., 2012:6).

Otras limitaciones que impidieron que las mujeres pudieran beneficiarse de los programas de

DDR fueron: la falta de cooperación de los comandantes para reconocer a las mujeres que formaban parte de las milicias (UNIFEM, 2005:4); porque aquellos buscaban obtener los beneficios de los programas para sus familiares en lugar de que se les dieran a los verdaderos combatientes (Mazurana, 2005:33); la negativa de los combatientes hombres de permitir que sus “esposas” (es decir, sus esclavas sexuales) participaran en los programas, ya que temían que los dejaran; la escasa información que les fue provista a los combatientes, especialmente a las mujeres, por lo cual no sabían si podían acceder al estatus de combatiente y beneficiarse de la DDR; el miedo al repudio social y la estigmatización si se sabía de la asociación con fuerzas insurgentes; falta de seguridad en los centros de concentración de los combatientes desmovilizados; imposibilidad de dejar las milicias porque el conflicto aún no había terminado (UNIFEM, 2005:4), a pesar de lo que dijeran los documentos oficiales; la reticencia de los gobiernos de Burundi y el Congo para que las mujeres pasaran a formar parte de las fuerzas regulares, ya que como parte de los programas de DDR se preveía la integración de las fuerzas con los rebeldes (Houngbedji et al., 2012:7); y finalmente, que muchas combatientes mujeres no portaban armas y cuando lo habían hecho fueron engañadas por sus comandantes para entregarlas, impidiéndoles así beneficiarse de los programas de DDR (Mazurana, 2005:33).

En el caso de Burundi, la Res. 1545 que estableció la ONUB exhortó a que se contemplaran las especiales necesidades de las mujeres, incluyendo el reconocimiento de estas en los programas de DDR (Ogunsanya, 2007:15). Empero, para el gobierno de Burundi la desmovilización generó un problema, ya que dudaban de cuál era el estatus de las mujeres combatientes (Macauley et al., 2012:2). Muchos observadores se cuestionaron si las mujeres habían sido realmente combatientes, por lo cual sus reclamos de ser tratadas y obtener los mismos beneficios que los hombres fueron sistemáticamente denegados por el PNDRR (Macauley et al., 2). Este programa inicialmente solo reconoció a los ex-combatientes hombres, sin considerar a sus familias o a las mujeres, solo recibiendo asistencia aquellas casadas con un soldado de las fuerzas regulares del estado o un hombre también desmovilizado que hubiera luchado a favor del gobierno burundés en algún grupo paramilitar. Luego el gobierno de Burundi tuvo que ampliar el espectro de mujeres que debían participar de los programas de DDR ante la innegable cantidad de ellas (Macauley et al., 2), a pesar de lo cual muy pocas mujeres fueron efectivamente desmovilizadas en ese país: a agosto de 2005 solo 485 mujeres estaban incluidas en el PNDRR (Ogunsanya, 2007:16) de un total de 55.000 participantes, las restantes se auto-desmovilizaron, es decir, no se molestaron en intentar registrarse como combatientes (Macauley et al., 2012:2).

En cuanto a la RDC, el programa nacional de DDR solo consideraba a las mujeres asociadas con grupos armados como beneficiarias si cargaban armas y eran registradas como combatientes;

sin embargo, no se reconoció a aquellas mujeres que formaban parte de los rebeldes en roles de soporte de las milicias (ICC, 2006:10). Como no hubo un esfuerzo real por desmovilizar y reintegrar a las mujeres, muchas continuaron con las fuerzas insurgentes que nunca se desbandaron realmente, mientras que otras prefirieron formas más discretas de volver a sus comunidades (Verhey, 2004:12). Por otro lado, el estatus de “esposa”, sin importar si era la primera, segunda, tercera, etc., era aceptado y les quitaba automáticamente el lugar de combatientes que les hubiera permitido posicionarse como posibles beneficiarias de los programas de DDR; además de que ya no eran vistas como miembros que habían sido reclutados de forma ilegal y, por ende, los comandantes no estaban obligados a dejarlas ir (Verhey, 12). Esa misma situación de “esposa” impedía también que muchas mujeres vieran la auto-desmovilización como una opción posible, ya que se les había inculcado socialmente que debían permanecer junto a sus parejas sexuales, sin importar si esa relación se inició forzosamente en la ilegalidad (Verhey, 13). Finalmente, nunca se intentó desmovilizar a aquellas secuestradas por los *Interahamwe*, que aún plagaban Kivu del Norte y del Sur (Tonheim, 2012:291).

El programa de DDR para Ruanda fue establecido en 1997 y, en su primera fase que duró hasta 2001, 18.600 ex-combatientes fueron desmovilizados de los cuales solo 330 eran mujeres (MDRP, 2008:3). La mayoría de ellas recibió el paquete de compensación que les correspondía a través del programa; de todos modos la ayuda psicológica y sanitaria no fue adecuada, y no hubo ayuda para las mujeres con hijos (MDRP, 4).

Finalmente, cabe recordar que los procesos de DDR solo lograron capturar una pequeña fracción de las armas y municiones que circulaban en esa región, ya el proceso de desarme no solo fue desigual sino que al no implementar controles fronterizos las armas pasaron de un país a otro libremente (Mazurana, 2005:36). Por ejemplo, en Burundi el gobierno había entregado armas a parte de la población para que se defendiera, y estas nunca fueron recuperadas (Mazurana, 35). Además, aquellos que se desmovilizaban entregan solo armas viejas o que ya no funcionaban, mientras se quedaban con las que estaban en buen estado para uso personal o venta en el mercado negro (Mazurana, 34). Esta proliferación de armas pequeñas y livianas entre la población civil facilitó los ataques sexuales contra las mujeres y, de alguna manera, el aumento de la delincuencia en general.

PROBLEMAS QUE ENFRENTARON LAS MUJERES ASOCIADAS A GRUPOS ARMADOS IRREGULARES

Para la gran mayoría de las ex-combatientes que fueron secuestradas, la experiencia de haber

vivido la guerra “transformadas” en insurgentes fue mucho más traumática que para los hombres, de quienes se esperaba socialmente que cumplieran ese rol. Además, estos no fueron estigmatizados y despreciados por sus comunidades cuando regresaban, a diferencia de las mujeres que retornaban, ya que aquellas eran acusadas de promiscuas, difíciles (Maccauley et al., 2012:2) y eran vistas como una mala influencia para las otras mujeres. Esa re-victimización que sufrieron a manos de sus familias y comunidades implicó que muchas mujeres que estuvieron asociadas a grupos rebeldes luego de su auto-desmovilización, decidieran permanecer juntas en nuevas comunidades que ellas mismas formaron; por ejemplo en Burundi, llegaron a existir 60 de esas organizaciones con más de 1.200 mujeres viviendo, trabajando y criando a sus hijos juntas, dándose apoyo para manejar los muchos efectos post-traumáticos del conflicto y del desprecio social y familiar (Maccauley et al., 3).

Otra dificultad que enfrentaron las ex-combatientes en el post-conflicto fue cuidar a sus hijos. Muchas mujeres quedaron embarazadas durante su estancia con los grupos insurgentes, sin tener en general conocimiento de quien era el padre del menor. Cuando volvieron a sus familias y comunidades, aún en los casos en que fueron físicamente acogidas, eso no implicó que se aceptara realmente su vuelta y mucho menos la de su/s hijo/s. Estas mujeres eran presionadas constantemente por sus familias para procurarse sus propios medios de vida para ella y su/s niño/s (Verhey, 2004:16). Inclusive a muchas “*filles mères*” se les impidió retomar sus estudios, prohibiéndoles la entrada a las escuelas (Verhey, 20). Las comunidades también rechazaron esos niños que fueron maltratados, discriminados e insultados permanentemente, adicionando otra fuente de estrés y preocupación a sus madres (Tonheim, 2012:287). Los programas de DDR que apenas consideraron a las mujeres, mucho menos tomaron en cuenta esa innegable realidad, por lo cual aún aquellas que fueron beneficiarias de algún programa, no se les reconoció ayuda extra alguna por haber tenido niños.

En general las familias y comunidades no aceptaron la vuelta de las mujeres que estuvieron asociadas con fuerzas rebeldes, por lo cual muchas veces aquellas se vieron forzadas a mudarse varias veces y a pedir ayuda a sus familias extendidas, y aun cuando se las recibió, el trato que recibían era diferente al del resto de la familia, por lo cual no solo eran maltratadas, sino que se hacía diferencias como negarles ropa nueva o jabón o, inclusive, no permitirles estar presentes si recibían amigos o familia (Tonheim, 2012:283, 285 y 288). En general, solo se les daba un techo, pero muchas tuvieron que salir a trabajar para poder pagarse su comida y la de sus hijos cuando tenían, o para pagarse la escuela (Tonheim, 286). Por ello, muchas de estas mujeres se retrajeron, teniendo el menor contacto posible con sus vecinos para intentar evitar esas situaciones, mientras que solo unas pocas reaccionaban de manera defensiva, intimidando a quienes las insultaban con el fin de ser respetadas (Tonheim, 288).

Después de tantos años de guerras los habitantes de las provincias del este de la RDC veían con sospecha a cualquier persona que hubiese estado con las milicias e inclusive con las fuerzas regulares del Congo, y a las mujeres se las discriminaba por varios motivos: temían que fueran violentas o peligrosas, porque hubieran adquirido el “espíritu militar”, es decir, que pudieran enojarse fácilmente y que se hubiesen vuelto malvadas (Tonheim, 2012:284); que fueran una mala influencia para otras personas, especialmente jóvenes; que padecieran alguna enfermedad como HIV o tuberculosis; que fueran promiscuas; que algunos de los rebeldes vinieran a buscarlas; entre otras razones. Debido a ello, eran frecuentemente insultadas, llamadas de prostitutas, “mujer violada”, o de “mujer *interahamwe*”, implicando que no solo habían mantenido relaciones sexuales con varios hombres, sino particularmente con el enemigo (Tonheim, 285).

Aunque era entendible hasta cierto punto el temor de la sociedad y de las familias de las mujeres asociadas a grupos rebeldes, esa discriminación y marginalización tuvo serias consecuencias: desde deseos de morir, hasta intentos por retornar con los grupos armados, ya que consideraban que era mejor ser maltratadas por aquellos que por sus propias familias (Tonheim, 2012:289). Lamentablemente, esas actitudes facilitaban el trabajo de reclutamiento de los grupos rebeldes, ya que si había más cuerpos disponibles para luchar era más sencillo perpetuar los conflictos.

VIOLENCIA SOCIAL

La violencia social ejercida contra aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, fue tal vez una de las peores formas de agresión en la re-victimización femenina. Como explica Tonheim (2012:290), aunque el maltrato y la estigmatización provenían de todos los sectores etarios y por los dos sexos, las mujeres fueron especialmente ofensivas con estas mujeres y niñas, tanto con las que formaron parte de los grupos insurgentes porque fueron secuestradas como con aquellas que simplemente fueron víctimas de violencia o explotación sexual.

Handrahan (2004:438) argumenta que este tipo de violencia de mujer a mujer, en complicidad con aquella ejercida por los hombres, se dio por lo que Kandiyoti (citada en Handrahan, 438) llama la “pugna patriarcal”. Este concepto se refiere a la táctica que usa una mujer para amoldarse y mantener las normas patriarcales aceptando los roles de género que le juegan en contra; pero a la vez, maximizando sus opciones y su propio poder, el cual, obviamente, es dado por lo hombres mientras estos lo crean conveniente o les sea funcional. De esta forma, aquellas mujeres que fueron víctimas se vieron una vez más victimizadas por esa violencia social, ejercida por quienes mantuvieron las normas patriarcales pero, asimismo, por quienes deberían haber tenido algún tipo

de solidaridad de género.

Todo ello implicó que las mujeres se encontraran solas luego del conflicto, especialmente aquellas que habían sido víctimas de violencia sexual. No había diferencia si las mujeres estaban físicamente aisladas, o si su soledad se dio estando rodeada de su familia o de su comunidad, desde el momento en que socialmente no se les permitió ni se toleró que expresen sus emociones, que cuenten su experiencia, sino al contrario, se las alentó a que callen, a que minimicen su sufrimiento, porque no había lugar para la congoja y la vergüenza femenina, ello solo sirvió para aumentar la humillación y la culpa de esas mujeres.

Por supuesto que esta re-victimización no se dio como un fenómeno aislado, sino que estaba incrustada en una cultura que culpaba a las víctimas por lo que les sucedía (Meintjes, 2000:6). En Ruanda hubo que luchar para que el nuevo gobierno del FPR reconociera a las violaciones como un crimen de Categoría 1²⁰, ya que la idea inicial fue categorizarlas junto al saqueo y al robo (Meintjes, 6), como si un crimen de proporciones genocidas pudiera ser comparado con crímenes netamente patrimoniales. De hecho, el caso de Ruanda en este aspecto fue paradigmático. Mientras que por un lado se hablaba públicamente de la violencia sexual, inclusive en los medios, y la palabra “violación” tenía un fuerte contenido político que confirmaba la bestialidad de los hutu, ese poder comenzaba a menguar cuando implicaba imponer justicia (Mibenge, 2008:147). En cuanto las mujeres eran percibidas como sobrevivientes demandando indemnizaciones, reparaciones o acceso a la salud, el debate era silenciado, y los fiscales, jueces y fuerzas de seguridad eran hostiles a los informes o testimonios de las víctimas que alegaban haber sufrido violencia sexual (Mibenge, 147).

A pesar de ello, y del pequeño avance que implicó reconocer el delito de violación, las víctimas de violencia sexual continuaron siendo estigmatizadas, por lo cual la mayor parte preferían no hablar de lo sucedido. Sin embargo, ello impuso una nueva re-victimización ya que al no poder hablar de lo vivido, el trauma, la vergüenza y la culpa fueron mayores y los efectos psicológicos más duraderos.

Una mujer ruandesa (citada en Newbury y Baldwin, 2000:5), explicó esa re-victimización en estos términos:

“Las mujeres violadas son doblemente castigadas por la sociedad. Primero la práctica judicial no les otorga reparación por las violaciones, a menos que se presente públicamente evidencia grafica. En segundo lugar, desde la perspectiva de la sociedad se demuestra poca solidaridad, porque en el momento

²⁰ Luego del genocidio en Ruanda se tipificó la comisión o instigación a cometer algunos delitos como Categoría 1, entre ellos: la violencia sexual, los crímenes de lesa humanidad y los actos de genocidio. Sin embargo, solo pertenecían a esta categoría si habían sido cometidos, ordenados o instigados por personas que ejercían puestos de liderazgo al momento del genocidio. En cambio, si habían sido perpetrados por quienes llevaron a cabo el genocidio –es decir, gente “común”-, eran clasificados como Categoría 2 o 3, así como los restantes crímenes, especialmente aquellos contra la propiedad. Los delitos de estas últimas categorías fueron juzgados por los tribunales Gacaca establecidos en el 2004, a diferencia de los de Categoría 1 que eran juzgados en los tribunales nacionales (Hogg, 2010:66 y 67).

en que hombres y niños morían, estas mujeres usaron la carta sexual, ‘vendiendo sus cuerpos para salvar sus vidas’. Entonces, son juzgadas de todos lados, e inclusive sus propias familias no las perdonan fácilmente. Aún peor, muchos les reprochan por haber preferido sobrevivir a través de la violación”

Por supuesto, que la gran mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual no “sedujeron” a los *génocidaires* para sobrevivir, sino que respondió a otros motivos: en algunos casos se las dio por muertas; en otros, algún familiar hutu pudo esconderlas; otras, en cambio, fueron mantenidas como esclavas sexuales; por fin, algunos decidían no matarlas a sabiendas que vivir con el estigma de una violación era casi una muerte en vida en dicha sociedad, más aún, en mucho casos era una sentencia de muerte, cuando el perpetrador estaba infectado de HIV.

Inclusive los tribunales Gacaca que el gobierno de Ruanda creó en 2004 para juzgar a todos aquellos sospechosos de cometer crímenes de lesa humanidad y de genocidio entre el 1º de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1994, que respondieran a los crímenes de Categoría 2 y 3, es decir aquellos cometidos por personas “comunes” (Hogg, 2010:67) no sirvieron para dar un cierre al sufrimiento de muchas mujeres. Aunque estos tribunales lograron algunos avances en la reconciliación de la población, por otro lado, aquellas mujeres que acusaban a sus violadores tuvieron que brindar testimonios detallados de lo que habían padecido y producir testigos; ello tuvo como consecuencia que las víctimas de repente se encontraran en boca de todos, por lo cual muchas sintieron que se exponían públicamente sin lograr nada a cambio, desanimando a otras a enfrentar a los perpetradores (testimonio de una víctima del genocidio en Richters, 2014:15). Se sabe que poder relatar la historia vivida a un oyente compasivo puede ser crucial para comprender mejor que ocurrió y recobrar de esos sentimientos de culpa y humillación (Macauley et al., 2012:3-4); en lugar de ello, esa característica negativa de los tribunales Gacaca impidió que esas mujeres puedan poner un cierre a su sufrimiento, no solo no obteniendo la justicia que se les prometió, sino que además se encontraron ellas mismas juzgadas en lugar de apoyadas.

La situación de las mujeres víctimas de violencia sexual ha sido la misma en Ruanda, Burundi y las provincias del este de la RDC. La gran mayoría fueron denigradas y maltratadas socialmente, sus chances de contraer matrimonio pasaron a ser prácticamente inexistentes, y muchas cargaron con los hijos que tuvieron como resultado de los abusos sexuales (Newbury y Baldwin, 2000:5). Especialmente aquellas que decidieron criar a esos niños, solo encontraron resistencia y reprobación por parte de sus familias y sus comunidades (Newbury y Baldwin, 5), tachándolas, inclusive, de colaboradoras (Twagiramariya y Turshen, 1998:104). Las viudas fueron otro segmento social que les fue muy difícil rehacer sus vidas. No solo por la pérdida de la posición social, sino porque muchas habían sido víctimas de violencia sexual y por ese hecho, se consideraba que habían perdido su valor social, además que aquellas que habían tenido algún hijo de sus violadores fueron directamente estigmatizadas y dejadas de lado (Turshen, 1998:16).

¿DESVICTIMIZACION/EMPODERAMIENTO?

Este apartado comienza planteando dos preguntas: ¿Fue posible para algunas mujeres empoderarse y lograr tener una activa y efectiva participación en la política y en el activismo social en el post-conflicto, manteniendo las ganancias adquiridas durante el estado de beligerancia, de forma legítima? ¿Se reconoció la lucha y el lugar que se ganaron aquellas mujeres que eligieron voluntariamente unirse a las milicias o a las fuerzas armadas de alguno de estos países? La respuesta a estas dos preguntas como se verá es negativa.

EX-COMBATIENTES MUJERES

Las ex-combatientes mujeres que se unieron a las filas de los rebeldes voluntariamente, vieron como sus libertades se fueron perdiendo y como se las fue marginalizando cuando en el periodo de pos-guerra se reinventó y se reafirmó el orden patriarcal (Meintjes, 2000:5), sistema en el cual ellas no tenían lugar. Al volver a sus lugares de origen, luego del conflicto, enfrentaron toda clase de dificultades en su intento de reinsertarse en la vida civil, ya que sus actitudes como ex-combatientes no se condecían con las expectativas de género de dichas sociedades (Durham y O'Byrne, 2010:48). Una de esas complicaciones fue acceder a los medios para ganarse la vida. Su falta de educación y capacitación laboral en general, les dificultaba obtener un empleo, más allá de la discriminación que sufrían por parte de los potenciales empleadores, justamente por su rol de ex-combatientes (Brück y Vothknecht, 2011:99). Pero, otros factores como cuestiones patriarcales, preferencia de darle el empleo a un hombre, leyes y costumbres, también dificultaron el acceso al empleo; causas que, compartían, con aquellas mujeres que no habían luchado (Mazurana, 2005:48).

Durham y O'Byrne (2010:49) citando a Barth, explican que muchas ex-combatientes fueron excluidas de sus comunidades; esto se debió en gran medida a su resistencia a re-adaptarse a los roles de género, por no poder tener hijos, o porque volvieron con alguna deficiencia física, todos motivos que las hacían menos deseables como esposas. Por otro lado, después de años de abusos, estas mujeres habían aprendido a no dejarse explotar, lo cual las hacía valientes, francas y sin miedo a decir lo que pensaban, cualidades estas que no eran queridas en una mujer y contradecían las expectativas de género de la mujer dócil y servil que se esperaba en la sociedad burundesa (Macauley et al., 2012:3); característica social que compartía con Ruanda y la RDC. Tanto así, que muchas ex-combatientes relataron que luego de los conflictos no encontraban parejas, ya que nadie quería casarse con una mujer que había tenido un rol activo en las fuerzas regulares o irregulares e, inclusive, muchas mujeres que habían estado casadas con hombres que también habían sido

rebeldes o soldados, las dejaban por otras mujeres que no habían participado de la guerra, ya que estas eran consideradas más femeninas y obedientes (Mazurana, 2005:39).

Otro motivo de repudio social fue haber cortado el vínculo con sus familias para unirse a los grupos insurgentes. Sin embargo, algunos casos excepciones se han dado en las provincias del este de la RDC, donde las mujeres que se unían voluntariamente podían mantener los lazos comunales, ya que iban y venían más libremente, lo cual facilitó su reintegración (Tonheim, 2012:291). De cualquier forma, las ex-combatientes relataban que aún aquellas que se habían unido voluntariamente a las filas de los grupos armados, eran maltratadas en sus comunidades, aunque la estigmatización era menor si habían luchado con grupos como los Mai Mai o las FARDC, los cuales no eran vistos de la misma manera que los *Interahamwe* (Tonheim, 291). Por otro lado, aquellas que lucharon en grupos congoleños eran percibidas como menos promiscuas, ya que se creía que solo habían tenido un compañero sexual, a pesar de que muchas contaron cómo fueron agredidas sexualmente por varios hombres, aún habiéndose unido por su propia voluntad (Tonheim, 291).

Las mujeres que retornaban del frente tampoco encontraron un lugar en la esfera política, y se negó su participación a pesar de haber formado parte de los grupos de insurgentes que pasaron a gobernar (Durham y O'Byrne, 2010:49). La excepción a esta última regla fueron algunas ex-combatientes del FPR que obtuvieron cargos políticos; tal fue el caso de Rosa Kabuye que enseguida de tomar Kigali asumió como Intendente, y luego ocupó otros puesto de poder e importancia hasta que cayó en desgracia y fue alejada de la escena política. Sin embargo, y excepciones a parte, a las mujeres combatientes no se les permitió participar en las mesas de negociación de la paz, ni siquiera aquellas que tenían alto cargos, ni tampoco se les consultó o pudieron expresar su opinión en cuanto a los arreglos (Mazurana, 2005:47). Por otro lado, algunas que consiguieron asumir cargos políticos o administrativos eran confrontadas para restarles autoridad o bien constreñidas por sus propios partidos para no avanzar en temas necesarios para las mujeres; así como otras que no tenían la formación necesaria fueron nombradas solo para que fracasaran, porque la realidad era que no querían mujeres en puestos de liderazgo (Mazurana, 48).

De todos modos, la regla general fue que no se reconociera el trabajo de estas ex-combatientes. En Ruanda, algunas se nuclearon en una asociación llamada *Ndabaga*, fundada en 2001 y la primera ONG de su género en la región de los Grandes Lagos (UNIFEM, 2004). Estas mujeres estaban entre las más pobres y menos educadas, ya que tuvieron que dejar sus estudios debido a la guerra y para combatir, dependiendo al final de la buena voluntad de sus vecinos para sobrevivir (UNIFEM, 2004). Por otro lado, a pesar de haber dedicado años a la lucha del FPR, no tuvieron acceso a una vivienda adecuada, a servicios sanitarios, educación o capacitación laboral,

todo lo cual les dificultó enormemente reintegrarse socialmente, ya que tampoco contaban con los medios económicos para obtener un empleo formal y generar un sustento propio (UNIFEM, 2004).

ACTIVISMO

En la etapa de pos-guerra, algunas mujeres decidieron seguir con el activismo comenzado antes, o durante los conflictos, mientras que muchas otras comenzaron a formar parte de la sociedad civil fundando ONGs con diversos fines relacionados con algún aspecto del conflicto luego de su finalización. Una de estas asociaciones fue *Le Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi* (CAFOB), la cual nucleaba a varias ONGs de mujeres en ese país; entre una de sus funciones se encontraba organizar el otorgamiento de créditos para ayudar a las mujeres económicamente (Ogunsanya, 2007:30). Otro de sus grandes logros fue redactar una lista de mujeres capacitadas para actuar en las diferentes esferas gubernamentales, respondiendo de esa forma a la aseveración que se hizo durante las negociaciones de Arusha, de que no había suficientes mujeres idóneas en Burundi para justificar las cuotas en los cargos políticos (Ogunsanya, 31). De todos modos, las organizaciones de base en Burundi han enfrentado un serio problema al verse dependientes de las donaciones internacionales para continuar su trabajo, las cuales además solo llegaban a aquellas ampliamente conocidas, dejando sin fondos a las más pequeñas (Falch, 2010:35). Esta situación les restó legitimidad, además de dificultar su trabajo, ya que los donantes estaban interesados mayormente en proyectos visibles, que no necesariamente respondían a las necesidades de las organizaciones de base, las cuales trataban las problemáticas reales de las mujeres, quitándoles, de este modo, iniciativa y capacidad de decisión y acción (Falch, 35).

En Ruanda, tanto a nivel nacional como local, inclusive en las áreas rurales las mujeres se nuclearon en distintas asociaciones y ONGs, algunas ya existentes desde antes de la guerra, para enfrentar las dificultades de la reconstrucción de sus comunidades (Newbury y Baldwin, 2000:6). Estas mujeres intentaron llamar la atención del gobierno central a ciertas temáticas de importancia; sin embargo, aunque parecía que se fomentaba el debate, había ciertas cuestiones en las que el ejecutivo ya había decidido y no estaban abiertas a discusión (Newbury y Baldwin, 6). Por otro lado, se fomentó la confusión del público para que no distinguieran la diferencia entre las ONGs y las estructuras locales del gobierno, ya que la función que debían tener las primeras era servir los intereses y los fines del estado (Burnet, 2008:376). Finalmente, en 2001 fue codificado el accionar de la sociedad civil, tanto local como internacional e inclusive religioso, declarando que los fines de estas asociaciones debían estar en línea con las políticas del gobierno, y su accionar debería servir para ejecutar los planes estratégicos gubernamentales que fueran de la incumbencia de la ONG,

bajo pena de perder el registro para operar (Burnet, 376). De todos modos, las organizaciones de mujeres lograron maniobrar en este ámbito de creciente autoritarismo para obtener algunos beneficios, tales como la sanción de la ley que permitía a las mujeres casadas heredar los bienes de sus maridos y establecer la igualdad de derechos hereditarios entre hombres y mujeres, aunque no se puede dejar de notar el interés del gobierno de Kagame en que esa ley fuera sancionada (Burnet, 377). Sin embargo, las asociaciones de mujeres han tenido su lado menos solidario, por ejemplo era común que estuvieran divididas de acuerdo a su composición, por un lado grupos solo formados por viudas y, por otro, aquellos integrados por mujeres casadas (El-Bushra, 2000:74). Esto se debió en parte por la rivalidad femenina para conseguir maridos, porque si en algo todas coincidían era que la “autonomía *per se* o por defecto, era la opción menos deseada de todas” (El-Bushra, 74).

Aunque en la RDC las organizaciones de mujeres se movilizaron, jugando un rol significativo en el registro de votantes y generando un interés en la población, especialmente en el segmento femenino para que participaran en el referéndum para aprobar la nueva Constitución en diciembre de 2005 (ICC, 2006:11), su trabajo no fue reconocido. Además se las encasilló como un grupo que “debía trabajar pero no pensar”, es decir, debían hacer toda suerte de trabajos y brindar servicios que suplieran la ineficacia y ausencia del estado, pero sin cuestionar las políticas públicas o expresar sus opiniones públicamente (ICC, 16). Las activistas aducían que la razón para que esto sucediera era que los hombres no querían que ellas tuvieran demasiado poder, al fin y al cabo, las mujeres solo eran mujeres y no contaban con la experiencia necesaria (ICC, 16). Finalmente, los programas que se establecieron para empoderar a las mujeres, eran vagos e inapropiados, sirviendo solamente para mantener una fachada de progreso ante los países donantes, pero sin llegar a ningún avance real (ICC, 16).

POSICION POLITICA Y SOCIAL

La guerra tiende a modificar las relaciones patriarcales y las mujeres pueden ganar, como consecuencia, poder y libertad (Handrahan, 2004:436). Aquellas que vivieron estos conflictos no fueron una excepción a esta regla. Sin embargo, esas ganancias tuvieron una corta vida, ya que cuando las estructuras patriarcales nuevamente se reafirmaron en la pos-guerra, las mujeres debieron volver a la organización pre-conflicto y a sus posiciones de subordinación (Handrahan, 436). De hecho, la porción de la comunidad internacional que contribuyó a afianzar la paz en estas sociedades, ayudó a que estas relaciones entre los hombres y las mujeres pierdan la fluidez adquirida y se vuelvan a rigidizar; ello así, porque el sentido propio de sociedad patriarcal como “normal” de la comunidad internacional siempre se mantuvo intacto, de modo que no podían operar

cambiando algo que ellos mismos no lograban ver en sus propias estructuras patriarcales y que tanto daño le hacen a sus sociedades y a las que intentan ayudar (Handrahan, 436).

Algunas de las mujeres que participaron activamente en las negociaciones de paz de Arusha, luego pasaron a ocupar cargos en el Gobierno de Transición de Burundi. Una de ellas, fue Catherine Mabobori, quien representaba a las organizaciones civiles en el Parlamento (Ogunsanya, 2007:15 y 30). Luego, con la sanción de la nueva *Constitution de la République du Burundi*, aprobada por referéndum el 28 de febrero de 2005 y promulgada el 18 de marzo del mismo año, se reconoció una cuota mínima de participación del 30% en cargos ejecutivos y parlamentarios (arts. 129 y 164 respectivamente). A pesar de que para ello hubo que presentar previamente una lista de mujeres lo suficientemente formadas como para legitimizar ese pedido. De esta forma se logró que una mujer, Alice Nzomukunda fuera nombrada Vice-Presidente Segunda (Ogunsanya, 2007:37), y que 36 de los 118 escaños de la Asamblea Nacional y 17 de los 49 del Senado, también fueran ocupados por mujeres, un porcentaje apenas menor del requerido constitucionalmente (Falch, 2010:12). A su vez, varias mujeres también lograron obtener cargos ministeriales, un ámbito que había sido de dominio exclusivamente masculino hasta ese momento. Lamentablemente, esos números no fueron acompañados a nivel local, donde continuaron con una baja representación política (Falch, 12).

A pesar de este progreso que a primera vista parece significativo, esto no se tradujo en una capacidad real de estas mujeres de influir efectivamente en la arena política. Como explica Falch (2010:13) ello respondió a varias razones: aunque los líderes de los partidos políticos argüían que cualquier mujer era libre de participar activamente e intentar acceder a un cargo, la realidad era que se las limitaba notablemente; otra razón se debía a la costumbre burundesa de que las mujeres no hablaran en público bajo pena de considerar su comportamiento inapropiado, lo cual se tradujo en que los líderes de los partidos raramente les permitían hablar o entablar discusiones, por lo cual siempre parecían estar subordinadas a sus colegas hombres. Por otro lado, muchas veces eran amenazadas con ser expulsadas si decían o hacían algo que no estuviera en línea con los intereses del partido al que representaban (Falch, 13). Las decisiones importantes eran tomadas por un pequeño grupo de hombres y se esperaba que las mujeres simplemente votaran esas decisiones sin cuestionarlas; además, mayormente, solo promovían a otros hombres a cargos de liderazgo, habiendo solo dos mujeres que lideraban partidos políticos de los 43 oficialmente reconocidos (Falch, 14). Como los candidatos eran designados a dedo por los líderes partidarios, estos no tenían sus propios votantes ni agenda, lo cual obligaba a ser indiscutiblemente leal al partido, ello deslegitimizaba los cargos obtenidos por las mujeres pareciendo que solo lograban los puestos para cumplir con la cuota legal (Falch, 14). Finalmente, una limitada educación y entrenamiento, así como la exigencia de que las mujeres continuaran cumpliendo sus roles de esposas y madres,

impedían una efectiva participación en política, ya que muchas veces se veían obligadas a dejar sus funciones para atender las tareas domésticas (Falch, 15).

Lamentablemente, lo antedicho demuestra claramente que un aumento numérico de las mujeres en cargos políticos no se tradujo en una efectiva capacidad de hacer cambios significativos o de aumentar el poder de estas. Además, el uso de cuotas implicó un techo para estas mujeres en lugar de un piso, restándoles legitimidad y capacidad de influenciar las políticas nacionales, impidiéndoles que promuevan políticas públicas para mejorar la posición de las mujeres y lidiar con sus problemáticas. Solo resta decir que en esa sociedad fuertemente patriarcal, donde las prácticas cotidianas subyugaban a la mujer al poder masculino, las ponía en una clara desventaja en la arena política (Falch, 2010:31)

Por otro lado, en Ruanda, un número creciente y sin precedente de mujeres obtuvo cargos políticos, tanto como Parlamentarias, como en altos cargos en el gobierno central (Newbury y Baldwin, 2000:6). Luego de la victoria del FPR, varias lograron obtener puestos de importancia, como, por ejemplo, Rose Kabuye, a quien se le otorgó el puesto de Intendente de Kigali e, inclusive, otras 10 mujeres fueron incluidas en el Parlamento Nacional de Transición en noviembre de 1994 (Longman, 2005:224). Estos números fueron creciendo ininterrumpidamente debido al apoyo de Kagame durante el periodo de transición que duró hasta 2003, cuando en las elecciones de ese año se vio como un 48,8% de los escaños de la Cámara baja del Parlamento eran ocupados por mujeres (Longman, 210 y 224). Esto ha sido visto por algunos autores (Hunt, 2014) y organizaciones como UNIFEM como un avance significativo de las mujeres en cuanto a una mayor igualdad en la representación política y a una mayor pacificación social en Ruanda, aunque la realidad indica que, lamentablemente, los puestos que han ocupado estas mujeres no estuvieron acompañado por la correspondiente cuota de poder que debía otorgarles su posición (Burnet, 2008:363).

La extensa actividad de las mujeres en la sociedad civil de ese país fue una base importante desde donde acceder a cargos públicos, lo cual no necesariamente fue un cambio positivo; al cooptarlas para trabajar desde el gobierno (Longman, 2005:217), las ONGs perdían a sus mentes más lúcidas y, tal vez, a las pocas mujeres que estaban preparadas para llevarlas adelante. Las reemplazantes, aunque hubieran contado con títulos universitarios y estuvieran académicamente preparadas, lamentablemente no tenían el conocimiento práctico necesario para trabajar bajo un gobierno autoritario (Burnet, 2008:378-379). Por otro lado, al pasar al sector gubernamental se vieron impedidas de articular aquellas críticas necesarias para lograr un progreso real. Asimismo, las parlamentarias aprovecharon los beneficios que les ofrecían sus cargos sin cuestionar demasiado que leyes estaban votando al levantar la mano, aunque eso implicara apoyar leyes autoritarias como

en 2001 que se destruyó al último partido opositor al FPR (Burnet, 381). Es claro que el gobierno ha usado a las mujeres para sus propios fines, mostrando su incorporación a la política como un instrumento legitimizador y de progreso, a pesar de que solo sirvió para todo lo contrario (Burnet, 2008:381; Logman, 2005:230) y no implicó una verdadera representación de los intereses femeninos. Pero más allá de la cuestión política, esas mujeres siguieron subordinadas a los hombres, ya que seguían sometiéndose a sus maridos, especialmente en cuestiones oficiales del hogar para no cuestionar su autoridad, como explicó una senadora a sus colegas (Lacey, 2005). Ahora bien, si no lograban tener igualdad en el hogar, menos era posible esperar que lo consiguieran a nivel social o gubernamental.

Por otro lado, muchas de aquellas mujeres que adquirieron mayor libertad o independencia económica eran vistas como habiendo perdido los valores, ya que salían de sus casas sin pedir permiso a sus esposos, se consideraba que les faltaban el respeto o que usaban un lenguaje inapropiado, además que desatendían las tareas del hogar lo cual provocaba la ira de los maridos (Slegh y Richters, 2012:144). Al ser percibidas como una fuente de problemas, se justificaba la violencia contra ellas (Slegh y Richters, 144). Básicamente, los pocos avances que lograron las mujeres ruandesas fueron percibidos por los hombres y, lamentablemente, por muchas mujeres, como una contradicción con los valores tradicionales, es decir, tradicionales en cuanto fomentados por los colonizadores pero no de acuerdo a la verdadera cultura de Ruanda. De hecho, como la religión cristiana –católica y protestante- siguió jugando un rol importantísimo en la comunidad post-conflicto, los ruandeses explicaban los roles de género y las desigualdades entre ellos como hechos naturales y de Dios, en lugar de verlos como construcciones sociales; de esta forma, en las iglesias se enseñaba como se debían comportar y relacionar los hombres y mujeres “buenos” (Slegh y Richters, 142). Luego, los hombres que sintieron que perdieron poder, en un esfuerzo para mantener su hombría y su lugar de jefes del hogar, no temieron en abusar de su poder recurriendo a la violencia doméstica, la cual estaba justificada por las leyes divinas que demandaban el liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer (Slegh y Richters, 142 y 144).

Finalmente en la RDC, durante el gobierno de transición solo el 2% de los senadores, el 16% de los diputados y el 11% de cargos gubernamentales eran ocupados por mujeres, no habiendo ninguna en cargos del Poder Ejecutivo (ICC, 2006:11). La falta de experiencia y la exclusión fueron los principales impedimentos para que ellas accedieran a puesto de importancia política y, aunque el art. 14 de la Constitución ordenaba trabajar hacia una mayor igualdad de género en la representación política en los niveles nacional, provincial y municipal, ello no ocurrió, ya que esa provisión legal nunca fue reglamentada (ICC, 11). De hecho, el artículo anterior, es decir el 13, le quitaba cualquier penalidad al incumplimiento del art. 14 al estipular que cada lista debía considerar

un equilibrio entre candidatos de ambos sexos, pero su inobservancia no era motivo para rechazar la lista (ICC, 11). Como explicó una funcionaria del gobierno congoleño:

“Los hombres discuten sobre política, seguridad, sobre los militares, de todo. Son todos hombres, hablando entre ellos. Pero en el terreno donde está el conflicto, las mujeres soportan las consecuencias de las decisiones de estos hombres. Hay un discurso sobre género, pero ningún progreso real.” (ICC, 2006:11).

CONCLUSION

“Cualquier ‘paz’ supone revisar las relaciones de poder, no solo entre naciones o partes de naciones sino también entre hombres y mujeres.”

Liz Kelly (2000:62)

¿VUELTA AL STATUS QUO ANTE BELLUM?

Algunas autoras (Hunt, 2014; Cheldelin y Eliatamby, 2011:284 y ss.; Turshen, 1998:20 y 21) tienen una mirada positiva o, quizás, expectante sobre los cambios que pudieron haber tenido lugar en el post-conflicto y que supuestamente favorecieron a las mujeres. Sin embargo, otras estudiosas (Meintjes et al., 2001; El-Bushra, 2000 y 2003) tienen una mirada mucho más realista: su situación no cambió. Por otro lado, el periodo de pos-guerra es demasiado tarde para realizar cambios profundos en las relaciones de género patriarcales, ya que se tiende a volver a las estructuras de la pre-guerra; de esta forma, cualquier flexibilización de las relaciones de género que se hubiera dado durante el conflicto y que no se hayan cimentado durante ese periodo, después es muy tarde para querer retomarlas y generar cambios duraderos (Meintjes et al., 2001:4)

El fin oficial del conflicto no implica realmente el cese de la violencia; por otro lado, los tratados de paz no ponen fin a las ideologías, sino que solamente reparten el poder entre las distintas facciones de acuerdo a sus ganancias o pérdidas (Alvarez Molinero, 2007:89). Aunque los acuerdos sienten nuevas bases jurídicas sobre las cuales se asentará el estado, ello no implica de modo alguno que se re-ordenen o alteren los estereotipos de género (Alvarez Molinero, 89). Ello así porque las

bases ideológicas que sostenían las relaciones de género tradicionales parecen resistir a los cambios, aún cuando haya un aparente re-ordenamiento (El-Bushra, 2003: 261).

Zarkov (2006:224), basándose en una idea de El-Bushra considera que las relaciones de género pueden mantenerse intactas mientras solo cambian los roles. Sin embargo, en el caso de los conflictos que nos ocupan, tal vez sería más acertado decir que lo único que ha cambiado, y hasta cierto punto, son las tareas que socialmente estaban asignadas a cada género, ya que las identidades no sufrieron cambio alguno, al contrario, solamente han aumentado la tensión entre las expectativas existentes sobre esas identidades y las nuevas realidades que trajo la guerra. Si bien algunas mujeres pasaron de ser la “esposa de...” a ser la cabeza de la familia, ello no necesariamente les trajo beneficio alguno. Mientras dejaron de ser subordinadas de sus maridos, pasaron a estar más desprotegidas social y económicamente, además de ser potencialmente blancos para otros hombres que conocían sus situaciones de indefensión. Por otro lado, muchas de estas mujeres hablaban del estado de “soledad” que venía acompañado de esa nueva autonomía (El-Bushra, 2003:258).

Un segmento de la población femenina pareció haberse empoderado, tales como: las mujeres que obtuvieron cargos políticos o que trabajaban desde la sociedad civil; aquellas que volvieron del frente luego de unirse a las fuerzas regulares o irregulares voluntariamente y haber depuesto las armas; e, inclusive, aquellas que fueron reconocidas como combatientes y participaron de los programas de DDR. Sin embargo, los cambios parecen haber sido más cosméticos que reales o profundos. Estas mujeres no lograron revertir los roles de género que les imponía la sociedad y continuaron subyugadas al poder de los hombres: ya sea el de sus líderes partidarios u autoridades nacionales; al de sus maridos; o, simplemente, porque fueron marginadas e ignoradas por la sociedad y el estado. Básicamente, se podría decir que adquirieron ciertas libertades, pero no la cuota de poder que debía haber acompañado esa autonomía.

Las organizaciones de mujeres, así como el resto de la sociedad civil, continuaron subordinadas a estados que concentraban el poder en la figura dominante de sus presidentes, en cuyos casos sus elementos más valiosos fueron cooptados por los gobiernos, resultando en un medio eficaz de acallar esas voces críticas. Por otro lado, se esperaba que fueran instrumentales en aplicar las políticas dictadas desde el poder, y cuando no adherían a ese chantaje sus vidas o las de sus familiares eran amenazadas. En otros casos simplemente se las ignoró, dejando que reciban alguna ayuda de donadores internacionales, pero sin apoyo estatal.

En cuanto a las mujeres que detentaban cargos políticos siguieron siendo desvalorizadas, marginalizadas y se esperaba que continuaran subordinadas a sus maridos y atendiendo a sus familias, además siguió siendo mal visto que hablaran en público, lo cual les impedía siquiera expresar sus propias ideas. Aunque un número importante de mujeres se aseguraron cargos políticos

en Ruanda, así como en Burundi, se les impidió adquirir la cuota de poder que estos deberían haberles conllevado. El hecho de que hubiera una importante cantidad de mujeres en el gobierno no implicó que pudieran efectivamente realizar cambios, a menos que estos contaran con el beneplácito presidencial. Además, cantidad no se tradujo en una mayor perspectiva de género o que entendieran las necesidades de la población femenina, especialmente la rural, o siquiera que tuvieran interés en ello. Finalmente, esto importó que no pudieran hacer cambios en las estructuras de poder o que pudieran haber contribuido a transformar los roles de género.

Las mujeres que habían combatido, también fueron convenientemente olvidadas por los gobiernos y estigmatizadas por la sociedad. Aquellas mujeres asociadas a las milicias vieron como los hombres eran desmovilizados y obtenían ventajas económicas, al mismo tiempo que ni el estado, ni los programas de DDR organizados por los organismos internacionales, parecían siquiera recordar que alrededor de la mitad de los componentes de los grupos rebeldes habían sido mujeres y que tenían otras necesidades. Si, de hecho, no se intentó hacerlas parte de los programas, en realidad las posibilidades de que se pensara en esas otras necesidades, como por ejemplo protección contra la violencia sexual en los campos de acantonamiento, eran prácticamente inexistentes. Por otro lado, aquellas que habían sido secuestradas, además de ser ignoradas en la desmovilización, solo encontraron desprecio por parte de sus comunidades. Es decir que, habiéndose unido voluntariamente o habiendo sido forzadas a hacerlo, una gran mayoría terminaron ignoradas, estigmatizadas, solas o cargando hijos más despreciados aún, y en la pobreza. Es que, luchar al lado de los hombres no les garantizó adquirir los mismos derechos que aquellos, ni ser merecedoras de la misma igualdad (Wilford, citado en Alison, 2004:458). Aunque hayan sido útiles como combatientes o para sostener la maquinaria de guerra, luego se volvieron una amenaza para el reordenamiento de las jerarquías sociales y de las relaciones de poder que se revirtieron al estado de la pre-guerra. Su supuesta independencia era una afrenta a las expectativas culturales existentes sobre las mujeres, y la posibilidad que actuaran como agentes desestabilizadores de los roles de género las hacía merecedoras de esa estigmatización social: no eran buen material para esposas, estaban poseídas por el “espíritu de la guerra”, podían ser una mala influencia para otras jóvenes.

Si bien se hicieron intentos para involucrar a las mujeres en la agenda para reconstruir la nación, sus necesidades se vieron subordinadas a aquellas indispensables para reparar el daño sufrido por los hombres y la “sociedad” –menos ciertas mujeres- (Kelly, 2000:62). Esto fue evidente en el caso del manto de silencio que se les impuso a las numerosísimas víctimas de violencia sexual. Mientras la idea de violación se politizaba, como por ejemplo en Ruanda, por otro lado se esperaba que ellas guardaran su sufrimiento; el estado no quería enfrentarse con la realidad, posiblemente para mantener la narrativa de los héroes que retornaban de la guerra como sugiere

Kelly (2000:62), o para evitar la demanda de reparaciones. Lo cierto es que la justicia les fue denegada, se las obligó a callar, las familias y comunidades las estigmatizaron al punto que muchas nunca volvieron a sus pueblos de origen y se ignoró lo que padecieron durante el conflicto, mientras que no se les brindó ayuda con las consecuencias que debieron enfrentar en la pos-guerra.

Por su parte, aquellas mujeres que lograron sobrevivir los altibajos de la guerra sin mayores sobresaltos ni pérdidas, simplemente siguieron o reanudaron sus vidas normales en el post-conflicto. En estos casos ni los roles de género, ni la división de tareas en el hogar o en aquellas actividades que les proveían de ingresos tuvieron variaciones. Las mujeres continuaron subordinadas a sus maridos, atendiendo sus casas y mayormente ignoradas por el sistema político.

Finalmente cabe mencionar que como los hombres vieron sus masculinidades afectadas durante el conflicto, muchos recurrieron a la violencia doméstica como forma de lidiar con esa realidad que no lograban enfrentar psicológicamente. Por ello, la violencia contra la mujer, incluida la sexual, tanto doméstica como oportunista siguió siendo moneda corriente, a veces a niveles tan altos como durante el conflicto. Posiblemente, el único cambio que hubo en este aspecto fueron los perpetradores, ya que en lugar de ser rebeldes o soldados, pasaron a ser vecinos, los propios familiares o personas de autoridad como maestros, por ejemplo. Ninguna mujer estaba a salvo de este tipo particular de violencia, sin distinción de clase o edad.

Esta situación de violencia permanente fue abonada por varios motivos: el primero, fue la ausencia de respuesta por parte de las autoridades, ya fuera por falta de recursos, por inacción e inclusive por corrupción, pero lo cierto es que los perpetradores muy raramente eran castigados. En segundo lugar, la violencia del estado realmente nunca cesó; la militarización continuó como medio de control social y de resolver disputas, lo cual siguió formando a la sociedad y penetrando en el hogar. En tercer lugar, la enorme cantidad de armas que nunca fueron recuperadas en los programas de DDR facilitaban la violencia contra las mujeres, así como todo otro tipo de actividad criminal. Finalmente, continuaron intactas las estructuras de desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, suponiendo a estas últimas como subordinadas de aquellos.

Lamentablemente no se observan cambios profundos en la situación de las mujeres en los escenarios del post-conflicto que ameriten señalar que han tenido un avance significativo en ninguno de los tres estados bajo estudio. Que en la pos-guerra la mujer en Ruanda pudiera recoger leña o cerrar una tranquera sola, sin necesidad de que haya un hombre presente para realizar dicha tarea, no son cuestiones que nos puedan persuadir de cambios sociales o culturales en las estructuras de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Al contrario, en muchos casos, hubo una vuelta a los roles de género tradicionales del pre-conflicto, más allá de la re-organización de la división de tareas, lo cual nos lleva a contestar afirmativamente la pregunta del título de este capítulo.

Solo resta hacer un último comentario sobre el porqué de esta vuelta a la situación pre-bélica en la que se encontraron las mujeres de estos estados. Más allá de las muchas causas señaladas es posible encontrar un motivo medular: la incapacidad de hombres y mujeres por igual de lograr alterar las expectativas sobre las identidades masculinas y femeninas, a pesar de como estas fueron afectadas por el conflicto.

Esa incapacidad no es exclusiva de dichos países ya que en Occidente, aunque con distintos frentes de batalla, nos encontramos en una situación muy similar. Sin embargo el problema es más profundo, ya que parece haber una connivencia para mantener el *status quo*, y ello no significa solamente someter a la mujer, sino presionar al hombre para que siga en una permanente competencia por lograr adquirir esa masculinidad hegemónica que es mayormente irreal.

La influencia de otros estados de la región, así como de la comunidad internacional en general, sea a través de mediadores, ONGs, organismos internacionales o entidades especializadas, misiones de paz, etc. tampoco han contribuido a que ello cambie, ni hubieran podido hacerlo; para ello hubiera sido necesario que esos mismos participantes tuvieran resueltas sus propias desigualdades entre hombres y mujeres, entre masculinidades y femineidades hegemónicas y subordinadas. Al contrario, cada uno de estos organismos, estados, etc. de alguna manera contribuyeron a marcar más esas desigualdades en estos países en el post-conflicto, ya que trajeron sus propias subjetividades, les dieron forma y las institucionalizaron a través, por ejemplo, de los programas de DDR que excluyeron a las mujeres. ¿Qué mensaje pasó esa exclusión al nativo? Ciertamente el peor y más negativo. A su vez, aquellos proyectos de ONGs internacionales que solo se enfocaban en las mujeres, descartando a los hombres, tampoco fueron positivos: las problemáticas sociales, es necesario repetirlo una vez más, no se dan en vacíos culturales; para ayudar a las mujeres exitosamente entendemos que es esencial incluir a los hombres también.

Entonces sin importar que roles hubieran tenido las mujeres durante el estado bélico, en el post-conflicto no cumplían con las expectativas de género o de femineidad. Sea porque habían realizado tareas consideradas masculinas como combatientes, porque de repente estaban ocupando cargos que implicaban una cuota de poder que debía tener el hombre pero no la mujer, porque no era funcional a los nuevos gobiernos que se modificaran los arreglos existentes en el pre-conflicto, o porque no se podía logicamente pretender que hubieran salido absolutamente indemnes física y emocionalmente de una guerra, pero ninguna de ellas parecía ajustarse a esa imagen que nunca se flexibilizó.

De todos modos, las mujeres también fueron ampliamente responsables de generar su propia auto-exclusión. Por ejemplo, en Ruanda casi los mismos porcentajes de mujeres que de hombres estaban en desacuerdo con las leyes que se sancionaron en el post-conflicto permitiéndoles heredar

o penando la violencia doméstica. En lugar de festejar ese pequeño reconocimiento, compadecían a los hombres porque esos cambios habían sido demasiado rápidos y no les permitían adaptarse a las nuevas circunstancias. De esta forma, pareciera que se enfrentaron a una situación de la que no había manera de salir airosos; es que, para que los cambios hubieran funcionado deberían haber venido desde las esferas de poder así como desde las bases sociales. Justamente, ese desencuentro permanente entre estas dos fuerzas, que se dio por distintos motivos, impidieron que pudiera afianzarse cualquier cambio en la situación de las mujeres.

BIBLIOGRAFIA

Adebajo, Adekeye (2011), *UN Peacekeeping in Africa. From the Suez Crisis to the Sudan Conflicts*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Adekunle, Julius O. (2007) *Culture and Customs of Rwanda*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Adler, Reva; Loyle, Cyanne y Globerman, Judith (2007), “A Calamity in the Neighborhood: Women’s Participation in the Rwandan Genocide”, en *Genocide Studies and Prevention*, vol. 2, nro. 3, pp. 209-233.

Åhäll, Linda (2012) “The Writing of Heroines: Motherhood and Female Agency in Political Violence”, en *Security Dialogue*, vol. 43, nro. 4, pp. 287-303.

Ahmed Ali, Fatuma (2007), “Women and Conflict Transformation in Africa”, en *Feminismo/s*, nro. 9, pp. 67-78.

Alao, Abiodun (2007), *Natural Resources and Conflict in Africa. The Tragedy of Endowment*. Rochester, Nueva York: University of Rochester Press.

Alison, Miranda (2004), “Women as Agents of Political Violence: Gendering security”, en *Security Dialogue*, vol. 35, nro. 4, pp. 447-463.

Alvarez Molinero, Natalia (2007), “Aportaciones del Feminismo al Derecho Internacional en la Construcción de la Paz”, en *Feminismo/s*, nro. 9, pp. 79-91.

Amnesty International (2004), *Burundi: Rape – the Hidden Human Rights Abuse*. Disponible en: <http://www.refworld.org/docid/4129c7a04.html>. Última consulta en fecha 20 de diciembre de

2015.

(2007), *Burundi: No Protection from Rape in War and Peace*. Londres: Amnesty International. Disponible en: <http://www.refworld.org/docid/470b304f2.html>. Última consulta en fecha 30 de septiembre de 2015.

Anderlini, Sanan (2000), *Women at the Peace Table. Making a Difference*. Nueva York: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Albert, Ethel M. (1963), "Women of Burundi: A study of Social Values", en Paulme, Denise (ed.) *Women in Tropical Africa*. Nueva York: Routledge, pp. 179-213.

Autesserre, Séverine (2006), "Local Violence, National Peace? Postwar 'Settlement' in the Eastern R.D. Congo (2003-2006)", en *African Studies Review*, vol. 49, nro. 3, pp. 1-29.

(2010), *The Trouble with the Congo. Local Violence and the Failure of International Peacebuilding*. Londres y Nueva York: Cambridge University Press.

Barnett, (1995), "Partners in Peace? The UN, Regional Organizations and Peace-Keeping", en *Review of International Studies*, vol. 21, pp. 411-433.

Bartels, Susan; Kelly, Jocelyn; Scott, Jennifer; Leaning, Jennifer; Mukwege, Denis; Joyce, Nina y VanRooyer, Michael (2013), "Militarized Sexual Violence in South Kivu, Democratic Republic of Congo", en *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 28, nro. 2, pp. 340-358.

Becchis, Giulia (2011), "Etnogenesi in Rwanda. Costruzione Coloniale ed Effetti di Ritorno" en *Antrocom Online Journal of Anthropology*, vol. 7. nro. 1, pp. 1-15. Disponible en: <http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/070111-A/03-Antrocom.pdf>. Última consulta en fecha 22 de Noviembre de 2014.

Beiser, Vince (14-09-2015), *This Doctor Is Helping Congo's Thousands of Rape Survivors*. Takepart.org. Disponible en: <http://www.takepart.com/article/2015/09/14/panzi-hospital-drc-denis-mukwege>. Última consulta en fecha 28 de septiembre de 2009.

Bijleveld, Catrien; Morssinkhof, Aafke y Smeulers, Alette (2009), "Counting the Countless: Rape Victimization During the Rwandan Genocide", en *International Criminal Justice Review*, vol. 19, nro. 2, pp. 208-224.

Bouwer, Karen (2010), *Gender and Decolonization in the Congo. The Legacy of Patrice Lumumba*. Nueva York: Palgrave MacMillan.

Brown, Sara (2013), "Female Perpetrators of the Rwandan Genocide", en *International Feminist Journal of Politics*, vol. 16, nro. 3, pp. 448-469.

Brück, Tilman y Vothknecht, Marc (2011), "Impact of Violent Conflict on Women's Economic Opportunities", en Kuehnast, Kathleen; de Jonge Oudraat, Chantal y Hernes, Helga (eds.) *Women and War. Power and Protection in the 21st Century*. Washington, D.C.: United States

Institute of Peace Press, pp. 85-114.

Bruneteau, Bernard (2006) *El Siglo de los Genocidios. Violencias, Masacres y Procesos Genocidas desde Armenia a Ruanda*. Trad. por Peyrou, Florencia y García, Hugo, Madrid: Alianza Editorial. (Versión original en francés: 2004, *Les Siècles de Génocides. Violences, Massacres et Processus Génocidaires de l'Arménie au Rwanda*. Armand Colin).

Burnet, Jannie (2008), "Gender Balance and the Meanings of Women in Governance in Post-Genocide Rwanda", en *African Affairs*, vol. 107, nro. 428, pp. 361-386.

Butler, Judith y Scott, Joan W. (1992), "Introduction", en Butler, Judith y Scott, Joan W. (eds.) *Feminist Theorize the Political*. Nueva York y Londres: Routledge, pp. xiii-xvii.

Byrne, Bridget (1996), "Towards a Gendered Understanding of Conflict", en *IDS Bulletin*, vol. 27, nro. 3, pp. 31-40.

Caprioli, Mary (2005), "Primed for Violence: the Role of Gender Inequality in Predicting Internal Conflict", en *International Studies Quarterly*, vol. 49, nro. 2, pp. 161-178.

Carayannis, Tatiana (2005), "The Complex Wars of the Congo: Towards a New Analytic Approach", en Kadende-Kaiser, Rose y Kaiser, Paul J. (eds.) *Phases of Conflict in Africa*. Willowdale, Ontario: de Sitter Publications, pp. 83-106.

Cardi, Coline y Pruvost, Geneviève (2011), "The Violence of Women: Suppressions and Narratives", en *Champ Pénal/Penal Field*, vol. VIII. Disponible en: <https://champpenal.revues.org/8367>. Última consulta en fecha 10 de diciembre de 2015.

Chabal, Patrick y Daloz, Jean Pascal (1999), *Africa Works: Disorder as Political Instrument*. Oxford: James Currey.

Cheldelin, Sandra y Eliatamby, Maneshka (2011), "Challenging the Dominant Narrative", en Cheldelin, Sandra y Eliatamby, Maneshka (eds.) *Women Waging War and Peace. International Perspectives on Women's Roles in Conflict and Post-Conflict Reconstruction*. Londres y Nueva York: Continuum, pp. 283-294.

Chew, Huibin Amelia (2008), "What's Left? After 'Imperial Feminism' Highjacking", en Riley, Robin; Talpade Mohanty, Chandra y Bruce Pratt, Minnie (eds.) *Feminism and War: Confronting U.S. Imperialism*. Londres y Nueva York: Zed Books, pp. 75-90.

Christian, Mervyn; Safari, Octave; Rmazani, Paul et al. (2011), "Sexual and Gender Based Violence against Men in the Democratic Republic of Congo: Effects on Survivors, their Family and the Community" en *Medicine, Conflict and Survival*, vol. 27, nro. 4, pp. 227-246.

Cockburn, Cynthia (2010), "Gender Relations as Casual in Militarization and War", en *International Feminist Journal of Politics*, vol. 12, nro. 2, pp. 139-157.

Cohen, David W. (2010), "Povos e Estados da Região dos Grandes Lagos", en J. F. Ade Ajayi

(ed.), *História Geral da África VI: África do Século XIX, à Década de 1880*, UNESCO. Brasília: UNESCO representação no Brasil, pp. 317-342.

Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2004), "Greed and Grievance in Civil War", en *Oxford Economic Papers*, vol. 56, nro. 4, pp. 563-595.

Consejo de Seguridad, Informe (20-02-2006), *Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeeping Personnel*, en nro. 3.

Coomaraswamy, Radhika (2005), "Sexual Violence during Wartime", en Durham, Helen y Gurd, Tracey (eds.) *Listening to the Silences: Women and War*. Leiden y Boston: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 53-66.

Coquery-Vidrovitch, Catherine (1997) *African Women. A Modern History*. Trad. por Beth Gillian Raps, Boulder, Colorado y Cumnor Hill, Oxford: Westview Press. (Versión original en francés: 1994, *Les Africaines: Histoire des Femmes d'Afrique Noire du XIX au XX Siècle*. Editions Desjonquères).

Cornwell, Richard y de Beer, Hannelie (1999), "Burundi: The Politics of Intolerance" en *African Security Review*, vol. 8, nro. 6, pp. 84-94.

Coulter, Chris; Persson, Mariam y Utas, Mats (2008), *Young Female Fighters in African Wars. Conflict and its Consequences*. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

Daley, Patricia (2008), *Gender and Genocide in Burundi. The Search for Spaces of Peace in the Great Lakes Region*. Oxford: James Currey; Bloomington: Indiana University Press; Kampala: Fountain Publishers; Nairobi: E.A.E.P.; Johannesburg: Jacana Media.

Dallaire, Roméo (2007), "The Média Dichotomy", en Thompson, Allan (ed.) *The Media and the Rwandan Genocide*. Londres: Pluto Press, pp. 12-19.

Daviau, Pierrette (2013), "Femmes et Construction de la Paix en République Démocratique du Congo (RDC). Les Mama Boboto et leur Fondatrice, Sr Cécilia Biye", en Daviau, Pierrette (ed.) *Femmes Artisanas de Paix: des Profils à Découvrir*. Montreal: Médiaspaul, pp. 177-201.

De Heusch, Luc (1995), "Rwanda: Responsibilities for a Genocide" en *Anthropology Today*, vol. 11, nro. 4, pp. 3-7.

De Ruiter, Donja (2011), *Sexual Offenses in International Criminal Law*. La Haya: International Courts Association.

Degni-Ségui, René (1996), *Report on the Situation of Human Rights in Rwanda*. United Nations, Economic and Social Council, E/CN.4/1996/68, January 29, 1996.

Deibert, Michael (2013), *The Democratic Republic of Congo. Between Hope and Despair*. Londres y Nueva York: Zed books.

Durham, Helen y O'Byrne, Katie (2010) "El Dialogo de la Diferencia: el Derecho

Internacional Humanitario y las Perspectivas de Género”, en *International Review of the Red Cross*, vol. 92, nro. 877, pp. 35-58.

El-Bushra, Judy (2000), “Transforming Conflict: Some Thoughts on a Gendered Understanding of Conflict Processes”, en Jacobs, Susie; Jacobson, Ruth y Marchbank, Jennifer (eds.) *States of Conflict. Gender, Violence and Resistance*. Londres y Nueva York: Zed Books, pp. 66-86.

(2003), “Fused in Combat: Gender Relations and Armed Conflict”, en *Development in Practice*, vol. 13, nro. 2/3, pp. 252-265.

Ellerby, Kara (2013), “(En)gendered Scurity? The Complexities of Women’s Inclusion in Peace Processes”, en *International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations*, vol. 39, nro. 4, pp. 435-460.

Elshtain, Jean (1995), *Women and War*. Chicago y Londres: The University of Chicago Press.

Eltringham, Nigel (2004), *Accounting for Horror. Post-Genocide Debates in Rwanda*. Londres: Pluto Press.

(2006), “Debating the Rwandan Genocide” en Kaarrsholm, Prebem (ed.) *Violence, Political Culture and Development in Africa*. Athens, Ohio: Ohio University Press, Ohio RIS Global Series, Book 6, pp. 66-91.

Enloe, Cynthia (1983), *Does Khaki Become you?: The Militarization of Women’s Lives*. Boston: South End Press.

(2010) “Foreword” en Shepherd, Laura (ed.) *Gender Matters in Global Politics. A Feminist Introduction to International Relations*. Londres y Nueva York: Routledge, pp. xvii-xviii.

Eriksson Baaz, Maria y Stern, Maria (2009), “Why Do Soldiers Rape? Masculinities, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)”, en *International Studies Quarterly*, vol. 53, pp. 495-518.

(2011) “Whores, Men and other Misfits: Undoing ‘Feminization’ in the Armed Forces of the DRC”, en *African Affairs*, 110/441, pp. 563-585.

(2013), “Fearless Fighters and Submissive Wives: Negotiating Identity among Women Soldiers in the Congo (DRC)”, en *Armed Forces and Society*, vol. 39, nro. 4, pp. 711-739.

Falch, Åshild (2010), *Women’s Political Participation and Influence in Post-Conflict Burundi and Nepal*. Peace Research Institute Oslo (PRIO) paper. Disponible en:

http://www.peacewomen.org/sites/default/files/partpol_postconburundinepal_falch_2010_0.pdf.

Última consulta en fecha 15 de octubre de 2015.

Feller, Markus (2001), *Violence against Women in Burundi*. World Organization against Torture. Disponible en: <http://www.refworld.org/docid/46c190360.html>. Última consulta en fecha 20 de diciembre de 2015.

Fernández de Casadevante Romani, Carlos (2012), *International Law of Victims*. Nueva York, Londres y Dordrecht: Springer.

Freedman, Jane y Jacobson, Sarah (2012), “Masculinities, Gender, and Violence. A Framework for Analysis”, en Freedman, Jane (ed.) *Engaging Men in the Fight against Gender Violence. Case Studies from Africa*. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 1-16.

Fox, Nicole (2011), “‘Oh, Did the Women Suffered, They Suffered so Much’: Impacts of Gendered Based Violence in Kinship Networks in Rwanda”, en *International Journal of Sociology of the Family*, vol. 37, nro. 2, pp. 279-305.

Gatwa, Tharcisse (2005), *The Churches and Ethnic Ideology in the Rwandan Crisis 1900-1994*. Milton Keynes: Regnun Books International.

Gentry, Caron E. (2012), “Thinking about Women, Violence, and Agency”, en *International Feminist Journal of Politics*, vol. 14, nro. 1, pp. 79-82.

Gerecke, Megan (2010), “Explaining Sexual Violence in Conflict Situations”, en Sjoberg, Laura y Via, Sandra (eds.) *Gender, War and Militarism. Feminist Perspectives*. Santa Barbara, Denver y Oxford: Praequer, pp. 138-154. Versión usada: e-Book.

Giberti, Eva y Fernandez, Ana Maria (1989), “La Propuesta”, en Giberti, Eva y Fernandez, Ana Maria (eds.) *La Mujer y la Violencia Invisible*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, pp. 15-23. Edición usada: segunda edición de 1992.

Gordon, April A. (2013), “Women and Development”, en Gordon, April A y Gordon, Donald L. (eds.) *Understanding Contemporary Africa* (5ta edición). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, pp. 305-333.

Gottschall, Jonathan (2004), “Explaining Wartime Rape”, en *The Journal of Sex Research*, vol. 41, nro. 2, pp. 129-136.

Haeri, Medina y Puerchguirbal, Nadine (2010), “From Helplessness to Agency: Examining the Plurality of Women’s Experiences in Armed Conflict”, en *International Review of the Red Cross*, vol. 92, nro. 877, pp. 103-122.

Hagay-Frey, Alona (2011), *Sex and Gender Crimes in the New International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Handrahan, Lori (2004), “Conflict, Gender, Ethnicity and Post-Conflict Reconstruction”, en *Security Dialogue*, vol. 35, pp. 429-445.

Hansen, Lene (2010), “Ontologies, Epistemologies, Methodologies”, en Shepherd, Laura (ed.)

Gender Matters in Global Politics. A Feminist Introduction to International Relations. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 17-27.

Haskin, Jeanne M. (2005), *The Tragic State of the Congo: From Decolonization to Dictatorship*. Nueva York: Algora Publishing.

Hatzfeld, Jean (2005) *Machete Season. The Killers in Rwanda Speak*. Trad. por Linda Coverdale, Nueva York: Farrar, Straus and Giroux. (Versión original en francés: 2003, *Une Saison de Machettes*. Francia: Éditions du Seuil).

Hausser, Dominique (1993), “Le Problème du Sida au Burundi et la Prévention auprès des Jeunes”, en *Sozial und Präventivmedizin*, vol. 38, pp. 398-400.

Heeg Maruska, Jennifer (2010), “When Are States Hypermasculine?” en Sjoberg, Laura (ed.) *Gender and International Security. Feminist Perspectives*. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 235-255.

Higate, Paul (2007), “Peacekeepers, Masculinities and Sexual Exploitation”, en *Men and Masculinities*, vol. 10, nro. 1, pp. 99-119.

Higate, Paul y Henry, Marsha (2004), “Engendering (In)security in Peace Support Operations”, en *Security Dialogue*, vol. 35, pp. 481-498.

Hilsum, Lindsey (2007), “Reporting Rwanda: the Media and the Aid Agencies”, en Thompson, Allan (ed.) *The Media and the Rwandan Genocide*. Londres: Pluto Press, pp. 167-187.

Hochschild, Adam (1999), *King Leopold’s Ghost. A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa*. Boston y Nueva York: Houghton Mifflin Company, First Mariner Books Edition.

Hogg, Nicole (2010), “La Participación de las Mujeres en el Genocidio de Ruanda: ¿Madres o Monstruos?”, en *International Review of the Red Cross*, vol. 92, nro. 877, pp. 59-95.

Houngbedji, Marlene; Grace, Rob y Brooks, Julia (2012), *Gendered Misconceptions of Militarized Identities: Disarmament, Demobilization, Reintegration of Female Combatants in the DRC*. ATHA White Paper Series. Disponible en: <http://atha.se/thematicbrief/gendered-misconceptions-militarized-identities-disarmament-demobilization>. Última consulta en fecha 20 de octubre de 2015.

Hudson, Valerie; Ballif-Spanvill, Bonnie; Caprioli, Mary y Emmett, Chad (2012), *Sex and World Peace*. Nueva York y Chichester, West Sussex: Columbia University Press. Edición usada: primera edición de tapa blanda, 2014.

Human Rights Watch (1998), *Proxy Targets. Civilians in the War in Burundi*. Disponible en <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/BURU983.PDF>. Última consulta en fecha 15 de diciembre de 2015.

(1999), *Leave None to Tell the Story. Genocide in Rwanda*. Human

Rights Watch Report. Disponible en: <http://www.hrw.org/reports/pdfs/r/rwanda/rwanda993.pdf>.
Última consulta en fecha 21 de Noviembre de 2014.

(2004), *Burundi, Suffering in Silence: Civilians in Continuing Combat in Bujumbura Rural*. Disponible en:

<https://www.hrw.org/legacy/background/africa/burundi/2004/burundi0604.pdf>. Última consulta en fecha 20 de Diciembre de 2015.

Hunt, Nancy R. (2005), “Noise over Camouflaged Polygamy, Colonial Morality Taxation and Woman-Naming Crisis in Belgian Africa”, en Cornwall, Andrea (ed.) *Readings in Gender in Africa*. Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press; Oxford: James Currey, pp. 53-64.

Hunt, Swanee (2014), “The Rise of Rwanda’s Women. Rebuilding and Reuniting a Nation”, en *Foreign Affairs*, edición mayo/junio, pp. 150-156.

Hunt, Swanee y Posa, Cristina (2001), “Women Waging Peace: Inclusive Security”, en *Foreign Policy*, edición de mayo-junio, pp. 38-47.

Idriss, Shamil (2000), “Who Can Prevent Genocide? Ask the Women of Burundi”, en *Agenda*, nro. 43, pp. 57-61.

International Crisis Group (2006), *Beyond Victimhood: Women’s Peacebuilding in Sudan, Congo and Uganda*. Africa Report nro. 112. Disponible en:
<http://www.refworld.org/docid/44c77a5b0.html>. Última consulta en fecha 10 de octubre de 2015.

IRINnews (18-11-2004), *Rwanda: Women Ex-Combatants Seek Inclusion in Peacekeeping Missions*.

Isike, Christopher (2012), “What Do Men Think? The Role of Cultural (Mis)conceptions in Perpetuating Male Violence against Women in Neocolonial Africa”, en Freedman, Jane (ed.) *Engaging Men in the Fight against Gender Violence. Case Studies from Africa*. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 16-38.

Jones, Adam (2002), “Gender and Genocide in Ruanda”, en *Journal of Genocide Research*, vol. 4, nro. 1, pp. 65-94.

Jones, Ann (10-12-2008), “A Crime against Society”, en *The Nation*. Disponible en:
<http://www.thenation.com/article/crime-against-society/>. Última consulta en fecha 30 de septiembre de 2015.

Jones, Bruce D. (1999), “Civil War, the Peace Process, and Genocide in Rwanda”, en Ali, Taisier M. y Matthews, Robert O. (eds.) *Civil Wars in Africa: Roots and Resolution*. Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Josse, Evelyn (2010) “‘Vinieron con Dos Armas’: las Consecuencias de la Violencia Sexual en la Salud Mental de las Víctimas Mujeres en los Contextos de Conflicto Armado”, en

International Review of the Red Cross, vol. 92, nro. 877, pp. 137-156.

Keen, David (1998), "The Economic Functions of Violence in Civil Wars", en *The Adelphi Papers*, vol. 38, nro. 320.

Kelly, Liz (2000), "Wars against Women: Sexual Violence, Sexual Politics and the Militarised State", en Jacobs, Susie; Jacobson, Ruth y Marchbank, Jennifer (eds.) *States of Conflict. Gender, Violence and Resistance*. Londres y Nueva York: Zed Books, pp. 45-65.

Kinzer, Stephen (2008), *A Thousand Hills. Rwanda's Rebirth and the Man who Dreamed it*. Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Kiot, Jennifer y DeLargy, Pam (2007), "Violencia Sexual y Transmisión del VIH/SIDA", en *Revista Migraciones Forzadas*, vol. 27, pp. 23-24. Disponible en: <http://fmr-test.nsms.ox.ac.uk/es/violenciasexual>. Última consulta en fecha 2 de octubre de 2010.

Kisangani, Emizet François (2012), *Civil Wars in the Democratic Republic of Congo, 1960-2010*. Boulder, Colorado y Londres: Lynne Rienner Publishers.

Klen, Michel (2010), *Femmes de Guerre*. Paris: Ellipses.

Kuehnast, Kathleen; de Jonge Oudraat, Chantal y Hernes, Helga (2011), "Introduction", en Kuehnast, Kathleen; de Jonge Oudraat, Chantal y Hernes, Helga (eds.) *Women and War. Power and Protection in the 21st Century*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, pp. 1-18.

Kuperman, Alan J. (2001), *The Limits of Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda*. Washington, D.C.: Bookings Institution Press.

(2006), "Provoking Genocide: a Revised History of the Rwandan Patriotic Front" en *Journal of Genocide Research*, vol. 6, nro. 1, pp. 61-84.

Lacey, Marc (26-02-2005), "Women's Voices Rise as Rwanda Reinvents Itself", en *The New York Times*. Disponible en: http://www.nytimes.com/2005/02/26/world/africa/womens-voices-rise-as-rwanda-reinvents-itself.html?_r=0. Última consulta en fecha 15 de octubre de 2015.

Landesman, Peter (2002) "A Woman's Work", publicado en el *New York Times*, en fecha 15 de septiembre de 2002. Disponible en: <http://www.nytimes.com/2002/09/15/magazine/a-woman-s-work.html?pagewanted=all>. Última consulta en fecha 26 de septiembre de 2015.

Le Bodic, Cédric (2011), "Peut-on Penser la Violence des Femmes sans Ontologiser la Différence des Sexes?", en *Champ Pénal/ Penal Field*, vol. VIII, nro., pp.1-13. Disponible en: <https://champpenal.revues.org/8092>. Última consulta en fecha 10 de diciembre de 2015.

Leatherman, Janie (2011), *Sexual Violence and Armed Conflict*. Cambridge: Polity.

Lemarchand, Réne (1994), *Burundi. Ethnocide as Discourse and Practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press y Woodrow Wilson Center Press. Edición usada: primera edición de tapa blanda, 1996.

(1999), *Ethnicity as a Myth: the View from the Central Africa*. Occasional Paper, Center of African Studies, Universidad de Copenhague. Disponible en: http://teol.ku.dk/cas/research/publications/occ._papers/lemarchand1999.pdf. Consultado en fecha 20 de noviembre de 2014.

(2004), "Exclusion, Marginalization, and Political Mobilization: The Road to Hell in the Great Lakes" en Wimmer, Andreas et al. (eds.) *Facing Ethnic Conflict: Towards a New Realism*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 61-77.

(2008), "The Burundi Killings of 1972", en *Online Encyclopedia of Mass Violence*. Disponible en: http://www.massviolence.org/PdfVersion?id_article=138. Última Consulta en fecha 12 de agosto de 2015.

Lewis, Stephen (2009), "Prólogo", en de Brower, Anne-Marie y Ka Hon Chu, Sandra (eds.) *The Men who Killed me*. Vancouver, Toronto y Berkeley: D & M Publishers Inc., pp. 1-2.

Li, Quan y Wen, Ming (2005), "The Immediate and Lingering Effects of Armed Conflict in Adult Mortality: A Time-Series Cross-National Analysis", en *Journal of Peace Research*, vol. 42, nro. 4, pp. 471-492.

Longman, Timothy (2005), "Rwanda's Paradox: Gender Equality or Emerging Authoritarianism", en Bauer, Gretchen y Britton, Hannah (eds.) *Women in African Parliaments*. Boulder: Lynne Reinner, pp. 210-233.

Logombe, Ahuka Ona; Claude, Kasereka masumbuko y Ruminjo, Joseph (2008), "Fistula and Traumatic Genital Injury from Sexual Violence in a Conflict Setting in Eastern Congo: Case Studies", en *Reproductive Health Matters Journal*, vol. 16, nro. 31, pp. 132-141.

Lwambo, Desiree (2013), "'Before the War, I was a Man': Men and Masculinities in the Eastern Democratic Republic of Congo", en *Gender and Development*, vol. 21, nro. 1, pp. 47-66.

Macauley, Cameron; Onyango, Monica y Niragira, Eric (2012), "Peer-support Training for Nonliterate and Semiliterate Female Ex-Combatants: Experience in Burundi", en *Journal of ERW and Mine Action*, vol. 16, nro. 1, pp. 1-8. Disponible en: <http://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/vol16/iss1/16>. Última consulta en fecha 20 de octubre de 2015.

Maclin, Beth; Kelly, Jocelyn; Kabanga, Justin y VanRooyen, Michael (2015), "'They Have Embraced a Different Behaviour': Transactional Sex and Family Dynamics in Eastern Congo's Conflict", en *Culture, Health and Sexuality*, vol. 17, nro. 1, pp. 119-131.

Maier, Donna (2012-2013) "Women Leaders in the Rwandan Genocide: When Women Choose to Kill", en *Universitas*, vol. 8, pp. 1-20. Disponible en: <https://www.uni.edu/universitas/article/women-leaders-rwandan-genocide-when-women-choose-kill>. Última consulta en fecha 26 de septiembre de 2015.

Mama, Amina (1997), "Sheroes and Villains: Conceptualizing Colonial and Contemporary Violence against Women in Africa", en Alexander, M. Jacqui y Mohanty, Chandra Talpey (eds.) *Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures*. Nueva York y Londres: Routledge, pp. 46-62.

(2013), "Challenging Militarized Masculinities", en *Open Democracy*. 50.50 *Inclusive Democracy*. Disponible en: <http://www.opendemocracy.net/5050/amina-mama/challenging-militarized-masculinities>. Última consulta en fecha 23 de septiembre de 2015.

Mamdani, Mahmood (2001), *When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism and the Genocide in Rwanda*. Princeton y Oxford: Princeton University Press.

Marks, Zoe (2012), "Listening to Perpetrators. Connecting Wartime Violence with Post-conflict Interventions", en Freedman, Jane (ed.) *Engaging Men in the Fight Against Gender Violence. Case Studies from Africa*. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 101-130.

May, John; Mukamanzi, Monique y Vekemans, Marcel (1990), "Family Planning in Rwanda: Status and Prospects", en *Studies in Family Planning*, vol. 21, nro. 1, pp. 20-32.

Mazurana, Dyan (2005), *Women in Armed Opposition Groups in Africa and the Promotion of International Humanitarian Law and Human Rights*. Report of Workshop organized by Geneva Call and the Program for the Study of International Organization(s). Disponible en: <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/women-war-011006.htm>. Última consulta en fecha 23 de octubre de 2015.

Mazurana, Dyan; McKay, Susan; Carlson, Khristopher y Kasper, Janel (2002), "Girls in Fighting Forces and Groups: Their Recruitment, Participation, Demobilization, and Reintegration", en *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, vol. 8, nro. 2, pp. 97-123.

McCalpin, Jermanine (2002), "Historicity of a Crisis. The Origins of the Congo War", en Clark, John (ed.) *The African Stakes of the Congo War*. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 33-50.

MDRP (2008), *The Rwandan Demobilization and Reintegration Program: Reflections on the Reintegration of Ex-combatants*. Dissemination note nro. 5, Banco Mundial. Disponible en: <http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/10/9969705/rwanda-demobilization-reintegration-program-reflections-reintegration-ex-combatants>. Última consulta en fecha 20 de octubre de 2015.

Meger, Sara (2012), "Militarized Masculinities and the Political Economy of Wartime Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo", en Freedman, Jane (ed.) *Engaging Men in the Fight against Gender Violence. Case Studies from Africa*. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 39-67.

Meintjes, Sheila (2000), "The Aftermath: Women in Post-War Reconstruction", en *Agenda*:

Empowering Women for Gender Equality, nro. 43, pp. 4-10.

(2001), “War and Post-War Shifts in Gender Relations”, en Meintjes, Sheila; Pillay, Anu y Turshen, Meredith (eds.) *The Aftermath. Women in Post-Conflict Transformation*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 63-77.

Meintjes, Sheila; Pillay, Anu y Turshen, Meredith (2001), “There Is No Aftermath for Women”, en Meintjes, Sheila; Pillay, Anu y Turshen, Meredith (eds.) *The Aftermath. Women in Post-Conflict Transformation*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 3-18.

Melander, Erik (2005), “Gender Equality and Intrastate Armed Conflict”, en *International Studies Quarterly*, vol. 49, nro. 4, pp. 695-714.

Mibenge, Chiseche (2008), “Gender and Ethnicity in Rwanda. On Legal Remedies for Victims of Wartime Sexual Violence”, en Zarkov, Dubravka (ed.) *Gender, Violent Conflict and Development*. Nueva Deli: Zubaan, pp. 143-179.

Mikell, Gwendolyn (1997), “Introduction”, en Mikell, Gwendolyn (ed.) *African Feminism: The Politics of Survival in Sub-Saharan Africa*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, pp. 1-50.

Mukwege, Denis y Nangini, Cathy (2009), “Rape with Extreme Violence: The New Pathology in South Kivu, Democratic Republic of Congo”, en *PLoS Med*, vol. 6, nro. 12, pp. 1-5.

Ness, Cindy (2007), “The Rise in Female Violence”, in *Daedalus*, edición de invierno, pp. 84-93.

Newbury, Catherine (1998), “Ethnicity and the Politics of History in Rwanda” en *Africa Today*, vol. 45, nro. 1, pp. 7-24.

Newbury, Catherine y Baldwin, Hannah (2000), *Aftermath: Women in Postgenocide Rwanda*. Working Paper nro. 303. Washington: Center for Development Information and Evaluation, US Agency for Development. Disponible en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacj323.pdf. Última consulta en fecha 9 de octubre de 2010.

Newbury, David (1998), “Understanding Genocide”, en *African Studies Review*, vol. 41, nro. 1, pp. 73-97.

(2012), “Canonical Conventions in Rwanda: Four Myths of Recent Historiography in Central Africa” en *History in Africa*, vol. 39, pp. 41-76.

Nduna, Sydia y Goodyear, Lorelei (1997), *Pain too Deep for Tears: Assessing the Prevalence of Sexual and Gender Violence among Burundian Refugees in Tanzania*. International Crisis Group. Disponible en: http://www.rescue.org/sites/default/files/migrated/resources/sgbv_1.pdf. Última consulta en fecha 30 de septiembre de 2015.

Ndulo, Muna (2009), “The United Nations Response to the Sexual Abuse and Exploitation of

Women and Girls by Peacekeepers during Peacekeeping Missions”, en *Berkeley Journal of International Law*, vol. 24, nro. 1, pp. 127-161.

O’Barr, Jean (1984), “African Women in Politics”, en Hay, Margaret Jean y Stichter, Sharon (eds.) *African Women, South of the Sahara*. Londres y Nueva York: Longman, pp. 140-155.

OCHA/IRIN report (2007), *The Shame of War. Sexual Violence against Women and Girls in Conflict*. Nairobi: OCHA/IRIN publications. Disponible en:

<http://lastradainternational.org/lsidocs/IRIN-TheShameofWar-fullreport-Mar07.pdf>.

Última consulta en fecha 30 de septiembre de 2015.

Ogot, Bethwell Allan (2010), "A Região dos Grandes Lagos", en Djibril Tamsir Niane (ed.), *História Geral da África IV: África do Século XII ao XVI*, UNESCO. Brasília: UNESCO representação no Brasil, pp. 559-590.

Ogunsanya, Kemi (2007), *Women Transforming Conflicts in Africa: Descriptive Studies from Burundi, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, South Africa and Sudan*. ACCORD, Occasional Paper series, vol. 2, nro. 3. Disponible en: <http://www.accord.org.za/publications/occasional-papers/494-women-transforming-conicts-in-africa>. Última consulta en fecha 6 de octubre de 2015.

Omeje, Kenneth (2013), "Understanding the Diversity and Complexity of Conflict in the African Great Lakes Region" en Omeje, Kenneth y Redeker Hepner, Tricia (eds.) *Conflict and Peacebuilding in the African Great Lakes Region*. Indianapolis: Indiana University Press, pp. 25-46.

Onoma, Ato Kwamena (2013), *Anti-Refugee Violence and African Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Otunnu, Ogenga (1999), “Rwandese Refugees and Immigrants in Uganda”, en Adelman, Howard y Suhrke, Astri (eds.), *The Path of a Genocide. The Rwandan Crisis from Uganda to Zaire*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, pp. 3-29.

Pettman, Jan Jindy (1996), *Worlding Women. A Feminist International Politics*. Londres y Nueva York: Routledge. Edición usada: e-Book, 2005.

Peyrú, Graciela y Corsi, Jorge (2003), *Violencias Sociales. Autoritarismo y Abuso de Poder: Epidemias del Siglo XXI*. Buenos Aires: Ariel. Edición usada: segunda edición, 2007.

Pillay, Anu (2001), “Violence against Women in the Aftermath”, en Meintjes, Sheila; Pillay, Anu y Turshen, Meredith (eds.) *The Aftermath. Women in Post-Conflict Transformation*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 35-45.

Prunier, Gérard (1997), “La Crise du Kivu et ses Conséquences dans la Région de Grands Lacs”, en *Hérodote*, nro. 86-87, pp. 42-56.

Puechguirbal, Nadine (2003), “Women and War in the Democratic Republic of the Congo”,

en *Signs*, vol. 28, nro.4, pp.1271-1281.

Randolph, Sheron y Sanders, Rickie (1992), “Female Farmers in the Rwandan Farming System: A Study of the Ruhengeri Prefecture”, en *Agriculture and Human Values*, pp. 59-66.

Reno, William (2006), “Congo: From State Collapse to ‘Absolutism’, to State Failure”, en *Third World Quarterly*, vol. 27, nro. 1, pp. 43-56.

Reyntjens, Filip (2000), *Burundi: Prospects for Peace*. Informe de Minority Rights Group International, United Kingdom.

(2004), “Ten Years on: From Genocide to Dictatorship”, en *African Affairs*, vol. 103, nro. 411, pp. 177-210.

(2009), *The Great African War. Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006*. Cambridge: Cambridge University Press. Edición usada: primera edición de tapa blanda, 2010.

Richters, Annemiek (2014), “Of Death and Rebirth: Life Stories of Rwandan Female Genocide Survivors”, en *Torture Journal*, vol. 24, suplemento 1. Disponible en: <http://www.ircct.org/media-and-resources/library/torture-journal/archive/volume-24--supplementum-1--2014.aspx>. Última consulta en fecha 21 de octubre de 2015.

Sanders, Edith R. (1969), “The Hamitic Hypothesis: Its Origins and Functions in Time Perspective” en *The Journal of African History*, vol. 10, nro. 4, pp. 521-532.

Sarlach, Lisa (1999), “Gender and Genocide in Rwanda: Women as Agents and Objects of Genocide”, en *Journal of Genocide Research*, vol. 1, nro. 3, pp. 387-399.

Scherrer, Christian P. (2002), *Genocide and Crisis in Central Africa. Conflict Roots, Mass Violence and Regional War*. Westport, Connecticut: Praeger.

Schindler, Kati (2011), “Do New Opportunities Arise for Women in Post-War Countries? The Case of Rwanda”, en *Weekly Report of the German Institute of Economic Research*, vol. 7, pp. 13-17.

Sideris, Tina (2001), “Problems of Identity, Solidarity and Reconciliation”, en Meintjes, Sheila; Pillay, Anu y Turshen, Meredith (eds.) *The Aftermath. Women in Post-Conflict Transformation*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 46-62.

Simic, Olivera (2010), “Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations”, en *International Peacekeeping*, vol. 17, nro. 2, pp. 188-199.

Sjoberg, Laura (2010), “Introduction” en Sjoberg, Laura (ed.) *Gender and International Security. Feminist Perspectives*. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 1-14.

Skjelsbæk, Inger (2001), “Sexual Violence in Times of War: A New Challenge for Peace Operations?”, en *International Peacekeeping*, vol. 8, nro. 2, pp. 69-84.

Slegh, Henny y Richters, Annemiek (2012), "Masculinity and Gender-Based Violence in Rwanda. The Potential Contribution of Community-Based Strategies to Make a Change", en Freedman, Jane (ed.) *Engaging Men in the Fight against Gender Violence. Case Studies from Africa*. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 131-158.

Smith, Steve (2002), "The Contested Concept of Security", en *The Concept of Security Before and After September 11*. Working Paper nro. 23. Singapur: Institute of Defense and Strategic Studies.

Sommers, Marc (2011), "Governance, Security and Culture: Assessing Africa's Youth Bulge", en *International Journal of Conflict and Violence*, vol. 5, nro. 2, pp. 292-303.

Sommers, Marc y Uvin, Peter (2011), *Youth in Rwanda and Burundi. Contrasting Visions*. United States Institute of Peace, Special Report. Disponible en: <http://www.usip.org/sites/default/files/sr293.pdf>. Última consulta en fecha 19 de septiembre de 2015.

Stears, Jill (2013), *Gender and International Relations. Theory, Practice and Policy*. Cambridge y Malden, Massachusetts: Polity. Tercera edición.

Stears, Jill; Pettiford, Lloyd; Diez, Thomas y El-Anis, Imad (2010), *An Introduction to International Relations Theory. Perspectives and Themes*. Harlow, Inglaterra: Pearson. Edición usada: tercera edición.

Stearns, Jason; Verweijen, Judith y Eriksson Baaz, Maria (2013), *The National Army and Armed Groups in the Eastern Congo. Untangling the Gordian Knot of Insecurity*. Rift Valley Institute, the Usalama Project. Disponible en: http://riftvalley.net/publication/national-army-and-armed-groups-eastern-congo#.VgRz6st_NHw. Última consulta en fecha 24 de septiembre de 2015.

Stiehm, Judith (2001), "Women, Peacekeeping and Peacemaking: Gender, Balance and Mainstreaming", en *International Peacekeeping*, vol. 8, nro. 2, pp. 39-48.

Sylvester, Christine (2002), *Feminist International Relations. An Unfinished Journey*. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, Christopher (1999), *Sacrifice as Terror. The Rwandan Genocide of 1994*. Oxford y Nueva York: Berg.

Tessler, Mark y Warriner, Ina (1997), "Gender, Feminism, and Attitudes toward International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from Middle East", en *World Politics*, vol. 49, nro. 2, pp. 250-281.

Tickner, J. Ann (1992), *Gender in International Relations. Feminist Perspectives on Achieving Global Security*. Nueva York: Columbia University Press.

(2005), "What Is Your Research Program? Some Feminist Answers to

International Relations”, en *International Studies Quarterly*, vol. 49, nro. 1, pp. 1-21.

Tonheim, Milfrid (2012), “Who Will Comfort me?” Stigmatization of Formerly Associated with Armed Forces and Groups in Eastern Congo”, en *The International Journal of Human Rights*, vol. 16, nro. 2, pp. 278-297.

Tuininga, Marlène (2003), *Femmes contre les Guerres. Carnets d'une Correspondante de Paix*. Paris: Desclée de Brouwer.

Turner, Thomas (2007), *The Congo Wars: Conflict, Myth and Reality*. Londres y New York: Zed Books.

(2013), *Congo*. Chichester: Polity.

Turshen, Meredith (1998), “Women’s War Stories”, en Turshen, Meredith y Twagiramariya, Clotilde (eds.), *What Women Do in Wartime. Gender and Conflict in Africa*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 1-26.

Twagiramariya, Clotilde y Turshen, Meredith (1998), “‘Favours’ To Give and ‘Consenting’ Victims: The Sexual Politics of Survival in Rwanda”, en Turshen, Meredith y Twagiramariya, Clotilde (eds.), *What Women Do in Wartime. Gender and Conflict in Africa*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 101-117.

UNIFEM (01-09-2004), *Rwandan Female Ex-combatants Can Play Important Role in Peacekeeping*. Disponible en: <http://reliefweb.int/report/rwanda/rwandan-female-ex-combatants-can-play-important-role-peacekeeping>. Última consulta en fecha 15 de octubre de 2015.

(2005), *Taking a Gender Perspective to Strengthen the Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP) in the Greater Great Lakes Region*. Workshop report. Disponible en: <http://sites-stage.tufts.edu/feinstein/2006/taking-a-gender-perspective-to-strengthen-the-multi-country-demobilization-and-reintegration-program-mdrp-in-the-greater-great-lakes-region>. Última consulta en fecha 10 de julio de 2015.

UN Women (2012), *Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence*. Disponible en: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03AWomenPeaceNeg.pdf>. Última consulta en fecha 4 de octubre de 2015.

Uvin, Peter (2001), "On Counting, Categorizing, and Violence in Burundi and Rwanda", en Kertezer, David I y Arel, Dominique (eds.) *Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in National Censuses*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 148-175. Edición usada: eBook, 2004.

(2007), *Ex-Combatants in Burundi: Why they Joined, Why they Left, How they Fared*. Working Paper nro. 3. Washington: The International Bank for Reconstruction and

Development/The World Bank.

(2009), *Life after Violence. A People's Story of Burundi*. Londres y Nueva York: Zed Books.

Vandeginste, Stef (2009), "Power-sharing, Conflict and Transition in Burundi: Twenty Years of Trial and Error", en *Africa Spectrum*, vol. 44, nro. 3, pp. 63-86.

Verhey, Beth (2004), *Reaching the Girls. Study on Girls Associated with Armed Forces and Groupes in the Democratic Republic of Congo*. Save the Children UK and the NGO Group: CARE, IFESH and IRC. Disponible en: <http://resourcecentre.savethechildren.se/library/reaching-girls-study-girls-associated-armed-forces-and-groups-democratic-republic-congo>. Última consulta en fecha 28 de septiembre de 2015.

Vidal, Claudine (2004), "La Commémoration du Génocide au Rwanda. Violence Symbolique, Mémorisation Forcée et Histoire Officielle", en *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 175, pp. 2-14.

Viret, Emmanuel (2010), "Rwanda – A Chronology (1867-1994)" en *Online Encyclopedia of Mass Violence*. Disponible en: http://www.massviolence.org/PdfVersion?id_article=108. Última consulta en fecha 22 de noviembre de 2014.

Vlassenroot, Koen (2002), "Citizenship, Identity Formation and Conflict in South Kivu: the Case of the Banyamulenge", en *Review of African Political Economy*, vol. 29, nro. 93-94, pp. 499-516.

(2006), "Societal View on Violence and War. Conflict and Militia Formation in Eastern Congo", en Kaarsholm, Preben (ed.) *Violence, Political Culture and Development in Africa*. Oxford: James Currey; Athens: Ohio University Press; Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, pp. 49-65.

Volman, Daniel (1998), "The Militarization of Africa", en Turshen, Meredith y Twagiramariya, Clotilde (eds.), *What Women Do in Wartime. Gender and Conflict in Africa*. Nueva York y Londres: Zed Books, pp. 150-162.

Walby, Sylvia (1990), *Theorizing Patriarchy*. Oxford y Cambridge: Basil Blackwell.

Watson, Catherine (1991), *Exile from Rwanda: background to an Invasion*. Washington, D.C.: Committee for Refugees.

Weber, Hannes (2013), "Demography and Democracy: the Impact of Youth Cohort Size on Democratic Stability on the World", en *Democratization*, vol. 20, nro. 2, pp. 335-357.

Whitaker, Beth (2005), "Refugees and the Spread of Conflict: Contrasting Cases in Central Africa", en Kadende-Kaiser, Rose y Kaiser, Paul (eds.) *Phases of Conflict in Africa*. Willowdale, Ontario: Sitter Publications, pp. 62-82.

Whitman, Shelly (2006), "Women and Peace-building in the Democratic Republic of Congo:

An Assessment of their Role in the Inter-Congolese Dialogue”, en *The African Journal of Conflict Resolution*, vol. 6, nro. 1, pp. 29-48.

Wikstøl, Thomas (2012), “The Silence of Male/Male rape Victims in Burundi and DRC”, en *Insight on Conflict*. Disponible en: http://www.insightonconflict.org/2012/10/malemale-rape-victims-burundi-drc/?utm_source=Main+List&utm_campaign=18. Última consulta en fecha 10 de diciembre de 2015.

Williams, Paul (2011), *War & Conflict in Africa*. Cambridge: Polity.

Zarkov, Dubravka (2006), “Towards a New Theorizing of Women, Gender, and War”, en Davis, Kathy; Evans, Mary y Lorber, Judith (eds.) *Handbook of Gender and Women's Studies*. Londres, Thousand Oaks y Nueva Delhi: Sage Publications, pp. 214-233.

Zicherman, Nona (2007), “Addressing Sexual Violence in Post-Conflict Burundi”, en *Forced Migration Review*, vol. 27, pp. 48-49.

Zurbriggen, Eileen (2010), “Rape, War, and the Socialization of Masculinity: Why Our Refusal to Give up War Ensures that Rape Cannot Be Eradicated”, en *Psychology of Women Quarterly*, vol. 34, pp. 538-549.

DOCUMENTOS, CONVENIOS Y TRATADOS

Carta de Naciones Unidas.

Convenio de Ginebra IV (1949).

Constitución de la República de Burundi.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104 23 de febrero de 1994.

Immigration and Refugee Board of Canada (25-09-2002), *Burundi: Forced Recruitment of Females of Hutu Origin by Hutu Militia Groups*. Disponible en: <http://www.refworld.org/docid/3f7d4d581f.html>. Última consulta en fecha 28 de septiembre de 2015.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra I (1977).